

Emir Sader (coord.), Alfredo Serrano Mancilla,
Álvaro García Linera y otros

Colección
POLÍTICA Y HEGEMONÍA ■

Las vías
abiertas de
América Latina

*Siete ensayos en busca de una respuesta:
¿fin de ciclo o repliegue temporal?*



celag

CENTRO
ESTRATÉGICO
LATINOAMERICANO
DE GEOPOLÍTICA

Bandes
Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela

Emir Sader (coord.), Alfredo Serrano Mancilla,
Álvaro García Linera y otros

Las vías abiertas de América Latina

Emir Sader (coord.), Alfredo Serrano Mancilla,
Álvaro García Linera y otros

Las vías abiertas de América Latina

Siete ensayos en busca de una respuesta:
¿fin de ciclo o repliegue temporal?

Las vías abiertas de América Latina: siete ensayos en busca de una respuesta: ¿fin de ciclo o repliegue temporal? / Alfredo Serrano Mancilla ... [et al.]; Emir Sader (coord.). - Caracas : CELAG : BANDES, 2017. - (Colección Política y Hegemonía)

D.L.: DC2017000647

ISBN: 9789806748057

1. Ciencias sociales - - América Latina. I. Serrano Mancilla, Alfredo. II. Sader, Emir, coord. III. Serie.

300.98

V622

© Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), 2016

© Emir Sader (coord.), Alfredo Serrano Mancilla, Álvaro García Linares y otros, 2016

Coordinación editorial: Guillermo Oglietti

Editora encargada: Taroa Zúñiga Silva

Asistente editorial: Gabriela Guillén

Diseño de tapa: Peter Tjebbes

Diseño de interior: Verónica Feinmann • Juan Manuel del Mármol

Corrección: Aurora Chiamonte

Impreso en la República Bolivariana de Venezuela.

Hecho el depósito de ley

Depósito legal: DC2017000647

ISBN: 978-980-6748-05-7

Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida sin permiso escrito del editor.

Presentación

Emir Sader¹

Este libro recoge diferentes análisis sobre los países con gobiernos posneoliberales en América Latina, desde sus orígenes y desarrollos hasta la situación actual, con un análisis más global sobre la región. No se pretende agotar los temas, sino provocar debates a partir de las extraordinarias experiencias vividas en esos países.

Todos los análisis, con sus particularidades, están realizados desde el punto de vista de las conquistas logradas y, a partir de ellas, de los problemas que enfrentan los gobiernos, con la conciencia de que las fuerzas y liderazgos que los protagonizaron son de los más avanzados que tuvo el continente, y que, por lo tanto, disponen de las mejores condiciones para superar las dificultades actuales.

1. Emir Sader dirigió y organizó los trabajos que conforman el presente libro.

El título del libro, inspirado en la obra maestra de Eduardo Galeano, sirve para destacar que los horizontes históricos del continente permanecen abiertos, que por ende son objeto de disputa y que en esta disputa es crucial el protagonismo de los pueblos organizados de la región.

ÁLVARO GARCÍA LINERA

¿Fin de ciclo progresista o proceso por oleadas revolucionarias?¹

El continente está viviendo un momento de inflexión histórica. Ciertamente, después de diez años continuos de expansivas victorias políticas de las fuerzas revolucionarias y progresistas en Venezuela, Brasil, Argentina, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Nicaragua y El Salvador, existe un estancamiento de esta irradiación e incluso un retroceso territorial. Es así que a la conspiración política conservadora en Honduras, Paraguay, Venezuela y Brasil, le ha seguido la derrota electoral en Argentina. En los últimos dos años, de un espíritu general de época caracterizado por la ofensiva hemos pasado a la defensiva política y electoral.

A través de vías electorales, en ocasiones acompañadas por acciones de movilización colectiva, sumadas a sistemáticas

-
1. Documento elaborado con base en la ponencia presentada por el autor en el evento “Restauración conservadora y nuevas resistencias en Latinoamérica”, organizado por la Fundación Germán Abdala y desarrollado en la Universidad de Buenos Aires el 27 de mayo de 2016.

agresiones económicas y a una inocultable conspiración externa, las fuerzas conservadoras han asumido en el último año el control de varios gobiernos del continente. Numerosas conquistas sociales, logradas años atrás, han sido eliminadas y hay un esfuerzo ideológico-mediático por pontificar un supuesto “fin de ciclo” que estaría mostrando la inevitable derrota de los gobiernos progresistas en el continente.

Si hace veinticinco años se hablaba del “fin de la historia”² como metarrelato conservador que predecía el fin de los grandes relatos heroicos anticolonialistas y anticapitalistas que habían caracterizado el siglo xx, hoy, el “fin de ciclo” constituye el aborto ideológico de esa teleología histórica que pretende hacer creer que las sociedades se mueven impulsadas por leyes independientes y por encima de las propias sociedades, a modo de principios cuasirreligiosos que pretenden explicar la dinámica del mundo. Se trata, ciertamente, de un intento por anular a la sociedad y al ser humano como fuentes explicativas de sí mismos y de su devenir.

Al colocar el “fin de ciclo” como algo ineluctable e irreversible se busca mutilar la praxis humana como motor del propio devenir humano y fuente explicativa de la historia, arrojando la sociedad a la impotencia de una contemplación derrotista frente a unos acontecimientos que, supuestamente, se despliegan al margen de la propia acción humana. Esto implica no solo un retroceso, mediocre y tartamudo, a concepciones ideológicas prerrenacentistas sino un esfuerzo deliberado por extirpar

2. Con referencia al libro de Francis Fukuyama *El fin de la historia...* cuya tesis central argumenta que la historia “en su sentido hegeliano y marxista de evolución progresiva de las instituciones políticas y económicas humanas (...) es direccional, progresiva y culmina en el moderno Estado liberal”. Para Fukuyama, al contrario de los marxistas, como él mismo sostiene, “este proceso de evolución histórica no culmina en el socialismo, sino en la democracia y en la economía de mercado”. Francis Fukuyama, *El fin de la historia y el último hombre*, Barcelona, Planeta, 1992.

cualquier atisbo de autodeterminación social como principio fundador del mundo social.

Sin embargo, el combate intelectual contra estas pseudoexplicaciones mistificadoras de la realidad no elude el análisis frío, el “análisis de plaza”, como decía Lenin en terminología militar, sobre el despliegue de acciones sociales (económicas, políticas, culturales, militares y simbólicas) que han permitido, en cada caso concreto, que las clases sociales menesterosas y los gobiernos progresistas y revolucionarios perdieran terreno, política y temporalmente, o cedieran la iniciativa.

Claramente, las fuerzas de derecha y las potencias imperiales han hecho, hacen y continuarán haciendo todo lo posible, a través de todos los medios legales e ilegales, por detener cualquier proceso emancipativo de los pueblos. Esa es su razón social y la energía de su existencia. Pase lo que pase en el mundo, nunca, en lo absoluto, cambiarán de actitud antagónica hacia los gobiernos de izquierda y los procesos de emancipación social. No obstante, esas acciones concretas y cambiantes de contrainsurgencia perpetua podrán volverse eficaces, dar sentido a la historia o arrebatarse el protagonismo popular solamente en función de lo que las propias clases populares plebeyas hagan o dejen de hacer; en función de lo que las estructuras políticas revolucionarias, sindicales y académicas hagan y piensen en un momento dado. Como lo explicaba un gran sociólogo francés³, si alguien arroja una piedra, a un vaso y este se rompe, la “causa” de ello no es la piedra sino que el vaso era rompible (por eso la piedra puede quebrarlo); es decir, es la cualidad del vaso la que le otorga la cualidad eficiente a la acción de la piedra.

En política y, en general, en todas las luchas de las clases sociales, las acciones del adversario no son las únicas que explican los resultados finales, a saber, alguna victoria, sino que son

3. Pierre Bourdieu, *Cosas dichas*, Barcelona, Gedisa, 1996.

nuestras propias acciones o inacciones, las acciones de las clases y los sectores laboriosos, las que convierten las agresivas acciones del adversario en condición eficiente, produciendo un tipo de resultado favorable a unos y contrario a otros. A la comprensión de esta dinámica fluida de las multiformes y multiespaciales luchas sociales, que se asemejan a un gran ajedrez cuyas fichas son a su vez nuevos juegos de ajedrez que están en espacios distintos pero también interconectados, se le denomina *análisis de las correlaciones de fuerzas*.

Gramscialización de las estrategias de contrainsurgencia imperial

En este sentido, lo que ahora deseo plantear son las principales características de los procesos progresistas y revolucionarios, y las debilidades e insuficiencias temporales que tienen y que deben ser superadas de la manera más rápida posible, para impedir que los sistemáticos ataques de los poderes fácticos planetarios y de las fuerzas conservadoras locales adquieran la calidad de condición eficiente capaz de provocar un mayor repliegue territorial o un retroceso estratégico de las fuerzas revolucionarias y progresistas de Latinoamérica.

Existen excelentes estudios sobre las nuevas acciones imperiales desplegadas en el continente en estos últimos años⁴, y está claro que asistimos a una agresión concéntrica que combina boicots económicos, ataques políticos internacionales, financiación de partidos políticos de derecha locales, carteles mediáticos de difamación y mentiras, con movilización social.

4. Se pueden revisar los artículos recientes de Atilio Borón (“Asalto al poder en Brasil” o “Venezuela, la tentación de una dictadura parlamentaria”, además de su libro *América Latina en la geopolítica del imperialismo*, ya en su segunda edición); de Ana Esther Ceceña (“El proceso de ocupación de América Latina en el siglo XXI”), y de Stella Calloni (“Ofensiva imperial”, “La injerencia extranjera es un fraude”, “Los golpes blandos”).

Es importante comprender esto. La actual contraofensiva imperial en América Latina tiene una forma diferente a la que vivimos en los años sesenta, setenta u ochenta del siglo pasado. Antes se privilegiaba el uso desnudo de la fuerza, que articulaba tras de sí a políticos y empresarios que sostenían por detrás el tutelaje dictatorial-militar sobre la sociedad. Ahora la punta de lanza es mediática, económica, social y cultural y, solo después –llegado el caso–, de confrontación social, con posibilidades de recurrir a la fuerza armada. Hoy, las principales herramientas de ataque brutal se concentran en el debilitamiento económico de los países (caída de los precios de materias primas), en el boicot económico (cierre de fuentes de financiamiento, ocultamiento de mercancías, fuga de capitales) y también en un asedio ideológico-cultural contra los gobiernos y fuerzas sociales revolucionarias.

Carteles mediáticos mafiosos, capaces de “asesinar” a diario la imparcialidad y la verdad en el altar de la infamia, la mentira noticiosa, han sido articulados. Asimismo, hay una campaña multimillonaria de ablandamiento cultural de contrainsurgencia a través de la promoción de infinidad de foros, clubes, redes sociales, seminarios, becas y “encuentros ciudadanos” que irradian un discurso liberal, moralizante y de escarnio en contra de todo aquello que huele a popular (el “antipopulismo”), y que busca erosionar las bases de credibilidad y producción de sentido de los Estados progresistas y revolucionarios. Así como hace tres décadas las Fuerzas Armadas norteamericanas tuvieron que introducir, en su currículo, las lecturas de Sun Tzu (su famoso libro *El arte de la guerra*) para enfrentar la oleada guerrillera mundial, hoy, el Departamento de Estado introduce, como lectura obligatoria de sus estrategias de contrainsurgencia, los textos gramscianos, debido a la preponderancia de las batallas culturales en este nuevo escenario de disputa del poder continental. Todo esto para focalizar el ataque concéntrico hacia lo que podemos considerar como la década dorada o la década virtuosa de América Latina.

Por más de diez años, desde los inicios del nuevo siglo, el continente ha vivido, de manera plural y diversa, el período de mayor autonomía y de mayor construcción de soberanía que uno recuerde desde la fundación de nuestros Estados en el siglo XIX, en procesos unos más radicales que otros, algunos más urbanos y otros más rurales, con distintos lenguajes, pero de una manera muy convergente.

La década virtuosa de la soberanía continental. Cuatro logros históricos

Cuatro son las conquistas históricas que definen la primera década del siglo XXI como una década virtuosa para el continente latinoamericano.

Ampliación de la democracia política

Desde la retirada de los militares como comando político armado de los intereses geopolíticos imperiales, la democracia representó para las clases subalternas la vigencia de garantías constitucionales, la libertad de opinión, la libre transitabilidad, la posibilidad de votar en elecciones, la vigencia de derechos humanos elementales y, en menor medida, la libertad de asociación sindical. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia, la democracia posdictatorial significó la participación de las clases menesterosas en la toma de decisiones políticas y en el manejo del aparato de Estado. Fue, entonces, un tipo de *democracia de derechos*, mas no así de *participación decisional* en el Estado.

El siglo XXI se inicia en el continente con un poderoso ascenso político de las clases sociales y fuerzas populares de izquierda que, de manera directa, vía sindical, de movimientos sociales o partidarios, asumen el control del poder del Estado. Con esto, no solo se tiene la victoria electoral de las fuerzas populares y de izquierda, anteriormente excluidas de las estructuras de gobierno, sino que además se supera, de manera práctica, el

debate iniciado en los momentos del repliegue popular mundial después de la caída del muro de Berlín y del debilitamiento del ideario socialista referido a la posibilidad de “cambiar el mundo sin tomar el poder”⁵, consigna que hacía eco del derrotismo popular generalizado y pedía abandonar las grandes batallas políticas por el poder en aras de una transformación “corpuscular”, casi individual, de las condiciones de vida.

Frente a esta mirada contemplativa de las estructuras de poder real del mundo y, en particular, del Estado como relación social desdoblada de la sociedad, precisamente por el abandono de la sociedad sobre sus propios asuntos políticos, los sectores populares, obreros, trabajadores, campesinos, indígenas, de mujeres y clases subalternas han superado ese debate de una manera práctica: asumiendo las tareas de control del Estado se volvieron diputados, asambleístas y senadores; asumiendo la gestión pública se movilizaron, hicieron retroceder las políticas neoliberales, modificaron las políticas públicas y los presupuestos. Así en diez años asistimos a lo que podría denominarse como una presencia de lo popular, de lo plebeyo, en sus diversas clases sociales, en la gestión del Estado y, con ello, a la resignificación de la democracia ejercida como poder plebeyo y como decisión popular de efecto estatal.

De manera paralela, en esta década asistimos a un fortalecimiento de la sociedad civil. Sindicatos obreros, sindicatos campesinos, comunidades indígenas, gremios, pobladores, vecinos, estudiantes y asociaciones juveniles comenzaron a fortalecerse, irradiarse, diversificarse y proliferar en distintos ámbitos, y, lo central, a politizarse, es decir, a involucrarse en la deliberación y gestión de los asuntos comunes, a asumirse como poder estatal.

5. John Holloway, *Cambiar el mundo sin tomar el poder. El significado de la revolución hoy*, Buenos Aires, coedición Ediciones Herramienta y Universidad Autónoma de Puebla, 2002.

La noche neoliberal de apatía, de simulación democrática, se rompió para recrear una sociedad civil potente que asume un conjunto de tareas de orden político y económico que afectan el desempeño de la totalidad de los Estados latinoamericanos.

Redistribución de la riqueza común y ampliación de la igualdad social

En segundo lugar, en lo social, en Brasil, Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Nicaragua y El Salvador asistimos a una extraordinaria redistribución de la riqueza social que comenzó a cerrar las puntas de las tijeras de la generación de la riqueza y la desigualdad, que en las últimas décadas se habían abierto de tal manera que la distancia entre una y la otra se acercaba a los ciento ochenta grados.

Frente a las políticas neoliberales de ultraconcentración de la riqueza que habían convertido a nuestro continente en uno de los más injustos del mundo, desde el año 2000 y a la cabeza de gobiernos progresistas y revolucionarios, asistimos a un poderoso proceso de redistribución de la riqueza común, que mejora notablemente las condiciones de vida de la clase trabajadora, sacando a millones de latinoamericanos de la extrema pobreza, y crea para las clases medias opciones objetivas de ascenso social.

Pero esta redistribución de la riqueza lleva también a una ampliación de las clases medias, no en el sentido sociológico-político del término, sino de su capacidad de consumo. Se amplía la capacidad de consumo de los trabajadores, de los campesinos, de los indígenas, de los distintos sectores sociales subalternos.

Igualmente, en poco más de una década, la reducción de las desigualdades sociales alcanza récords históricos que no habían podido obtenerse en los últimos cien años. La diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre que, en la década de los noventa, arrojaba cifras de más de 100, 150 o 200 veces, al finalizar la primera década del siglo XXI se reduce a 80, 60 o

40, de una manera que amplía la participación e igualdad de los sectores sociales.

Formas posneoliberales de gestión de la economía y de administración de la riqueza

En tercer lugar, en la gestión de lo económico, con mayor o menor intensidad, cada uno de los gobiernos de estos Estados va a ensayar propuestas posneoliberales. No estamos hablando todavía de propuestas poscapitalistas, pues estas solo podrán prosperar universalmente; nos estamos refiriendo a propuestas posneoliberales que permiten que el Estado retome un fuerte protagonismo en la producción de la riqueza y en el ordenamiento de la gestión económica, priorizando los intereses nacionales y a las clases populares.

Algunos países llevaron adelante procesos de nacionalización de empresas privadas o de creación de empresas públicas, otros optaron por una ampliación de la participación del Estado en la economía, en la administración del excedente social, en la elevación de los salarios de los obreros o en la transferencia de recursos a los sectores más desfavorecidos, en el impulso de formas de intercambio no basadas exclusivamente en el valor de cambio, etcétera. Pero está claro que todos ellos han ensayado formas posneoliberales de la gestión de la economía recuperando la importancia del mercado interno, del Estado como distribuidor de la riqueza, de la participación del Estado en áreas estratégicas de la economía.

En este sentido, la experiencia latinoamericana marcará un punto de inflexión en la trayectoria mundial del neoliberalismo. A partir de estas experiencias en el continente, el neoliberalismo ya no será nunca más el “único mundo posible”. Hoy surgen otras posibilidades de gestión de la economía y de la administración de la riqueza, otros horizontes viables que muestran al neoliberalismo como un régimen anquilosado, desgastado, decadente, sin brillo y sin entusiasmo.

A pesar de las dificultades de la experiencia latinoamericana, los países del sur dejan una señal imborrable y definitiva: de manera práctica, le muestran a los pueblos del orbe que hay otros mundos posibles, que el neoliberalismo no es el fin de la historia –de hecho, su continuidad es la fosilización de la historia–, que se puede producir la riqueza de otra manera, que es viable distribuir la riqueza de otra manera, de tal forma que las clases populares sean sus más directas beneficiarias.

Construcción de una Internacional latinoamericana progresista y soberana

En cuarto lugar, el despertar del siglo **xxi** latinoamericano también está caracterizado por la producción –por primera vez, desde la fundación de los Estados nacionales– de una política externa continental soberana y autodeterminativa.

Desde el siglo **xix**, los grandes diseños de política externa en el continente están tutelados, primero por el imperio inglés, luego por el imperio norteamericano, de los que dependen los créditos, las tarifas arancelarias, las transferencias tecnológicas, las emisiones discursivas, la estabilidad gubernamental y, por tanto, la organización de la política continental. Toda la política exterior latinoamericana (absolutamente toda) se encuentra delineada en función de las estrategias geopolíticas conducidas por las potencias del norte: alineamiento durante la Guerra Fría, modelos económicos, apertura política, regímenes dictatoriales, votaciones en Naciones Unidas, entrega de recursos naturales.

Sin embargo, durante la primera década del siglo **xxi** esto se derrumba. Tras la victoria de los gobiernos populares se constituye lo que podríamos denominar, de manera informal, una Internacional progresista y revolucionaria continental. Y si bien no existe un Comité (como en la Internacional comunista), de alguna forma los presidentes Lula da Silva, Kirchner, Correa, Morales, Chávez y Ortega asumen lo que podríamos llamar una especie de Comité central de una Internacional

latinoamericana, que permitirá pasos gigantescos en la constitución de decisiones continentales soberanas y en la planificación del futuro de nuestras naciones.

En esta década, la OEA, que anteriormente decidía los destinos de nuestro continente bajo la batuta de Estados Unidos y que llega a legitimar la invasión de países latinoamericanos, pasa a convertirse en una institución irrelevante. Al fin surgirá una institucionalidad continental, Unasur y la Celac, sin la presencia norteamericana, cosa que centrará el debate y la construcción del destino de los latinoamericanos en sus propias manos, cuando cien o cincuenta años atrás esto era impensable. Desde la sostenibilidad de las políticas crediticias, hasta el financiamiento del salario del portero de cualquier institución continental, todo dependía de los Estados Unidos y por eso teníamos instituciones que servían de coartada a los intereses norteamericanos en América Latina.

Está claro que no puede existir soberanía política sin soberanía económica, que representa la base material de cualquier soberanía posible. Y justamente eso es lo que ha logrado el continente en esta década virtuosa: emancipación de las dependencias crediticias y apertura a otros mercados, como el asiático y el europeo, que diversificaron las fuentes de obtención de recursos; todo esto clave a fin de construir una estructura política latinoamericana propia para comenzar a debatir el futuro compartido.

Pero esto también permite algo que parecía imposible tiempo atrás: la solidaridad entre países hermanos para resolver internamente conflictividades políticas extremas que anteriormente habrían requerido por lo menos la intervención militar del país del norte. Ese es el caso, en 2002, del golpe de Estado en contra del comandante Chávez en Venezuela o, en 2008, del golpe civil en contra del presidente Evo Morales.

En los meses de agosto y septiembre de 2008, ni el presidente Morales ni yo, su vicepresidente, podíamos aterrizar en los departamentos controlados políticamente por las fuerzas de

la derecha fascista. El Gobierno democrático había perdido el control de la gestión estatal que había sido asumido, de facto, por bandas paramilitares que promovían una especie de “poder dual” regional, desconociendo la autoridad nacional, democráticamente elegida, e instigando el estallido de una guerra civil.

Sin embargo, fue la presencia de la Unasur, de los presidentes Kirchner, Chávez, Correa, Lula da Silva, lo que ayudó a restablecer el orden democrático, a desconocer cualquier tipo de legitimidad a esas bandas de fascistas y a retomar la iniciativa política por parte del Gobierno nacional.

Entonces, en conjunto, en esta década virtuosa el continente lleva adelante cambios políticos (la participación del pueblo en la construcción de un Estado de nuevo tipo), cambios sociales (la redistribución de la riqueza y reducción de las desigualdades), cambios económicos (la participación activa del Estado en la economía, la ampliación del mercado interno y la creación de nuevas clases medias) y, en lo internacional, la articulación política latinoamericana sin la presencia norteamericana. Todo esto no es poca cosa. Desde el siglo XIX, estos últimos diez años se constituyen como los más importantes de nuestro continente en cuanto a integración regional, soberanía latinoamericanista e independencia.

Las fragilidades de la década. Cinco tareas inmediatas

No obstante –y es necesario asumir con objetividad y frialdad antártica el debate al respecto–, en los últimos meses este proceso de irradiación territorial de los gobiernos progresistas y revolucionarios se ha estancado.

En algunos países importantes y decisivos del continente, hay un regreso de los sectores arcaicos de la derecha, y en otros, existe la amenaza de que la derecha reciclada retome el control. Aquí debemos preguntarnos: ¿por qué?, ¿qué es lo que ha sucedido para que hayamos llegado a esta situación? Está claro que

las fuerzas conservadoras y del partido de los privilegios privados intentarán, una y mil veces, retomar el poder estatal y utilizar todos los medios legales e ilegales a su alcance, a fin de recuperar el uso de lo público para el disfrute privado de un puñado de oligarquías y empresas extranjeras.

Evidentemente, el Departamento de Estado norteamericano y los bloques conservadores locales siempre buscarán sabotear los procesos progresistas. Es una cuestión de control del excedente económico existente en la región, de sobrevivencia de las oligarquías dependientes y de obstrucción a la propagación mundial de lo que consideran un “mal ejemplo” para los otros pueblos del mundo. Por ello, está claro que la derecha continental siempre atacará, boicoteará, devaluará, desvirtuará y buscará hacer fracasar cualquier proyecto popular y revolucionario. Este es un hecho incontrastable de la realidad. Pero –y aquí volvemos a la imagen del vaso rompible o de las condiciones de eficacia de la acción del adversario– los revolucionarios, los intelectuales, las organizaciones sociales y los gobernantes debemos saber reconocer, con meridiana claridad, qué cosas hemos hecho deficientemente, qué acciones no hemos emprendido y qué datos de la realidad hemos soslayado que, en conjunto, han favorecido a la conspiración conservadora para comenzar a tener resultados favorables, hasta el punto de no solo detener la expansión de la oleada revolucionaria, sino lograr que las fuerzas conservadoras retomen, nuevamente, el control del poder estatal en la mayor parte de los países de América Latina.

Esta tarea de comprensión de la realidad, en sus dimensiones multicausales, es también una acción revolucionaria porque únicamente entendiendo dónde están nuestras debilidades y cuáles son nuestros errores podremos superarlos inmediatamente y reducir el campo de eficacia de las acciones de las fuerzas conservadoras.

Acá señalaría cinco límites o contradicciones que se han hecho presentes y han aflorado en esta década virtuosa continental y

que están siendo utilizadas por las fuerzas contrarrevolucionarias para retomar la iniciativa política inmediata. No las mencionaré por orden de importancia, sino por orden lógico.

Crecimiento y estabilidad económica: base material de la justicia y la fortaleza política.

Clausewitz decía que la guerra es la continuación de la política por otros medios⁶, y estaba en lo correcto porque, al final, las armas y las tropas en el fragor del campo de batalla solo cumplen designios políticos, defienden y logran o pierden intereses políticos. Lenin, el gran revolucionario ruso, argumentaba con mayor sabiduría que la política es economía concentrada⁷, es decir, que detrás de toda decisión política, incluida la más extrema que es una guerra, lo que está en juego son proyectos, intereses y recursos económicos de tal o cual clase social, tal o cual país, tal o cual sector.

Esta incomprensión de la relación entre la política y la economía no solo constituye un error de las corrientes liberales que han creado un microcosmos conceptual para estudiar las prácticas políticas, que pareciera sostenerse únicamente sobre las argucias de la voluntad o el engaño; constituye también el error de cierto “posmarxismo”⁸ que le atribuye a los significados y a los relatos construidos una cualidad mágica, capaz de

-
6. “Vemos, pues, que la guerra no constituye simplemente un acto político, sino un verdadero instrumento político, una continuación de la actividad política, una realización de esta por otros medios”. Karl Clausewitz, *De la Guerra*, capítulo 1 del libro primero *Sobre la naturaleza de la guerra*, México DF, Ed. Diógenes, 1972.
 7. “La política es la expresión concentrada de la economía... La política no puede menos de tener supremacía sobre la economía. Pensar de otro modo significa olvidar el abecé del marxismo”. V. I. Lenin, “Insistiendo sobre los sindicatos, el momento actual y los errores de Trotski y Bujarin”, en *Obras completas*, tomo 34, México DF, Ediciones Salvador Allende.
 8. Véase E. Laclau y Ch. Mouffe, *Hegemonía y estrategia socialista. Hacia una radicalización de la democracia*, Madrid, Siglo XXI, 1987.

inventar el mundo y a los sujetos históricos con capacidad de transformar la política. Evidentemente, el discurso, la voluntad, el *marketing* y la narrativa tienen un carácter performativo, es decir, son creadoras de realidad social. Pero las palabras, ideas y narraciones adquieren ese carácter “creador” si y solo si existen condiciones materiales de disponibilidad social, de eficacia simbólica, de eficacia asociativa y condiciones sociales de acción colectiva. Todas estas condiciones de posibilidad se sostienen y emergen a partir de la manera en que las personas acceden o están impedidas de acceder a determinados bienes materiales socialmente disponibles o necesarios, comenzando por los económicos.

Los sujetos de la política no se arman a voluntad e ingenio, como si la gente representara las líneas de un plano elaborado por un creativo arquitecto de sujetos, porque si así fuera tendríamos tantos sujetos históricos con capacidad de movilización política en cada país como ingeniosos creadores de discursos en una sociedad. La performatividad⁹ del discurso político no actúa en cualquier momento ni sobre cualquier agrupación o exigencia. El discurso político, la narrativa mediática o cívica solo son capaces de producir realidad colectiva allí donde existe una disposición social hacia nuevas narrativas (por el agotamiento de las antiguas), en caso de una ausencia social (material o simbólica) capaz de generar un estado de agregación, o en caso de un peligro que acecha la vida o una posesión común y frente a la cual la asociatividad movilizadora se presenta como una defensa imprescindible.

En cualquier caso, la disposición de los bienes sociales (dinero, propiedades, educación, servicios básicos, medios de trabajo, lenguaje, etcétera), la forma de acceso y distancia a ellos estructura bloques o franjas sociales objetivas que dan

9. Véase Austin, John, *Cómo hacer cosas con palabras. Palabras y acciones*, Buenos Aires, Paidós, 2008.

lugar a experiencias colectivas, a memorias sedimentadas, a sensibilidades y disposiciones capaces de ser gatilladas de una manera u otra, con una intensidad u otra, con unos aliados u otros, dependiendo del tipo de discurso emitido.

El discurso político tiene capacidad performativa solo cuando existe en proceso una cualidad formativa de la sociedad, cuando hay una potencialidad formativa de la sociedad. Y eso no siempre sucede; es más, constituye una excepcionalidad histórica que depende de los cauces fluidos de la disponibilidad o de la carencia de medios materiales. En cierta medida, el discurso político lo que hace es resaltar, trazar un espacio de subjetivación política a partir de las “líneas de nivel” de la geografía social, sobre la *topología social* resultante de las estructuras de propiedad, gestión y distribución de los recursos económicos de una sociedad.

Cuando se está en el Estado, cuando el bloque popular ha adquirido el poder de Estado, la importancia de la fuerza material de la economía es aún más decisiva y visible, porque el Estado, en tiempos revolucionarios, está llamado a desempeñar un papel propietario, productivo y organizador de la producción nacional. Si bien el Estado es, como dijimos en otra ocasión, una relación social en la que la mitad de sus acciones son idea (esquemas morales y lógicos de organización de la vida diaria¹⁰) y la otra mitad, materia (instituciones, recursos, coerción); el

10. “Pues si, en cualquier coyuntura, los hombres no se entendieran sobre estas ideas esenciales, si no tuvieran una concepción homogénea del tiempo, del espacio, de la causalidad, de la cantidad, etc., todo acuerdo entre las inteligencias se haría imposible, y con ello toda vida común. Además, la sociedad no puede abandonar al arbitrio de los particulares las categorías sin abandonarse a sí misma. Para poder vivir, no solo tiene necesidad de un conformismo moral suficiente; hay un mínimo de conformismo lógico del que tampoco puede prescindir. Por esta razón ejerce el peso de toda su autoridad sobre sus miembros para prevenir las disidencias”. Emile Durkheim, *Las formas elementales de la vida religiosa*, Madrid, Akal Editor, 1982, p. 15.

lugar más idealista del mundo donde la “idea” (una iniciativa gubernamental) deviene inmediatamente en “materia” (decretos, leyes, procedimientos administrativos, recursos, ejecución, etcétera); todo ese papel performativo de la idea, de las decisiones gubernamentales, tiene eficacia, es creíble, reproducible y organizador si, a la vez, ayuda a generar las condiciones de bienestar social, de distribución sostenible de la riqueza y de crecimiento económico. Si un proceso revolucionario no logra esto, es altamente probable que se presente un incremento del malestar social, una pérdida de apoyo al gobierno progresista y revolucionario, y que las propuestas políticas conservadoras en el interior de las propias clases sociales plebeyas se fortalezcan.

Entonces, una primera debilidad que algunos de los gobiernos progresistas y revolucionarios están afrontando es precisamente el de la gestión económica. Es como si se le hubiera dado poca importancia al tema de la gestión económica, cuando en realidad no existe posibilidad de continuidad revolucionaria si no se resuelve, en primer lugar, la gestión y la mejora de condiciones económicas del pueblo trabajador. ¡Claro!, cuando el bloque nacional-popular es el opositor político no gestiona la economía del país, lo que hace es estudiar los problemas que tiene la nación, elaborar una propuesta económica basada en los intereses de los sectores populares, irradiar y buscar movilizar en torno a esa propuesta a la sociedad, sin gestionarla aún. Su convocatoria hacia el pueblo está en función de una propuesta, de iniciativas y proyectos, pero aún no en función de la gestión.

En esos momentos, cuando se está en la resistencia enfrentando la gestión neoliberal, lo más importante es la política, el discurso, la organización, las ideas, la movilización, acompañadas de propuestas de gestión económica creíbles, capaces de resolver los problemas de la sociedad laboriosa. En esos momentos, la política está en el puesto de mando y el discurso adquiere la capacidad de articular un sujeto social movilizable.

Pero una vez que uno se encuentra en gestión de gobierno, cuando uno se vuelve Estado, la economía se convierte en decisiva y asume el mando. No obstante, los gobiernos progresistas y líderes revolucionarios no siempre asumen esa importancia decisiva de la economía estando en el Estado. Acostumbrados a la acción política y educados en la acción revolucionaria que, por definición, es esencialmente política, la confianza en el discurso, en su eficacia y su labor performativa, puede conducirnos, equivocadamente, a seguir actuando exclusivamente de esa manera cuando ya se está en la gestión estatal.

Evidentemente, los procesos revolucionarios tienen en la acción colectiva, el discurso y la narrativa movilizadora, los principales motores de producción de convocatoria, apoyo y credibilidad. Pero eso dura mientras la gente está movilizadada, en estado de catarsis colectiva¹¹ o de universalidad de las nuevas clases dirigentes. Mas, a diferencia de lo que creen los trotskistas, la realidad nos muestra que la sociedad no se moviliza de manera permanente. Sí es capaz de los mayores heroísmos que registra la historia, de los más grandes sacrificios de tiempo, recursos e incluso de vida para luchar por lo que cree necesario para su familia, sus compañeros y el país, pero, después de un tiempo, se necesita volver a la vida cotidiana: llevar a los niños al colegio, ahorrar para pagar las deudas bancarias, participar con los vecinos en una actividad cultural, etcétera.

-
11. “Se puede emplear el término ‘catarsis’ para indicar el paso del momento meramente económico (o egoísta-pasional) al momento ético-político, o sea, la elaboración superior de la estructura en superestructura en la conciencia de los hombres. Esto significa también el paso de lo ‘objetivo a lo subjetivo’ y de la ‘necesidad a la libertad’. La estructura, de fuerza exterior que aplasta al hombre, lo asimila a sí, lo hace pasivo, se transforma en medio de libertad, en instrumento para crear una nueva forma ético-política, en origen de nuevas iniciativas. La fijación del momento ‘catártico’ se convierte así, me parece, en el punto de partida de toda la filosofía de la praxis”. Antonio Gramsci, *Cuadernos de la cárcel*, tomo 4, México DF, Ediciones Era, 1986, p. 142.

De ahí que las revoluciones se presentan, no como líneas ascendentes infinitas, sino como oleadas (Marx) con flujos y reflujos, con momentos excepcionales de universalismo en la acción colectiva, y largos períodos de reflujo, de corporativismo, de cotidianidad desmovilizada. En esos momentos, el ideal, el discurso, la narrativa y la propuesta ya no son suficientes para mantener la adhesión social al proyecto enunciativo. Lo que ahora cuenta es la economía, la mejora de las condiciones de la vida cotidiana del pueblo. Por eso, si el gobierno progresista y revolucionario no logra crear una base material sostenible para esta mejora, la pérdida de apoyo social y la emergencia de propuestas contrarrevolucionarias que hagan creer en un avance a través del retorno de un gobierno de derecha son inevitables.

La base material de cualquier proceso revolucionario es la economía. Cuidar la economía, ampliar los procesos de redistribución, aumentar el crecimiento fueron también las preocupaciones de Lenin allá entre 1919 y 1922, cuando después del llamado “comunismo de guerra” tuvo que afrontar la realidad de un país destrozado. Resistió la invasión de siete países, derrotó a la derecha, pero tuvo siete millones de personas que murieron de hambre.

¿Qué hace un revolucionario? ¿Qué hizo Lenin? Priorizar la economía. Todos sus textos después del “comunismo de guerra” son resultado del esfuerzo teórico y práctico por restablecer la confianza de los sectores populares, obreros y campesinos, en su gobierno, a partir de la gestión económica, del desarrollo de la producción, de la distribución de la riqueza, del despliegue de iniciativas autónomas de campesinos, obreros y pequeños empresarios –incluso de empresarios– para garantizar una base económica que le diera estabilidad y bienestar a la población¹².

12. Véase E. H. Carr, *La revolución rusa: de Lenin a Stalin, 1917-1929*, Madrid, Alianza Editorial, 2014.

Ante la imposibilidad de construir el comunismo desde un solo país y comprendiendo que el mercado mundial y la moneda que regulan las relaciones internacionales de intercambio, de tecnología y productos no desaparecen por decreto, que la moneda y el mercado no desaparecen estatizando los medios de producción, que la economía social y comunitaria solamente podrá surgir, de forma gradual, por iniciativa y experiencia autónoma de la propia sociedad, cada revolución emergente y cada país, al tiempo de mantener el poder revolucionario, debe crear las condiciones materiales para la expansión de las iniciativas comunitarias de la propia sociedad y apuntalar las condiciones de una revolución mundial para resistir, en este largo período de lucha entre capitalismo decadente, pero dominante, y socialismo fragmentado, débil, pero ascendente. Eso requiere mejorar las condiciones de vida de la población y crear las condiciones básicas de su bienestar aunque, eso sí, manteniendo el poder político en manos de los trabajadores. En el fondo ese es el significado histórico de la NEP¹³. Se pueden

-
13. “... es necesario saber que la tarea de la NEP [nueva política económica], la tarea principal y decisiva, la que subordina a sí todo lo demás, consiste en establecer una conexión entre la nueva economía, que hemos comenzado a construir (muy mal, muy torpemente, pero que, no obstante, hemos comenzado a construir sobre la base de una economía socialista enteramente nueva, de una producción nueva, de una nueva distribución), y la economía campesina, de la que viven millones y millones de campesinos (...) el desarrollo del capitalismo controlado y regulado por el Estado proletario (es decir, del capitalismo ‘de Estado’ en este sentido de la palabra) es ventajoso y necesario (claro que solo hasta cierto punto) en un país de pequeños campesinos, extraordinariamente arruinado y atrasado, porque puede acelerar un desarrollo inmediato de la agricultura por los campesinos. Con mayor razón puede decirse lo mismo de las concesiones: sin desnacionalizar, el Estado obrero da en arriendo determinadas minas, bosques, explotaciones petrolíferas, etcétera, a capitalistas extranjeros, para obtener de ellos instrumental y máquinas suplementarias que nos permitan apresurar la restauración de la gran industria soviética”. V.I. Lenin, “Intervención de Lenin en el XI Congreso del PC de Rusia celebrado en Moscú, del 27 de marzo al 2 de abril de 1922”, y “III Congreso de la Internacional Comunista”, en *Obras completas*, México DF, Akal Editor / Ediciones de Cultura Popular, tomo 36, s/año.

hacer concesiones y dialogar con quien sea que permita apoyar el crecimiento económico, pero siempre garantizando el poder político en manos de los trabajadores, los revolucionarios y el bloque de poder popular.

En este largo período, la economía es decisiva. Los procesos progresistas y revolucionarios se juegan el destino en la economía. Sin los satisfactores básicos para la población el discurso no cuenta. El discurso es eficaz, crea expectativas y esperanzas colectivas a partir de una base material de satisfacción mínima de condiciones necesarias. Sin esas condiciones, cualquier discurso, por muy seductor o esperanzador que sea, se diluye ante el deterioro de la base económica de las familias trabajadoras.

Toda esta experiencia histórica y nuestra propia experiencia en esta década nos enseñan que el proyecto posneoliberal, como alternativa real al neoliberalismo, tiene que ser sostenible en el tiempo, producir mejoras sustanciales en la vida de las personas, crear una plataforma de estabilidad y confiabilidad sobre la cual la sociedad puede animarse a nuevas audacias históricas, a nuevas experiencias, comunitarias y socialistas, de apropiación de bienes que vayan apuntalando con mayor profundidad lo común y lo comunitario. Ningún avance hacia el socialismo será posible sin una mayor democracia, pero tampoco sin las condiciones mínimas de bienestar, de mejoras económicas de la sociedad, que mantengan la confianza en su gobierno y la preparen para nuevos y más grandes “asaltos al cielo”.

Aquí es necesario hacer un desdoblamiento. Si bien estamos afirmando que debemos hacer todos los esfuerzos para garantizar el crecimiento económico, este será revolucionario si, y solamente, tiene por objetivo la mejora de las condiciones de existencia de todos los sectores populares, es decir, si genera mayor justicia e igualdad. Para un gobierno progresista y revolucionario, el crecimiento y la estabilidad económica no son un fin en sí mismo, sino solo un medio para mejorar las condiciones de vida de la sociedad, en particular y siempre, de las clases menesterosas. Por ello, el tomar medidas que, en

nuestra búsqueda por el “crecimiento económico”, afecten al bloque popular beneficiando al bloque conservador va en contrasentido al fortalecimiento de los procesos progresistas del continente.

Afectar los ingresos del pueblo para aumentar las ganancias de las élites empresariales no solo está en contra de los fundamentos de los procesos revolucionarios, que existen por y para favorecer al pueblo (a los trabajadores), sino que, además, peca de una ingenuidad política catastrófica. Las élites empresariales nunca sostendrán ni defenderán un proyecto popular. Efectivamente, pueden ser neutralizadas temporalmente, pueden adherirse, individualmente, a tal o cual decisión, pero su presencia subordinada dentro del proyecto revolucionario solo será posible en tanto el bloque popular tenga la fuerza política, electoral y de movilización. Porque apenas el bloque nacional-popular comience a mostrar síntomas de debilidad, lo más seguro es que esas clases sociales, inmediatamente, se pasen al bando contrario o definitivamente se pongan a conspirar en contra del Gobierno revolucionario.

En la toma de decisiones, los gobiernos progresistas y revolucionarios deben orientar sus medidas, cualesquiera que sean estas, siempre en función de los beneficios colectivos y el mejoramiento de las condiciones de vida y de la asociatividad de las clases menesterosas; pues, al final, solo ellas serán las que defiendan en las calles el proceso revolucionario.

Ciertamente, un gobierno debe gobernar para todos, o mejor, la clase dirigente debe mostrar que sus intereses son los que mejor unifican y representan los intereses de todos. Esa es la clave de la dirección del Estado porque el Estado es el monopolio de lo universal. Ahí radica su fuerza y su poderío, en representar lo universal, sabiendo que ese universal es lo particular irradiado y articulante el resto de los sectores.

Pero gobernar para todos no significa entregar los recursos o tomar decisiones que, por satisfacer a todos, debiliten la base social que le ha dado vida al gobierno, que le ha dado sustento y

que será, al fin y al cabo, la única que saldrá a las calles cuando las cosas se pongan difíciles.

¿Cómo moverse en esa dualidad? Gobernar para todos, teniendo en cuenta a todos, pero, en primer lugar y por siempre, como dice la Iglesia católica de base, tomando una opción preferencial y prioritaria por los trabajadores, los pobladores, los campesinos y los humildes. Ningún tipo de política económica revolucionaria puede dejar de lado lo popular pues cuando lo popular, la justicia y la redistribución, a corto y largo plazo, dejan de ser el norte orientador de las acciones gubernamentales y se busca priorizar solo el “crecimiento”, el proceso se desnaturaliza y, con seguridad, aquellos que se beneficien exclusivamente del crecimiento sin justicia ni redistribución, tarde o temprano, buscarán un gobierno propio que haga lo mismo, solo que de manera mucho más confiable y rápida.

Hay quienes sostienen, desde el lado de una supuesta izquierda más “radical”, que el problema es que los gobiernos progresistas no tomaron ni están tomando medidas más duras de socialización que acaben con el mercado mundial, la división internacional del trabajo e instauren inmediatamente medidas comunistas de propiedad y producción.

Ingenuos chapuceros e izquierdistas “deslactosados” que dilucidan los grandes problemas prácticos de una revolución removiendo una cucharilla de café, olvidando que no existe decreto que pueda sustituir el largo aprendizaje de masas y que ningún voluntarismo gubernamental reemplaza la fuerza de la realidad capitalista mundial.

Si fuera un tema de voluntad y de decreto, podría sacarse uno que diga que ya no hay mercado. Y, sin embargo, el mercado seguirá y la gente, aquí y allá, continuará intercambiando sus productos de acuerdo con el esfuerzo social depositado en ellos.

Se pueden emitir todos los decretos necesarios para estatizar los medios de producción, pero eso no significa socialismo porque la sociedad no es la que asume la gestión directa de esos medios de producción. Se pueden emitir leyes que digan que ya no hay

compañías extranjeras, no obstante, las herramientas para los celulares y las máquinas seguirán requiriendo de la técnica y el conocimiento planetario-universal que los envuelve a todos.

Un país no puede volverse autárquico. ¡Eso no es socialismo, sino el regreso a la Edad de Piedra! Ninguna revolución ha aguantado ni sobreviviría en la autarquía o en el aislamiento. La revolución es mundial y continental, o es una caricatura de revolución. Por tanto, la superación del mercado mundial será, de la misma forma, un hecho mundial. La construcción del comunismo como nuevo modo de producción que sustituya al capitalismo como modo de producción universal no puede menos que ser también mundial, planetaria. Lo que los gobiernos progresistas y revolucionarios pueden y deben hacer es crear las mejores condiciones de democratización de la riqueza y ayudar al fortalecimiento de las organizaciones sociales, al aprendizaje práctico de las experiencias de socialización de la producción y de las formas de gestión colectiva, no estatal, de la riqueza. Pueden hacer todo ello, pero jamás sustituir a la sociedad laboriosa en la paulatina y ascendente creación de la nueva producción, de la nueva administración comunitaria de la riqueza. Esa es justamente la enseñanza que nos deja el fracaso de los denominados “socialismos realmente existentes”.

Cualquier poder político o bloque social de poder no podrá ser duradero si no viene acompañado, lo más pronto posible, de un poder económico que objetive, en el ámbito de la gestión económica, lo logrado inicialmente en el ámbito del Estado. ¿Cómo? No existe recetario ni libreto a seguir. Cada país y cada revolución debe resolver este tema en la práctica. Pero el nuevo poder político revolucionario tiene que ir acompañado del poder económico estatal, general, y del poder económico del bloque social que representa. De otro modo, se presentará la siguiente dualidad: por un lado, el poder político en manos de los trabajadores; por otro, el poder económico en manos de los empresarios.

Unificados los espacios clasistas del poder social, con la política y economía en manos de la nueva estructura estatal, se garantiza la estabilidad del proceso revolucionario y las mejoras reales

en las condiciones de vida del pueblo, que es la forma en la que el mismo pueblo insurrecto mide y valora los resultados efectivos de su revolución en la vida cotidiana. Luego, con el tiempo, se podrá pasar a una segunda etapa histórica en que ese poder político, concentrado en el Estado, y ese poder económico, igualmente acumulado por el Estado, vayan gradualmente desprendiéndose del poder concentrado mediante una reasunción, por parte de la propia sociedad, de los mismos. Se trata de la emergencia de inéditas formas de democratización/disolución del Estado y de disolución de poder económico en los sectores subalternos, que son capaces de crear modos de trabajo, de gestión y distribución comunitarios/universales de la riqueza. En esta capacidad autodeterminativa de la propia sociedad, y ya no del Estado, se encuentra la clave que decidirá, a futuro, la posibilidad del paso del posneoliberalismo al poscapitalismo.

Una revolución cultural permanente

La experiencia revolucionaria boliviana, con sus extraordinarias acciones colectivas y tendencias preinsurreccionales, se ha convertido en un laboratorio excepcional de la intensidad de la lucha de las clases y de sus enseñanzas, en términos de teoría política. Un elemento decisivo en la conquista del poder político, por parte del bloque social revolucionario, fue la victoria previa a los grandes combates sociales, a las grandes marchas y sublevaciones que definieron el destino victorioso de la revolución, en el ámbito de las ideas-fuerzas, en la lucha por el sentido común de la época.

Al ideario y horizonte neoliberal triunfante de fines del siglo xx, no solo se lo debilitó, criticó o denunció como falso, sino que se supo levantar, frente a él, otro horizonte colectivo creíble, palpable y realizable, capaz de contener las expectativas y las ansias individuales y colectivas de las clases populares. Es decir, se supo sumar la acción de demostración de la falacia del ideario neoliberal con la lucha por la instauración de un nuevo horizonte posible de sociedad. La sumatoria de estas dos tenazas discursivas dio, por un lado, la escenificación del agotamiento y

de la decadencia del ideario neoliberal, y por el otro el posicionamiento de un principio de esperanza colectiva con capacidad de movilización de expectativas, de sueños y acciones colectivas.

Esto permitió transformar, sobre la marcha, la acción de protesta colectiva en contra del mal gobierno en una acción de conquista de la nueva sociedad, de la esperanza. Porque al fin y al cabo, el pueblo no lucha únicamente debido a que tiene carencias –estas siempre son parte de la condición popular de vida–, sino, ante todo, cuando entiende que su lucha puede tener un resultado efectivo, cuando sabe que es posible obtener lo que propugna y se siente portador de una fuerza moral de justicia detrás de todo lo que hace. Es decir, cuando tiene una esperanza, un horizonte probable.

Esto significa que antes de las victorias políticas y militares de todo proceso revolucionario existe, primero, una victoria cultural, una victoria de significados y esquemas interpretativos-orientadores del futuro inmediato, una victoria moral sobre el adversario, que convierte la carencia social, la frustración colectiva y la necesidad diaria en una voluntad general que apunta a un horizonte que se apodera de las pasiones del pueblo. Entonces, las victorias políticas y militares solo cumplen, en el tiempo, lo que de inicio ya constituye una victoria moral sobre el viejo régimen.

En los momentos más intensos de la lucha de clases la política, incluso bajo formas de lucha militar, se pondrá en el puesto de mando y ella dirimirá en definitiva la victoria o la derrota de la revolución. A esto es lo que hemos denominado el punto de bifurcación de la acción colectiva. Y de triunfar la revolución, en democracia, el adversario derrotado deberá ser incorporado, de manera dispersa y desorganizada, en el conjunto de las iniciativas, decisiones y acuerdos que asuma el nuevo bloque de poder dirigente. La fórmula entonces será derrotar al adversario culturalmente (Gramsci); derrotar al adversario política y militarmente (Lenin); e incorporar al adversario derrotado de manera dominada en el conjunto de iniciativas y acuerdos del nuevo poder.

Porque, de no hacerlo, y al dejar al adversario sin camino, tarde o temprano él buscará antagonizar contra el nuevo poder, tratando de crear a la larga un proyecto de poder alternativo.

Sin embargo, en todo ello la lucha por las ideas nunca cesa después de la toma del poder por el bloque social revolucionario; de hecho, es el escenario primordial de todas las luchas, incluidas las económicas que, como dijimos antes, son las decisivas. Esto, porque la sociedad asume sus problemas políticos, organizativos y también económicos, a través de significantes, de esquemas mentales explicativos del mundo. Así como en la física las partículas elementales son los “ladrillos” con los que se constituye toda la materia que vemos a nuestro alrededor, los significantes y representaciones simbólicas son los “ladrillos” sociales con los que se constituyen todos los campos de la actividad social de las personas: el de la actividad económica, la acción política, la vida cotidiana, la familiar, etc. Por ello, antes y durante los procesos revolucionarios, esta lucha por los significantes que explican y orientan en el mundo a las personas, representa una batalla permanente mediante la cual se define el destino de las revoluciones. Por eso un revolucionario es, en primer lugar y para siempre, un subversivo cultural que no puede bajar la guardia ni un solo instante en este escenario de lucha perpetuo y decisivo.

Ahí es donde se están presentando un segundo grupo de problemas para los procesos progresistas y revolucionarios del continente. Así como a veces tendemos a soslayar el fundamento económico de la continuidad de toda revolución, también tendemos a bajar los brazos en la batalla cultural una vez que hemos conquistado el poder político, cuando en realidad se trata del momento en que esta se va a intensificar más y, a la larga, de perdernos ahí, podremos perder en los otros escenarios, dando pie a una contrarrevolución victoriosa.

En gestión de gobierno a veces priorizamos la acción política contra las fuerzas opositoras, la mera gestión administrativa o incluso la búsqueda de éxitos económicos para los

procesos. Pero si todo ello lo hacemos sin una batalla cultural, politización social o impulso de una significación lógica y moral del mundo que se está construyendo, la buena gestión política, administrativa e incluso económica se traducirá en un debilitamiento del gobierno, un alejamiento de los sectores populares y un crecimiento de la resignificación conservadora en las explicaciones del mundo, en la percepción popular.

Precisamente ese es uno de los problemas más importantes por los que están atravesando los gobiernos progresistas y revolucionarios: redistribución de la riqueza sin politización social. ¿Qué significa eso? Que la mayor parte de las medidas que se están implementando favorecen a las clases subalternas, pero el sentido común que se construye en torno a esta redistribución de la riqueza no necesariamente lleva la impronta de hechos políticos, de conquistas políticas revolucionarias, de derechos producto de la lucha.

En el caso de Bolivia, en menos de diez años, el 20% de los bolivianos ha pasado a la clase media, en términos de consumo. Hay un crecimiento de los sectores medios de la sociedad, una ampliación de la capacidad de consumo de los trabajadores, un desarrollo de derechos que materializan la democratización política en democratización económica. Cosas similares están sucediendo en otros países del continente. Pero si esta ampliación de la capacidad de consumo, de la capacidad de justicia social, no viene acompañada con la politización social revolucionaria, con la consolidación de una narrativa cultural, con la victoria de un orden lógico y moral del mundo, producidos por el propio proceso revolucionario, no se está ganando el sentido común dominante. Lo que se habrá logrado es crear una nueva clase media con capacidad de consumo, con capacidad de satisfacción, pero portadora del viejo sentido común conservador.

El gran reto, que todo proceso revolucionario duradero tiene, es acompañar la redistribución de la riqueza, la ampliación de la capacidad de consumo, la ampliación de la satisfacción material de los trabajadores, con un nuevo sentido común

y con una nueva manera cotidiana de representar, orientar y actuar en el mundo, que renueve los valores de la lucha colectiva, la solidaridad y lo común como patrimonio moral. Y ese sentido común no son más que los preceptos íntimos, morales y lógicos con los que la gente organiza su vida, la manera en que se asume subjetivamente lo bueno y lo malo, lo deseable y lo indeseable, lo positivo y lo negativo de la vida y de las acciones humanas. No se trata de un tema de discursos susceptible de ser inculcado con grandes dosis de seminarios o lecturas. Es un tema de orden simbólico de la individualidad, que resulta de una larga sedimentación de acciones y narrativas prácticas que se inscriben en el cuerpo y en la memoria profunda de las personas y que, con el tiempo, se vuelven innatas, obvias, “naturales”.

En este sentido, lo cultural, lo ideológico, la arquitectura de los símbolos con los que las personas se orientan en el mundo cotidiano se vuelven decisivos para la solidez y la continuidad de un proceso revolucionario. No existe revolución verdadera ni consolidación de un proceso revolucionario, si no se tiene una profunda revolución cultural, ética y lógica con la que las personas organicen su ubicación el mundo.

Hay un tiempo de insurgencia colectiva, de “democracia espasmódica”, de catarsis colectiva como diría Gramsci¹⁴, o de “acontecimiento” como diría Badiou¹⁵, en el que las personas asociadas, comunitarizadas, construyen con sus manos el mundo, inventan y redefinen el curso de la sociedad. Se trata del momento de la comunidad en acción y de la universalidad de las clases plebeyas; sin embargo, luego cada cual regresa a la casa, al trabajo, a la actividad cotidiana, a la escuela, a la universidad y, de no darse una perpetua revolución cultural / simbólica, vuelve

14. Ver nota a pie nº 10.

15. Véase A. Badiou, *El ser y el acontecimiento*, Buenos Aires, Ediciones Manantial, 1999.

a reproducir los viejos esquemas morales y lógicos de cómo organizar el mundo.

Ahí es donde los procesos progresistas y revolucionarios están débiles y, hasta cierto punto, atrasados. En este terreno, el mundo cultural, el sentido común y el orden lógico y moral conservador de la derecha, labrado y sedimentado a lo largo de décadas y siglos, no solo tiene la ventaja por su larga historia inscrita en los cuerpos de cada persona, sino que ahora también está tomando la iniciativa, a través de los medios de comunicación, de las universidades, fundaciones, editoriales, redes sociales, publicaciones, en fin, a través del conjunto de formas de constitución de sentido común contemporáneas.

¿Cómo retomar la iniciativa en este campo de lucha decisivo? Jerarquizando la lucha ideológico / simbólica como la más importante de las luchas políticas del proceso revolucionario que ya es Estado y gobierno.

Muchas veces, compañeros que son dirigentes sindicales, estudiantiles o profesores universitarios se esfuerzan, en una especie de justa carrera de ascenso social, por llegar a ser parlamentarios o miembros de la administración pública en ministerios, gobiernos locales, etc. Se trata de un hecho de justicia que precisamente visibiliza la democratización del Estado y el cambio de la composición social estatal. Luego de haber sido marginados del poder político, el que las clases plebeyas se sientan ahora con el justo derecho a participar directamente en la administración del Estado habla del espesor de la acción revolucionaria de la sociedad. Y está bien que se dé. Pero, en ocasiones, es más importante ser un dirigente de barrio, de la universidad, ser un dirigente de base, un comentarista de radio, tener un programa de televisión, escribir, hacer teatro o ser organizador social, que ser autoridad o funcionario público, porque en ese trabajo cotidiano con la base social, en los barrios, las fábricas, las radios y programas de televisión, en las representaciones culturales es donde uno gesta la construcción del nuevo sentido común. Y cuando vemos oleadas enteras de compañeros de sectores sociales populares que abandonan la organización, el

barrio, el campo mediático o académico para incursionar en la administración estatal, también vemos que dejan detrás de sí un gran vacío cultural, un vacío de construcción simbólica que puede ser inmediatamente llenado por la mediocridad y el sedimento del viejo sentido común conservador que comienza a revitalizarse creando las condiciones ideológicas y culturales para la restauración conservadora.

Entonces, es posible que tengamos un buen ministro o parlamentario, pero a costa de la ausencia de un gran sindicalista obrero revolucionario, de un buen catedrático universitario, de la ausencia de un comentarista televisivo visto por cientos de personas. Es decir, puede haber un buen gestor pero a costa de un retroceso cultural. Y este es un tema muy sensible en cuanto a la distribución de las tareas en un proceso revolucionario. La voluntad de poder de un bloque popular que construye Estado no puede depositar toda su energía, todos sus recursos y todos sus mejores cuadros políticos en la gestión de gobierno. Eso sería olvidar que se llegó a donde se llegó porque se construyó poder (cultural, político) desde la sociedad, y que la manera de garantizar el control del propio poder del Estado es garantizando la construcción de poder desde la sociedad, en la propia sociedad: en los medios de comunicación, en los sindicatos obreros y campesinos, en los barrios, en la cultura. Cuando uno está en gestión de gobierno es tan importante un buen ministro o parlamentario, como un buen dirigente revolucionario sindical, barrial, estudiantil, porque ahí radica, en definitiva, la vitalidad del proceso revolucionario.

Reforma moral e incorruptibilidad

La tercera debilidad que están presentando los gobiernos progresistas y revolucionarios es una débil reforma moral. Claramente, la corrupción es un cáncer que corroe la sociedad, no ahora, sino desde hace veinte, cincuenta o cien años.

El neoliberalismo es un ejemplo de corrupción institucionalizada, pues monopolizó los recursos públicos acumulados por

dos generaciones convirtiéndolos en recursos privados. La privatización fue el ejemplo más escandaloso, inmoral, indecente y obsceno de corrupción generalizada. Contra ello se rebeló la sociedad, siendo la primera labor de los gobiernos progresistas y revolucionarios, con mayor intensidad en unos casos frente a otros, la recuperación de los recursos privatizados para ampliar el patrimonio de los recursos comunes de la sociedad vía nacionalización. Pero aquello no bastó ni fue suficiente.

Así como se dio el ejemplo de restituir la *res publica*, los recursos o bienes públicos como recursos de todos, es también importante, en lo personal, en lo individual, que cada compañero que se encuentre en la función pública (presidente, vicepresidente, ministro, director, parlamentario, gerente) nunca abandone la humildad, sencillez, austeridad, transparencia e incorruptibilidad en su comportamiento diario, en su forma de ser. Una revolución es una voluntad general dirigida a construir una nueva sociedad que supere todos los males que atormentan a la actual, entre ellos la corrupción. Por eso, cada dirigente, cada autoridad representativa tiene que incorporar en su vida, en su cuerpo, no solo la realidad de la nueva sociedad que se está construyendo, sino que, además, debe mostrar en su vida cotidiana la diferencia sustancial con los personajes del viejo régimen que en el pasado se enriquecieron a costa del erario público. Hoy, más que nunca, es necesario trabajar en la capacidad de demostrar con el cuerpo, el comportamiento y en la vida cotidiana, lo que propugnamos. No se puede separar el pensamiento de la acción, lo que somos de lo que decimos.

Frente al moralismo hipócrita de los medios de comunicación de la derecha, debemos luchar, una y otra vez, por una moral revolucionaria de dignificación de la gestión de lo público a través de un sacrificio transparente por lo común, de la entrega del ser y el desprendimiento de uno para servir a los demás.

Continuidad de los liderazgos históricos

Un cuarto elemento que complejiza los procesos es la continuidad de los liderazgos en los regímenes revolucionarios hechos en democracia.

Cuando triunfa una revolución armada, la cosa es más fácil porque dicha revolución logra someter, mediante la coerción, a los sectores conservadores. Sin embargo, en las revoluciones democráticas, el nuevo poder revolucionario tiene que convivir con el adversario, que ha sido derrotado electoralmente, culturalmente y políticamente, pero aún sigue en el campo de lucha. Es parte de la democracia, y las constituciones imponen límites de cinco, diez, quince años para la elección de una autoridad.

¿Cómo dar continuidad al proceso revolucionario y al liderazgo cuando se tienen esos límites? Es un tema del que no se ocuparon otras revoluciones porque pudo resolverse al principio. En cambio, los nuevos procesos progresistas y revolucionarios tienen que afrontarlo de acuerdo con los límites constitucionales de mandato.

¿Cómo resolver el tema de la continuidad del liderazgo? No faltan las críticas que sostienen que los “populistas” y socialistas son caudillistas. Mas, ¿qué revolución verdadera no personifica el espíritu de la época en personas? Si todo dependiera de instituciones, es decir, de normas y procedimientos rutinarios, ya no sería una revolución. Las instituciones no hacen las revoluciones, las revoluciones las hacen las personas, las subjetividades, las clases sociales, los individuos, precisamente en contra de la asfixia de determinadas instituciones y colectividades privilegiadas.

No existe, en el mundo, una verdadera revolución sin líderes y sin caudillos, porque una revolución es justamente el desborde creativo y heroico de la subjetividad de las personas que desborda instituciones, suprime rutinas, anula destinos preestablecidos e inventa un mundo nuevo allí donde el mundo parecía estar acabado. Entonces, una revolución, que es un hecho colectivo, es producto de subjetividades de carne y hueso, de personas que se sobrepone a las normas y a las rutinas, y que hallan, en

el encuentro personal, en el valor del sujeto de carne y hueso con nombre y apellido, en la comunidad libre de las acciones conjuntas, el espacio de su creatividad histórica.

En cambio, cuando las instituciones son las que regulan la vida de un país, nos encontramos frente al mando de la rutina, de la norma, de la repetición y ya no de la revolución. Y cuando esto se apodera de la participación en los temas comunes, estamos ante democracias fósiles, tan características de los países con instituciones liberales y en decadencia. Cuando la subjetividad de las personas y la fuerza de las personalidades es la que define el destino de un país, estamos frente a verdaderos procesos de revolución. Y, por lo general, ese poderoso hecho colectivo de la historia, que reconfigura el destino de los pueblos, se personifica en individuos, se simboliza en personas cuyo carácter y discurso emblematiza la gran obra colectiva.

El líder histórico no sustituye la acción colectiva como suprema creadora de vida social, pero es su emblema identificante y cohesionador. En este caso, la cuestión es: ¿cómo dar continuidad al proceso teniendo en cuenta que existen límites constitucionales para el ejercicio en el gobierno de un líder, de una persona? Se trata del gran debate contemporáneo de los procesos progresistas en tiempos de democracia representativa, que no será fácil resolver.

Alguien podría argumentar que no se deberían tener líderes tan fuertes cuya sustitución, en la gestión gubernamental y en las candidaturas electorales, provoque retrocesos políticos. Es posible. Pero eso no depende ni del líder ni de los académicos. En caso de darse, será un dato objetivo de la realidad colectiva que no es posible prever, porque depende de cómo las clases subalternas internalicen su experiencia de lucha y representen los logros de su acción revolucionaria. Tal vez la importancia esté en promover y trabajar liderazgos colectivos que permitan mayores posibilidades de elección, en el ámbito democrático, para la continuidad de los procesos. Pero incluso a veces ni eso es suficiente. Es una de las preocupaciones que deberá

ser resuelta en el debate político. ¿Cómo se brinda continuidad subjetiva a los liderazgos revolucionarios a fin de que los procesos no se trunquen ni se limiten y puedan tener continuidad en perspectiva histórica?

Estado continental plurinacional

Por último, una quinta debilidad que es necesario mencionar de manera autocrítica pero propositiva, es la débil integración económica continental. En los últimos diez años, el continente ha avanzado de manera extraordinaria en la articulación política. Los bolivianos somos los primeros en agradecer la solidaridad de Argentina, Brasil, Ecuador, Venezuela, Cuba, cuando tuvimos que enfrentar problemas políticos para nuestra continuidad democrática; ha sido esta solidaridad continental la que ha ayudado a contener golpes de Estado y a preservar la continuidad democrática en nuestros Estados.

Sin embargo, en relación con la integración económica, no se ha podido avanzar de manera sustancial. Se han tenido grandes iniciativas como la del sucre, la creación de empresas grannacionales y la articulación de empresas nacionales para asumir conjuntamente la presencia en otros mercados, pero se ha avanzado muy poco en esas iniciativas y, al final, están quedando en nada. La construcción de la integración económica se torna mucho más difícil pues cada gobierno enmarca su visión en su propio espacio geográfico, su economía, su mercado y aquí se trata de ver los otros mercados, espacios geográficos y economías. Ahí surgen las limitaciones de la propia mentalidad de las sociedades.

Existen propuestas, pero cuando se tienen que ver las compras, la balanza de pagos, las inversiones y la tecnología, las cosas se ralentizan y cada funcionario se apega a su norma, al interés y la rentabilidad nacional inmediata. Ese es el problema. Cada funcionario debe salir del esquema nacional y pensar en clave continental. Además, el mundo está cambiando, es un mundo en el que cada nación, por sí misma –a excepción de dos o tres naciones-continente– es irrelevante y no tiene la fuerza para

cambiar el destino del curso actual de la interdependencia mundial. De hecho, en un contexto de globalización, cada nación por sí misma es diariamente triturada por esa globalización dirigida por bloques regionales o Estados continentales y megacorporaciones empresariales. En este siglo XXI, América Latina solo podrá convertirse en dueña de su destino si logra constituirse en una especie de Estado continental plurinacional, que respete las estructuras nacionales pero que, a la vez, a partir de ese respeto de las estructurales locales y culturales de cada país, tenga un segundo piso de instituciones continentales en lo financiero, legal, cultural, político y comercial, capaz de influir y redireccionar el curso de la mundialización económica.

América Latina tiene más de 450 millones de personas, cosa que en términos de demografía y de mercado es ya, en sí mismo, un hecho relevante y decisivo en el contexto mundial. A ello hay que sumar que el continente tiene una de las mayores reservas de minerales estratégicos, de agua dulce y biodiversidad (que son los mayores tesoros de este siglo), de litio, gas y petróleo; y además es una de las zonas de mayor producción agrícola del mundo. Es una región con una amplia población joven, con incremento de su formación profesional, que está incursionando en la fabricación de tecnología y generación de conocimiento. Es un continente que si actúa, no como la suma de países separados, sino como una unidad política y económica, podrá curvar el espacio / tiempo del mundo e influir y redireccionar a favor propio el curso de la economía mundializada.

Posneoliberalismo: horizonte insuperable de esta época

Son tiempos difíciles, interesantes y exigentes para los revolucionarios. Las fuerzas reaccionarias de la derecha quieren retomar la iniciativa política y, en algunos lugares, lo han logrado aprovechando nuestras debilidades. ¿Qué va a pasar? ¿En qué momento nos encontramos? ¿Qué se viene a futuro?

No debemos asustarnos ni ser pesimistas ante el futuro, ante las batallas que se vienen. Cuando Marx analizaba los procesos revolucionarios, en 1848¹⁶, siempre hablaba de la revolución como un proceso por oleadas, nunca como un proceso ascendente o continuo, permanentemente en ofensiva. La realidad de entonces y la actual muestran que las clases subalternas organizan sus iniciativas históricas por temporalidades, por oleadas: ascendentes un tiempo, con repliegues temporales después, para luego asumir, nuevamente, grandes iniciativas históricas. Así, una y otra vez, hasta que el curso de la historia y las necesidades colectivas encuentran el cauce de satisfacción para ese descontento y creatividad social.

Es así como a la primera oleada de desborde social, como la que vivimos los diez años anteriores, le está sucediendo un repliegue temporal. Pero más temprano que tarde habrá de sucederle una segunda oleada, que avanzará más allá de lo que lo hizo la primera, y a esta le sucederá una tercera, que la superará.

Me atrevo a pensar que estamos ante el fin de la primera oleada y que estamos viviendo un repliegue cuya duración se extenderá por meses o años. No lo sabemos con precisión. Sin embargo, está claro que como se trata de un proceso, que aún no ha agotado su potencial ni resuelto las causas más profundas que lo llevaron a manifestarse, tendremos una segunda oleada que intentará ser el escenario de resolución de las demandas y necesidades históricas que permitieron el estallido de la primera y que todavía no han sido ni serán satisfechas en el escenario de este repliegue restaurador.

Por tanto, lo que debemos hacer es prepararnos para las batallas en este escenario de repliegue temporal de la oleada revolucionaria, debatir abiertamente qué cosas se hicieron mal en la primera oleada, en qué se falló, dónde se cometieron errores y qué

16. Véase Carlos Marx y Federico Engels, “Las revoluciones de 1848”. Selección de artículos de la *Nueva Gaceta Renana, Obras fundamentales*, tomo 5, México DF, Fondo de Cultura Económica, 1989.

faltó hacer a fin de enmendar inmediatamente estas debilidades y comprometerse, de manera práctica y también inmediata, para que cuando se dé la segunda oleada, los procesos revolucionarios continentales puedan llegar mucho más lejos y mucho más arriba de lo que lo hicieron en la primera oleada.

La crítica y la autocrítica deben ser revolucionarias, es decir, no buscar culpables y lavarse las manos de las responsabilidades que cada uno y todos tenemos con la producción del destino que construimos. Este es el proceder típico de la izquierda deslactosada que observó impotente y ajena, desde el palco, el despliegue de los procesos revolucionarios y que, ahora, desde el mismo palco –financiado, claro está, por gratificantes remuneraciones externas– divaga impotentemente acerca de lo que otros debieran haber hecho. ¡Eso no sirve para nada! La autocrítica es práctica, sirve para la acción inmediata, porque el momento de repliegue requiere acciones prácticas de resistencia, de reorganización y de búsqueda de nuevas iniciativas por parte de los sectores populares.

Esta segunda oleada continental podrá ir más lejos porque tendrá unos soportes, unos puntos de partida que no se pueden ceder; tendrá a una Cuba, una Bolivia, una Venezuela y un Ecuador firmes, que permitirán avanzar hacia el resto del continente y más allá de su extensión territorial.

Nos tocan tiempos difíciles, pero para un revolucionario los tiempos difíciles son su aire y su alimento; de eso vivimos y nos alimentamos, de los tiempos difíciles. ¿Acaso no venimos de abajo? ¿Acaso no somos los perseguidos, los torturados y los marginados de los tiempos neoliberales?

La década de oro del continente no ha sido un regalo. Han sido las luchas desde abajo, desde los sindicatos, desde las universidades, desde los barrios y desde las comunidades indígenas y campesinas las que han hecho posible este ciclo revolucionario. Esta primera oleada no ha caído del cielo. En nuestros cuerpos están las huellas y heridas de las luchas de los años setenta, ochenta, noventa del siglo pasado y el inicio del nuevo siglo. Y si

hoy, provisional y temporalmente, tenemos que volver a replegarnos a esas luchas, que así sea. Para eso está un revolucionario, para asumir las experiencias, retomar lo que antes se hizo y mejorar lo que se construirá a futuro.

Luchar, vencer, caerse, perder, levantarse; volver a luchar, vencer, caerse y volver a levantarse. Ese es nuestro destino, hasta que terminen nuestras vidas.

Algo que cuenta a nuestro favor es tener el tiempo histórico de nuestro lado. Ellos, las fuerzas reaccionarias –lo decía el profesor Emir Sader–, no tienen alternativa, no son portadoras de un proyecto de superación opuesto al que los procesos progresistas y revolucionarios enarbolaron e hicieron. La derecha simplemente se anida en los errores, los rencores y las envidias del pasado. Son los restauradores del decadente y fallido neoliberalismo. Ya sabemos lo que hicieron con el continente cuando gobernaron (en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador): destruyeron nuestros países convirtiéndolos en miserables, dependientes y asfixiados de vergüenza colectiva.

Esa derecha reciclada, ese neoliberalismo tardío no representa el futuro. Son como zombis o muertos vivientes que, temporalmente, se mueven y caminan dando manotazos ante la historia.

El posneoliberalismo es el futuro y es la esperanza. Lo que los gobiernos progresistas y revolucionarios han hecho, en diez años, por ampliar derechos sociales y construir la soberanía de los países es más de lo que se ha hecho en los cien años anteriores. La derecha restauradora tiene eso en contra: es el pasado, es el retroceso. En cambio, el tiempo histórico está a favor de la revolución.

Pero ahí hay que ser muy cuidadosos y aprender de lo que se vivió en los ochenta y noventa, cuando todo complotaba contra las fuerzas revolucionarias: acumular y saber acumular fuerzas; entender que cuando uno se lanza a una batalla y la pierde su fuerza se va hacia el enemigo potenciándolo y debilitándonos; darse cuenta que cuando hay que dar una batalla se la tiene que calcular bien; saber obtener legitimidad y explicar a la gente; saber

conquistar nuevamente la esperanza, el apoyo, la sensibilidad y el espíritu emotivo de las personas en cada nueva pelea que iniciamos; entender que hay que entrar, nuevamente, en las batallas minúsculas y gigantescas de las ideas, en los grandes medios de comunicación, en los periódicos, en los pequeños panfletos, en la universidad, en los colegios, en los sindicatos; que hay que volver a reconstruir el nuevo sentido común de la esperanza, del posneoliberalismo. Ideas, organización y movilización.

No sabemos cuánto durará esta batalla, pero hay que prepararse por si dura uno, dos, tres, cuatro o más años. Cuando nos tocó soportar, desde la trinchera, los tiempos neoliberales, soportamos más de veinte años; y aquellos que vienen desde la dictadura, soportaron cuarenta años. Sin embargo, en esos tiempos, la derecha se presentaba como portadora del cambio, mientras que hoy es el pasado que apesta a naftalina. Hoy, la izquierda es la abanderada del cambio.

Es un buen tiempo, cuando hay lucha siempre es un buen tiempo, ya sea en gestión de gobierno o en oposición. El continente está en movimiento y más temprano que tarde dejarán de ser simplemente ocho o diez países, seremos quince, veinte o treinta los que celebraremos esta gran Internacional continental de los pueblos revolucionarios, progresistas, de la democracia, la justicia y la igualdad.

RICARDO FORSTER

La experiencia argentina bajo el nombre del kirchnerismo

Se me ocurre que para intentar ofrecer una pintura de la actualidad argentina que no sea un relato lineal ni meramente “periodístico”, que tome en cuenta la extrañeza que para un público latinoamericano suele tener la política en esta parte del mundo, y sobre todo las dificultades para entender el peronismo, es necesario presentar de qué modo la experiencia del kirchnerismo –sus doce años de gobierno y su derrota electoral– es heredera y crítica, a la vez, del movimiento creado hace más de setenta años por Juan Perón. No para dirimir algo casi imposible de lograr, que es explicar la exuberante y contradictoria diversidad del peronismo, su paso tumultuoso por la historia nacional, sus logros y sus oscuridades, sino para romper ciertos prejuicios a la hora de realizar un balance productivo y crítico de esta última década en la que tantas cosas ocurrieron cuando ya nada presagiaba que la historia iba a recomenzar. Incluyendo, por supuesto, sus límites, sus errores y la clausura del proyecto

democrático-popular que acabó por dejarle el camino libre a la restauración neoliberal.

Intento, en todo caso, mostrar de qué modo lo que algunos han denominado como el “retorno del populismo” constituyó una extraordinaria oportunidad para actualizar, en mi país, una tradición emancipatoria con una fuerte convicción latinoamericanista; poniendo en discusión, también, esa casi natural inclinación, no sin algo de prejuicio, a diferenciar las “experiencias de los gobiernos de izquierda latinoamericanos” –en particular Bolivia, Ecuador y Venezuela– de lo realizado, bajo la forma de una original actualización del populismo clásico, por el kirchnerismo, que desafió, como pocos, los poderes reales.

Detenerme a indagar el contexto histórico, político, cultural y económico que hizo posible, bajo la forma de lo inesperado, la irrupción de un proyecto que buscó invertir la hegemonía de la derecha en Argentina sin rebasar los límites de un capitalismo de raíz neokeynesiana. Seguramente ahí podríamos encontrar sus problemas y sus debilidades en tanto no pudo, no supo o no quiso aventurarse por los territorios sinuosos de una transformación estructural de la economía que acabaría por pasarle factura; pero que no ha sido diferente de los límites que también encontraron los otros gobiernos progresistas de la región. De un proyecto que ha dejado una marca profunda y que ha trazado los rasgos de una fuerte identidad político-cultural que constituye, hoy, el núcleo vital de la oposición al neoliberalismo, la única alternativa real para cerrarle, en un futuro no muy lejano, el paso a la derecha.

Estoy convencido de que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner han sido los que más a la izquierda llevaron a una sociedad, la argentina, poco dispuesta a dejarse conducir hacia políticas de matriz igualitaristas, y que su confrontación con los poderes corporativos ha sido, por lejos, la más relevante desde el retorno a la democracia. No espere, entonces, el lector encontrar una descripción lineal y al uso de lo que sucedió en estos años; estas páginas apuntan a evidenciar la “novedad” que, para mí, trajo el kirchnerismo, sus desafíos, su condición “maldita”, su ir

a contracorriente de las tendencias dominantes asociándose a las otras experiencias rupturistas que, en el mismo contexto histórico, se dieron en América del Sur y reiniciaron, cuando pocos lo imaginaban posible, la marcha de la emancipación continental.

Un nombre para cambiar la historia

¿Qué dice un nombre? ¿Qué de nuevo se guarda en el lenguaje político cuando sobre la escena de una historia desnutrida y avara con sus mejores tradiciones surge el nombre de algo otro y semejante? ¿Es acaso el advenimiento de una nominación la evidencia de una novedad? ¿Qué misterios se esconden en el interior de una palabra, cuya significación se mueve al compás de lo que cambia en una sociedad, cuando poco y nada se vislumbraba en el horizonte oscurecido por la impiedad de una época ajena a las grandes reparaciones populares, como lo fue la del último cuarto del siglo xx? ¿Qué implica que el patronímico de una persona se convierta en santo y seña de un giro fundamental en la historia de un país? ¿Qué nombramos, de qué manera y por qué cuando pronunciamos la vastedad difusa, ambigua y compleja de un nombre que viene a resignificar la realidad política y la materia simbólica con la que nos habíamos acostumbrado a decir, a pensar y a hacer lo nacional? ¿Es ese nombre continuador de otro más amplio, contradictorio y desgastado que lo precedió? ¿Es lo propio e innovador heredero o traidor de la nominación previa? ¿Puede un nombre perturbar tan intensa y decididamente el itinerario de una sociedad hasta dividirla de modo casi irreconciliable despertando demonios dormidos?

Preguntas que surgen, arremolinadamente, cuando lo que intentamos descifrar es el “nombre del kirchnerismo”, su irradiación incendiaria, su potencia hermenéutica y su reconfiguración del presente y el pasado. Algo porta ese nombre que no nos deja en paz. Algo insólito para un tiempo crepuscular en el que ya no esperábamos novedades refulgentes,

inspiraciones políticas capaces de sacarnos de nuestra parsimonia dominada por un pesimismo que parecía irrevocable. Como si el enigma de su pronunciación nos obligara a repensar nuestras biografías individuales y colectivas. Un nombre que no solo abrió una nueva etapa en la vida del país sino que ha dejado, una vez consumada la derrota electoral, una estela de incertidumbre, expectativa y desasosiego que amenaza con devorar sus intensidades y sus desafíos. Extraña oportunidad la que se abre cuando en un lapso relativamente largo se ofrece la posibilidad de interrogar por la fecundidad y la decadencia sin saber, todavía, de qué lado se inclinará la balanza de la historia.

Cuando escribimos sobre un tiempo que es el nuestro no podemos eludir las peripecias personales –aunque lo queramos, tratando de responder a ciertas exigencias académicas que nos prohíben las confesiones por extemporáneas a la rigurosidad metodológica–, los estados de ánimo que ocupaban nuestras reflexiones en momentos en los que experimentamos la brutal escisión entre la lejanía de otra época en la que nos quemamos en el fuego de la insurrección y la inmediatamente previa a la actual, la que ahora nos ocupa, en la que el lenguaje se nos escapaba a la hora de intentar establecer los lazos entre uno y otro tiempo de nuestras biografías.

La llegada imprevista de Néstor Kirchner, su silueta anacrónica que parecía querer testimoniar un ayer olvidado y sepultado, revolvió las aguas estancadas de la memoria reactualizando lo que ya no discutíamos. O, tal vez, sería mejor decir lo que buscábamos interpelar sabiendo que de lo que se trataba era de un pasado clausurado, de recuerdos gelatinosos que nos remitían a otra época del mundo. Una historia sellada, acabada, a la que solo podíamos mentar desde la monografía académica (el más distanciado de los modos) o desde la experimentación del ensayo (escritura en la que nos atrevíamos a cruzar lo personal, lo íntimo de experiencias vividas con el balance crítico de una generación desmembrada por derrotas propias y ajenas). Un giro impensado del presente que abrió las compuertas para resignificar el

pasado, que nos/me permitió auscultar de otro modo aquellos legados que habían sido devorados por las inclemencias de una época termidoriana de las grandes tradiciones revolucionarias. Posibilidad no de recuperar dogmática y acríticamente esos legados y esas biografías, sino de iniciar una interpretación capaz no solo de situarse en el campo de lo historiográfico y de lo erudito, sino, también, de hacerlo desde una perspectiva política y actualizadora.

De la misma manera que nos permitió abordar de otro modo la experimentación neoliberal de los años noventa sacándonos de la pasividad política y haciéndonos restablecer los lazos entre reflexión teórica y compromiso político, la derrota electoral de noviembre de 2015, la primera que le ofrece a la derecha sin aditamentos la oportunidad de acceder al gobierno con la legitimidad del voto mayoritario, nos exige aguzar la mirada crítica en torno a los doce años de kirchnerismo. Estamos obligados a analizar sus límites, sus contradicciones, sus errores, sus incoherencias, sus aciertos, sus excesos de confianza, sus quimeras, sus fuerzas y sus debilidades.

¿Acaso fue el último nombre posible para una apuesta emancipadora en un país que vuelve a girar hacia la derecha regresando a su oscura gimnasia de la repetición? ¿Acaso se replicó con el kirchnerismo aquello que de Alfonsín dijera Pancho Aricó, cuando sostuvo que había estado “a la izquierda de la sociedad”? Al iniciar la escritura de estas reflexiones estaba lejos de imaginar el brutal dato de la realidad que consumaría la restauración neoliberal. Pese al impacto de la derrota y a la experimentación de sus nefastas consecuencias para la vida social, no puedo sino seguir insistiendo con la necesidad de dar cuenta de lo que nos constituyó y atravesó en estos doce años, sus luces y sus sombras, las inéditas oportunidades que abrió y los callejones con los que se encontró. Sigue siendo, el kirchnerismo, el nombre de una extraña aventura emancipadora cuya consumación no ha fraguado todavía como pieza de museo. Cuando algo significativo rompe la repetición monótona

de un presente eternizado en su cinismo relativista, lo que surge conmueve lo actual y lo pasado. Reapertura de aquello que permanecía sellado.

La característica principal del pensamiento histórico como tal –escribe Slavoj Žižek– no es el “movilismo” (la fluidificación o relativización histórica de todas las formas de vida), sino el pleno sostenimiento de una cierta *imposibilidad*: tras una auténtica ruptura histórica simplemente no se puede volver al pasado o continuar como si nada hubiera ocurrido...¹

Nuestra década del setenta, la apuesta trágica de una generación, adquirió, a partir de la emergencia de ese otro nombre, otra significación al mismo tiempo que se rompían los sellos de la clausura. Simplemente, como dice Žižek, ya no pudimos leer ni interpretar ese pasado con los mismos ojos de las décadas dominadas por la transición democrática y la teoría de los dos demonios.

El presente, en este caso el que se abrió en mayo de 2003, cambió el pasado y construyó un puente de ida y vuelta entre la novedad y lo acontecido. Se trató, si lo abordamos benjaminiamente, de una politización del pasado que, para ciertos historiadores académicos, constituye una herejía.

En cada coyuntura histórica –continúa Žižek–, el presente no es presente únicamente; también incluye una perspectiva sobre el pasado que le es inmanente. Tras la desintegración de la Unión Soviética, por ejemplo, la Revolución de Octubre ya no es el mismo acontecimiento histórico: ya no es (desde el triunfante punto de vista liberal-capitalista) el comienzo de una nueva época de avance en la historia de la humanidad, sino el comienzo de un catastrófico descarrilamiento de la historia que acabó en 1991 (...) En el análisis dialéctico de la historia, por el contrario, cada

1. Slavoj Žižek, *Menos que nada. Hegel y la sombra del materialismo dialéctico*, Madrid, Akal, 2015, p. 215, trad. de Antonio J. Antón Fernández.

nueva “etapa” que llega “reescribe el pasado” y retroactivamente deslegitima la anterior.²

En relación con el peronismo, con su compleja, zigzagueante y ecléctica historia, el presente movilizó por el kirchnerismo supuso una modificación sin la cual hoy ni siquiera sería posible interrogarnos por su actualidad. Permitió no solo recuperar una parte perdida de su tradición, aquella que remitía a los orígenes y a la experiencia de la generación del setenta, sino que le devolvió, bajo nuevas características, su condición maldita. El peronismo, si es posible decirlo de este modo, se encontró con un nuevo rostro capaz de perturbar su larga decadencia. Seguramente el triunfo de la derecha macrista nos obliga a mirar de otro modo la experiencia kirchnerista, nos exige regresar sobre sus imposibilidades y sobre los fantasmas de la repetición en el interior de una sociedad aficionada a reiterar sus equivocaciones. Cómo no establecer un parangón con aquella aseveración del economista Eduardo Basualdo cuando señaló que la burguesía nacional había cometido suicidio al apoyar el golpe de marzo de 1976 junto al modelo económico implementado por Martínez de Hoz, y su oscura repetición cuando una parte mayoritaria de la clase media y del empresariado pequeño y mediano volvieron a hacerlo con Mauricio Macri. ¿Se dará aquello archicitado de Marx respecto a la historia y a sus movimientos especulares: “... primero como tragedia y después como farsa”?

Se ha abierto un tiempo de regresión y restauración que nos obliga no solo a hacer el balance de la experiencia vivida, sino que también nos exige desentrañar el nuevo carácter de lo que se acaba de inaugurar. Junto con el sostenimiento de lo mejor que supimos construir y reconstruir en el movimiento popular se vuelve necesario disputarle a la derecha neoliberal lenguaje,

2. Slavoj Žižek, *op.cit.*, p. 243.

sentido común e imaginarios de época. Para lograr eso será indispensable abandonar dogmatismos y clichés aventurándonos al doble desafío de sostener la movilización del pueblo contra un modelo de expropiación y miseria, a la vez que abordamos, con los instrumentos de la crítica, la complejidad del nuevo escenario del capitalismo ultraliberal y su intensiva producción de subjetividad. Pero regresemos al contexto en el que advino el notable giro progresista iniciado por Néstor Kirchner.

Ciertamente, dígase lo que se diga, a favor o en contra, la irrupción del santacruceño desplazó las certezas de una derrota definitiva, sepultó las sensibilidades melancólicas, arrinconó los lamentos de ese *ille tempore* mitificado y por lo tanto alejado para siempre de los cuerpos actuales, salió a disputar con los sepultureros de ideas, ideales, biografías, sueños y utopías devastadas por la inclemencia mancomunada de la represión –entre nosotros– y el aceleramiento de un profundo y decisivo cambio civilizatorio que venía junto con derrumbes soviéticos, regresiones inverosímiles de experiencias tercermundistas convertidas en locura y muerte, crisis del marxismo, preterización de la revolución y entrada sin anestesia al capitalismo salvaje fabulosamente estetizado por el reinado absoluto de la mercancía y el consumo de masas. En ese a destiempo se instaló inopinadamente un nombre que todavía no se pronunciaba pero que ya anticipaba lo inédito por ocurrir. Nos asaltó. Nos atravesó como un rayo. De ahí en más nos impidió el acomodamiento a la certeza del fin de la historia y de la muerte de las ideologías que, entre otras cosas, permitieron acallar nuestros demonios y nuestras desgarraduras. Bajo otra luz comenzamos a ver el discurrir de las cosas.

Es cierto, o al menos eso seguimos creyendo, que las sociedades no se plantean tareas que no pueden resolver ni se saltan, como si nada, las determinaciones materiales de la historia. Eso, hasta que no se demuestre lo contrario, seguirá siendo parte de nuestro acervo conceptual (nuestro Marx *dixit* capaz de interpelar, como pocos, la trama profunda del capitalismo).

Pero, y esto también es verosímil, de vez en cuando, muy de vez en cuando, algo se quiebra en el interior de un sistema acostumbrado a la repetición. Algo del orden de la sorpresa viene a conmover lo establecido conjugándose con la aparición de aquellos rasgos que, desde Maquiavelo a Hegel, se han pensado bajo la idea de una voluntad capaz de presionar sobre la escena de la realidad invirtiendo el devenir de las cosas. Una ruptura. El surgimiento de una firma que, en el inicio, apenas si alcanza a garabatear su nombre sin que todavía sea posible volverlo plenamente inteligible para una sociedad que permanece entre lo antiguo –que sigue impregnando su sentido común y la trama central de su subjetividad– y lo nuevo –neblinosa experiencia que busca algún nombre que la pueda nombrar mientras las cosas dejan de ser lo que eran sin acabar de asumir los rasgos de la novedad que portan.

El 25 de mayo de 2003, sin que nadie alcanzase a vislumbrar lo que se estaba desencadenando, las palabras impensadas de un discurso también inopinado dibujaron en el clima de la época una ráfaga de aire puro capaz de producir sensaciones extrañas y encontradas. Una apertura hacia otra manera de ver la realidad que, en ese comienzo, no alcanzaba a permitirnos la claridad suficiente como para proyectar con alguna certeza el hacia dónde de ese discurso que delineaba lo que aún parecía un nombre impronunciable.

Siempre habrá que recordar el estado ruinoso de la vida social, anímica, económica y política que caracterizaba a la Argentina de principios de siglo XXI, cuando resultaba quimérico imaginar un brusco giro que nos condujese a un tiempo de recuperación. La pesadumbre, el desconcierto, la paranoia frente a la descomposición acelerada, la bancarrota de las identidades políticas tradicionales y la crisis de representación venían a cerrar el largo ciclo iniciado por la dictadura en marzo de 1976 y que, salvando el breve interregno de la recuperación democrática, desplegó durante veinticinco años el laboratorio neoliberal. Otro país, otra sociedad, otra memoria, otras formas

de sociabilidad y nuevas estructuras de dominación y producción de subjetividad dejaron sus marcas profundas en el cuerpo argentino. El clima de época, global en su potencia aniquiladora de tradiciones emancipadoras aceleró la crisis de los proyectos revolucionarios arrinconando también sus soportes teóricos e ideológicos. Tiempo de sepultureros y de un hondo pesimismo que, en el mejor de los casos, ofreció el refugio de pequeñas cofradías dedicadas a estudiar la bancarrota y sus consecuencias mientras algunos núcleos dispersos resistían como podían a la ofensiva del neoliberalismo.

Cuando no lo esperábamos, cuando seguíamos rumiando nuestros desencantos y desasosiegos, vino otra vez en nuestra ayuda la materialidad de una historia que se ponía nuevamente en movimiento despertando lo que parecía definitivamente dormido. La confluencia azarosa de una crisis terminal, un cambio que se había iniciado en Venezuela y continuado en Brasil, la emergencia de personalidades excepcionales y el brutal agotamiento de la experiencia neoliberal en nuestro continente unido a distintas formas de resistencia popular abrieron una nueva e inesperada etapa en nuestros países (en Argentina, la crisis y el estallido de diciembre de 2001 cerraron la etapa regresiva abierta por la dictadura y profundizada a lo largo de la década de los años noventa, etapa que había llevado al país a niveles de desigualdad, pobreza e indigencia antes desconocidos).

Cuando las ideas son incapaces de salir del callejón, cuando la teoría naufraga en su propia tempestad, es la contingencia de la historicidad la que nos reintroduce en la dinámica de los acontecimientos y nos ofrece la posibilidad de reinventar lenguajes que parecían perimidos. Nada más desafiante que encontrar las palabras nuevas que puedan nombrar la novedad del presente, incluso en su dimensión oscura y perturbadora. El agotamiento de una época es acompañado por el del lenguaje que intentó expresarla. Nuestra encrucijada, viajeros ahora de la derrota, es si podremos sostener la renovación que supuso, entre nosotros, la irrupción y el despliegue del kirchnerismo. Sin garantías.

Un nombre de resonancias políticas comienza a oírse cuando algo distinto hiende la estructura de una realidad que, hasta el momento de la emergencia, se movía por otros andariveles; cuando la repetición es interrumpida por aquello que dice provenir de algo conocido pero que, al mismo tiempo, porta algo de insólito y de novedoso. Como si ese nombre pronunciado con cautela en un principio guardase, en su interior, promesas impensadas el día anterior. No hay nombre político con aspiraciones provocadoras que pueda imaginarse sin ese golpe de efecto.

¿Sabía acaso Kirchner lo que su nombre iba a desencadenar? ¿Imaginaba esa dialéctica de novedad y de retorno que provocaría su lanzamiento al ruedo de la intervención pública? ¿Había margen, todavía, para apropiarse de una tradición tan lastimada por las fatalidades de la historia como lo era, hasta ese momento, el peronismo y, sobre todo, su herencia popular, nacional y hasta de izquierda de la que provenía el personaje inesperado que venía del sur profundo? Pero, ¿se trataba de eso —sin que se pudiera ser especialmente optimista—, de imprimirle un giro sorprendente en su capacidad para no quedar aprisionado en la melancólica restauración de lo imposible de ser restaurado? Bajo el nombre de kirchnerismo muchas de esas cosas se han puesto en juego. Nada ha permanecido igual a lo que era el día previo a la asunción del santacruceño. La Argentina hoy, y pese al triunfo de la derecha, es otro país, su sociedad (en especial las clases populares) no es la misma que dejó que sobre su cuerpo el neoliberalismo escribiese, en la década de los años noventa, una historia infausta de injusticia y explotación. Está por verse hasta dónde el kirchnerismo ha dejado una marca en la conciencia del pueblo y en su capacidad de rebeldía.

Para muchos ese nombre difícil de pronunciar abrió el horizonte de un país que se había extraviado en su noche más profunda; les devolvió una creencia, un sentido político, un rumor de afectos y fraternidades que ya no imaginaban circulando por su cotidianidad; les permitió dialogar de otro modo con sus

ausencias y con sus posibilidades de transformación de la realidad. Renovó sus indagaciones teóricas contaminándolas con las nuevas e inesperadas demandas de la intervención política. Para otros, ese nombre se convirtió en un enigma y en un problema. Algo en él les resultó, desde el inicio, indigerible e insoportable, como si viniese a desplazar el lugar que venían ocupando a la hora de hablar de lo guardado en la memoria, de todo aquello que representaba sus luchas y sus ilusiones; un nombre del engaño y la impostura que intentaba quedarse con las tradiciones populares y emancipadoras desconociendo a sus verdaderos guardianes.

Preferían la transparencia del menemismo al desafío de un nombre que los tomó desprevenidos y al que nunca lograron descifrar porque no pudieron sustraerse al prejuicio con que lo recibieron. Quedaron, también, aquellos otros que simplemente descargaron todas las baterías del rencor de clase contra una experiencia que los retrotraía a épocas que nunca imaginaron volver a vivir. Como si hubieran estado en una cápsula del tiempo y, de un día para otro, atravesando décadas, como sostuvo con ingenio irónico el artista plástico Daniel Santoro, salieron de ella con la misma estructura mental con la que rechazaron, criticaron y voltearon con odio furibundo el primer peronismo.

Cuando un nombre, en este caso el del kirchnerismo, provoca estas reacciones es porque algo importante viene a proponerle a la sociedad. Pero también porque eso importante le resultará insoportable a una parte de esa misma sociedad. Pregunta inquietante: ¿qué sucede cuando esa pronunciación se adelanta a los deseos de esa sociedad, cuando se interna por caminos sinuosos que le exigen a los habitantes del nuevo tiempo adaptarse a lo que no soñaron que les iba a ocurrir? ¿Puede ese nombre, inclinado hacia el gesto jacobino, ese que irrumpe sin lo previo y sin pedir permiso, encontrar el reconocimiento de una sociedad que no lo había previsto? Solo las experiencias políticas portadoras de la fuerza de la historia son capaces de despertar estados de ánimo exaltados. Ellas

reinstalan pasiones olvidadas colocándolas, de nuevo, en el centro de la escena. Oportunidad y peligro.

Pocas experiencias políticas, escasos nombres propios, han tenido la impronta de impregnar tan densamente el escenario de un país volviendo imposible la neutralidad valorativa y la huida hacia refugios impermeables a la demanda de una realidad relampagueante y tormentosa. Un nombre venido de latitudes sureñas, difícil para pronunciar, alejado de las grandes lenguas migratorias que configuraron aquellos otros nombres de nuestras grandes tradiciones políticas e intelectuales. Un nombre cuya resonancia había que inventar y que se iría desplegando al calor de las demandas de una sociedad en estado de intemperie que balbuceaba, sin aún entender, lo que ese nombre comenzaba a significar. ¿Qué espectros revoloteaban a su alrededor? ¿Qué memorias rapiñadas por la implacabilidad del poder regresaban junto con su pronunciación dubitativa? ¿Qué escrituras, nuevas y antiguas, vendrían o no a nutrirlo de un relato capaz de instalarlo en el derrotero de la historia argentina? ¿La significación de su nombre le viene del bando de sus adversarios o de algunos de sus seguidores?

Lo inesperado de un discurso inaugural, sus sorprendentes giros narrativos, su vindicación generacional, su apelación a ideales sepultados por la barbarie represiva, la reposición de palabras olvidadas o saqueadas conmovió nuestra capacidad de escucha. ¿Qué honduras de la memoria y qué trivialidades del poder se esconden en ese nombre que ha venido marcando a fuego nuestras vidas en la última década? ¿Adónde nos lleva? Algo sabemos: no hay novedad ni ruptura sin la aparición de algunas palabras y de ciertos nombres que nos obliguen a decir de otro modo lo que nos acontece. ¿Es acaso esa “novedad” la que irradia el nombre del kirchnerismo? ¿Habremos llegado a las estribaciones de su derrotero o estamos internándonos en otro territorio que aún desconocemos?

Kirchnerismo: ¿un peronismo después del peronismo?

El peronismo, su deriva compleja y laberíntica por la historia del país, constituyó para Nicolás Casullo –con quien me gustaría continuar esta indagación en torno al “nombre del kirchnerismo”– un problema poderosamente irresoluble, un retorno de lo imposible y una continua necesidad de indagar lo que parecía sellado por derrotas, errores, brutalidades fascistoides, indignidades, aventurerismos, corrupciones varias y traiciones múltiples que, sin embargo, no dejaba de mostrar ese otro rostro en el que se dibujaban, como arrugas profundas, las herencias de la lucha obrera, la emergencia impensada y escandalosa de los negros de la historia, la memoria de la resistencia, la metamorfosis revolucionaria de la generación del setenta, los exilios, la militancia barrial, los muertos, los debates interminables en noches de insomnio cuando lo abrumador de la derrota y de las ausencias pesaban en el alma; el Gordo Cooke y Rodolfo Walsh como nombres propios de intelectuales comprometidos que parecían remitir a otra galaxia, todo eso también, y fundamentalmente, era para Casullo el peronismo que amenazaba, y de la manera más ignominiosa como producto del prostíbulo menemista, con concluir su itinerario desmontando el andamiaje que lo constituyó en otra edad del país cuando su aparición histórica se dio en el interior del fervor popular. Creyó ver, con intuición anticipatoria, en lo que todavía no llevaba el nombre de kirchnerismo un extraño, sorprendente y anómalo retorno de lo espectral peronista materializado cuando ya nadie lo imaginaba ni lo esperaba.

La irrupción del kirchnerismo –al que todavía Casullo no terminaba de otorgarle ese nombre que iría delineándose con el paso del tiempo y la profundización de su impronta en la escena nacional– removió aguas estancadas, despertó viejos entusiasmos y le permitió regresar sobre la lengua política, una lengua de la que nunca se desdijo y que siempre estuvo ahí, incluso en los momentos de agobio y derrota, como vigía de una espera de

lo porvenir. Su antigua y compleja relación con el peronismo, que hundía sus raíces en un suelo mítico que siempre permaneció en todas sus indagaciones históricas, se encontró con una inesperada oportunidad que ya parecía definitivamente saldada por una realidad pospolítica y desesperanzadora de todo giro que reabriera las puertas del entusiasmo y de la participación.

Si bien en los años del gobierno de Néstor Kirchner, Casullo fue expresando su satisfacción por lo que se iba suscitando (incluso, y con cuidado, le permitió regresar, sin perder su mirada crítica y desconfiada, sobre ese peronismo de tantos y encontrados travestismos a lo largo de más de medio siglo pero sabiendo, como no podía ser de otro modo después de la implacable revisión iniciada en los tiempos del exilio y luego profundizada cuando regresó al país hasta ser parte de una renuncia colectiva en 1985, que simplemente consolidó su certeza cuando llegó la época más miserable bajo la impronta bizarra del imitador del Tigre de los Llanos –Carlos Menem–, de los propios límites del movimiento fundado por Juan Perón). Su ilusión nació de la potencia de lo imprevisto y de la excepcionalidad de un momento de la vida argentina que no estaba previamente escrita y de la inquietante certidumbre de un nuevo llamado de la siempre añorada disputa política.

Nicolás Casullo, no era de aquellos que simplemente se dejaban llevar por el frenesí –y por eso su ausencia es demasiado significativa–, sino que, incluso en medio de los festejos no dejaba de introducir cierta mirada ácida y de sospecha, como queriendo prevenirse de falsos triunfalismos o de exagerados optimismos que, desde su perspectiva crítica y tocada por el aliento de lo trágico, le estaba no solo prohibido, sino que constituía un juramento intelectual innegociable: permanecer alerta ante los peligros que podían provenir no solo del campo enemigo sino, más grave, de las propias obsecuencias y dogmatismos de las fuerzas amigas. No se equivocó.

En un artículo del año 2003, escrito poco tiempo después de asumir Kirchner la presidencia del país, Casullo intentó

repensar el peronismo, sus paradojas, la extraña vitalidad que le había vuelto a dar esa desaliñada figura proveniente de un lejano sur patagónico, como si intuyera que sin pasarle a esa historia el cepillo a contrapelo sería imposible meterse de lleno en la novedad de una época que se anunciaba como sorprendente e inesperada y que exigía una auscultación sin piedad y sin dogmatismos de una tradición política fuertemente atravesada por su componente mítico, que continuaba siendo el factor decisivo de la historia nacional. No había, en Casullo, ninguna indulgencia ni ninguna posibilidad de olvido a la hora de revisar una herencia tan malgastada.

De qué manera –se preguntó allí– reflexionar este peronismo que se inscribe en la escena de un país transido por innumerables y duras marcas provenientes de distintos pasados recientes, con inéditas experiencias de la miseria social, con mutaciones lingüísticas, estéticas y expresivas de generaciones jóvenes no peronistas, con bolsones ideológicos cubiertos de carencias de todo tipo, con restos muertos partidarios, con neofomas de las teorías y el conocimiento, con metamorfosis identitarias y subjetividades políticas y morales de nuevo cuño citándose en los baldíos de las urbes. Y esa misma pregunta, qué peronismo, también dentro del contexto de un tiempo capitalista global que nos muestra una producción cultural mundializada decidiendo cotidianamente, y como nunca antes, lo propio y la idea de lo propio. Gestando formas de la conciencia, relación con lo real, índole de los sujetos, integración a lo civilizatorio, secretos de las sensibilidades de masas “viejas” y “nuevas”, alineamientos forzosos de países y regiones y guerras neocolonialistas en nombre de un viejo Jehová anglosajón. La pregunta por el peronismo significa, entonces, cómo pensar políticamente este tiempo democrático³.

Casullo vio en el peronismo la conjunción de los extremos, la trama histórico-simbólica en la que era posible auscultar los

3. Nicolás Casullo, *Pensar entre épocas*, Buenos Aires, Norma, 2004, p. 236.

claroscuros de la modernidad, sus momentos atravesados por el deseo de transformación, el mapa de una esperanza social conmovedora del *statu quo* y, también, la perpetuación, a través de sus contenidos de derecha, de un sistema capaz de absorber una de sus dimensiones, la que fue leída por las izquierdas, desde el inicio, como la expresiva de su bonapartismo y de su reducción de la clase obrera a comparsa de un modelo integracionista y conformista.

Para él, sin embargo, lo inusual, lo descentrado, lo irreducible, lo inclasificable del peronismo permaneció siempre ajeno a esa visión cargada de prejuicio e incomprensión.

Peronismo: la plaza del recordatorio festivo, la del renunciamiento, la de la amenaza de escarmiento, la bombardeada, la del cinco por uno, las prohibidas, las postergadas, las recordadas o programadas para el retorno, las de la liberación y las abandonadas. Las plazas fabriles y febriles que marcaron –para el siglo xx– el aferrable lugar de la “historia” política de lo subalterno, pero fuera de los engranajes gremiales, maquinistas, y de las disciplinas horarias. Para el peronismo [sigue Casullo con esta pintura de una extraña e impresionante diversidad capaz de encerrar, desde su visión, la anomalía que, desde un comienzo, atravesó una experiencia política, social y cultural que no dejó de conmover y de imprimirle su marca a una historia nacional que nunca supo muy bien qué hacer con él], el lugar de una patria posible de remover. El lugar de las masas del siglo xx, el de las memorias y juramento frente a palacios de gobierno, a caudillos, a palcos gigantescos con sus estéticas de grandiosidad que también acompañó, como época, el parto peronista. Congregación para una idea de sociedad “hallada”, como movilización total del pueblo en la fragilidad de una Argentina del 45, incierta, adormecida, migradora, simplemente “complementaria”. Plaza de la modernidad apasionada entonces, que extremó y tensó la sociedad hacia la plena historia, y que a la vez deshistorizó instancias y crónicas adversarias. Que incorporó edades y enemigos excepcionales, visibles. Sitio excesivamente verdadero y fantasmagórico a la vez, que tanto el

socialismo, el anarquismo, el leninismo, el stalinismo, el fascismo y el nazismo interpretaron de una manera acabada.⁴

Inquietud de una pregunta formulada en la frontera de otra época que, todavía, no se sabía muy bien cuál era su rumbo. Captura, sin embargo, de aquello que el progresismo y las izquierdas nunca alcanzaron a comprender del peronismo y que le permitió a Casullo reencontrar, en esa encrucijada dramática por la que atravesaba un país en estado de intemperie, la dimensión interpeladora y desafiante que el peronismo, al menos una de sus almas, volvía a plantearle a una sociedad incrédula que estaba convencida del final, ¡al fin!, de ese engendro del demonio que había venido a impedir la realización de la Argentina.

Una provocación, un continuo desacomodamiento de lo establecido, un giro inesperado, una ruptura capaz de anular la lógica de la repetición, una energía transgresora en una época en la que supuestamente ya no era posible la transgresión, un equívoco surgido de lo inesperado, un contratiempo del supuesto devenir necesario de la historia de acuerdo con un plan estratégicamente elaborado por los herederos de la generación de 1880, un exabrupto discursivo de un coronel trasnochado acompañado por una mujer insospechada y plebeya, un amontonamiento de odios enceguedores, el “hecho maldito del país burgués”, todo eso era, en la mirada casulleana, el peronismo. Pero también era su envilecimiento menemista, su travestismo oportunista y su gansterismo corporativo-sindical que había dejado una marca imborrable hasta llevarlo, casi, a su definitiva decadencia. Fue ahí, en ese tiempo de extravío y entreguismo desenfrenado, cuando todo parecía perdido y convertido en recuerdo de un pasado irrecuperable, cuando, de una

4. Nicolás Casullo, “La pregunta por el peronismo”, en *Pensamiento de los confines*, n° 13, Buenos Aires, FCE, diciembre de 2003, pp. 16-17.

inesperada jugada del azar, salió el número que, en el último momento, había comprado ese gobernador venido del sur patagónico que tocaría, entre otras, el alma de Nicolás Casullo.

Largamente se ha escrito sobre el papel de “la fortuna” en la historia de las sociedades. Desde Maquiavelo, el gran teórico inaugurador de estas reflexiones insoslayables, se ha insistido, con suerte dispar, en el análisis de la relación, siempre equívoca y compleja, entre el individuo destacado, el azar de la historia y la fuerza de la voluntad. Horacio González, a la hora de intentar descifrar las peculiaridades del kirchnerismo, se detuvo con fruición erudita en esta tradición emblemática de la filosofía política. “La fortuna es la condensación del tiempo en forma perpleja, impensada. En verdad, la fortuna es la *virtú* como conjunto de pasiones realizativas y de iniciativas intempestivas”⁵. Dos rasgos que describen a Néstor Kirchner, quien volvió a mostrar que no “hay moldes en la historia sino acontecimientos puros, tan solo paradójales. La fortuna queriendo aparecer con el nombre de *virtú*”.

En la última etapa de su camino intelectual, después de haber atravesado el páramo de la derrota y de haberse internado por las comarcas de la crítica de la modernidad, Casullo se inclinó hacia el reconocimiento de esa alquimia entre fortuna y acontecimiento a la hora de condimentar con nuevas especias el guiso de la política, sobre todo, cuando buscó comprender qué traía de novedoso el kirchnerismo. Cruzar, como también hace Horacio González, Marx con Maquiavelo, Perón con Benjamin, constituyendo lo compartido de una revisión crítica del estado de la cuestión. Me sumo con la discreción del caso, estimado lector, a esa genealogía teórica.

5. Horacio González, *El kirchnerismo: una controversia cultural*, Buenos Aires, Colihue, 2011, p. 14.

Creo que Carta Abierta⁶, en lo mejor de su recorrido, guarda ese desafío formulado, en el comienzo de esta historia, por un intelectual nunca dispuesto a abandonar la crítica como instrumento decisivo para “pensar entre épocas”, volviendo a sostener la dialéctica entre mundo de ideas y mundo de acción. Nicolás, en todo caso, siguió buscando, hasta el final, las nuevas palabras para decir lo propio de un tiempo argentino inaugurado por lo que de a poco fue encontrando el nombre de kirchnerismo. Tal vez porque siempre supo, incluso en los momentos de mayor fervor político y cuando los tiempos parecían maduros para la revolución, que el peronismo era portador de distintos rostros. Que ese algo perturbador e incómodo que lo caracterizó desde su origen seguiría acompañándolo a lo largo de su travesía por una historia que lo festejó y lo rechazó con igual énfasis.

También supo reconocer los peligros de un aplanamiento ahistórico, de una mitologización capaz de instalarse en el nuevo fervor juvenil impidiendo la imprescindible revisión crítica de un movimiento portador de sus propios demonios. Después de la larga marcha por el desierto de la derrota, del exilio y de los travestismos que acompañaron al peronismo, Casullo, y algunos otros con él, señalaron la necesidad de sortear la tentación de una unidad ficticia ocultadora de lo irreductible, de aquello que desde tiempos lejanos mostró los problemas y los límites de una fuerza política construida bajo la figura paradigmática del “acuerdo nacional”.

Él siempre destacó la especificidad trágica que acompañó esos momentos, pocos pero decisivos, en los que el peronismo

6. Carta Abierta es un colectivo de intelectuales y personas de la cultura y del ámbito académico que surgió en abril de 2008, cuando se desencadenó el conflicto entre el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y las patronales agrarias. Su modo de acción combinó la estructura asamblearia con la publicación de una veintena de cartas que buscaron interpelar a la sociedad.

se asumió como el lenguaje de la justicia social y como expresión multitudinaria de los sin voz. Si algo no sintió como lo propio del peronismo fue el abrazo de Perón con Balbín. El desafío plebeyo, la rebelión de los incontables, la presencia de quienes deberían haber permanecido en un segundo plano, ese en el que habitan desde siempre los subalternos, esos fueron los rasgos –traicionados en muchas ocasiones por el mismo peronismo superestructural, el de los dirigentes– que persiguieron las reflexiones casulleanas y que lo acercaron a la inauguración kirchnerista, allí donde vio en ella lo espectral que retornaba.

En los umbrales de un giro epocal, en el inicio del mandato de Néstor Kirchner, escribió lo siguiente a la hora de intentar pensar el peronismo en relación con este nuevo y confuso tiempo que se avecinaba:

Fondo histórico-trágico en síntesis, en tanto espacio comunitario enfrentado a la naturaleza impiadosa de una racionalidad económica y a las formas del conocimiento dominante que destinan. Trágico en tanto admita aunar mito y crítica al mito, sin renunciar a la historia. Un tiempo pospolítico donde ensayar la *reanudación de la política* como forma de la conciencia social después de la obsolescencia de la revolución obrera y en espacios de una historia por ahora indiscernible, contra un mercado erradicador de toda idea de comunidad, justicia y decisiones soberanas. Pospolítica necesitada de citar el pasado para que las nuevas sensibilidades sociales se hagan carne en una historia y se desprendan de la homogeneización globalizadora. Tiempo que permita remover la política popular desde otros lenguajes, señas, palabras y marcos de inteligibilidad. Desde otras imágenes teóricas. Tarea para un país quebrado. El desafío [escribía bajo la impronta de un deseo que sería anticipatorio] es político, entendiendo esta idea en tanto construcción política y filosófica. Representa el pasaje desde lo que fue un orden histórico simbólico –“Estado obrero” con su contradictorio camino revolucionario entre bases y dirigencias– hacia otra configuración política popular que ensayística, crítica y teóricamente puede plantearse *como un peronismo después del peronismo*. Planteo histórico discursivo que, en términos

de redespiegue democrático, trabaje para un *entre tiempos* de difícil construcción de las políticas. Construcción con dos tensiones básicas. Una, desde la memoria nacional contra la licuación de los antecedentes y el cinismo político posmoderno. Dos, desde la inscripción de nuevas identidades sociales y culturales victimizadas, desde otra articulación de Estado-economía, contra las estructuras caducas, corruptas, mafiosas y cadavéricas que hoy dominan la política y sus identidades. En el pretexto de la pregunta por el peronismo quizás se esconda la labranza de un pensamiento de época.⁷

En los años siguientes alcanzaría a ver de qué modo surgirían las nuevas preguntas en una sociedad que era testigo de un giro vertiginoso de los acontecimientos; giro que volvía a tener al peronismo (¿quizás bajo la forma de un “después del peronismo”?) como centro de otra etapa decisiva de una historia nacional que se negaba a cerrar su deriva por el tiempo. Casullo vio en el kirchnerismo una oportunidad que ni el más optimista de los optimistas pertenecientes a alguna patrulla perdida de los años setenta podía haber soñado. Pero no imaginó esa oportunidad bajo el signo de la repetición ni del retorno a lo ya vivido. Por el contrario, creía que la única posibilidad que se le abría al país y al propio peronismo radicaba en no regresar sobre lo ya vivido ni reiterar liturgias apolilladas. Lejos de la melancolía, pensaba que era fundamental encontrar esas nuevas preguntas que solo podían nacer de ideas y palabras capaces de constituirse desde una perspectiva innovadora. Ese “peronismo después del peronismo” era lo que parecía ofrecer la emergencia excepcional del kirchnerismo.

Y a Casullo le interesaba estar a la altura de ese desafío cargado de vientos sureños y portador, a la vez, de un anacronismo provocador y de una novedad inesperada. Lo que provenía de la tradición y del mito, aquello que permanecía a resguardo de

7. N. Casullo, “La pregunta por el peronismo”, *op. cit.*, p. 29.

las tempestades de la historia, y aquello otro que solo podía surgir de plantarse ante los desafíos del presente con un lenguaje profundamente renovado. La amenaza sería, eso pensaba, quedarse atrapado en la repetición, dejarse atenazar por la fuerza inercial del mito extraviando sus contenidos transformadores. Lo cierto fue, una vez más, que el peronismo volvía a conmover la escena de un país que estuvo al borde de su disolución. Y Casullo se propuso interpelar crítica y políticamente esa nueva escena. No pudo ser testigo, por supuesto, de la cristalización dogmática ni de la obcecada inclinación a repetir viejos errores. Intuyó, como en el pasado, que uno de los mayores peligros vendría desde el propio interior del peronismo. No pudo prever que una derecha “nueva”, sin deudas directas con la política tradicional, forjadora de un universo *light* y pospolítico, apropiadora impúdica de lenguajes provenientes de acervos progresistas, emergería como la carta triunfante de la restauración neoliberal. Con su media sonrisa irónica hubiera rescatado de sus escrituras los argumentos y los signos anticipadores de este giro tragicómico de la historia argentina.

La política y la vida en general consistirían [para Casullo según la sutil interpretación de Horacio González] en un ejercicio escéptico de recuperar un paraíso perdido, lo que quizás no sea posible. Pero solo valdría la pena ese esfuerzo, en tanto *generosa inutilidad* que dignifica a los hombres, conjurados en recordar un pasado que a pocos o nadie importa. El “peronismo” es el nombre que está en el lugar de la añoranza grandiosa pero imposible. Es el mito “dramático y fallido”, desdeñado por los “poderes reales en Argentina”, entre ellos los del propio peronismo con su “lista de defecciones tan eterna y concreta que casi terminó siendo, desde 1955, la historia real del peronismo”. Aun desertor o menguado [sigue descifrando González la escritura de Casullo], sin embargo había que trabajar para redimir su oculta y genuina estrella. Ese trabajo era el del ensayista que lidia con mitos desgarrados y los expone nuevamente

ante la incredulidad del presente, sabiendo que puede suscitar una imperdonable nostalgia o una inesperada primavera de recuperación⁸.

Tanto para Casullo como para su intérprete, la llegada del kirchnerismo, la extrañeza de su nombre que comenzó a ser pronunciado con tonalidad inquieta, posibilitó, con sus claroscuros y sus debilidades, la reapertura de un expediente histórico que parecía definitivamente cerrado. Rompió el sello desplegando, una vez más, la batalla de las ideas y de los cuerpos reinstalando en el centro de la escena argentina el antiguo y actual fantasma del peronismo.

Ambos, quizás Horacio González con una dosis mayor de pesimismo acumulado por el paso de los años de un kirchnerismo zigzagueante al que ya no pudo visualizar Casullo, sintieron la necesidad de romper el sortilegio mítico que desde siempre viene acompañando la larga saga del movimiento creado por Juan Perón. Nicolás, pesquisa utópico de la actualización de lo mítico-libertario, entrevió en el kirchnerismo una insólita e inesperada oportunidad de expansión bajo nuevas retóricas, mientras que Horacio, sufrido hermeneuta de un peronismo que siente cada vez más ajeno a su mirada, se ocupó más de sus imposibilidades y límites. Lo crepuscular de un nombre que solo podría persistir en su desafío si lograra sustraerse a la fascinación del mito.

Oportunidad –¿última?– para el kirchnerismo. ¿Podrá? ¿Estará a la altura de esa demanda acuciante y demasiado compleja? ¿Será ese “más allá del peronismo”, o su figura del “después” de la que hablaba Casullo, un umbral a traspasar para dejar atrás la fatalidad de la repetición? ¿Es su nombre el punto de partida de una nueva pronunciación o apenas la continuidad de un derrotero sobrecargado de idas y vueltas?

8. Horacio González, *El kirchnerismo: una controversia cultural*, Buenos Aires, Colihue, p. 83.

En estos días confusos y complejos, días signados por la ausencia de Cristina Fernández y por los reacomodamientos rápidos en el interior del cuerpo elefántico del peronismo, que se mueve al compás de un resultado electoral inesperado y paridor de una nueva escena argentina dominada por la lógica de la restauración conservadora-liberal, vuelve, como un espectro que nunca terminó de irse del todo, el litigio del origen, esa marca que lo acompaña desde los lejanos tiempos de la fundación cuando en su discurso mítico se dibujó la contradicción entre dos estrofas de su himno: “combatiendo al capital” y “todos unidos triunfaremos”.

¿De qué modo combatir al capital apelando, a la vez, a una unidad con aquellos que lo único que desean es la reproducción de ese mismo capital? Un oxímoron parece ser el punto de arranque del peronismo. Su historia, sus combates y su tragedia, son, probablemente, el producto de ese equívoco. Los jóvenes setentistas creyeron encontrar en el movimiento el hilo dorado que les permitiese entrar a la conciencia de los trabajadores; intuyeron, con cierta exageración que les costaría muy caro, que entre esas masas seguidoras del General y la palabra “socialismo” se podían construir puentes de ida y vuelta. Leyeron la correspondencia de John W. Cooke con el Perón exiliado y se identificaron, sin disimulos, con el más jacobino y revolucionario de los forjadores ideológicos de un movimiento al que se acercaban creyendo encontrar en él la clave para la siempre postergada revolución social.

No leyeron, con la misma pasión, las respuestas dilatorias de Perón. No quisieron detenerse en la negación de dirigir sus pasos, como se lo reclamaba Cooke, hacia la Cuba de Fidel. No terminaron de entender que un abismo separaba al guerrillero de la Sierra Maestra del creador del justicialismo. Una ilusión desbordada de entusiasmo que produjo una fatalidad. Perón no se dirigía hacia el socialismo, en el mejor de los casos deseaba regresar al Estado de bienestar diseñado en los “años felices” abruptamente sepultados en 1955. Temporalidades distintas.

Para unos, el aceleramiento de la historia era lo que reclamaban los tiempos de la revolución. Para el viejo león herbívoro, cansado del exilio y muy cerca del final, se trataba de encauzar un país sin brújula y desmadrado para regresarlo a la senda del desarrollo con inclusión social.

En los años setenta ese reformismo resultaba indigerible para esos jóvenes recién llegados al peronismo y dispuestos a rebasar todos sus límites. Ezeiza, nombre trágico y parteaguas de una historia que se cargaría de muertos y desaparecidos, puso la barrera que no se podría franquear. Entre aquel 20 de junio de 1973, la renuncia apresurada de Héctor Cámpora, el asesinato de José Ignacio Rucci, la expulsión de los Montoneros de la Plaza de Mayo, la muerte de Perón, la cacería de “los zurdos” desatada por la Triple A creada por José López Rega (probablemente con la fatal venia del General en su descorazonamiento de los últimos meses), la opción militarista de la conducción de Montoneros, el Rodrigazo que anticiparía lo que décadas después infectaría al país bajo la impronta del menemismo, la incapacidad homicida de Isabel Perón y la dictadura terrorista que de manera implacable aniquilaría a los portadores de los ideales de la izquierda peronista, se desplegó una política de repudio y olvido de esa memoria que pareció seguir el destino siniestro de sus constructores, que no solo fueron masacrados por la dictadura, sino que prácticamente fueron borrados de la historia.

Entre 1983 y 2003 prevaleció el silencio –en el mejor de los casos– o el simple rechazo y repudio en el discurso hegemónico que atravesó la vida política y cultural del país durante esos años. Por eso la absoluta sorpresa que significó aquella frase del discurso inaugural de Néstor Kirchner: “Vengo en nombre de una generación diezmada”. De una generación, agregaría, doblemente desaparecida: en los campos de exterminio de la dictadura y en la memoria de un presente que se negaba a representarse en esa genealogía maldita. Inversión inesperada que, junto a medidas claves de un gobierno excepcional,

acabaría reabriendo los expedientes cerrados de una historia no resuelta.

Siempre es bueno regresar a ese texto anticipatorio que Casullo escribió cuando muy pocos alcanzaban a ver algo de claridad en una escena nacional devastada:

Néstor Kirchner representa la nueva versión de un espacio tan legendario y trágico como equívoco en la Argentina: la izquierda peronista. En su rostro anguloso, en su aire desorientado como si hubiese olvidado algo en la mesa del bar, Kirchner busca resucitar esa izquierda sobre la castigada piel de un peronismo casi concluido después del saqueo ideológico, cultural y ético menemista. Convocatoria kirchneriana por lo tanto a los espíritus errantes de una vieja ala progresista que hace mucho tiempo atrás pensaba hazañas nacionales y populares de corte mayor. Revolotean escuálidos los fantasmas de antiguas Evitas, CGT framquista, caños de la resistencia, Ongaro, la gloriosa JP, la tendencia, los comandos de la liberación, ahora solo eso, voces en la casa vacía. Por eso un Néstor Kirchner patagónico, atildado en su impermeable, con algo de abogado bacán casado con la más linda del pueblo, debe lidiar con la peor (que no es ella, inteligente, dura, a veces simpática), sino recomponer, actualizar y modernizar el recuerdo de un protagonismo de la izquierda peronista que en los setenta se llenó de calles, revoluciones, fe en el General, pero también de violencia, sangre, pólvora, desatinos y muertes a raudales, y de la cual el propio justicialismo en todas sus instancias hegemónicas desde el 76 en adelante, renegó, olvidó y dijo no conocer en los careos historiográficos.

Memorable e inequívoca la semblanza casulleana.

Surge, bajo el signo de la inquietud, la pregunta por las consecuencias de esa reivindicación a deshora de una saga maldecida por todos los poderes y borrada, incluso, de las escrituras y de la memoria del peronismo oficial, ese mismo que se encargó de tapiar todos los pasadizos que condujeran a ese pasado y a esa generación. Como si lo espectral hubiese insistido cuando menos se lo esperaba. Sombras y voces venidas de un más allá

que, bajo la impronta de lo inesperado, reaparecían en una escena que no estaba preparada para recibirlas y mucho menos para incorporarlas a la materialidad de una historia declarada en estado de clausura.

Perturbación y desconcierto. Kirchner aprovechó esa pequeña fisura en el muro de la dominación y supo actuar cuando nadie se lo esperaba. Rápido de reflejos, instaló en el centro de la escena lo espectral. Lo hizo revivir quebrando una hegemonía triunfante. Otras palabras para otro relato del pasado entramadas con la reinención de una democracia en crisis. Insoportable e imperdonable. Los muertos estaban bien muertos; para ellos solo valía el discurso de la efeméride vacía, las condolencias de la hipocresía. El nombre del kirchnerismo, su lenguaje inaugural y memorioso de otras sagas, rompió el silencio y la tachadura, terminó con un pacto en el que la hipérbole de la memoria culminaba en olvido. Basta de víctimas abstractas e inocentes, capaces de devorarse vidas y biografías, sueños e ideales. Regreso, bajo las condiciones, los reclamos y las interpretaciones fijadas por una nueva época, de quienes habían sido portadores de una profunda provocación histórica.

El kirchnerismo habilitó el pensar en contracorriente a la hora de involucrarse de nuevo con las crónicas de la revolución fracasada, no para concluir en la apología, sino para disputar, en un doble sentido, el presente y el pasado. Tomando riesgos, cometiendo errores, desafiando aquellos poderes que se creían definitivamente vencedores, habilitando antiguos pasadizos por los que regresaron sueños irredentos, el kirchnerismo conmovió nuestra época de un modo impensado. El momento de la derrota es, quizás, no solo el de la dolorosa reflexión crítica, sino, también, el de la insobornable reivindicación de una saga que puso de nuevo en movimiento los engranajes de una historia enmohecida.

El kirchnerismo como politización de la historia

La política del presente, la que inició su recorrido en mayo de 2003, expresada en un nombre –el del kirchnerismo– capaz de inaugurar un viaje a dos puntas: hacia las comarcas del pasado revitalizando lo que había sido convertido en pieza de museo o en itinerario erudito por tierras cuya lejanía las acaba haciendo inalcanzables para un presente incapaz de cuestionar su actualidad interrogando críticamente a la historia. Y hacia una inevitable reapropiación del presente como tiempo desde el cual inventar, de otro modo, la doble relación con el pasado y el futuro abriendo, incluso, el debate sobre el peronismo y sus improntas actuales. Un debate que no solo deberá dar cuenta de su larga y abigarrada travesía por la historia, sino, también y centralmente, de su continuidad bajo otra experiencia que le ha conferido –de eso nadie tiene dudas– una nueva oportunidad. Un extraño rescate que, desde el presente, le devuelve al peronismo una intensidad política que parecía definitivamente perdida.

Sabemos, con Walter Benjamin, que le toca a la generación actual redimir a las generaciones que sufrieron en el pasado la opresión y la derrota. Tal vez el peronismo ha encontrado en lo inaugurado por Néstor Kirchner la posibilidad de su propia redención, o el lugar en el que su historia zigzagueante encuentra su punto de llegada y de insospechada reformulación. Siempre habrá que elegir palabras dubitativas, formas condicionales de la gramática, a la hora de escribir sobre “el futuro” del peronismo. Lo cierto es que los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner han producido un tajo profundo cuyas consecuencias últimas están por verse junto con la travesía, una vez más, por el desierto reaccionario que vuelve a asolar el país. Y, como no podía ser de otro modo, el peronismo, sus disputas, sus disidencias abismales, estuvieron en el ojo de la tormenta que permitió el triunfo de la restauración neoliberal.

Porque eso es también el kirchnerismo: un cuestionamiento radical de un presente abroquelado que ya no se sentía disponible para disputar su propio lugar en la historia y que prefería acomodarse en la resignación posmoderna y la hegemonía neoliberal. Dicho de otro modo: ruptura de la pasividad de una época incapaz de sentirse legataria y heredera de antiguas apuestas generacionales transformadas en polvo apenas reclamado por historiadores desprovistos de lo que Walter Benjamin le reclamaba al trabajo del historiador “materialista”: ser constructor de un “giro político” de ese pasado actualizado desde las exigencias, las tensiones, las luchas y las contradicciones del presente.

Una politización de la historia, eso es lo propio, lo original y lo desafiante del kirchnerismo. Aquello que produce la reacción intempestiva de una parte mayúscula del gremio de los historiadores académicos que se sienten cuestionados en su “poder clasificador”, en su “trabajo de garantes de la verdad histórica”, esa misma que no puede ni debe ser contaminada, según su concepción, con las furias emanadas de la toma de partido. No podemos sino insistir con ese costado maldito de una fuerza política que vino a conmovir una época que deambulaba sonámbula sin saber hacia dónde dirigiría sus pasos. Pero también vino a cuestionar duramente aquellas prácticas intelectuales que se habían acomodado a la seguridad y la tibieza del fin de los tiempos de urgencia y conflicto, que habían encontrado en la tranquilidad de sus prácticas académicas la posibilidad de dejar bien atrás los fantasmas de una historia trágica.

El kirchnerismo, en todo caso, impidió que la lógica hegemónica de que “todo siguiera igual” continuara rociando con sus pesticidas cualquier intento de reiniciar la búsqueda emancipadora. Evidenció la distancia que se había abierto entre los antiguos cultores de sueños revolucionarios devenidos en académicos escépticos y la persistencia de una realidad atravesada por la injusticia y la desigualdad. Desenmascaró la nueva comodidad que el sistema les ofrecía a quienes

seguían vistiéndose con las ropas de un progresismo por completo alejado de la disputa e inclinado, de modo cada vez más indisimulado, a probarse los trajes apolillados del republicanismo moralizante.

Un desafío, lo sabemos, plagado de peligros cuyo signo distintivo no es otro que el del dogmatismo, allí donde las exigencias de la disputa por el relato de la historia pueden conducir a la estrechez de miras y al reduccionismo. De todos modos, vale la pena pagar el precio de ese riesgo, que incluye la discusión, para nada saldada, del estatuto de la verdad histórica y de las aduanas que se levantan para garantizar, supuestamente, que se protejan los saberes regulados por la ciencia. Ser contemporáneos de una disputa de este calibre, vivir días en los que volvió a cobrar relevancia lo que sucedió a lo largo de nuestros doscientos años de historia constituye un privilegio que ya no imaginábamos que apasionaría de este modo a una sociedad que parecía haber cerrado los expedientes del pasado o, tal vez, que los había reducido al trabajo erudito de historiadores alejados del ruido de la realidad. El kirchnerismo, con sus más y sus menos, abrió un debate que amenaza con seguir extendiéndose. Lo celebramos aunque, insistimos, conocemos sus riesgos. Peor, mucho peor, es convertir a la historia en una pieza de orfebrería encerrada en las vitrinas del museo. La politización de la historia rompe el giro pasivo que intenta reducir a dato muerto los reclamos y los ensueños de liberación gestados, a lo largo del tiempo, por las generaciones que nos precedieron.

Apertura del pasado, apropiación discursiva que se entrelaza con la necesidad de cargar de contenido un presente necesitado de legitimación. Esa ha sido, y sigue siendo, la tarea de historiadores comprometidos con su época y con la saga de las multitudes. Pero no de cualquier tipo de historiador, sino de aquel cuya artesanía constructiva de la memoria se sustenta en la imperiosa necesidad de rescatar del olvido a los derrotados de la historia. Un relato que descrea de objetividades al uso y que rechaza la asepsia con la que siempre se ha buscado romper

los puentes entre épocas apuntalando la imaginaria percepción de “un destino solitario” que nada o muy poco tiene que ver con aquello que ha quedado a nuestras espaldas. Por lo general, el viaje hacia esas regiones del ayer se hace para destacar los abismos infranqueables que nos separan de esas épocas, nunca para entretrejer los ensueños diurnos de quienes, a lo largo de la historia de una sociedad, imaginaron otra realidad para los subalternos.

Es así, siguiendo esta huella benjaminiana, como prefiero interpretar la significación del nombre del kirchnerismo como reapertura de expedientes sellados, como instalación, en el debate actual, de lo que permanecía bajo la forma de lo espectral. En todo caso, lo que no puede permanecer silenciado o convertido en mera mercancía cultural, ofrecida para el consumo de espectadores pasivos, es ese pasado que insiste con regresar para desafiar los prejuicios y las determinaciones de un relato inclinado al ensimismamiento académico o a la fábula sin consecuencias en el presente. La historia como querella, que es lo mismo que sostener su imprescindible politización.

Ese es “el giro copernicano en la visión del historiador” del que hablaba con insistencia Walter Benjamin mientras proseguía sus eruditas investigaciones parisinas al borde del abismo. Otro modo de mirar el pasado que conduce hacia una decisiva redefinición de sus contenidos. Apertura de lo que parecía sellado y que poco o nada podía determinar de la experiencia del presente. Haber abierto las compuertas de la historia desde la perspectiva del litigio interpretativo, de aquello que algunos han denominado “la disputa por el relato”, constituye una de las originalidades del kirchnerismo.

Más allá de los que se regocijan con la derrota del “experimento populista”—en particular los que provienen del campo progresista—, lo cierto es que la irrupción de esa novedad sureña reintrodujo en nuestra sociedad pasiones y debates que parecían definitivamente mal saldados. Volvió a cobrar sentido el

vínculo entre el pasado y el presente instalando aquello de que el lugar de la enunciación modifica nuestra comprensión de lo que fundó nuestra travesía como nación. Apertura de los archivos para sacar de su enmohecimiento las tramas irresueltas, los conflictos silenciados, las deudas pendientes. Politización de la historia que significa un giro libertario allí donde las voces olvidadas recobran antiguas resonancias bajo las luces de la actualidad. El macrismo, nombre de la nueva derecha, busca vaciar esas densidades de la historia; su objetivo es museologizarla, pasteurizarla, rapiñarla, despellejarla hasta convertirla en un amasijo indiscernible. Sabemos de los límites de una historiografía falsamente politizada, en especial cuando quienes se arrojan el nombre de sus verdaderos representantes no hacen otra cosa que reintroducir categorías y visiones ajadas, dogmáticas y, en el fondo, reaccionarias.

Haciendo las salvedades del caso y de sus especificidades, es posible abordar, con una clave semejante, la profunda interpelación política que desde mayo de 2003 le vuelve a acontecer al peronismo. Tal vez ahí radique la distancia esencial entre la captura menemista del peronismo, su metamorfosis en un dispositivo funcional a la reconversión neoliberal, y la acción provocadora que sobre la tradición fundada por Juan Perón ejerció el kirchnerismo. Es a partir de esa interpelación como retornan sobre la escena actual los fantasmas de controversias nunca saldadas, la emergencia, una vez más, de un peronismo de izquierda y otro de derecha. Los rostros, enfrentados, de dos maneras antagónicas y agonales de asumir un legado siempre en litigio.

Eso no significa que la contraposición sea mecánica ni ofrezca los rasgos de lo incommovible e irrevocable allí donde la propuesta del Frente para la Victoria ha logrado incluir formas tradicionales del peronismo disputándose a la derecha. ¿Será que estos doce años permitieron la emergencia de lo que, de ese primer peronismo, había sido transformado en mito y guardado en la memoria popular? ¿Abrió,

el kirchnerismo, una agenda retrospectiva, un ejercicio de rememoración capaz de actualizar, bajo la imposibilidad de la repetición, lo desplegado en ese tiempo del origen? ¿Se puede hoy ser peronista sin ser kirchnerista? En la respuesta que seamos capaces de formular radica, quizás, lo nuevo de este momento argentino.

En particular, si somos conscientes de lo que persigue la maquinaria mediático-político-judicial que hoy funciona a pleno bombardeando la cotidianidad de los argentinos: aniquilar el kirchnerismo borrando la memoria de su paso por la historia reciente, transformando en ficción y en impostura su capacidad de interrumpir la larga marcha de la dominación. La derecha neoliberal, la que hoy gobierna a través del macrismo, quiere, precisamente, reinstalar la versión conservadora y dialoguista del peronismo, pero sabe que para lograrlo tiene que erradicar la subversión y la rebeldía que anidaron en la experiencia de los últimos doce años en los que, a contracorriente de lo establecido, se intentó cambiar la lógica de la repetición.

Si el nombre donado por el santacruceño se convierte apenas en otra denominación agregada al diccionario de los sinónimos insuficientes, no estaremos delante de una inflexión, sino, apenas, de una expansión más dispuesta a reencontrarse con sus otras formas tradicionales. Un giro irónico de una historia entre trágica y camaleónica. En cambio, y siguiendo a Benjamin, nos importa abordar el nombre del kirchnerismo desde la perspectiva de la “conciencia despierta” que reinstala políticamente, bajo la forma del recuerdo, aquellas experiencias y aquellos sueños convertidos en mito que nos retrotraen al primer peronismo. Un sacudimiento del letargo de una historia que parecía ya consumada y que había transformado el peronismo en una mitología desprovista de capacidad para interpelar, en el presente, la conciencia de las mayorías populares.

En todo caso, una de las características sobresalientes de lo inaugurado en mayo del 2003 fue, precisamente, la actualización, sin desconocer su fragilidad, de esa “conciencia despierta”

entendida, ahora, como reanudación de la disputa por el sentido y, sobre todo, la puesta en movimiento de una historia capaz de entretener aquellas marcas del origen con las demandas y las novedades de este tiempo del capitalismo y de la sociedad argentina. De una experiencia, sin embargo, que tropezó con sus límites, que no pudo o no supo profundizar allí donde la realidad se lo volvió a demandar. Acaso el kirchnerismo dio todo lo que podía dar en un movimiento político popular acosado por dificultades internas y externas que operaron como barreras a la hora de tener que exigir más a una sociedad poco dispuesta a acompañar las acciones de radicalización.

El jacobinismo de origen constituyó una virtud y una limitación. De la misma manera, su matriz peronista le permitió interpelar, desde una tradición recuperada y revitalizada, a un pueblo algo huérfano de antiguos sueños justicieros, a la vez que le impuso sus trabas conservadoras bajo la alianza con gobernadores e intendentes provenientes de ese mundo feudalizado que nunca dejó de acompañar y de influir sobre la propia acción del peronismo. Néstor y Cristina Kirchner tuvieron que lidiar con el rostro de Jano de la tradición peronista.

Doble, entonces, la interpelación kirchnerista: de los legados y herencias forjados en otra época nacional, época quemada por los fuegos de una revolución derrotada (de la que generacionalmente participaron Néstor y Cristina) y, bajo una continuidad siempre en estado de debate, la perseverancia del peronismo como fuerza política paridora de lo virtuoso y de lo turbio, de los ideales igualitaristas y de cinismos restauradores. Turbulencias de una historia que parecía haber arribado al puerto de las cosas muertas y que se encontró, de manera inopinada, y cuando muy pocos lo preveían, con la posibilidad de abrirse a novedades y desafíos que no pertenecían –eso creíamos– a la cartilla de este momento de la vida argentina y sudamericana. Lo inesperado mezclado con lo excepcional. Ruptura y continuidad que sigue teniendo en el peronismo su enigmática figura irremplazable.

En todo caso, y de eso también tratan estas reflexiones, la potencia del kirchnerismo para habilitar una redención, que ya no parecía posible, de ese movimiento surgido en una jornada mítica allá por octubre de 1945. Politización no solo de la memoria histórica sino, también, del peronismo. Un más allá que se reencuentra con lo no saldado: un peronismo después del peronismo. ¿Apenas una repetición de la pendularidad que desde siempre lo acompañó? ¿O señal de una ruptura histórica? Este tiempo de restauración abierto por la llegada de la derecha macrista al gobierno será clave a la hora de darle respuesta a esta pregunta inquietante: ¿habrá sido el kirchnerismo un ave de paso, apenas un accidente en la marcha de un movimiento cada vez más adaptado a las exigencias del sistema o, por el contrario, el punto de clivaje para una nueva historia? Hay genuina novedad cuando en una época se pueden abrir, con viejos y nuevos recursos teóricos, políticos y lingüísticos, las preguntas que desde siempre nos acechan.

El fantasma del populismo: peronismo, progresismo y kirchnerismo

1. Decía Nicolás Casullo, anticipándose proféticamente a lo que sería la experiencia abierta por Néstor Kirchner, que cuando el peronismo expresa su rostro de izquierda o de centro izquierda (algunos lo llaman “nacional popular” sin mas) inmediatamente provoca una histérica reacción en el poder tradicional, sacude la modorra de la dominación y vuelve a reintroducir las pasiones políticas. Es en esos momentos, y lo fue en ciertos pretéritos de nuestra historia lejana y reciente, cuando odios y rencores, prejuicios y diversas formas del racismo, conjuras y difamaciones se ponen a la orden del día y contaminan, con una atmósfera viciada, las usinas mediáticas hasta alcanzar a muchas almas puras y bellas de la clase media que vuelven a convencerse, una vez más, de que el populismo regresa, como

un espectro aterrador, para angustiar sus tranquilas vidas de ciudadanos-consumidores. Cuando el peronismo, como lo hizo en la década del noventa bajo su impostura menemista, se pliega a las demandas del capitalismo financiero, nada de esa mitología de la infamia y la degradación ocupa la escena pública ni las tertulias de las buenas personas. Todo se trastoca cuando introduce una cuña plebeya e igualitarista y sale a cuestionar el modelo de apropiación de la riqueza del bloque hegemónico.

La lengua de los biempensantes y del sentido común clasesmediero, en esas circunstancias inesperadas en las que se sacude la calma de la dominación, suele desatarse y recobrar lo nunca olvidado: el odio de clase que se metamorfosea en insultos e invectivas que emergen de oscuras gargantas cloacales. Allí están, como testimonios de la alquimia de odio, ignorancia, prejuicio y racismo, las cartas de lectores de algunos de nuestros “prestigiosos” matutinos o las interminables y soeces intervenciones en los sitios web, como notas a pie de página, que dejan estampadas las almas puras de la derecha vernácula al comentar tal o cual artículo. Un cultivo sistemático de la infamia y el ultraje suele acompañar la visión del mundo de muchos de aquellos que dicen defender los ideales de una república democrática. Claro que en esa república no puede haber lugar para que se hagan presentes y visibles esas masas “negras” que, desde siempre, amenazan el verdadero orden republicano.

Basta hacer un rápido recorrido por algunos de esos momentos complejos y desafiantes en los que el peronismo se encarnó en un movimiento popular, y lo hizo bajo el impulso de una acción transformadora capaz de cuestionar la hegemonía del *establishment* económico-político, para volver a descubrir las “furias” que se desataron en el interior de aquellos mismos supuestos portadores del ideal republicano. Del “aluvión zoológico”, pasando por los despreciados “cabecitas negras”, sin olvidar a los “zurdos y subversivos” de los años sesenta y setenta para llegar a los “negros de mierda que van a los actos por el

choripán”, el poder y sus lenguaraces no han dejado de vomitar sus prejuicios y sus distintas formas de violencia –verbal y material– sobre los representantes de esa inédita profanación de los santorales intocados de las clases dominantes. Y nunca han carecido de la compañía y el aporte de antiguos progresistas devenidos en sostenedores a rajatablas de esa República siempre soñada, que cuando alcanzó a cristalizar en nuestra historia lo hizo en detrimento de los intereses y los derechos de las mayorías silenciadas y expulsadas del centro de las decisiones políticas.

Cuando el peronismo interrumpe, como sucedió con la llegada de Néstor Kirchner al gobierno y luego bajo el liderazgo de Cristina Fernández, la monótona repetición de un orden injusto y desigual, que pone en cuestión el núcleo del poder reabriendo lo que permanecía sellado por ese orden corporativo, lo que ya no puede sostenerse es la neutralidad, la asepsia interpretativa, el formalismo hueco y el institucionalismo consensualista en el que suelen escudarse los antiguos progresistas que, dando un giro sobre sí mismos, acaban convirtiéndose en socios intelectuales de la derecha liberal-conservadora. Es lo que, de nuevo con agudeza, definía Nicolás Casullo bajo el nombre de “progresistas reaccionarios”. Un verdadero hallazgo conceptual que pone en evidencia, más allá del oxímoron, la perturbadora actualidad de cierto progresismo.

Para ellos, el derrame de multitudes venidas de los suburbios de la historia no podía significar otra cosa que barbarie e irracionalidad conjugadas alrededor de una acción política depredadora de la genuina institucionalidad democrática. Lo que era esperable desde las trincheras liberal-conservadoras, aquellas que desde siempre buscaron destruir cualquier iniciativa igualitarista de matriz popular, abarcó, no sin sorpresas para algunos desprevenidos, una parte no menor de los aguerridos y democráticos habitantes de la trinchera progresista. Por derecha y por izquierda (si todavía esta definición les puede cuadrar a aquellos que desterraron de su lenguaje y de

sus prácticas cualquier referencia a memorias insurgentes o, más sencillo y menos comprometido, a cualquier genealogía que los identifique con ideales emancipadores o con el mito, monstruoso, del populismo) le dieron forma a una misma argumentación: el populismo no hacía otra cosa que desplegar un discurso demagógico (en la nomenclatura actual se utilizaron a destajo los términos, más sofisticados, de “impostura” o de “relato ficcional”), mientras dejaba intocada la estructura a la que supuestamente venía a transformar.

Para liberar de angustias y contradicciones a sus buenas conciencias prefirieron leer las experiencias neopopulistas desde el mismo prisma que lo venía haciendo desde siempre la derecha, pero escudándose ahora en una nueva retórica institucionalista. Lo que había que defender frente a la ofensiva “autoritaria” de los herederos de Perón era la institucionalidad democrática. Para ellos, profetas de la “República verdadera”, el kirchnerismo representaba, y lo sigue haciendo, la alquimia de demagogia, corrupción, impostura y mitologización populista. Lo peor de lo peor. Sin importarles cruzar de vereda se amalgamaron con la derecha real y se convirtieron, algunos de ellos, en sus plumas privilegiadas y exaltadas desde los mismos medios de comunicación a los que, en su juventud revolucionaria, habían execrado como portaestandartes de la reacción.

2. Como hongos que brotan después de la lluvia, en nuestro país proliferan las voces que se desgarran las vestiduras ante la amenaza populista, esa misma que en otro momento de la historia latinoamericana, aquella de los años cuarenta y cincuenta, irradió la fuerza de los olvidados y excluidos llevándolos hacia el centro neurálgico de la vida social-política, dándole forma, por primera vez, de una manera multitudinaria y tumultuosa (tal vez anticipada por aquel México insurgente de Zapata y Villa en el comienzo del siglo pasado) al surgimiento poderoso de movimientos políticos capaces de dejar un profundo surco en la memoria popular. Y fue sin dudas el

peronismo la más expresiva, audaz y provocadora de aquellas experiencias que forjaron el primer populismo y el que seguiría insistiendo en el interior no solo de las experiencias obreras sino determinando irremediablemente todos los giros del país a lo largo de más de seis décadas. También es cierto que el movimiento creado por Juan Perón llevó en su interior su *alter ego*, el mecanismo a través del que, algunos sectores que son parte de su geografía, lograron invertir los contenidos emancipadores para dejar paso a distintas variantes de derecha. Lo que va del lopezrreguismo al menemismo –y al actual Frente Renovador de Sergio Massa– constituye una dimensión para nada marginal ni extemporánea del propio peronismo que ha sabido apadrinar y hasta favorecer a esos sectores que supieron camuflarse con los distintos actores del poder hegemónico. La irrupción, en gran medida inesperada, de Néstor Kirchner vino a modificar de cuajo la hegemonía que el sector pro-*establishment* del justicialismo tuvo en momentos decisivos de nuestra historia, inaugurando, como ya lo señalaba Casullo, ese tiempo tormentoso y desafiante que suele acompañar el regreso de un peronismo memorioso de sus orígenes plebeyos, populares e igualitaristas. Quedará por ver hasta qué punto el kirchnerismo es un plus de profunda incidencia en el itinerario histórico del peronismo y si supone, ahora sí, una inflexión emancipadora capaz de expresar lo mejor de esa caudalosa tradición política siempre dispuesta, como la historia no ha dejado de mostrarlo, a invertir dramáticamente sus términos habilitando, en su interior, a su propio antagonista.

Nicolás Casullo, con enorme agudeza crítica, va a desenredar la madeja de una derecha que, si bien sigue siendo portadora del nombre y de los objetivos de su antecesora, es lo suficientemente creativa y sutil como para darle a su práctica, a sus intervenciones y a su lenguaje un carácter adaptado a los tiempos signados por la estetización de todas las cosas, por la culturalización de la política y por la necesidad de dar cuenta de los nuevos moralismos políticamente correctos. La década de

los noventa fue, en este y en otros sentidos, un gigantesco laboratorio en el que el capitalismo de matriz financiera desplegó su potencia hegemónica redefiniendo las tramas profundas de los imaginarios sociales y dándole forma a nuevos lenguajes y entramados subjetivos adaptados a la época dominada por la economía global de mercado. El kirchnerismo, además de intentar invertir, con suerte dispar, la lógica estructural del capitalismo neoliberal, comprendió que la batalla decisiva se daría también en el terreno cultural-simbólico, allí donde las conciencias van definiendo la mirada del mundo que signará su derrotero y su relación con el sistema.

Esta “nueva derecha” –así preferirán denominarla algunos– que se pondrá al frente de “la revolución cultural conservadora”, multiplicada desde principios de 1980, se entrelazará con la estirpe de la progresía intelectual, antigua y avergonzada descendiente de las tradiciones de izquierda y nacional populares, para juntas abrazar, con fervor de conversos, a la recién descubierta “democracia” que, en su deslumbramiento, sería confinada a una sola de sus herencias: la forjada en el interior del liberalismo y de la paradigmática aceptación acrítica de “un acentuado formalismo democrático republicano de corte netamente conservador y amedrentador, que busca desasirse de la historia: desprenderse de todo ‘hacia qué’ y ‘para qué’ histórico preciso”. En un giro cada vez más pronunciado fueron abandonando sus antiguas críticas al capitalismo para adaptarse, en lo político y económico, a la dogmática de la ortodoxia fondomonetarista mientras mantuvieron su progresismo valorativo pero, ahora, canalizado ya no a través del Estado o de ideales revolucionarios, sino de diferentes ONG y de una moral heredera de la filantropía oligárquica.

La estrategia neoliberal, su enorme capacidad para impregnar con su visión del mundo el sentido común dominante, logra apropiarse, cuando lo necesita, de memorias y gramáticas pertenecientes a sus antiguos adversarios, pero lo hace vaciándolos de contenidos y reduciéndolos a espectáculos especialmente

armados para conciencias sensibles. También lo hace reescribiendo la turbulenta historia de la modernidad, destinando sus críticas más ácidas y destructivas a la transformación de la genealogía de la revolución popular en materia prima de la barbarie homicida de los totalitarismos. La astucia de la deconstrucción de las sagas populares revolucionarias (que empieza, como es obvio, por la etapa jacobina de la Revolución francesa y atraviesa la Revolución rusa, pasando por la china y la cubana hasta alcanzar a todos los movimientos de liberación nacional y las diversas formas del populismo a lo largo y ancho del siglo xx) se hace en nombre de una democracia “esencial”, normativa, capaz de ofrecerse como el paradigma virtuoso de la República siempre soñada y hasta añorada por nuestros progresistas que, ¡al fin!, creen que a la historia moderna le sobró Rousseau y le faltó Locke o, de una manera más *aggiornada*, abundaron Marx y Keynes y escasearon von Hayek y Friedman.

Nuestros progresistas, todos provenientes de la mitología de la revolución, antiguos cultores de los diversos marxismos y populismos transgresores, han mutado en defensores a ultranza de una alquimia de liberal capitalismo, multiculturalismo importado de los departamentos de estudios culturales anglosajones, institucionalismo dogmático y rechazo visceral a cualquier recuperación de la política como conflicto. Su panacea es la famosa “sociedad abierta” de Karl Popper, pero bajo la multiplicación infinita del espíritu libertario de la mercancía. Lo demás es, claro, barbarie bajo la forma de una genealogía del horror revolucionario que, ahora y entre nosotros, ha cambiado nuevamente de forma y se ha vestido con las ropas plebeyas del neopopulismo.

Repasando el cambio de relación con la propia historia que se opera en el interior del progresismo conservador, Casullo afina todavía más el análisis crítico desarmando la maquinaria autojustificadora que muchos de los intelectuales que provienen de este sector suelen poner en funcionamiento:

Paralelamente las poderosas usinas económicas, financieras e inversoras de hoy, que estructuran la estrategia política e ideológica neoliberal a partir de las reglas del mercado mundial, amasan a su vez una campaña cultural de época –tanto conservadora como progresista– que de distintas formas plantea y sofoca el presente como reiteradas y eficaces consignas sobre el fin de la historia, el fin de las ideologías, el fin del Estado rector, el fin de la política, el fin de las derechas e izquierdas, el fin de las democracias sociales, el fin de los proyectos nacionales, el fin de los programas “anacrónicos”, el fin de los proyectos utópicos. Ambas vertientes, la dura revisión crítica a un pasado y la propaganda contrapolítica del mercado liberal, gestan el miedo político a la historia: una pérdida de conciencia, participación y sentido de la historia. Miedo a actuar en la historia, a protagonizar la historia, a *intervenir en la historia* en tanto marcha posible de encauzar en términos prioritarios de real justicia, equidad y emancipación del hombre. Pero también retracción de la experiencia social en tanto crisis de la conciencia en su relación con la historia en sí. Es decir, fuerte caída cultural de la perspectiva de *un sentido histórico*. O de un *sentido de la historia* (...) El siglo xx fue la centuria que depositó su viga maestra en el poder de la historia como fragua, el potencial de las historias posibles de hacerse y rehacerse. Y en donde los mundos simbólicos, discursivos y retóricos emanaban, palmo a palmo, de la matriz de los hechos. De sus evidencias, marchas y abecedarios concretos a cargo de los conjuntos sociales que, para bien o mal, se sintieron llamados a actuar. El miedo a la historia por el contrario –como neoideología que supera el sistema de políticas admitidas por el mercado mundial–, la conciencia de una historia paralizada que no garantiza ya ninguna de sus promesas, que gira sobre sí misma como fantasma de lo que fue, que se escurre de cualquier escena hacia un abismo devorador de significados, replantea la experiencia cultural entre palabra, política y mundo.

El kirchnerismo, a lo largo de doce años, rompió en mil pedazos esa cómoda estética poshistórica, esa celebración del fin de las ideologías y el agotamiento de la política entendida como puesta en evidencia de lo no resuelto en la sociedad, y lo hizo reapropiándose de ese gesto maldito que se guarda en

la memoria, siempre bastarda a los ojos del progresismo reaccionario, de las multitudes democráticas lanzadas a la escena pública para hacerse cargo de sus propios derechos y exigencias. Simplemente impidió que siguiera desplegándose una repetición malsana que, de la mano de la hegemonía de la economía global de mercado y del reino sacrosanto de la democracia liberal, había decretado la expulsión del conflicto del interior de sociedades “serias y modernizadas”, de acuerdo con los patrones provenientes de los países centrales. El kirchnerismo salió al rescate de aquella tradición popular envilecida y prostituida desde el interior de su propia dirigencia.

Con voluntad y audacia, desentendiéndose de formalismos agusanados y poniendo en cuestión instituciones vaciadas y corrompidas, salió, bajo la impronta del retorno de la política, a conmover los cimientos del poder y, con ello, a cuestionar, de manera radical y decisiva, el núcleo duro del dispositivo neoliberal, reabriendo las compuertas de un proyecto democrático y popular.

Hoy, cuando la derecha macrista desmonta una tras otra las transformaciones genuinamente progresistas de los últimos años, se vuelve necesario indagar en las causas que llevaron a la derrota en un contexto original y algo extraño de la vida argentina. Digo original y extraño porque Cristina Fernández cierra su gobierno con un alto índice de aprobación popular (cercano al 50%), porque el 9 de diciembre de 2015 una multitud de más de trescientas mil personas la despidió, gestando un acontecimiento inédito y, a su vez, porque casi todos los índices económico-sociales lograron atravesar las turbulencias de la economía mundial, regional y nacional sin deteriorar el nivel de ingresos y sosteniendo el mercado interno.

Eso ha generado un cuadro de nuevo tipo, con un gobierno de derecha que, desde el primer día, inició un plan de ajustes terrible que golpeó directamente el poder adquisitivo de los trabajadores y amplió la brecha entre ricos y pobres aumentando todos los índices de deterioro social. A la par de esta

implementación de un duro modelo neoliberal –que incluye el reinicio del ciclo de endeudamiento, la rehabilitación de relaciones directas con Estados Unidos, distanciándose del bloque del Mercosur y de la Unasur para intentar suerte con la Alianza para el Pacífico–, el macrismo se encontró con una realidad política en la que una parte significativa de la sociedad no ha dejado de manifestar su oposición de modo más espontáneo que organizado aunque, a lo largo de estos meses, realizando algunas movilizaciones multitudinarias que llevaron, entre otras cosas, a ciertos retrocesos del gobierno.

Pero, ciertamente, todavía no se vislumbra la estrategia de una oposición sólida que pueda disputarle poder a la derecha y, junto con eso, el nivel de hostigamiento judicial a Cristina Kirchner dificulta la definición de cuál sería su futuro político, entendiendo que, hoy por hoy, ella sigue siendo la depositaria del reconocimiento popular y la única dirigente en condiciones de forjar una unidad ampliada de todos aquellos que se oponen a la restauración neoliberal. Queda mucho camino por recorrer, en especial combinando los análisis autocríticos con la ampliación de la base social de la protesta. Argentina, una vez más en su historia, ha entrado en un laberinto del que no será fácil salir.

MANUEL CANELAS

La década ganada... ¿Y después?

En los últimos meses ha cobrado fuerza el debate sobre el “fin de ciclo” de los gobiernos progresistas en América Latina. Buena parte de quienes sentencian con contundencia que ya concluyó el tiempo de los gobiernos de izquierda en la región, no lo hacen desde un lugar incontaminado por los diversos intereses en juego; al contrario, muchos de quienes han confrontado con nuestros gobiernos desde hace más de una década ahora parece que tienen mucha prisa por despedirnos. A los más entusiastas incluso les gustaría hacerlo antes de que lo hagan las urnas. Para nadie es un secreto que en América Latina los grandes grupos mediáticos y sus intelectuales orgánicos –esos pocos escogidos con compensaciones mucho más altas que el salario de un representante público– son desde hace mucho tiempo los opositores más fuertes a los cambios en la última década y media. En muchos de nuestros países no resulta complicado establecer un mapa de los intereses cruzados entre poder político y poder mediático que existían desde las décadas de los ochenta y los noventa. Cuando en Bolivia los partidos tradicionales fueron desplazados del poder político a

inicios de siglo, buena parte de sus miembros encontraron refugio, escondite, en sus brazos empresariales mediáticos. Y, con la coartada de la libertad de expresión y la no necesidad de pasar por el escrutinio público de las urnas, han sido implacables, muchas veces sin jugar limpio, contra el proceso de transformación que dirige el presidente Evo Morales desde 2006.

Sabemos, además, que nuestras élites (neo)liberales desplazadas han construido y consolidado durante décadas la idea de que la libertad de expresión –empresarial y concentrada– representa algo así como la condición previa de la democracia. Y es innegable que han logrado que esta idea sea parte del sentido común. Por cosas como estas es que Vicenç Navarro suele llamarles “medios de comunicación y persuasión” –esta segunda tarea hace mucho, mucho tiempo que ha desdibujado y subordinado a la primera–. No importaría pues demasiado la voluntad popular expresada en las urnas o la participación social en decisiones trascendentes de nuestros países. No. En realidad, con los años ha quedado claro que estas posiciones privilegian y promocionan una idea de liberalismo casi contrario a la democracia. Una suerte de defensa de un gris y determinado procedimentalismo: seguridad jurídica –mejor si es la de los grandes propietarios– y libertad de expresión por encima y antes de todo. En la misma operación, además, se identifica al enemigo de la mano del manido recurso al populismo: los avances de la soberanía popular en espacios antes “naturalmente” privatizados –por lo tanto no susceptibles de ser puestos en conflicto ni cuestionados según el dogma neoliberal– son siempre caracterizados como atentados a la división de poderes y ataques a la libertad.

Estas caracterizaciones negativas de muchos de los avances realizados estos años en términos de agresión/invasión a la libertad (individual) de los ciudadanos ha resultado más sencilla, entre otras cosas, porque nos hemos olvidado de disputar el significado de la palabra libertad y de mirar con más cuidado –definir mejor las categorías; utilizar herramientas metodológicas cualitativas– las transformaciones sociales en nuestros países.

En la inauguración del Encuentro Latinoamericano Progresista (ELAP) de 2014, en el Ecuador, el compañero Guillaume Long¹ nos advertía sensatamente sobre el primero de estos puntos. Advertencia que tuvo lugar antes de que algunos de los hechos –derrota del Frente para la Victoria (FPV) en Argentina; *impeachment* a Dilma Rousseff en Brasil; derrota del Sí en el Referéndum Constitucional en Bolivia–, que sirven para dar fuerza al discurso de “fin de ciclo”, hubieran tenido lugar.

Es probable que la advertencia hubiera llegado tarde ya en 2014, pero parecería que seguimos, dos años después, sin hacerle mucho caso. Son muy pocos los debates, libros, conferencias o asambleas donde nuestros líderes, nuestros políticos e intelectuales mantienen una discusión urgente sobre la necesidad de terminar con el monopolio de la palabra libertad por parte de la derecha. Si hemos encontrado cierto tipo de acuerdo reciente en pensar que algunos de los problemas que enfrentamos se deben a la relativa salud del imaginario, del discurso –que ya sabemos que es una práctica de primer orden– del neoliberalismo, es evidente que deberíamos prestar especial atención a la idea de libertad que promocionó el mismo y cuán vigente sigue hoy.

Nombra quien puede. Como dice David Slater, en última instancia las luchas sociales son guerras de interpretación. La derecha –sus políticos y todos sus voceros en diferentes áreas– lleva décadas interpretando la idea de libertad en su relación con la información y los medios en un sentido tremendamente restrictivo: libertad de expresión de las grandes empresas de comunicación y persuasión, para mantenerse al margen del control democrático. Por otro lado, hemos permitido, incluso mientras hemos estado gobernando, que la interpretación dominante de la libertad, desde un punto de vista político económico, nos la marque de manera claramente predominante el mercado –la mayor agencia de persuasión mundial– y sus respectivos voceros.

1. Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador.

Esta vigencia de cierta idea de libertad tiene su actual puesta en escena en el marco de un fuerte proceso de transformación social en Bolivia, sobre todo gracias a las consecuencias de una exitosa política económica que tiene en la Nacionalización de los Hidrocarburos de mayo de 2006 su condición de posibilidad. Cada vez que nosotros exhibimos los datos exitosos de la salida de la pobreza de importantes sectores de la población, estamos apuntando algo cierto y digno del reconocimiento de diferentes organismos internacionales². Cuando destacamos como una potencialidad del modelo económico boliviano el sustancial crecimiento de nuestro mercado interno también decimos otra verdad³. O cuando explicamos mediante el incremento del acceso al consumo la superación de techos de cristal étnicos que impedían a buena parte de los bolivianos ejercer su ciudadanía plena en ciertos espacios. Todo esto es verdad pero nos falta problematizar algunos aspectos relevantes, cuestionarnos más, para entender mejor algunas limitaciones de estos éxitos y algunas interrogantes que se abren hacia adelante. Estar ante nuevas preguntas no nos aboca necesariamente a un fin de ciclo. No saber responderlas probablemente sí.

¿Qué idea de libertad –y de ciudadanía– promueve el acceso al consumo masivo en la Bolivia de hoy? Si bien se han roto

-
2. Son numerosos los textos y oportunidades en las que organismos internacionales han elogiado a Bolivia por sus esfuerzos en la reducción de la pobreza extrema y moderada. Consultar, por ejemplo: Cepal: *Panorama Social de América Latina*. Santiago, Cepal, 2014, (pp. 18-20); PNUD: *Informe Nacional de Desarrollo Humano en Bolivia. El nuevo rostro de Bolivia. Transformación social y metropolización*. La Paz, PNUD, 2015 o Cepal: *Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2014*. Publicación de las Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2014.
 3. Ver *Cepal: Estudio económico de América Latina y el Caribe 2015*, Cepal, 2015, disponible en: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38713/Bolivia_es.pdf?sequence=19 o *Cepal elogia el dinamismo de la economía boliviana*, en http://www.la-razon.com/economia/Crecimiento-Cepal-elogia-dinamismo-economia-boliviana_o_2072192784.html

muchos techos de cristal que mantenían a los indígenas excluidos de diversos espacios, ¿la incorporación de millones de ellos está subvirtiendo en profundidad los parámetros de identificación de clase? ¿O estamos viendo cómo, de la mano de un mercado con una fuerza que no ha conocido nunca este Estado, se están resignificando con fuerza nuevas fronteras de distinción? ¿De qué manera el éxito de nuestra gestión económica está transformando la construcción del vínculo social en Bolivia?

La (idea de) libertad tiene mucho que decir para responder las anteriores cuestiones. Habría que preguntarse, por ejemplo, qué entiende por libertad, y con qué prácticas y en qué espacios llega a esta comprensión, un joven que es, gracias a la nueva situación de estabilidad económica, el primer miembro de una familia en ingresar a una universidad. O de qué manera el enorme salto en el número de conexiones a internet –debido en buena medida al rol de la nacionalizada empresa de telecomunicaciones (Entel)– ha posibilitado una ampliación de canales mediante los cuales los bolivianos construimos nuestra subjetividad.

La libertad no ha sido ni mucho menos ajena a la tradición de la izquierda mundial, sin embargo es probable que este último tiempo la hayamos descuidado. Hemos descuidado la lucha por su politización y no la hemos considerado un valor de importancia central para la gente. Su interpretación debe ser un campo de lucha central en este momento. Es probable que la izquierda en Bolivia, sobre todo después de todo lo que destruyó la “democracia pactada”⁴ hablando todo el tiempo de la libertad, no haya sentido un especial aprecio por este signifiante a la hora de construir un proyecto emancipador. Esto es sencillo de comprobar leyendo los principales discursos de nuestros líderes: justicia, igualdad, lucha contra la discriminación son términos mucho más presentes en ellos. Sin embargo, el sentido común ciudadano es algo distinto,

4. Período de la vida política boliviana (1982-2002) caracterizado por una suerte de alternancia política de partidos tradicionales, como el MNR, ADN, MIR, UCS o Condepa.

si bien se transformó fuertemente entre 2000 y 2005 e incorporó como aceptables y normales algunas de estas ideas, no empezó desde cero y, como hemos dicho, la ampliación del mercado ha sido un catalizador para recuperar/ resignificar elementos del sentido común de las décadas anteriores que permanecían bien arraigados –esto también se pudo ver, por ejemplo, como dice Pablo Stefanoni⁵ en el resultado del Referéndum Constitucional del 21 de febrero.

El vicepresidente Álvaro García Linera últimamente ha recuperado la idea de construir comunidad en la ciudad. No es una tarea sencilla. Esto solo será posible reflexionando en profundidad sobre los espacios urbanos donde hoy se desenvuelven la vida, los sueños y los deseos de la gente; llevando adelante acciones contundentes que frenen, como decía Armando Ortuño, “la derrota de lo público en la ciudad”, y cambiando la promesa de una libertad individual mercantilizada por una libertad articulada en un sentido progresista con otras ideas, como la de justicia social y la de igualdad.

Lo público, hoy

En nuestro país, los años de plomo del neoliberalismo arrasaron con cualquier reivindicación de lo público –estatal y no estatal– durante mucho tiempo. Es de sobra conocido que el paradigma que empezó a consolidarse en los años ochenta se asentó en buena medida sobre una poderosa estigmatización de lo hecho en las décadas anteriores: las del protagonismo estatal en la economía y la de incorporaciones sustantivas de grandes mayorías a condiciones de ciudadanía antes propiedad de los contados protagonistas del proyecto liberal republicano, que fue hegemónico

5. Consultar Stefanoni, Pablo: *Elecciones en Bolivia. Un referéndum por penales*. Edición n° 200, *Le Monde Diplomatique*, febrero de 2016.

en Bolivia desde la Guerra Federal hasta los años cincuenta, con momentos nacional-populares en los treinta y cuarenta.

De hecho en nuestro país tuvo una especial relevancia simbólica el inicio del ciclo neoliberal a mediados de los años ochenta, ya que el partido revolucionario por antonomasia (el Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNR) fue también el encargado de sepultar el ciclo anterior y, con una velocidad ruborizante, justificó su accionar por la “responsabilidad de salvar a la patria”. Para no pocos resultó sorprendente ver a Víctor Paz Estenssoro –el presidente de la Revolución del 52– como el protagonista del desmantelamiento de buena parte del aparato estatal y de nuestra soberanía. Es cierto que el abandono del carácter de partido revolucionario del MNR ya venía de muy atrás, pero el haber tenido un rol central en el proceso que se inició en 1985 no deja de resultar una clase magistral sobre los alcances del “pragmatismo” político. De hecho, a diferencia de lo ocurrido en 2005 con Evo Morales, el último gobierno de Paz Estenssoro (1985-1989) no dudó un segundo en recurrir a la violencia estatal desnuda para la imposición de su programa: estados de sitio, cierres de medios de comunicación, detención de periodistas, etcétera. No parece que los que ahora critican a nuestro Gobierno con tanta severidad sobre el estado de la libertad de expresión recuerden muy bien estos episodios. En algunos casos es aun peor, sí los recuerdan –como hacía hace poco en una entrevista el expresidente Carlos Mesa⁶– pero parece que no los consideran demasiado graves. Mesa no tuvo problemas en decir que de 2006 en adelante se vive el peor momento en lo que a libertad de expresión se refiere. Paradójicamente recordó brevemente las detenciones y cierre de medios de Paz Estenssoro –nada similar ha ocurrido durante los gobiernos del MAS–, pero eso no alteró su balance final.

6. Ver <http://www.paginasiete.bo/nacional/2016/5/11/libertad-plena-expresion-vivio-1982-2006-96153.html>

Igual la explicación de estos olvidos o matizaciones se encuentra no solo en la identidad de clase con el proyecto que se instaure con Paz Estenssoro sino en la fuerza hegemónica que tuvo su discurso. Sería un error pensar que este no persuadió a muchos millones de que era el camino de sacrificio obligatorio; un camino desigual que no vivieron del mismo modo los miles de mineros que se quedaron sin trabajo que las élites de la democracia pactada. No olvidemos la recordada frase del discurso más importante de Paz Estenssoro entonces: “Bolivia se nos muere”. Es, por supuesto, una variación local del célebre “*There is no alternative*”, de Margaret Thatcher. Importa poco precisar si esto era cierto o no, la frase funcionaba como una poderosa interpelación emocional que facultaba al entonces Jefe de Estado a hacer todo lo que estuviera en su mano para evitar que la patria desapareciera.

Puesto en estos términos –que evidencian la enorme inteligencia política de Paz Estenssoro– la identificación de quien lo criticase o se opusiese a sus medidas estaba servida: ¿quién podía estar en contra de las acciones –así estas causaran sufrimiento– que iban a permitir salvarnos? Nadie, salvo los traidores, por supuesto. Por eso es que no hubo grandes movilizaciones ni reclamos significativos por los confinados y los castigados durante ese gobierno. Y es probable que, aun ahora, los políticos e intelectuales que fueron grandes valedores de lo hecho en esos años consideren que era lo que tocaba hacer.

Eso sí, resulta algo contradictorio ver a varios de estos políticos e intelectuales ser tremendamente críticos cuando en algún discurso el presidente Evo Morales habla en términos duros de los adversarios políticos o de la defensa de algunas de nuestras acciones en términos de cuidar el bienestar de la nación. Sin confinamientos ni cierres de medios, nuestros críticos liberales, bien acomodados en la prensa nacional, hablan del riesgo de la democracia todo el tiempo.

Como decíamos, las manos libres que tuvo Paz Estenssoro encontraron, como una de sus condiciones principales, una fuerte

estigmatización de un Estado con intervención en lo público, que se profundizó en los siguientes gobiernos de ese ciclo. Al respecto cabe recordar el paquete de medidas ortodoxas que se aplicaron en el país a partir de 1985 para “frenar” uno de los peores episodios hiperinflacionarios del mundo. Intelectuales poco sospechosos de ser radicales de izquierda, como Jorge Castañeda, han matizado mucho lo de cierto que contenía este discurso. Se refería a América Latina –pero Bolivia no fue en esto una excepción– haciendo un balance más equilibrado: hubo ejemplos de gestión empresarial por parte del Estado muy deficiente, hubo otras cosas positivas en ese período y conviene no olvidar lo político que existió en la crisis de la deuda entonces. En fin, estos matices poco importaron en esos años, y el neoliberalismo consiguió, en muy poco tiempo, volverse la nueva razón de nuestro mundo.

Lamentablemente la retirada del Estado de lo público, en relación con la economía y lo social, no supuso la entrega de estos campos a las manos de la sociedad civil, a los sectores autoorganizados o a las comunidades indígenas con formas comunitarias de gestión que tenían, en algunos casos, mejores condiciones para ser más eficientes. Fueron unas pocas manos privadas, nacionales y sobre todo transnacionales, las que rápidamente ocuparon los espacios de los que se iba retirando el Estado. Casi cualquier estadística de esos años así avala que esta operación de sustracción no repercutió en la mejora de vida de las mayorías sociales de nuestro país. La promesa del goteo del crecimiento –una suerte de espera interminable para recoger el beneficio del sacrificio obligatorio– no se produjo y el descontento organizado impugnó con fuerza al sistema político a finales del siglo pasado.

Las luchas más importantes del denominado *Ciclo Rebelde*⁷, 2000-2005, tuvieron en la defensa de lo público su bandera

7. Concepto utilizado por la socióloga Silvia Rivera Cusicanqui para referirse a los numerosos focos rebeldes indígenas del altiplano y valles bolivianos

más importante. Desde la emblemática Coordinadora del Agua pasando por la lucha por el gas de los movimientos sociales aldeños y terminando en las exigencias de protagonismo político de las organizaciones indígenas, todo el programa del gobierno popular contenía una poderosa reivindicación de lo público.

El programa de gobierno del MAS-IPSP de 2005, y buena parte de las discusiones en la Asamblea Constituyente, están enmarcadas en este sentido común que la victoria electoral lleva de las calles a las instituciones. De hecho, una década después podemos ver que la presencia del Estado en la economía –esa que había sido gran responsable de todos los males las décadas anteriores– es valorada como algo positivo por una mayoría absoluta de los bolivianos según el Latinobarómetro⁸. Y no hay actor político opositor que aspire a ser una opción razonable de gobierno que no defienda como algo positivo dicho rol.

Ahora bien, en esta década efectivamente se hizo mucho en cuanto a ponderar la participación del Estado en la economía, pero el resultado en otros campos es bastante más ambiguo, sobre todo en la salud y en la educación. Las consecuencias de no haber sido capaces de desagrar la idea de lo público en estos campos ha sido perjudicial para el avance del proceso, y esto afecta de lleno la posibilidad de fortalecer estructuras generadoras de equidad eficientes y efectivas que reduzcan de modo más intenso las desigualdades sociales existentes. En muchos casos no se trata de un problema de infraestructura (luego hablaremos un poco sobre la idea del espacio que tiene nuestro Proceso de Cambio) –se invierte en esto más que en las dos últimas décadas juntas– sino de la calidad y la orientación del servicio, y de la falta de recursos personales.

en 1947. Ver *“Oprimidos pero no vencidos”, luchas del campesinado aymara y qhechwa 1900-1980*. La Paz, Hisbol-Cesutcb, 1984.

8. Consultar bases de datos en: <http://www.latinobarometro.org/latContents.jsp>

En los años noventa, en el auge de la hegemonía neoliberal con el *gonismo*⁹, un marcador de clase poderoso era la posibilidad de acceder a un colegio y a una universidad privados. Nadie en su sano juicio aspiracional de clase hubiera apuntado a su hijo en una institución de educación pública si el salario –o el crédito o el ingenio– le permitía no hacerlo. Para no quedarse sentado esperando la eterna llegada del goteo el mejor camino era siempre el privado: con algo de suerte desembocabas en un puesto en el Estado.

De los miembros de todos los gabinetes ministeriales desde 1985 hasta 2005 los que estudiaron en la escuela pública representan un porcentaje significativamente menor. Todavía menos son los hijos de estos ministros que han elegido lo público para su educación primaria y secundaria. A nivel de élite política esto ha cambiado sustancialmente esta última década. Las investigaciones de Ximena Soruco¹⁰ están ahí para mostrarlo, hablando de la composición social del funcionariado; sin embargo, en el sentido común ciudadano una escuela pública sigue estando casi tan mal vista como lo estaba en los años noventa. Además, estos años de crecimiento económico sostenido han permitido que las escuelas privadas agranden la brecha respecto de las públicas, en cuanto a tecnología y vinculación académica con sus pares de otros países, a pesar de esfuerzos como el programa Quipus¹¹. Y una parte muy significativa de las nuevas clases medias –de las que tan orgullosos nos mostramos– no ha cambiado su opinión sobre la educación

9. Expresión que hace referencia a los períodos de gobierno de 1993-1997 y 2002-2003 bajo el mandato del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, actualmente “asilado” en Estados Unidos y prófugo de la justicia boliviana por los hechos de Octubre Negro de 2003.

10. Ver, por ejemplo, *Composición social del Estado Plurinacional*, La Paz, Ed. Fondo de la Vicepresidencia, 2014.

11. Programa de ensamblaje masivo de computadoras portátiles que se entregan a estudiantes de primeros años de colegio. El programa fue puesto en marcha por el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Educación en 2014.

pública. Todo esto ha terminado con un fortalecimiento de lo privado como marcador de la calidad del servicio.

Algo muy similar ocurre en el terreno de la salud. La opinión negativa sobre los servicios públicos de salud está tan vigente en nuestro sentido común que no son pocas las autoridades que reconocen en público que prefieren, en la medida de lo posible, evitar un hospital público.

¿Qué impacto tienen estas declaraciones y prácticas en la construcción de las preferencias de nuestras clases medias emergentes? ¿Reconducen las mismas a una idea progresista de la ciudadanía o, más bien al contrario, fortalecen el imaginario de los años noventa sobre estos temas? ¿Y todo esto qué relación tiene con la identificación con diferentes proyectos políticos? ¿Acaso no podemos encontrar aquí parte de la explicación de por qué, por ejemplo, no estamos siendo capaces de ganar la batalla político cultural a la hora de defender que una mujer de pollera o un líder sindical están tanto o más preparado para gestionar una institución pública que un sujeto que ha estudiado en instituciones privadas y tiene dinero para llevar a su familia a la sanidad privada?

La relativa permanencia en nuestro imaginario de lo privado como sinónimo de algo de mejor calidad es una constante subversión a buena parte de nuestro discurso. Su fortalecimiento puede terminar erosionando nuestra base electoral.

Algo menos de Lenin, un poco más de Lefebvre

Iñigo Errejón sostiene que uno de los retos a los que se enfrentan los procesos de transformación en la región es el de ser capaces de generar una nueva cotidianeidad distinta a la neoliberal¹² –por supuesto aún vigente en numerosísimos campos y todos

12. Ver, por ejemplo, <https://instituto25m.info/entrevista-a-inigo-erregon-podemos-como-practica-cultural-emergente-frente-al-imaginario-neoliberal-hegemonia-y-disidencia/>

los días—. Esta es quizás la tarea más compleja, ya que lo que se puede hacer sobre el tema desde un gobierno es limitado, lo cual no significa que no sea importante. Pensemos simplemente en el impacto que podría tener una burocracia estatal distinta, o el que podría tener un transporte público diferente al que tenemos; por no hablar del campo tan grande como poco explorado de las series de ficción o películas de cine que se transforman rápidamente —más en una sociedad como la nuestra de crecimiento acelerado y ausencia de productos audiovisuales propios— en modelos de comportamiento social. ¿Acaso en estos diez años de empoderamiento popular, de difícil comparación con nuestra historia, hemos generado un relato de ficción exitoso, que valide en la pantalla lo ocurrido en las calles? Que yo conozca, solamente la Revolución Bolivariana en Venezuela se tomó en serio llevar la disputa en este campo, más allá de los resultados: con la producción de telenovelas con contenido progresista que buscaban subvertir los roles tradicionales, o, en otro campo, con la democratización, en el acceso y en la gestión, de varios museos y centros de exhibición de arte.

En toda esta discusión, el espacio, su construcción, es absolutamente importante a la hora de discutir sobre la subjetividad y la construcción de lo cotidiano. Beatriz Preciado ha explicado bien en *Pornotopia* (2010) la eficacia de las revistas norteamericanas de los años cincuenta y sesenta mostrando en sus fotografías habitaciones ideales, para explicar cómo debía vivir un hombre soltero que, además, fuera un triunfador con las mujeres. Kristin Ross, en *Coches veloces, cuerpos limpios* (1995), revela la importancia del automóvil en la construcción del imaginario de la Francia posmoderna.

Los años noventa fueron probablemente los de mayor privatización de los espacios. Comentamos anteriormente que la idea dominante era la de lo privado, en la educación, la salud, el ocio, como sinónimo de lo bueno. Y lo bueno, para el imaginario del neoliberalismo, es una justa compensación por el esfuerzo individual, no algo que se busque democratizar o que se deba

compartir: si se comparte deja de ser bueno, distinguido. De este modo, en esos años, los criterios (in)formales para evitar que la plebe ingresara en un número elevado de espacios estaban muy extendidos. Y en ese poder ingresar, o no, se marcaba tu condición de ciudadano de primera o de segunda. Se dibujaban, con esa respuesta, los límites de tu ciudad. Si bien en nuestro país no existió un sistema de discriminación sancionado por ley durante este período, la costumbre era un poderoso criterio para excluir a muchas personas de discotecas de moda, plazas públicas de barrios acomodados o universidades privadas, por citar algunos casos. Cualquier cosa valía: desde el recurso policial para combatir la inseguridad por la presencia de “gente extraña”, hasta súbitas condiciones de membresía requerida para ingresar a la discoteca de moda.

Nosotros tenemos, como Estado, una serie de instrumentos en forma de políticas y de normativas para intervenir en estos espacios en un sentido progresista, para ir construyendo una cotidianeidad alternativa. No estamos escasos de ejemplos de estas alternativas en nuestro país, de hecho las hay en un buen número. En todo el proceso de movilizaciones y luchas de los primeros años del siglo, el campo popular dio diferentes muestras de ello: por ejemplo, casi todos los días duros de la Guerra del Gas en El Alto¹³, los vecinos, en condiciones de asedio policial y con cada vez menos recursos materiales, fueron capaces de aguantar y triunfar apoyándose en formas de relación diferentes a las estrictamente mercantiles. Formas de relación que no fueron improvisaciones debidas a la coyuntura sino que respondían a maneras arraigadas de relacionarse entre habitantes de un mismo barrio y, en muchos casos, con vínculos familiares entre

13. La denominada “Guerra del Gas”, desencadenada entre septiembre y octubre de 2003, tuvo el trágico saldo de más de sesenta personas muertas y centenares de heridos. Ver, por ejemplo: Clacso, *Dossier, Análisis de Casos, La Guerra del Gas, 2003*; Ornelas Raúl, *La Guerra del Gas: cuarenta y cinco días de resistencia y triunfo popular*. Clacso, 2003.

sí. Tenemos también diferentes ejemplos entre las prácticas y las instituciones de la economía popular. Sin caer en la ingenuidad que lleva a idealizarlas todas solo por tener el sello de lo alternativo –muchas de ellas son tremendamente neoliberales– existen algunas formas de relacionamiento y prácticas en estos grupos sociales que construyen diariamente una manera diferente de hacer las cosas –no estamos, por supuesto, hablando de nada que pueda entusiasmar a los seguidores de Walter Mignolo–. Lo que hay que preguntarse es si estas prácticas están, primero, consiguiendo reproducirse en estos años y, segundo, si el Estado está tomándolas en cuenta a la hora de construir institucionalidad o, de manera equivocada y desde una mirada más propia de un paradigma de modernización clásico, está más bien dándoles la espalda y desarrollando políticas que buscan “formalizarlas”, y en este sentido cabe preguntarse también si el Estado reflexiona sobre sus propias prácticas.

La construcción de la nueva cotidianeidad de la comunidad urbana de la que habla García Linera se tiene que llevar a cabo pensando y problematizando todo esto. Volviendo al tema del espacio, hay que interrogarse respecto a cuál es la idea predominante que sobre el mismo ha tenido, y promovido, el Proceso de Cambio. Y tengo la impresión de que aún tenemos mucho por hacer en este campo. Es cierto que se concretaron cosas muy importantes, que han tenido un impacto notable; el teleférico, por ejemplo, no solo ha sido el primer esfuerzo serio en muchos años de intervenir en el sistema de transporte sino que sobresale por sus características: comunica ciudadanos alteños y paceños, que viajan en espacios pequeños donde se miran de frente, lo cual ha llevado adelante una lenta pedagogía sobre la condición ciudadana de vecinos de ambas ciudades como iguales. Sin embargo, hay muchas otras cosas, sobre todo en políticas culturales, en las que no hemos hecho suficiente. Y ya sabemos que, en política, si tú no haces lo que hay que hacer, alguien lo hace en tu lugar.

El fuerte ascenso social, el mayor número de jóvenes que accede a una educación formal, el extendido uso de las redes sociales y la mejora de las condiciones de vida han provocado una actividad cultural notablemente mayor que los años anteriores. Por ejemplo, la ciudad de La Paz ha vivido una descentralización de sus espacios de actividad cultural –antes limitado a dos o tres calles de dos barrios acomodados y alguna otra en el centro de la ciudad–. A solo tres calles de la Asamblea Legislativa Plurinacional se encuentra el edificio de Entel (la empresa de telecomunicaciones nacionalizada en 2008), en la parte exterior del edificio cada noche se junta un grupo de unos veinte jóvenes que ocupan el espacio durante horas para practicar diferentes bailes; antes de medianoche, sin causar nunca ningún problema ni daño al edificio, se marchan para volver al final de la tarde siguiente en una especie de nacionalización popular del frontis de Entel. Y no es una excepción, por la falta de espacios públicos en nuestras ciudades son varios los edificios públicos o privados, algunos abandonados, en que diferentes colectivos desarrollan actividades de este orden. Estas actividades generan, obviamente, una cotidianidad muy diferente de la que uno puede encontrar en otro tipo de espacios. Se puede suponer, con poco riesgo de equivocarse, que el vínculo social en estos colectivos es más fuerte que el que tienen los consumidores que pasan las mismas horas en un centro comercial.

Otro indicador poco positivo, sobre el estado de nuestras políticas de recuperación del espacio público, es el significativo auge de los gimnasios. Mucho se ha escrito sobre estos y sobre los centros comerciales como lugares emblemáticos de la subjetividad neoliberal (*American Psycho* es seguramente uno de los clásicos contemporáneos sobre este tema; tanto su versión escrita como la filmada son altamente recomendables). Uno no va a un gimnasio a construir precisamente un sólido vínculo social con la comunidad, incluso la disposición clásica de sus espacios complota contra este deseo, si es que alguno de los usuarios lo tuviera. Lo que también muestra este

crecimiento, fácilmente contrastable de los gimnasios, es las ganas y el tiempo disponible de un número cada vez mayor de bolivianos de hacer deporte. También, por supuesto, denota cambios en los patrones de belleza. Las ganas de hacer deporte, o de verse más atractivo, no tienen una sola manera de canalizarse; podríamos haber tenido una respuesta diferente que nos hubiera dado mejores resultados en términos de ir sembrando una cotidianidad nueva, por ejemplo, si como gobierno hubiéramos promovido con mayor fuerza la recuperación de espacios públicos donde la gente pueda estar al aire libre, cerca de otra gente, otras familias, haciendo deporte.

Es probable que todo esto nos haya parecido un problema menor hace unos años dada la envergadura de la tarea que se tenía por delante cuando se accedió al gobierno. Pero la reivindicación del Estado como un instrumento necesario para el cambio social (el “Estado como novísimo movimiento social”, decía Boaventura de Sousa Santos) no puede hacernos caer en la trampa de pensar que desde la atalaya estatal se ve todo el mapa, y sus transformaciones, de manera cabal. No pasaba antes, y no sucede ahora tampoco. Nosotros estábamos bastante prevenidos teórica y prácticamente sobre esa distancia no insalvable del todo entre Estado y Sociedad. Insalvable pero de necesaria cohabitación, si lo que se quiere es un proyecto que realmente incida en la mejora de la vida de las grandes mayorías y no se busca solamente una cátedra que elogie la vida armónica de un centro social ocupado, impermeable, de modo sorpresivo, a las leyes y los presupuestos generales del Estado.

Si éramos críticos, con razón, de las posiciones que argumentaban de manera ortodoxa que el Estado siempre sería un instrumento de dominación de clase o contra los que decían que su gestión sería irrelevante por el desplazamiento de la soberanía a otros espacios a una escala superior, no podemos pensar, ni por un momento, que con nuestra presencia en el mismo y con su gestión se acabó la disputa.

La dimensión política de la gestión pública

Es preciso recuperar una idea amplia de lo que es la gestión pública. Darle nuevamente una dimensión política que se ha ido perdiendo relativamente estos años en favor de destacar solamente su faceta económica. En los últimos años hemos dedicado casi todos nuestros esfuerzos a consolidar nuestras fortalezas en la gestión económica; no sostengo que esto sea algo negativo por sí mismo pero hay que mirar qué se ha descuidado en este Proceso. Es preciso valorar y cuidar los mejores diez años de gestión económica de nuestra historia, sin duda; además es cierto que, a pesar de que todos los argumentos de la oposición se han ido cayendo uno tras otro (nuestro éxito económico se debía solo a buena suerte; los precios internacionales nos habían favorecido en todo; sin duda en el siguiente año indudablemente nos hundiríamos...) se mantiene la ofensiva contra nuestra política económica porque se sabe que buena parte de nuestro apoyo popular radica en sus buenos resultados.

Sin embargo, creo que este argumento a nuestro favor ha empezado a mostrar sus limitaciones, y no porque la economía esté yendo mal sino porque después de tanto tiempo de estabilidad ha ido perdiendo su cualidad política diferenciada: la mayoría de los bolivianos ya considera que esto es lo mínimo que debería hacer nuestro gobierno y que cualquier otro proyecto que quiera disputar el poder tendrá que garantizar niveles de estabilidad económica similares. De algún modo siempre sucede así con los grandes objetivos alcanzados en política: primero parecen metas imposibles, por fuera de lo razonable; luego logros sacrificados garantizados solo por una mezcla de la voluntad política de un determinado líder o partido y el empuje popular; después, si esto dura en el tiempo, ya parecen parte del paisaje, se vuelven la condición mínima razonable desde la que hacer política.

La campaña del Referéndum Constitucional del 21 de febrero tuvo muchos problemas –solo hace falta ver el resultado– pero quizás el más significativo es que mostró las

limitaciones electorales de la apelación a la buena gestión económica y a la estabilidad. Nadie la ponía en duda pero tampoco nadie la vio amenazada. Y no funcionó del todo el mensaje de que la única garantía de su continuidad era nuestra presencia en el poder, con Evo Morales a la cabeza. De hecho, la campaña del No más exitosa fue la que reconocía lo hecho –no negaba la paternidad de la situación económica a nuestro gobierno– hasta hoy por el MAS, pero cuestionaba que esto bastase para querer seguir después de 2019.

Por señales como estas resulta urgente redimensionar políticamente la gestión pública que nunca debe reducirse a la gestión económica. Esta centralidad de lo económico en nuestro discurso tiene varias causas. No hay que olvidarse que el ciclo neoliberal se instaló sobre el epitafio del Estado como pésimo gestor de la economía. Había que combatir esa idea, desde el discurso y con resultados. Lo mismo que disipar el fantasma de nuestra última experiencia fracasada de la izquierda en el poder, la Unión Democrática Popular, la UDP, a principios de los años ochenta, precisamente famosa por el descontrol económico y la hiperinflación, como seña mundialmente conocida. Los primeros años la derecha intentó resucitar ese fantasma: “la izquierda no sabe gestionar la economía”. Lo hizo primero con la crisis en 2008; luego agitando la idea de que resultaba inminente un encarecimiento drástico del combustible –conocido como “gasolinazo”–; incluso intentando –como hizo en alguna oportunidad el líder opositor y empresario Samuel Doria Media– instalar temor en el sistema financiero por su supuesta debilidad. Nada de esto les resultó efectivo, y la credibilidad que la gente le otorga a estas advertencias tan poco inocentes es significativamente baja.

Ahora bien, una gestión pública que vea mucho más allá de la gestión económica debería tomar en cuenta alguna de las cosas que hemos apuntado en este texto: hay que saber captar por dónde van las nuevas demandas de estos numerosos sectores emergentes que en su gran mayoría viven, desean y

votan en las ciudades. ¿Cuáles son los espacios en los que se pone en escena la construcción de estas identidades y dónde se encuentran en pugna sus valores, sus lealtades políticas? Hay que preguntarse si como Estado, desde la gestión pública, se puede intervenir políticamente para que este sentido sea progresista y de fortalecimiento de lo común.

Durante estos años han tenido lugar dos fenómenos convergentes: una sostenida migración de gente a las ciudades y una transformación de decenas de núcleos poblacionales, que con una mirada de dos décadas atrás podían ser considerados pueblos, pero ahora sus habitantes tienen identidad de ciudadanos. Es la ciudad –ampliada– el nuevo campo de batalla. Los que identifican, desde nuestro lado, a las ciudades como espacios “perdidos” donde viven las clases medias, y además caracterizan a estas como, en esencia, antirrevolucionarias, nos están haciendo un flaco favor con su mirada muy limitada. En lugar de caer en el refugio de adjetivos que nos pueden dar cierto confort revolucionario pero pocas pistas sobre lo que ocurre realmente en nuestras calles hoy, nos resultaría mucho más útil analizar con cuidado cómo y cuánto ha cambiado nuestro país gracias a las políticas que nosotros mismos hemos puesto en marcha. Es probable que después de esa mirada atenta veamos que tal vez el camino sea interpelar a más gente y de manera más profunda, haciendo hincapié, por ejemplo, en los trabajadores y sus condiciones –buena parte de los jóvenes que migran a la ciudad consiguen trabajos precarios en el sector servicios–, más que en el imperialismo y su ofensiva constante. No porque el imperialismo haya dejado de actuar –ejemplos hay todo el tiempo– sino porque incluso para que esta advertencia funcione hay que saber qué entiende hoy la mayoría de los bolivianos por esta palabra, entre otras tantas.

Lo dijo muy bien Cristina Fernández de Kirchner: “A los que nos odian hay que responderles con gestión: con gestión y con amor”. Con una gestión pública profundamente política.

Conclusiones

Son millones los bolivianos que en esta última década, cada vez que han sido preguntados, han dado su apoyo a la hoja de ruta que el presidente Evo Morales puso en marcha en enero de 2006. Es muy difícil encontrar algún otro líder político en el mundo que obtuviese en sus terceras elecciones generales consecutivas un respaldo de 62% de los votos y una distancia respecto al segundo competidor de 37%. Estos fueron los números de las elecciones de octubre de 2014. Son varios los actores opositores que admiten, en líneas generales, que el país esta última década ha cambiado notablemente y que lo ha hecho en una buena dirección. De hecho la campaña de nuestro principal rival en las últimas elecciones tenía como uno de sus lemas principales: “Cambiamos solo lo malo”. Reconocían nuestra política de redistribución como un ejemplo de, lo llamaban así incluso en sus publicaciones, “rentismo moderno y democratizador”. Defendían la Nueva Constitución Política del Estado como si en el Referéndum de Aprobación hubieran pedido el voto por el Sí. Y se mostraban como los más celosos guardianes de la Nacionalización de los Hidrocarburos. Estos años las ideas centrales del Proceso de Cambio son las que han dibujado la cancha de lo imaginable para hacer política. Situarlo fuera de las mismas es una condena a la irrelevancia.

Ahora bien, estas victorias también suponen dificultades para nosotros. El éxito de buena parte de lo conseguido estos años ha pasado a formar parte constitutiva del paisaje político; ha perdido, por lo tanto, mucho de su cualidad electoral. No deja de resultar curioso que cuando nosotros empezamos a hablar de la irreversibilidad, de cómo consolidar el carácter irreversible de lo logrado, emerge con mucha fuerza un relato contrario: el del fin de ciclo. Lo curioso es que para intentar contestarlo comprobamos cuán reversible es todo lo conseguido, y argumentamos, con preocupación, que se puede dar marcha atrás con las victorias de esta década.

La derrota del 21 de febrero puede llevarnos al camino fácil, al repliegue sobre lo nuestro, sobre nuestros leales. Cuando uno ha sufrido una derrota no parece el mejor tiempo para los experimentos, precisamente por eso debemos hacer lo contrario: ser más audaces que nunca. La oposición aún no entiende –y si lo entiende no le gusta– el país que tenemos. Nosotros, últimamente, hemos caído en alguna de las tentaciones de esta huida hacia lo nuestro: hablamos más de la oposición política como amenaza real cuando, sin lugar a dudas, es menos peligrosa y menos representativa que la que teníamos, por ejemplo, en 2008.

El balón sigue estando en nuestra cancha, eso sí, en una cancha en que nuestras victorias han cambiado sustancialmente y donde haríamos bien en tratar de entender sus nuevas coordenadas. Las encuestas siguen diciendo que el nuestro es el único proyecto político que tiene un plan para el país, según opinan dos tercios de los bolivianos, frente a un tercio, que no ha crecido en una década y considera que la oposición tiene un plan para nuestra patria. Por lo tanto, es razonable pensar que a la gente le preocupan menos las actividades, incluso de dudosa legalidad que realizan algunos destacados opositores, que nuestras respuestas a las condiciones del mercado de trabajo o de la salud. Para decirlo esquemáticamente: como hemos demostrado estos años, la mejor manera de ganarle a la conspiración imperialista no es tanto denunciarla con palabras que hoy no son parte de las preocupaciones de las mayorías, sino seguir cumpliendo con nuestro programa de gobierno, con nuestro plan para el país.

La hegemonía, dice Alejandro Grimson, es siempre buscar ampliar las bases de sustentación de un proyecto, incluso si la operación de ampliación fracasa, y nos quedamos con lo que tenemos, mereció la pena. Cuando nos preguntamos por cómo construir irreversibilidad es necesario hablar de la cotidianeidad. No vamos a construir esa deseada irreversibilidad solo con que nos cuadre la macroeconomía. Tenemos que volver a mirar con más cuidado qué sucede en nuestras ciudades, en sus espacios, en los deseos y las necesidades que allí se manifiestan.

EMIR SADER

Brasil: de Lula al golpe blanco

Brasil ha pasado por extraordinarias transformaciones, regresivas y progresivas, en un período relativamente muy corto de tiempo. En poco más de medio siglo tuvo 21 años de dictadura militar, 12 años de gobiernos neoliberales y otros tantos años de gobiernos antineoliberales. Fue gobernado por militares, por Fernando Henrique Cardoso y por Luiz Inácio da Silva, “Lula”, entre otros. Ha tenido dictadura, regímenes neoliberales y los gobiernos más democráticos y populares de su historia, hasta llegar al golpe blanco, que intenta terminar con ese ciclo de gobiernos iniciado en 2003 con el primer mandato de Lula.

Brasil había tenido una temporalidad política relativamente distinta respecto a los otros países de la región: después de dos intentos –en 1954 y 1961– los militares lograron dar un golpe de Estado en 1964, e imponer una dictadura que pudo usufructuar todavía del final del más largo ciclo expansivo del capitalismo, que permitió que la economía volviese a crecer basada en la

contención absoluta de los salarios y en las facilidades para el ingreso de capitales externos.

De esta manera, el período de dictadura en Brasil, al contrario del de los otros países de la región, no fue de recesión, sino de expansión económica, incluso con aceleración de la concentración de los ingresos y la riqueza. Hubo todo un período histórico, en esos 21 años de dictadura, que incluyó un nuevo ciclo económico, así como el surgimiento de un nuevo sector de la clase obrera, al cual pertenecía Lula y del cual surgieron el Partido de los Trabajadores (PT), la Central Única de los Trabajadores (CUT) y el Movimiento de los Sin Tierra (MST).

La transición democrática en Brasil resultó tan fallida como en otros países de la región, porque estuvo hegemonizada por el liberalismo político, que impidió que la democratización llegara a las estructuras económicas. En Brasil y en toda la región fueron los gobiernos progresistas los que retomaron ese tema y así concluyeron el largo proceso de transición de las dictaduras hacia las democracias.

La crisis actual es la del agotamiento de ese impulso, que ahora necesita un proyecto propio, tanto como modelo de desarrollo económico adecuado a las condiciones internacionales, regionales y nacionales, como de nuevas utopías, nuevos valores que movilicen a las sociedades, otra vez, hacia el futuro de América Latina en el siglo **xxi**.

Los años de Lula

La victoria de Lula en 2002 –que luego propiciaría el bienestar social y la reanudación del crecimiento económico– ha sido posible por el fracaso de la política de Cardoso, quien se había propuesto el control de la inflación mediante un duro ajuste fiscal. Los primeros efectos del control de la inflación permitieron la elección, en 1994, y la reelección, en 1998, de Cardoso, poco antes de que el modelo entrara en crisis y

su gobierno aumentara la tasa de interés hasta casi el 50% mensual –con la intención de frenar la huida de capitales–, y que la economía ingresara en una crisis recesiva profunda y prolongada que solo sería resuelta con el gobierno del PT.

Lula triunfó como resultado del fracaso de ese modelo, pero recibió una dura herencia: la recesión mencionada, un Estado debilitado, una economía desindustrializada y apoyada en la exportación de productos primarios, con hegemonía del capital financiero, una sociedad fragmentada, y el monopolio de los medios privados de comunicación, entre otros factores de peso.

Si bien Lula había ganado la elección presidencial en segunda vuelta –contra José Serra, el candidato de Cardoso–, el gobierno del PT nunca tuvo mayoría parlamentaria. Las alianzas establecidas por el Presidente, a nivel parlamentario y con sectores empresariales, imponían la hegemonía del Gobierno mientras dichas alianzas se justificaban en la prioridad de las políticas sociales, de los procesos de integración regional y en el rescate del papel activo del Estado.

El Gobierno no buscó transformar las estructuras de poder heredadas del neoliberalismo, ni el poder del capital financiero, ni el del agronegocio, ni el de los monopolios en los medios de comunicación. Es cierto también que en aquel momento, no se tenían las fuerzas necesarias para ello, pero el Gobierno tampoco se propuso generar las condiciones para poder hacerlo en el futuro. El éxito de las políticas sociales y el liderazgo de Lula disminuyeron –hasta cierto punto y hasta un cierto momento– los efectos negativos de esas estructuras que se mantenían.

Cuando terminó su segundo mandato, Lula tenía una abrumadora mayoría de referencias negativas en los medios, pero un apoyo de más del 80% de la población. Tan es así que pudo escoger una persona sin tradición política, como Dilma Rousseff, y elegirla como su sucesora.

Fueron años de extraordinarios avances en la recuperación del crecimiento económico, en el suceso espectacular de las políticas sociales del gobierno, en el rescate del rol activo del

Estado en la economía y en la proyección de la política internacional, todo lo cual transformó a Lula en uno de los grandes protagonistas de la escena mundial. La fisonomía social de Brasil cambió radicalmente, la autoconfianza de los brasileños nunca fue tan grande y la imagen del país en el mundo se volvió altamente positiva.

Los años de Dilma

Desde 2011 hasta 2015 transcurrió el primer mandato de Dilma Rousseff. Fueron años de transición entre las condiciones vigentes durante los dos gobiernos de Lula (2003-2010) y las que existirían luego en el interrumpido segundo mandato de Dilma, iniciado en 2015 y concluido, por un golpe, en 2016.

La situación internacional había cambiado drásticamente de modo negativo. Los efectos recesivos, tanto externos como internos, hicieron que la economía no creciera a lo largo de todo el mandato. Sin embargo, de forma coherente con los criterios históricos del PT, las políticas sociales siguieron expandiéndose continuamente, tanto la “Beca Familia” como el plan habitacional “Mi casa”, además del plan general de inversiones en infraestructura. Todo ello generó, por un lado, un desequilibrio en las cuentas públicas y, por el otro, descontentos en el gran empresariado. En el plano político, a su vez, el Gobierno enfrentó resistencias cada vez más grandes entre sus aliados, lo cual fue debilitando su capacidad de acción.

En 2014, Dilma se presentó a la reelección; tenía como contrincantes a Aécio Neves, candidato del PSDB, y a Marina Silva, candidata por el PSB. El resultado final de la segunda vuelta revela la situación del país en aquel momento, previo a la crisis: Dilma triunfó por apenas 3% de los votos, aun habiendo hecho un gobierno que había favorecido claramente a la gran mayoría de las masas pobres del país con sus políticas sociales.

En síntesis, se puede decir que donde la influencia de los medios fue determinante –en el centro sur del país–, la derecha logró una importante victoria, incluso entre los sectores populares beneficiarios de las políticas sociales del gobierno. Aécio Neves tuvo, en la segunda vuelta, 51 millones de votos, de los cuales por lo menos 30 millones fueron votos de origen popular; mientras que Dilma triunfó en las regiones –especialmente en el nordeste– donde las transformaciones de la vida de la gente fueron tan espectaculares que neutralizaron las campañas de los medios, donde obtuvo siempre más del 70% de los votos. Por otra parte, por primera vez en una elección presidencial en Brasil, todo el gran empresariado apoyó abiertamente a la oposición y contribuyó con muchos recursos para la elección parlamentaria, logrando elegir el Congreso más conservador de la historia política del país.

De esta manera, como hemos dicho, Dilma triunfó con un pequeño margen de votos teniendo que encarar una economía estancada y un Congreso de mayoría opositora, además del enfrentamiento en contra de su gobierno llevado adelante por toda la gran prensa privada.

La gran crisis

Fue a partir de esa situación, y de la forma cómo el Gobierno de Dilma reaccionó, ya desde el inicio de su segundo mandato, que se generó la larga, profunda y sorprendente crisis política. La derecha brasileña siempre tuvo como objetivo derrocar a los gobiernos del PT, desde la crisis del llamado *mensalão* del 2005 en contra del Gobierno de Lula –cuando intentó promover un *impeachment*–, pasando por los intentos electorales fracasados de 2006, 2010 y 2014. Pero esta vez logró desarrollar una ofensiva desestabilizadora más fuerte, valiéndose de errores graves cometidos en el segundo mandato de Dilma.

En primer lugar, el mandato inicial de Dilma terminó en el momento que le correspondía, pero el segundo tardó en comenzar, lo cual dio tiempo para que Eduardo Cunha, líder de la corriente derechista del PMDB, coordinara su candidatura a la presidencia de la Cámara de Diputados. Cuando el Gobierno se dio cuenta, él ya era amplio favorito para ganar, valiéndose de la composición conservadora de la Cámara y de una amplia bancada elegida con recursos privados movilizad- dos por él, incluyendo una gran cantidad de parlamentarios evangélicos.

Frente a esa situación, el Gobierno lanzó un candidato, que actuó como “el oficialista”, que era precisamente el que la derecha podía derrotar, y terminó imponiéndose con gran mayoría, adueñándose de la presidencia de la Cámara y de la dirección de todas las comisiones. Se rompió así la alianza con el PMDB, al cual pertenece Cunha, dejando al Gobierno en minoría en el Congreso y generándose una situación de absoluta ingobernabilidad. Este factor terminó siendo el decisivo en el golpe blanco puesto en práctica por la derecha brasileña.

El otro grave error del Gobierno de Dilma, al inicio de su segundo mandato, fue su política económica. Sin contar con el apoyo del gran empresariado y con las cuentas públicas desequilibradas, se optó por el camino equivocado de aplicar un ajuste fiscal, con la ilusión de recomponer dichas cuentas y, de este modo, reconquistar el favor de sectores patronales.

Sin embargo, fue esa una opción socialmente equivocada, porque hizo recaer sobre los trabajadores el peso de la crisis. Resultó también económicamente ineficiente, ya que los recortes de los recursos públicos solo profundizaron la recesión y, con ella, el desempleo. Por último, la opción gubernamental fue políticamente desastrosa porque le quitó en un santiamén el apoyo popular del que gozaba, que pasó de más del 50% a alrededor del 10%.

Fragilizado de esa forma, el Gobierno se volvió blanco de ataques desde todas las direcciones: intensificación de las

campañas de los medios sobre corrupción e incompetencia económica, al lado de acusaciones de distintos sectores del Poder Judicial y de la Policía Federal en contra de políticos del gobierno y del PT. Esto permitió la movilización, por parte de los medios de comunicación, de grandes sectores de las capas medias en contra del gobierno, intensificando la impresión de aislamiento político y de apoyo popular a la derecha.

Como la derecha no había logrado cuestionar al Gobierno por el recuento electoral, ni por las acusaciones de corrupción, terminó valiéndose de su mayoría parlamentaria para acusarlo de manejos presupuestarios, que para nada caracterizan un delito de responsabilidad que pudiera justificar un *impeachment*. Tales manejos presupuestarios son mecanismos que todos los presidentes y gobernadores han utilizado y siguen utilizando. La derecha se valió simplemente de su mayoría parlamentaria para hacer aprobar un *impeachment* sin justificación legal, con el silencio cómplice del Poder Judicial. Las propias justificaciones públicas de los votos por el *impeachment* invocaban razones políticas y olvidaban los arreglos presupuestarios como razón legal para aprobarlo.

Fue así que la derecha logró terminar con el mandato de Dilma Rousseff, poniendo en su lugar a su vicepresidente, Michel Temer, que ha asumido no con el programa por el cual ambos habían sido reelegidos, sino con el programa de la oposición, de carácter neoliberal, que había sido derrotado en cuatro elecciones sucesivas.

Se instaló una administración interina que pasó a actuar como si fuera permanente, buscando desmontar lo fundamental de los gobiernos elegidos y reelegidos desde 2003. Un núcleo económico ortodoxamente neoliberal es el encargado de reestablecer este modelo, incluyendo la vuelta a las privatizaciones, los cortes duros en los recursos para políticas sociales y el ataque a los derechos de los trabajadores.

El Gobierno está compuesto por un equipo político vinculado al PMDB –cuyos integrantes prácticamente están todos

acusados de corrupción con procesos en desarrollo— aliados con el núcleo neoliberal y con representantes del agronegocio. Es un proyecto típico de restauración neoliberal, muy similar, en el contenido, al de Mauricio Macri en Argentina, al igual que fueron similares, en el contenido, los gobiernos neoliberales de los años noventa en estos dos países.

El golpe desató el más grande proceso de movilizaciones populares que Brasil jamás haya conocido. Además de los movimientos sociales organizados y los partidos de izquierda, se fueron incorporando grandes contingentes de los más expresivos sectores hasta ese momento ausentes de la política nacional: mujeres, jóvenes, movimientos negros musicales de la periferia, además de hinchas de fútbol, artistas, juristas, etcétera, en en manifestaciones populares diarias y de todas las formas posibles. A punto tal de que el Presidente interino no pudo, en el primer mes de su gobierno, aparecer en ninguna actividad, ni siquiera vivir en su casa particular, por las demostraciones de repudio.

El golpe terminó siendo refrendado por dos tercios de los senadores, lo cual remite el proceso político brasileño a las elecciones presidenciales de 2018, mientras tanto el gobierno golpista buscará poner en práctica un duro proyecto de desguace del Estado, de los derechos sociales, de la política externa soberana del país. De igual modo, tratarán que Lula no pueda ser candidato, porque el expresidente se presenta, cada vez más, como gran favorito para volver a la presidencia del país. Esa sería la vía óptima del golpismo restaurador.

Brasil después de la crisis

La gran cuestión, ya sea que los gobiernos del PT hayan concluido definitivamente, o que vuelvan en 2018, es saber qué es lo que han significado en la historia de Brasil, qué es lo que han

dejado al país y de qué nivel parte la izquierda brasileña, sea para seguir gobernando o para luchar para volver a gobernar.

Antes que nada hay que explicar cómo fueron posibles gobiernos antineoliberales en Brasil, en el marco internacional y regional de hegemonía neoliberal, qué limitaciones ha significado esto, qué reformas pudieron implementar y qué ha resultado de toda esa experiencia.

Yo hablé de “enigma Lula” en mi libro *El nuevo topo*, para referirme al proyecto organizado por el expresidente de Brasil, un enigma que, si no es descifrado, devora a sus contrincantes. Fue lo que le pasó a la derecha y a la ultraizquierda brasileñas. Ni una ni otra creían que el proyecto de Lula fuera a prosperar, menos todavía con la dimensión espectacular que ha asumido.

Para la derecha, Lula y la izquierda no estaban en condiciones de gobernar, sobre todo después de que esa misma derecha creía que había logrado imponer las tesis del pensamiento único y del Consenso de Washington, según las cuales el ordenamiento de las cuentas públicas sería la condición a asumir por cualquier gobierno. Esto impediría –continuaban imaginando– poner en práctica las tesis históricas del PT de prioridad de las políticas sociales. Lula fracasaría y, como dijo un exministro de la dictadura militar, permitiría que la derecha gobernara finalmente el país con tranquilidad.

La ultraizquierda, por su parte, apeló a la tradicional tesis del trotskismo de la “traición” de Lula y del PT. Según esa tesis, todos los partidos socialdemócratas cuando llegan al gobierno adhieren a las posiciones de la burguesía y de la derecha, se desmascaran frente al pueblo y son derrocados; de esta manera abrirían espacio para la alternativa revolucionaria... representada por ellos, desde luego.

Lula recibió una herencia pesada: desde un Estado deshecho, una economía en recesión profunda, una sociedad fragmentada y recortada de derechos, hasta una desigualdad social creciente. Pero, además, recibió los rasgos estructurales de la sociedad brasileña sobrevivientes hasta hoy, como ser la desindustrialización

de la economía, el peso determinante del agronegocio en la agricultura, el rol hegemónico del capital especulativo en la economía, el monopolio privado de los medios de comunicación, entre otros factores igualmente importantes.

Lula triunfa en su cuarto intento de convertirse en presidente, pero no cuenta con mayoría propia en el Congreso, ni tampoco, como es obvio, con amplio apoyo dentro del gran empresariado. Su gobierno mantiene medidas duras de ajuste fiscal al inicio, pero transfiere la prioridad a las políticas sociales. Recupera el rol activo del Estado y promueve los procesos de integración regional. Con ello, logra el apoyo de partidos de centro e incluso de centroderecha en el Parlamento, así como de sectores del empresariado, en la medida en que la economía se recupera de la recesión y el Gobierno demuestra capacidad de consolidar los apoyos populares. Se conforma entonces una alianza política en el Parlamento y con algunos sectores empresariales que permite que Lula imponga como hegemónicos los ítems básicos de su gobierno.

Lula, basado en su experiencia de negociaciones sindicales, logra avanzar por las líneas de menor resistencia, sin enfrentar a los elementos de poder estructurales heredados de los gobiernos anteriores. Su enigma fue saber encontrar, en los marcos de las estructuras recibidas, las condiciones para implementar el más grande proceso de democratización social que Brasil ha vivido pero, a la vez, sin remover los elementos estructurales del poder conservador en Brasil. Mientras contó con un escenario internacional favorable, su esquema funcionó muy bien, en un juego en el que todos ganaban, pero en el que la novedad era que los pobres –la gran mayoría de la población– mejoraban por primera vez su nivel de vida, y lo hacían más que cualquier otro sector de la sociedad.

La supervivencia de esos elementos estructurales, sumada al cambio en el escenario internacional y sus efectos en la situación interna del país, generaron la crisis del segundo mandato de Dilma. Sea como fuere, y aunque el PT no pueda volver a

gobernar, esos años fueron decisivos en la historia del país. Porque han roto los prejuicios y los clichés impuestos por los medios y los economistas neoliberales. Esto es, la economía puede crecer y distribuir ingresos a la vez; no es necesario primero tener crecimiento para después, algún día, promover la distribución de los ingresos. Al contrario, la distribución –en manos de y favorable a la gran mayoría pobre– promueve el crecimiento. Se demostró que el aumento de los salarios no es un factor de inflación. Que se puede crecer, hacia fuera, con aumento de exportaciones y, hacia adentro, con expansión del mercado interno de consumo popular. Que una política externa de integración regional e intercambio Sur-Sur ayuda al crecimiento de la economía.

Esa experiencia quedó grabada en la mente de la gente, especialmente entre los más directamente beneficiados por ella. Pero también quedó grabada en la mente de la derecha brasileña que se planteó, desde 2003, el objetivo de sacar al PT del gobierno e impedir que se vuelva a dar una experiencia similar. Esta especial circunstancia tiene en el liderazgo de Lula su personificación, porque hace de él el único gran líder político brasileño, con un extraordinario apoyo popular. Por eso un objetivo central de la derecha es tratar, de alguna manera, de sacarlo de la vida política. El destino de Lula es la variable más importante del futuro de Brasil.

La crisis hegemónica en el posneoliberalismo

La crisis brasileña es la expresión nacional de un fenómeno que se plantea en todos los gobiernos posneoliberales de América Latina. El neoliberalismo se ha agotado en nuestros países, incluso porque fue puesto en práctica en sus modalidades más radicales y, por esto mismo, tuvo como respuesta esos gobiernos. Pero ellos surgieron y se desarrollaron en el

marco general de la hegemonía neoliberal en el mundo y en el mismo continente.

Otro factor típico de los gobiernos posneoliberales es que reciben economías en procesos de desindustrialización, con el peso de las exportaciones de productos primarios ocupando un lugar importante en la pauta exportadora. Por otra parte, en lo político, el modelo de desarrollo económico con distribución de ingresos, no agrada ni al capital financiero ni a la mayoría del gran empresariado. Hay así una contradicción entre el modelo que la mayoría de la sociedad apoya y el poderoso sector económico que dispone de gran parte de los recursos que pudieran hacer marchar la economía o, al contrario, sabotear ese desarrollo.

Este es el fondo de la crisis hegemónica de las sociedades con gobiernos antineoliberales. Se establecen contradicciones entre el modelo económico que congrega a las grandes mayorías populares y los intereses de los sectores del gran empresariado, que dispone de gran parte del capital y del poder de inversión. A la par, está la hegemonía del capital financiero en su modalidad especulativa, que canaliza hacia la especulación una gran cantidad de capitales que podrían ser dirigidos a las inversiones productivas.

Teóricamente la solución de la contradicción se daría por la caída de esos gobiernos y la instalación de gobiernos autoritarios y represivos en contra de la mayoría, o por la nacionalización de grandes empresas para, una vez estas en manos del Estado, volver a hacer las inversiones necesarias para la recuperación del crecimiento económico.

Pero para ello es necesario, antes que nada, haber creado en la conciencia del conjunto de la sociedad, las condiciones para generar una situación favorable que permita tanto desmontar la descalificación del Estado y la exaltación del mercado, como realizar la crítica radical de la mercantilización de la sociedad y la promoción de los derechos de todos y para todos.

En otras palabras, el actual estadio transitorio del posneoliberalismo puede cursar hacia un retroceso al neoliberalismo, o avanzar hacia el anticapitalismo. Sin embargo, este avance solo podría ser efectivo si se apoyara en un grupo de países del continente que le diera consistencia, cobertura y proyección internacional.

¿Qué significa esto concretamente? En lo esencial –considerando que la contradicción fundamental en la era neoliberal se da entre la esfera pública y la esfera mercantil– combatir la mercantilización en el plano de las ideas y en el plano concreto del fortalecimiento de los derechos de la ciudadanía que estructura la esfera mercantil. Universalizar derechos es empezar a construir estructuras en abierta contradicción con el principio central del capitalismo, esto es, la generalización de las relaciones mercantiles. Para ello es indispensable una transformación profunda del Estado, que se dé alrededor de la esfera pública, y que haga que el Estado se corresponda con las transformaciones sociales operadas en nuestras sociedades.

Ya no es posible seguir gobernando de forma empírica, enfrentando problema a problema sin una visión estratégica de los objetivos que queremos para nuestras sociedades. Pero, entretanto, este es el período que transitamos ahora, de la crisis a la apertura de nuevos horizontes para nuestros países.

RENÉ RAMÍREZ Y JUAN GUIJARRO

De la ira a la esperanza: la disputa del futuro en Ecuador

En memoria de Agustín Cueva (1937-1992)

El vivir bien es uno de los objetivos últimos de toda revolución. Los conservadores suelen poner esto en duda, no tanto porque cuestionen las intenciones sino, sobre todo, porque desconfían de las capacidades para lograrlo. En cambio los revolucionarios no nos resignamos con el presente, tenemos la certeza de que podemos cambiarlo. En términos políticos, este impulso nos encamina en la búsqueda de las condiciones y las acciones para hacer posible la vida buena. Cuando los revolucionarios, en sus circunstancias históricas específicas, emprenden cambios en las relaciones de trabajo, en las regulaciones al capital, en la conformación del Estado, etcétera; lo hacen porque consideran que estos son ámbitos relevantes para conseguir el buen vivir. El peso específico de estas transformaciones da la medida de cada revolución, y es una magnitud que depende, en principio, de cómo los sujetos valoran los cambios que suceden en sus vidas. Esto vuelve problemática nuestra relación con el presente, porque es una relación de pertenencia a la vez que

una tarea por cumplir: mientras que el presente nombra lo dado, la vida misma no es lo que somos ya sino lo que estamos siendo, y la vida buena no es lo que estamos siendo sino lo que queremos llegar a ser.

Por supuesto, la hipótesis revolucionaria no se puede abordar en términos abstractos sino que es preciso enmarcarla en las circunstancias y condicionantes geohistóricas y de economía política que connotan cada proceso. En nuestra situación actual, el dominio neoliberal a escala mundial atraviesa una fase recesiva de acumulación, que se manifiesta en el tránsito de la producción industrial a la financiarización de la economía y la concentración del valor en las nuevas formas de explotación de los bienes comunes, sobre todo el conocimiento. Este tránsito involucra una nueva división internacional del trabajo, una relocalización de la manufactura a la mentefactura, que va de la mano con el declive del consenso ideológico de Washington y el surgimiento de contrahegemonías en el Sur global. En este complejo escenario podemos ubicar las perspectivas del proceso de la Revolución Ciudadana en curso en Ecuador considerando tres cuestiones que se entrecruzan en el plano político, pero que podemos distinguir para el análisis: 1) el impulso antineoliberal *contra* el presente; 2) el impulso eudemónico *por* la vida buena; y 3) el horizonte poscapitalista, *hacia* el cual se orienta nuestro rumbo.

El interés por recuperar analíticamente este impulso ambivalente y su horizonte de expectativas es estratégico: reconocer las alianzas y los puntos de anclaje, las resistencias y oposiciones, y los pasos para seguir avanzando. Es decir, que aunque el foco de atención es singular, el objetivo es genérico: la propia dinámica del proceso nos impele a un análisis más amplio que puede servir de contrapunto para los otros procesos en América Latina. Por ello, en nuestra lectura no podemos perder de vista que la hipótesis revolucionaria nos compromete a leer el proceso político en clave de futuro anterior; es decir que el porvenir está abierto, es posible vivir mejor, porque lo

sucedido no está determinando lo que sucederá, sino que, por el contrario, nuestras aspiraciones marcan cada una de nuestras acciones en el presente.

En este sentido, podemos afrontar el impulso *contra* el presente entendiendo primero las operaciones del contrato (anti) social neoliberal (1.1), que introduce y se sustenta en disyunciones ciudadanas: junto a la ciudadanía plena del libre empresario conviven la desigualdad, la exclusión y la marginación (1.2). Estas disyunciones se reproducen a través de mecanismos de consenso ideológico como la universidad neoliberal, que opera como fábrica de desaliento y resignación al desarticular la formación y la crítica bajo la consigna del pensamiento único, a la vez que separa las trayectorias profesionales de las necesidades sociales (1.3).

A continuación es preciso dar cuenta del impulso *por* la vida buena, que comienza cuando las disyunciones se transforman en antagonismos ciudadanos como un poder de veto político (2.1), que al cabo se incardina en poder constituyente que postula un proyecto alternativo en un nuevo pacto de convivencia (2.2). Este pacto revierte el presente y provoca al futuro mediante acciones estructurantes que configuran una nueva matriz de poder (2.3), cuyos efectos pueden constatarse como reafirmaciones ciudadanas: recuperación de bienes públicos, repotenciación de capacidades y expectativas al alza (2.4). Estas reafirmaciones van más allá de la coyuntura en la medida en que se asientan en mediaciones emancipadoras como las que buscan una nueva universidad que forme conciencias críticas y articule las profesiones con las necesidades sociales, convirtiéndose así en pieza clave para la transformación de la sociedad (2.5).

La revisión hasta este punto nos permite seguidamente proyectar el horizonte poscapitalista, *hacia* el cual se orienta nuestro rumbo. Esta orientación hace posible rebatir algunas críticas que pronostican (desean) la caída de los proyectos contrahegemónicos de izquierda por la determinación de un supuesto ciclo

“natural” de la economía mundial (volatilidad de las materias primas en el mercado internacional y maldición de los recursos) o de la política nacional (derroche populista y desequilibrios macroeconómicos). Aquí podemos diagnosticar la fatalidad como un problema más complejo, del cual es parte el síntoma de la disyunción entre economía y política, y para romper con esta falsa determinación recuperar la consigna reversible: la economía es política concentrada/la política es economía concentrada. En un sentido cronológico el futuro es lo que viene después, pero si seguimos la dirección de nuestra hipótesis revolucionaria el futuro es la semilla del presente. Por eso es posible indagar en el presente primero las alternativas *de* acumulación (3.1) y luego las alternativas *a* la acumulación (3.2).

1. El impulso contra el presente

Las circunstancias específicas del presente están marcadas por nuestra oposición al proyecto de dominación neoliberal: un régimen que condiciona la circulación de poderes y saberes que legitiman una serie de prácticas que apuntan a resolver la crisis de acumulación de capital fijo, de finales del siglo xx e inicios del XXI, normalizando nuevas formas de explotación de los seres humanos, que ya no son solo agentes de la acumulación sino que devienen sus objetos. El día de hoy ya no solo consumimos manufacturas adquiridas en el mercado, sino que estamos permanentemente conectados en la red virtual que explota y consume nuestra subjetividad cotidiana: relaciones intersubjetivas, modos de vida, afectividades y experiencias. Se impone así una disyunción alienante del sujeto político-económico: si en el siglo XIX la crítica denunció la separación entre el burgués y el ciudadano, en el siglo XXI la vida misma deviene sujeto y objeto de la explotación.

El proyecto neoliberal en este sentido no tiene ninguna esencia propia, pero es operativo y funcional, provoca una

serie de efectos políticos que suponen el desplazamiento de la razón política desde el Estado social hacia la razón económica del sujeto individual. El individuo aparece así no solo como el agente de circulación y valoración de mercancías, sino sobre todo como la instancia que determina la producción y transmisión de ciertas verdades que atañen a la vida: “algo que debe suceder”.

En esta orientación, el principio ideológico en la base del proyecto neoliberal consiste en asumir que la libre concurrencia de las elecciones individuales conduce al óptimo social: de Adam Smith a la escuela neoclásica, dominante en las aulas de ciencias sociales, los vicios privados se subliman como virtudes sociales en el intercambio mercantil, así que no resulta necesaria la coordinación social. Como no hay sujeto colectivo, tampoco hay historia compartida; y por lo tanto, tampoco hay metas sociales. El determinismo teleológico del historicismo es suplantado así por el determinismo de la contingencia individual. El Estado resulta aquí un mero accidente. Siguiendo estos postulados, la corriente hegemónica de la ciencia económica, que informa las políticas públicas en gran parte del mundo, sostiene que las elecciones individuales para aumentar el ingreso/consumo son las únicas metas posibles y deseables.

Partiendo de esta perspectiva se asume una secuencia putativa donde lo bueno se define como el bien que es útil, y la utilidad se calcula a partir de la elección individual; esta se entiende como reflejo de las preferencias propias, que se “revelan” a través del “poder de compra” de la persona. De esta manera, se normaliza la cadena de sentido: bien = auto-interés = preferencia = elección = satisfacción = bienestar. En esta operación normalizadora se asume el bienestar social como la suma de elecciones individuales reveladas mediante la compra; y se mide a través del ingreso/consumo, y a nivel social a través del ingreso agregado o consumo agregado, o la producción agregada. Así se reivindica como sujeto agente al

individuo trabajador perceptor del ingreso, y en el extremo opuesto se encontraría –tácito, tanto en el nivel discursivo a la vez que práctico, como veremos más adelante– el sujeto pasivo “improductivo”, cuyo malestar se mide a través de la pobreza de ingreso o consumo (Ramírez, 2012).

1.1. El contrato (anti)social

Este sentido común de la época impregna todos los ámbitos de la vida social. Pero un punto de anclaje primordial se ubica en las definiciones normativas de la ingeniería constitucional. En la tradición (neo)liberal del (neo)contractualismo, la Constitución se asume como un acuerdo que define cómo se han de distribuir los poderes, que se entienden como sustancias naturales discretas que se pueden poseer, transferir y agregar a la manera de la libre competencia mercantil. Más allá de esto, toda Constitución es una instantánea del campo de fuerzas –una correlación descriptiva tanto como normativa– en un momento histórico concreto, y tiene efectos y consecuencias en la vida social.¹ En el caso de Ecuador la instantánea neoliberal

-
1. Este abordaje tiene una intención crítica porque se opone a una corriente de revisionismo histórico según la cual el neoliberalismo no sucedió en Ecuador. Como plantea un texto de Simón Pachano, se trataría de “el fracaso de lo que nunca existió” (2013: 13-38). Lo que suelen hacer autores como Dahik (1991), Lucio Paredes (2000), Armijos & Flores (1991) –todos ellos involucrados en los gobiernos del caso– es que parten deductivamente del catálogo del denominado Consenso de Washington y luego, a la manera de la revisión del decálogo durante la confesión católica, confirman si se cumplió cada condición, etc. Como estas condiciones no se efectuaron a cabalidad, entonces concluyen que, por así decirlo, se pecó por omisión. Esta perspectiva, además de su intención regresiva, tiene falencias evidentes, que podemos resumir en que parte de la definición para describir un fenómeno social por negación. Por el contrario, la propuesta debe ser asumir la postura de un nominalismo materialista: las categorías y conceptos obedecen a las propias expresiones y actos de los actores sociales en su momento histórico; así que lejos de ser especies naturales o esencias transhistóricas operan más

es la Constitución de 1998, que fue elaborada por una coalición dominada por la derecha-centroderecha (socialcristianos + democristianos = 40 de 70 asambleístas) y con una minoría débil de centroizquierda (socialdemócratas + indigenistas).

La impronta de la constelación político-jurídica de 1998 es un modelo ambiguo de “economía social de mercado”, que en realidad fue un membrete abanderado por los democristianos pero poco explícito de la situación concreta. Hacia el fin del período constituyente, la coalición de derechas se rompió durante una disputa sobre la privatización de la seguridad social. Los líderes democristianos dimitieron² y el bloque socialcristiano también se ausentó. Se formó una nueva mayoría de centro, autodenominada “convergencia”, que se autoprorrogó ocho días más, durante los cuales se añadió a lo aprobado anteriormente un amplio catálogo de derechos.

En esta secuencia de poder dual, si por un lado la minoría de convergencia promovió los derechos de tercera y cuarta generación (se reconoce al país como “pluricultural y multiétnico”, lo que da cabida a los derechos sobre tierras ancestrales, formas tradicionales de organización y patrimonio histórico, educación y administración de justicia indígena en el marco de la ley), por otro lado la centroderecha redujo el margen de maniobra estatal en la economía y subordinó el orden social al mercado; de esta manera se omitió la reserva de “sectores estratégicos” abriendo la puerta para su expropiación (la exploración y explotación de recursos naturales “podrán ser llevadas a cabo por empresas públicas, mixtas o privadas”; se permite “la concesión del uso de frecuencias electromagnéticas”; el aprovechamiento

bien como superficies que conjugan una serie de factores, operaciones, valoraciones concretas y tangibles en la vida social.

2. Entre ellos Osvaldo Hurtado, que era presidente de la Constituyente y expresidente de la República (1982-1984). Tendremos oportunidad de volver a encontrarlo unas páginas más adelante.

y uso del agua corresponde al Estado “o a quienes obtengan estos derechos, de acuerdo con la ley”), y se indujo la privatización de los bienes públicos (la seguridad social “se prestará con la participación de los sectores público y privado”; “las universidades y escuelas politécnicas crearán fuentes complementarias de ingresos a través de arancelamiento de la matrícula”, etcétera).

En la nueva distribución de poderes de la “economía social de mercado”, mientras al Estado le corresponde “promover el desarrollo de actividades y mercados competitivos” y “mantener una política fiscal disciplinada”, la economía tiene como “objetivo permanente” la “conservación de los equilibrios macroeconómicos y un crecimiento suficiente y sostenido”. Por otra parte, al Banco Central se le asigna “autonomía técnica y administrativa”, con las funciones de “establecer, controlar y aplicar las políticas monetaria, financiera, crediticia y cambiaria”.

La razón de esta distribución se encuentra más clara en el argumento que durante el debate constituyente publicaron dos conocidos ideólogos neoliberales en un informe “técnico”: “un hecho de la ‘política real’ en el caso ecuatoriano (y en general en América Latina), justifica la necesidad de la autonomía de la política monetaria y la coordinación entre las políticas macroeconómicas, nos referimos a que los gobiernos han demostrado ser proclives a caer en tentaciones populistas”; para aclarar los términos, los autores señalan que “se denominan políticas económicas populistas aquellas que, en contextos de gran desigualdad social, son implementadas por los gobiernos con el propósito de compensar dichas desigualdades [y que] generan desequilibrios insostenibles a la economía” (Lucero & Pozo, 1998: 11, 29).

De esta inclinación a favor de la disciplina fiscal, autonomía financiera y crecimiento mercantil para conjurar la “tentación populista”, se sigue que las pautas de bienestar se definen, a nivel micro, por la utilidad individual a través del aumento

del trabajo/consumo (“el incremento y la diversificación de la producción orientados a la oferta de bienes y servicios de calidad que satisfagan las necesidades”); y a nivel macro, por el “crecimiento sustentable de la economía”. Las aspiraciones de justicia social se orientan de esta manera hacia la asignación en el mercado y, marginalmente, a la asistencia estatal focalizada para asegurar mínimos de supervivencia.

En esta distribución, que resta poder al Estado y lo traspasa al mercado, se establece una nueva concepción de los sujetos políticos; nominalmente se indica que “todos los ecuatorianos son ciudadanos”, pero el ciudadano activo, capaz de ejercer derechos en este modelo social, es el trabajador adulto, capaz de producir/consumir para estimular el crecimiento. Como medida de articulación social al mercado, se compromete al Estado a “garantizar el pleno empleo”, y además la exclusión desaparece porque el Estado asegura “el acceso de los pobres a los recursos productivos”; se obliga a “erradicar la pobreza y promover el progreso económico, social y cultural de sus habitantes”. A la par surge una nueva zona liminar entre empleo/desempleo: los “grupos vulnerables” que son de “atención prioritaria” (niños, adolescentes, mujeres embarazadas, enfermos crónicos y ancianos; es decir, todos los que no caben en la definición de la población económicamente activa).

En efecto, en el documento de planificación expedido por el presidente Jamil Mahuad más tarde ese mismo año se confirma: “La implementación de una estrategia de desarrollo sustentable exige una redefinición y reasignación de responsabilidades del Sector Privado, de manera que asuma mayores responsabilidades públicas y se convierta en un factor de estabilización más eficaz que en el pasado. El protagonista principal, que puede –y debe– liderar el proceso de sostenibilidad del desarrollo, es el empresariado” (Odeplan, 1998: 48; énfasis en el original).

Estas maniobras normativas obedecen a la emergencia de un nuevo poder sobre la vida, que entra así en un renovado campo de cálculo, explícito e implícito, como factor económico: en un primer momento el “ciudadano” se coloca en el lugar activo de quien elige, es decir el agente de trabajo/consumo; pero en un momento subsecuente se desplaza al lugar de quien es objeto de la atención/inatención estatal, vulnerable/pobre; y en ambos casos se subordina a las metas de la acumulación mercantil. En términos de configuración estatal de la política pública, esta disyunción dio paso, en el plano subjetivo, a una topografía marcada por dos espacios de ciudadanía y una zona fronteriza: por un lado la ciudadanía activa en y a través del mercado, que no entra en la mirada estatal; por otro lado la ciudadanía pasiva, objeto de la acción estatal para “erradicar la pobreza”; finalmente el territorio limítrofe de la “atención prioritaria”.

La ética de la mirada universalista de la política social fue así desplazada hacia una óptica local, asumida por la proliferación de organismos del tercer sector (ONG, fundaciones, organizaciones caritativas, etcétera (véase Váscones, Córdoba & Muñoz, 2005), y la difusión de una nueva ética pública de doble rasero: la reivindicación del éxito emprendedor convive y se justifica con y a partir de la asunción de la caridad residual (como sostiene el ignominioso principio *maximin* de John Rawls: la distribución inequitativa de la riqueza se justifica si mejora (o no empeora) la situación del más pobre).

En el plano objetivo, la disyunción de la ciudadanía también asume la impronta y marca el carácter ambivalente del Estado neoliberal; la debilidad de contención social estatal se evidenció al final del siglo xx, cuando se volvió más tangible la precariedad para enfrentar la catástrofe social que provocó el fenómeno de El Niño (1998). Dos años después, el oportunismo del accionar desregulador del Estado se puso de manifiesto en la complicidad entre la clase política y el capital financiero durante la corrida bancaria y la dolarización de la economía, que benefició a los acaparadores de divisas. De hecho, la propia Constitución de 1998

indujo normativamente la socialización del atraco de los banqueros en su infame Transitoria 42: “Hasta que el Estado cuente con los instrumentos legales adecuados para enfrentar crisis financieras... el Banco Central del Ecuador podrá otorgar créditos de estabilidad y de solvencia a las instituciones financieras”.

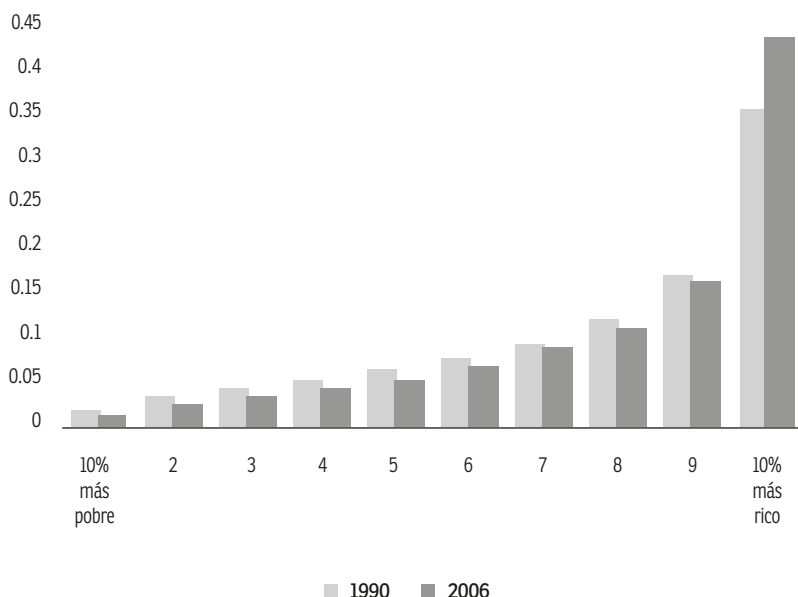
En realidad el (des)gobierno de la economía nacional se decidía desde hace mucho fuera del país; entre 1980 y 2005 se firmaron trece cartas de intención con el FMI, con sus respectivos compromisos en beneficio del capital financiero. El propio plan de desarrollo de 1998 ya señala el clima de la época: “estamos ante la disyuntiva de mantener el mito de las multinacionales como adverso para nuestro desarrollo, y la intervención estatal como la panacea, o de romperlo y subimos al tren del desarrollo moderno” (Odeplan, 1998: 27).

1.2. Disyunciones ciudadanas

El problema fue que el “tren del desarrollo moderno” descarriló. La ambivalencia estatal se convirtió en condicionante estructural para la concentración de la riqueza, el aumento de la pobreza y las desigualdades sociales. En los últimos cinco años del siglo xx la pobreza aumentó 12,84% hasta alcanzar al 52,18% de la población del país. A partir del año 2000 la estabilidad nominal provista por la dolarización permitió que seis años más tarde la pobreza y la pobreza extrema retornara a niveles similares a los registrados una década atrás. No obstante, dado el crecimiento poblacional y considerando que la tasa de fecundidad de los más pobres es más elevada que la del resto de la población, en la década 1996-2006 el número de pobres aumentó en términos absolutos. Es decir que los efectos de los desastres naturales, de la corrida bancaria y el cambio de moneda no impactaron de la misma manera a la población. El proyecto neoliberal, que en la Constitución de 1998 prometía el “acceso de los pobres a los medios de producción” y la “atención prioritaria para los grupos vulnerables”, en los hechos profundizó la desigualdad entre ciudadanos activos y ciudadanos pasivos (véase Ramírez, 2010).

Entre 1990 y 2006 el modelo de “economía social de mercado” tuvo impactos diferentes dependiendo de la categoría ciudadana: los hogares pertenecientes a los estratos de ingresos más altos no vieron retroceder su ingreso per cápita, mientras que, sistemáticamente, los ocho primeros deciles de la población redujeron sus ingresos. En estos 16 años, el 90% de la población redujo su participación en el ingreso total, mientras que el 10% más rico de los ecuatorianos incrementó la suya del 35% al 43%. Se puede observar que en el período mencionado se confirmó la disyunción de la ciudadanía postulada constitucionalmente en un proceso sistemático de polarización social: mientras en 1990 la diferencia de ingreso entre el 10% más rico y el 10% más pobre era de 19, en el 2006 esta diferencia fue de 36 (Gráfico 1).

Gráfico 1. Participación en el ingreso total, 1990*-2006



Fuente: Enemdu. (*): Urbano

Contra la oferta constitucional de la economía social de mercado, la expropiación de los sectores estratégicos y la apertura de la economía al sector privado no erradicaron la pobreza ni integraron a los ciudadanos pasivos al pleno empleo con el incremento de la demanda de nuestro “factor productivo” más abundante, la “mano de obra poco calificada”³. Por el contrario, el proyecto neoliberal incrementó la demanda de mano de obra de “alta calificación”. Esta dinámica provocó, a su vez, una nueva división dentro de la clase trabajadora, con el aumento de la brecha salarial entre “calificados” y “no calificados”, y con ello contribuyó adicionalmente a la concentración del ingreso y el aumento de la desigualdad antes descritos. Sucede que bajo el término “trabajo” se comprenden dos tipos de actividad: la primera involucra el esfuerzo y el agotamiento del cuerpo para cambiar la naturaleza y producir mercancías que no existían antes del proceso; la segunda consiste en ordenar a otros que lo hagan. El primer trabajo no es placentero, está mal pagado y se valora como “no calificado”; el segundo es placentero, se valora como “calificado” y está bien pagado. Por eso en la sociedad neoliberal todos sueñan con convertirse en *managers*. (Volveremos más adelante sobre esta cuestión).

1.3. Maquinarias de reproducción

La disyunción ciudadana inscrita constitucionalmente se reafirmó así en la economía política de la concentración y

-
3. Como ya constataron Vos, Taylor & Paes de Barro (2002). La situación del trabajo se precarizó más aún cuando se introdujo la “tercerización” el mismo año 1998 mediante una reforma al Código Laboral, poco después de aprobada la Constitución. La tercerización se refiere a las actividades laborales que puede realizar una persona jurídica para “complementar” el proceso productivo de otra empresa. Aquí caben servicios de vigilancia, seguridad, alimentación, mensajería, mantenimiento, limpieza y otras “actividades de apoyo”. La tercerización fue ampliada mediante Decreto 2.166 de 2004 y por la reforma al Código de Trabajo de junio de 2006 (véase Porras, 2009). En la Constitución de 2008 y varias enmiendas introducidas en la actualidad se ha eliminado esta figura; ver más adelante.

desigualdad del ingreso. El proyecto neoliberal restauró la riqueza de los sectores más ricos de la población, y empobreció a los más pobres. En estas circunstancias, un dirigente del Partido Socialista se preguntaba perplejo: “¿Por qué las fuerzas políticas que, de una u otra manera, mantienen las características injustas de la actual sociedad, tienen credibilidad precisamente en los sectores a los que han empobrecido con sus políticas económicas y sociales?” (Rodas Chaves, 2000: 193-194).

En efecto, a pesar de sus resultados negativos, el proyecto neoliberal fue y sigue siendo, en ciertos momentos y lugares, productivo, porque opera no solo en el nivel material, sino sobre todo en el nivel de las mentalidades ejerciendo una violencia tácita, no explícita ni concentrada únicamente en aparatos de dominación, sino sobre todo difusa en la reproducción de la vida cotidiana. Son consecuencias de esta violencia no solo que continuamente estemos supeditados a procesos de evaluación y cálculo, juicio y corrección para medir nuestra productividad y acrecentarla, sino, sobre todo, el hecho de que lo consentimos. Estas nuevas formas de poder, que operan en instancias micropolíticas, definen cierto sentido común, cierta “normalidad” para enmendar conductas y transformar a los seres humanos en agentes dóciles a la acumulación capitalista. Las normas de rendimiento –cada vez más y mejor– se vuelven instrumentos de (auto)dominación, estándares que niegan y afirman para imponer/aceptar los límites del comportamiento adecuado.

Pero esta normalidad no se deriva de ninguna ley natural, sino que proviene de procesos que involucran técnicas de intervención y conversión. Los mecanismos por los cuales transitamos de la zona de atención prioritaria estatal a la ciudadanía pasiva improductiva y a la ciudadanía activa productiva, de la infancia ociosa a la vida adulta útil o inútil, son las instituciones educativas, y sus evaluaciones y titulaciones operan como pasaportes para este tránsito por la topografía ciudadana. Las lógicas del éxito y el fracaso, de la competencia incrementalista

y la exclusión de los vulnerados y vulnerables, se inoculan así desde las prácticas educativas y sus valoraciones sociales. Un espacio fronterizo en este tránsito es la universidad, porque aquí convergen las aspiraciones profesionalizantes de la ciudadanía activa con las legitimaciones del conocimiento sancionado académicamente, se incorporan las presunciones de lo que ha de ser normal de acuerdo al horizonte de las expectativas neoliberales y se reivindica la productividad de su régimen de poder-saber.

Como se mencionó antes, la universidad pública se privatizó constitucionalmente en 1998, pero las tendencias privatizadoras del sector universitario venían desde antes: entre 1995 y 2006 la tasa de matrícula en el quintil más pobre de la población aumentó apenas 5,7%, mientras que para el quintil más rico aumentó 154,7%. Además, no solo que se implantó la desigualdad en el acceso sino también en el tránsito hasta finalizar la carrera (Ramírez & Minteguiaga, 2010).

Es decir, la universidad se convirtió en un mecanismo funcional para la reproducción de élites socioeconómicas. De ahí que la malla de formación universitaria se supeditó a las auto-representaciones y expectativas profesionales de estas élites, y la oferta académica comenzó a decantarse por carreras de poca inversión académica (financiera e intelectual) y bajos niveles de formación: en 2010 el 34% de los títulos eran en administración de empresas y solo 1% en ciencias básicas. Por ejemplo, en la universidad privada más cara del país, la Universidad San Francisco de Quito, el programa de “Sociología del desarrollo”, que se inició en 1990, se cambió ocho años más tarde por el de “Gerencia social y sociología aplicada”, y el perfil profesional se orientó a formar “una persona que trabaja en la consultoría y/o el desarrollo de programas y proyectos socioeconómicos a nivel nacional, binacional o multinacional” (Campuzano Arteta, 2005).

Esta gerencialización de la universidad, tanto a nivel institucional como de la producción y circulación de saberes, se

ha de entender en el marco de la introyección de la ideología neoliberal; la orientación empresarial de las trayectorias profesionales impone la generación de verdades bajo la mirada gerencial, que se prepara para enfocar el mundo bajo la trama de la organización administrativa. Mediante transferencias, importaciones y metáforas de la rutina burocrática hacia todos los aspectos de la vida social, el gerente evalúa los intereses y calcula el costo-beneficio y las posibilidades de éxito de cada momento. Pero sobre todo reivindica la autonomía del manager en la escala de la jerarquía social, lo que permitiría resolver las causas de crisis tal como las enuncia un convencido ideólogo neoliberal: “Profesionales brillantísimos, con altísimos ingresos económicos, eran regulados y controlados por otros con sueldos mucho más bajos sentados en un escritorio del estado (sic)” (Dahik, 2010: 55).

Encontramos aquí ya la insistencia normativa en la disyunción de la ciudadanía. En términos de pertinencia social esta tendencia gerencialista también marcó una disyunción muy tangible en la medida en que resultó (resulta) poco adecuada e ineficiente para un país con un régimen de acumulación primario-exportador y una estructura empresarial hiperconcentrada, que se agudizó durante el período neoliberal; en el 2010, el 10% de empresas absorbieron 96% del total de ventas en el país, y dentro de este grupo, el 1% acaparó 86%. Las empresas más grandes (de doscientos y más trabajadores) representaban 0,2% del total del país, y abarcaban 44,1% de las ventas totales; sin embargo, no generaron más que 24,4% del empleo. En cambio las empresas pequeñas (hasta diez trabajadores) representaban 95,4% del total en el país, con tan solo 16,4% de las ventas totales pero 44,4% del empleo (datos del INEC). Es decir que el manager es un dios cuando sueña, pero solo un mendigo cuando despierta.

Pero en ciertas ocasiones persiste en la vida cotidiana la ideología del éxito individual según la cual todos podemos aspirar, aunque no lo cumplamos, al sueño del emprendedor

millonario del proyecto neoliberal –mientras escribimos estas líneas Donald Trump ha sido electo candidato presidencial republicano en EE.UU.–. Pero toda promesa demarca su propio territorio de posibilidades, y con ello las aspiraciones no se pueden aplazar indefinidamente. Los resultados (anti)sociales del proyecto neoliberal, la evidencia tangible de la acaparación y la expropiación comenzaron al cabo a generar contramovimientos en la sociedad, y con ello la emergencia de proyectos de ciudadanía alternativa.

2. El impulso por la vida buena

El proyecto neoliberal fue desgastando sus credenciales, y las disyunciones comenzaron a carcomer las lealtades. La situación era ya insostenible en 2006 cuando solo 13,8% de la ciudadanía creía que la situación era “buena” y apenas 22% opinaba que iba a “mejorar en el largo plazo”. El rechazo se concentró en la desafección hacia los cuatro partidos políticos que se anquilosaron en la gestión de la legislatura desde el retorno a la democracia, entre 1981 y 2005 (derecha: PSC; centro derecha: DP; centroizquierda: ID; populista: PRE. Desde mediados del siglo pasado el casillero representativo del cambio era un casillero vacío). Estos partidos perdieron paulatinamente su centralidad en la política, reapareciendo prácticamente solo en los momentos de campaña electoral (Pachano, 2006).

En 1996 el 48% de los ecuatorianos sostenía que la democracia podía funcionar sin los partidos; doce años después, la proporción había aumentado 61% (datos de Latinobarómetro). Entre 1997 y 2008, en Ecuador, el promedio de confianza en los partidos políticos no alcanzaba el 15%, y en las ocho elecciones presidenciales del período ningún partido político fue reelecto; los ocho presidentes elegidos, cada uno de los cuales se postulaba como una alternativa radicalmente opuesta a su predecesor, provenían de ocho partidos distintos. Por aquellos

días, en las paredes de la ciudad se podía leer: “Nuestros sueños no caben en sus urnas”. Aunque las elecciones se mantuvieron como un procedimiento rutinario durante todo el período, el apoyo a la gestión de la clase política cayó hasta umbrales críticos, se incrementaron progresivamente los índices de abstención electoral y de votación nula, y se empezó a volatilizar el respaldo electoral.⁴

Por otra parte, el desafecto ciudadano tenía su correspondencia por la clase política: “si las propuestas de una reforma política llegan a enfrentar el dilema entre participación y gobernabilidad, es necesario optar por la segunda” (así se expresa Osvaldo Hurtado en 2005). La asumida impotencia de la clase gobernante dio lugar a que la potencia de lo político comience a desbordar el sistema, en la medida en que las desafecciones se convirtieron en antagonismos hasta el punto de quiebre.

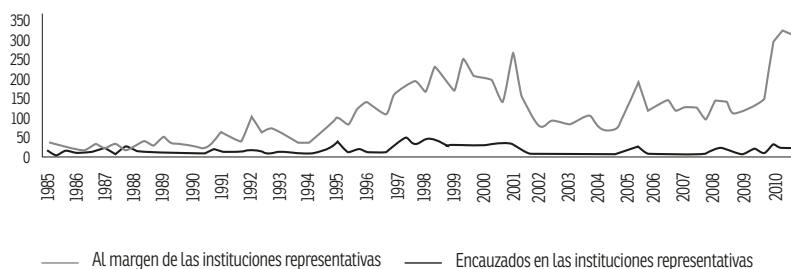
2.1. Antagonismos ciudadanos

El adelgazamiento del vínculo de representación iba de la mano de la descomposición estatal, a la vez objetivo estratégico y flanco débil del proyecto neoliberal. Esta debilidad permitió que la desafección se tradujera en una creciente movilización social al margen (y en contra) de las instituciones representativas, que a medida que cobró fuerza se activó como un poder de veto del sistema político. Entre 1996 y 2005 se sucedieron siete gobiernos, los únicos tres presidentes elegidos en las urnas fueron derrocados en medio de amplias manifestaciones sociales de rechazo, y luego tuvieron que huir

4. En las elecciones presidenciales los índices de volatilidad bordearon el 50% en los períodos de gobierno de 1988-1992 y 1992-1996, y más del 70% en el período 1998-2002. En las elecciones legislativas el índice medio alcanzó niveles que llegaban casi al 50% en los períodos de gobierno de 1979-1984 y 1998-2002 (para el detalle de los cálculos véase Pachano, 2008: 12).

del país para eludir juicios por corrupción (Abdalá Bucaram, el 5 de febrero de 1997; Jamil Mahuad, el 21 de enero de 2000; y Lucio Gutiérrez, el 20 de abril de 2005). Un nuevo grafiti se repetía con insistencia en las paredes urbanas: “La lucha nos da lo que las urnas nos quitan”.

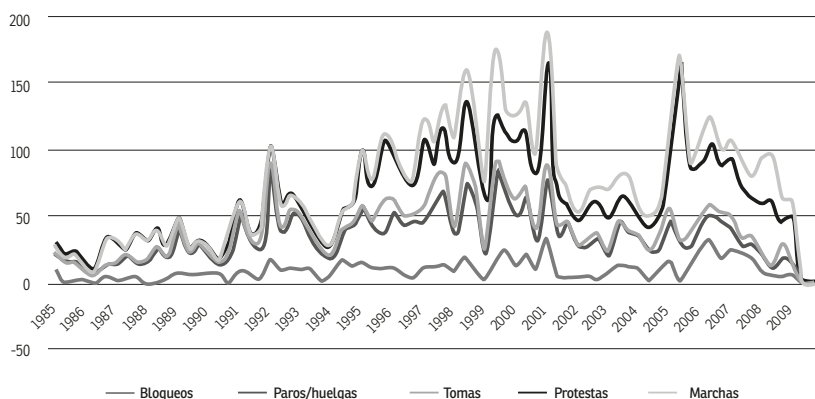
Gráfico 2. Desbordamiento del sistema político (número de movilizaciones)



Fuente: CAAP.

Los rasgos específicos de cada derrocamiento marcan la magnitud y la composición del poder de veto ciudadano: mientras las protestas de febrero de 1997 contra Bucaram fueron encabezadas por los partidos opositores y los movimientos sociales, en el derrocamiento de Mahuad, en enero de 2000, se aliaron los indígenas con mandos medios del ejército para dar un golpe de Estado que instaló una efímera Junta de Salvación Nacional; en cambio, los levantamientos de abril de 2005 contra Gutiérrez fueron protagonizados por ciudadanos que actuaron al margen de toda estructura organizativa.

Gráfico 3. Intensidad de los antagonismos ciudadanos



Fuente: CAAP.

Para entonces, nada quedaba de la confianza en los partidos como canales para las demandas ciudadanas, y los “forajidos”, como fueron calificados por la clase política impugnada, proclamaban su desafecto bajo el lema: “¡Que se vayan todos!” (Errejón & Guijarro, 2015). El himno popular de aquellos días era:

¡Ni un presidente,
ni uno solo más!
¡Vamos a convocar
la Asamblea popular!

La irrupción ciudadana era, más que un rayo en cielo sereno, una tempestad de irrupciones que invadían el sistema por varios frentes. Pero después del estallido la dinámica contenciosa comenzaba a aquietarse sin haber encontrado alternativas políticas concretas. Un indicio de la rigidez del sistema se puede encontrar en la opinión difundida entre la propia izquierda política de que “el cambio estructural debe hacerlo

el pueblo sin hegemonismos de ninguna clase” (Rodas Chaves, 2000: 199). Pareciera que así los (supuestos) partidarios del cambio asumen como norma la ideología de “convergencia” de 1998, efecto de una maniobra táctica más que de la capacidad de dirigir el cambio; capacidad que se da por descontada ya con la devaluación de la posibilidad hegemónica.

Esta imposibilidad de asumir la política como arte de lo posible condicionó el margen de maniobra de los partidos tradicionales y los políticos profesionales, e impidió que las aspiraciones se canalizaran por su intermedio. Entonces se volvió evidente que para buscar cambios reales era necesario pasar de la impugnación del poder de veto a la afirmación de un nuevo poder constituyente. Para ello se requería conformar una fuerza política efectiva al margen del sistema. Así surgió la oportunidad para que jóvenes intelectuales de clase media (25-40 años) con ambiciones políticas pero sin estatus social ni influencia como para hacer carrera política por los medios convencionales, fundaran el Movimiento Alianza Patria Activa y Soberana (Alianza PAÍS - AP).

AP comenzó como un conglomerado de más de treinta organizaciones sociales, un “movimiento de movimientos” agrupados en una estructura flexible que permitía convivir posturas diversas pero aliadas en un frente común antineoliberal, asentado en la convicción compartida de que “la organización política no debe limitarse a actuar, lo que tiene que hacer es construir: tiene que construir ideas, tiene que construir propuestas, tiene que construir políticas” (Patiño entrevistado por Harnecker, 2011: 238). Las organizaciones redactaron colectivamente un programa político que proponía una nueva Constituyente para hacer una Revolución Ciudadana organizada en cinco “ejes programáticos para la transformación radical del Ecuador”: revolución constitucional y democrática; revolución ética; combate frontal a la corrupción; revolución económica y productiva; revolución educativa y de salud; revolución por la dignidad, la soberanía y la integración latinoamericana (AP, 2006).

2.2. Nuevo pacto constituyente

El nuevo movimiento buscó hacer alianzas electorales con el movimiento indígena (PK), con la socialdemocracia (ID) y con el populismo (PRE), pero ningún partido mostró apertura. En las elecciones de octubre 2006 se presentó a Rafael Correa Delgado –el rostro más visible de AP luego de un fugaz paso de dos meses como ministro de Economía que impugnó las políticas impuestas por el FMI– como candidato presidencial único, con la promesa de una Constituyente y sin candidatos a congresistas para conectar con la desafección ciudadana. En noviembre, Correa resultó elegido en segunda vuelta por 56,7% de los votos, y de inmediato, luego de asumir el cargo en enero de 2007, convocó a una consulta popular para dar paso a una Asamblea Constituyente⁵. La consulta fue respaldada por 82% de los ecuatorianos en abril de 2007. En septiembre, 80 de los 130 asambleístas elegidos fueron de AP, una mayoría amplia que permitió recoger en la nueva Constitución de 2008 los puntos programáticos de la Revolución Ciudadana. Diez asambleístas de otras tendencias de izquierda (indigenistas, sindicalistas) se aliaron con el bloque constituyente de AP.

La nueva coalición de izquierdas impulsó un modelo social que afirma una nueva matriz de poder ciudadano; mientras que el preámbulo de 1998 comienza en tercera persona con un sujeto constituido: “El pueblo ecuatoriano (...) establece en esta Constitución las normas fundamentales que amparan los derechos y libertades”, el preámbulo de 2008 involucra al sujeto constituyente: “Nosotras y nosotros, el pueblo soberano del Ecuador (...) decidimos construir una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir”.

5. Todos los datos electorales se pueden consultar en la página web del Consejo Nacional Electoral: <http://cne.gob.ec/es/resultados/estadisticas>

Es decir, la división que es inherente a la configuración normativa del poder (pueblo soberano-gobierno soberano) es en el primer caso externa, y en el segundo interna (ciudadanía que se autoafirma); la supuesta sustancia discreta del poder es evacuada por el sujeto constituyente (en otros términos, en la nueva concepción del poder coinciden el sujeto del enunciado y el sujeto enunciante). Esta coincidencia es más que declarativa y tiene un asidero factual muy significativo. La Constituyente de 1997-1998 fue convocada por consulta popular para reformar la anterior Constitución, y luego se autoarrogó funciones para redactar una nueva. El debate fue ambivalente: luego de la dimisión de parte de los asambleístas y la autoprorroga de otros, el texto resultante se aplicó en el marco de un gobierno interino no electo, resultado de un derrocamiento presidencial motivado por la causal de “incapacidad mental” mocionada en el Congreso contra un Presidente que era apodado popularmente el “Loco” Bucaram. En cambio la Constituyente de 2007-2008 comenzó en contigüidad con los días de la ira del antagonismo ciudadano, como un experimento que buscaba respuestas prácticas a la descomposición estatal y la destitución social.

La Asamblea de 2008 fue convocada con plenos poderes, y por su origen y propósitos fue democrática e impulsó nuevos mecanismos de participación directa, que incluían consultas virtuales y foros itinerantes que contaron con la participación de más de 11.500 ciudadanos y el procesamiento de más de 3.100 propuestas constitucionales provenientes de la ciudadanía (Birk, 2009). No fue por azar que el debate constitucional adquirió tales dimensiones, en la participación y en su duración, sino también por la profundidad de los cambios que se buscaron.

El nuevo poder ciudadano así manifiesto ya no asume constitucionalmente los límites negativos que en el proyecto neoliberal el mercado imponía a la acción estatal, sino que los postula como límites afirmativos de un nuevo

posicionamiento estatal, una nueva zona de actividad a partir de un “sistema económico social y solidario”, que “reconoce al ser humano como sujeto y fin” y “propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado, mercado y medio ambiente”.⁶

El objetivo constitucional principal consiste entonces en “garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir”. Con ello se legitima la recuperación de las capacidades instrumentales del Estado para “administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos” que corresponden a los expropiados por el neoliberalismo: la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley; a los que se añaden ahora la biodiversidad y el patrimonio genético. En correspondencia con esta nueva agenda estatal se redefinen los márgenes de maniobra política, pues se justifica que “el Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea necesario, en los intercambios y transacciones económicas”.

En concordancia con lo anterior, la política económica tiene como primer fin “asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional” y la planificación del sector público asume un nuevo “régimen de desarrollo” que tiene

6. Por supuesto, en la teoría revolucionaria las posibilidades reales de este “equilibrio” son las que demarcan la dimensión de los cambios. Pero tenemos en cuenta que en el presente no es estratégico abordar la cuestión “alianza transitoria o revolución permanente”, al margen de la ecuación “sujeto colectivo más productividad”. Las circunstancias actuales exigen plantear ambos desafíos a la par: consenso táctico y profundización del cambio junto con sujeto colectivo a la par que otro modo de acumulación. Estas exigencias nos enfrentan con nuevos obstáculos y nuevos retos, y por ello demandan nuevas estrategias. Volveremos sobre este asunto más adelante.

como meta “construir un sistema económico justo, democrático, productivo, solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable”. La “formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera es facultad exclusiva de la Función Ejecutiva y se instrumentará a través del Banco Central”.

Es preciso resaltar que estos cambios van más allá del diagnóstico superficial de “retorno del Estado”; si bien es cierto que el nuevo paradigma constitucional contrarresta ciertos puntos del anterior (que se valoran como negativos: la regulación de la economía, la reserva de los “recursos estratégicos”, el interés por la redistribución además del crecimiento), y asume otros (que se valoran como positivos: los tópicos del “pleno empleo”, la “erradicación de la pobreza” o los “grupos de atención prioritaria”, ya no enunciados como “vulnerables”); los más relevante son las innovaciones que, con el antecedente de las promesas incumplidas del proyecto neoliberal, genera el reposicionamiento estatal respecto a una topografía ciudadana más compleja y diversificada, y que podemos analizar en la inscripción constitucional del “buen vivir” como horizonte a “alcanzar”.

En consonancia con este postulado constitucional, el documento de planificación expedido por la función Ejecutiva luego de la aprobación de la Constitución se denominó *Plan Nacional para el Buen Vivir, 2009-2013*. Ahí se entiende que el:

... buen vivir nos obliga a reconstruir lo público para reconocernos, comprendernos y valorarnos unos a otros –entre diversos pero iguales– a fin de que prospere la posibilidad de reciprocidad y mutuo reconocimiento, y con ello posibilitar la autorrealización y la construcción de un porvenir social compartido. (Ramírez, cit. en Senplades, 2009)

El buen vivir introduce así constitucionalmente un cambio de la matriz de poder que involucra una nueva trama de relacionamientos políticos, una nueva forma de reconocimientos

y reciprocidades: los sujetos activos de ciudadanía en la Constitución de 2008 ya no se definen a partir de su productividad laboral. En este sentido, la propia concepción del trabajo se amplía para incluir, además del trabajador empleado, al trabajador autónomo, al de autosustento y de cuidado humano, todos los cuales caben en la mirada estatal bajo la garantía de protección laboral (artículo 325); se reconocen como formas de producción, además de la pública, privada y mixta, a la asociativa, cooperativa, familiar, autónoma, de auto-sustento y cuidado humano (artículos 319 y 333); se prohíben explícitamente la tercerización e intermediación laboral para actividades propias y habituales de la empresa (artículo 327); se garantiza la no discriminación y las medidas de acción afirmativa para grupos históricamente discriminados tanto en el acceso como en la trayectoria laboral (artículos 329-332); el trabajo ya no es solo “un derecho y un deber social” sino que además es “fuente de realización personal y base de la economía”.

En esta lógica, la ciudadanía rompe los márgenes productivistas y se define desde otra grilla normativa que se propone realizar los “derechos del buen vivir”: en términos de garantía de provisión pública, siguiendo el principio de la “inclusión y equidad”, estos se asignan en capítulos de ambiente, salud, educación, seguridad social, hábitat y vivienda, cultura, cultura física y tiempo libre, comunicación social, gestión del riesgo, población y movilidad humana, seguridad humana, transporte, además de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales. Y en correspondencia con estos derechos se establecen nuevas formas de institucionalidad política: la estructura estatal se divide en cinco “funciones” [ya no poderes], donde a la clásica tríada ejecutivo-legislativo-judicial se añaden las funciones electoral y la de control ciudadano, con sus ramificaciones y agencias para considerar la diversidad ciudadana en “las diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades”.

Es decir, que la disyunción neoliberal de la ciudadanía es depuesta por una topografía ciudadana más diversa y múltiple, pero no necesariamente heterogénea; el tópico del retorno estatal es un indicio de la vocación universalista de la nueva política ciudadana. En todo caso se trata de un universalismo de las singularidades, que se pueden entrever en los cambios profundos en la gradación de las racionalidades políticas; se abre un nuevo campo de posibilidades, nuevas valoraciones de lo que se ha de hacer y cómo. En este sentido un punto de avanzada radical –una cabeza de puente para la disputa de la socioecología política– es el reconocimiento de derechos a la naturaleza: “la naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”. Es claro indicio de una moralidad biocéntrica, que asume directamente que no se puede reafirmar una ética ciudadana sin cambiar las relaciones políticas de los seres humanos con la naturaleza, para la protección recíproca de (las condiciones de reproducción de) la vida.

Hay que tener en cuenta que la definición de la “naturaleza” como un sujeto de derechos es primordial para concebir el cambio en la matriz de poder, porque en Ecuador –como en muchos países del Sur global– la naturaleza se ha integrado en la historia nacional a partir de la explotación de recursos naturales, configurando un régimen de acumulación primario-exportador que solo reconoce su valor en clave utilitaria. Es decir que se inscribe como objeto de explotación bajo la separación entre naturaleza e historia, legada del colonialismo. En el nuevo paradigma constitucional aquello se vuelve problemático, en tanto se asume ante todo un compromiso con la vida misma. El referente de la “Pachamama” asume, en efecto, la postura de un saber ancestral que atribuye potestad a la naturaleza, y este es el rasgo decisivo en clave cosmopolítica: lejos de ningún esencialismo nativista,

de lo que se trata es de recuperar una relación humano-naturaleza que no es una relación instrumental sujeto-objeto, sino una relación de reconocimiento sujeto-sujeto.⁷

Al poder de normalización del mercado, el proyecto neosocialista opone por tanto no solo el poder regulador del Estado, sino sobre todo la potencia afirmativa de la vida misma. Aquí resulta claro que mientras el neoliberalismo es conservador porque su fin último consiste en restaurar el determinismo mercantil, el socialismo del buen vivir es revolucionario porque además del impulso negador del presente se orienta hacia nuevos modos de pensar y hacer política. Por ello no se trata simplemente de una nueva razón de economía política, que se restringe a distribuir castigos y recompensas, sino que proviene de un impulso eudemónico capaz de generar nuevas ciudadanías; no meramente importa la acumulación de capital sino la reivindicación de todo aquello que hace posible la vida misma.

Las propuestas de la nueva Constitución fueron aprobadas en referendo popular en septiembre de 2009 con 63,9%

-
7. Los postulados constitucionales que reivindican los derechos de la naturaleza son de una complejidad aún no del todo calibrada, y será preciso seguir la exploración teórica y las prácticas concretas para comprender y asumir su real dimensión. No obstante, al menos provisionalmente podemos apuntar que aquí es posible encontrar implícita una crítica normativa a quienes denuncian el “neextractivismo” (Gudynas) o incluso un supuesto “consenso de *commodities*” (Svampa) porque solo toman en cuenta el aspecto externo y más superficial de la explotación de los recursos naturales. En el fondo se trata de un problema mucho más complejo: los compromisos constituyentes tienen una incidencia ineludible porque al mentar a la naturaleza como sujeto de derechos ya se desplaza la disyunción activo/pasivo, de manera que si bien la naturaleza misma no es considerada agente moral, se constituye en agente mediador de economía política. Es decir que ahí donde la norma traza un campo de batalla, además de la denuncia distanciada es posible plantear una disputa implicada. Todo ello merece mayor reflexión que la que aquí cabe (para una discusión preliminar y un estudio de caso, ver Ramírez, 2010).

de votos. En las elecciones de abril de ese mismo año, se ratificó en las urnas la gestión de gobierno con 52 % de los votos para la reelección presidencial en primera vuelta –un hecho inédito en Ecuador desde el retorno a la democracia en 1979. Además, por primera vez en la historia del país, el voto se distribuyó proporcionalmente en todo el territorio nacional, rompiendo con los tradicionales clivajes regionales (Sierra/Costa; Quito, capital política/Guayaquil, capital económica). AP también obtuvo mayoría relativa en la Asamblea Legislativa con 59 curules de 124.

En febrero de 2013, por tercera vez en seis años, Correa vuelve a ganar las presidenciales, en primera vuelta, con 56,67% de los votos y con una mayoría legislativa absoluta de 100 curules sobre 137; AP se ubica como primera fuerza política en 33 de las 34 circunscripciones electorales. Un año más tarde, en las elecciones seccionales de febrero de 2014, AP consolida su liderazgo a nivel nacional con 69 alcaldías, en todas las regiones del país, y 10 prefecturas (incluyendo Pichincha, Guayas y Manabí); es decir, el 38,7% de las dignidades electas (de 23 prefectos y viceprefectos, 221 alcaldes municipales, 1.305 concejales y 4.079 miembros de juntas parroquiales). No obstante, las tres ciudades principales del país eligen alcaldes de oposición (Guayaquil, Quito y Cuenca; en estas dos últimas AP pierde la alcaldía), una circunstancia que hay que tomar en cuenta en la implantación local de las oposiciones y el espacio mediático que ocupan.

Acciones estructurantes

De esta manera la nueva matriz de poder esbozada en la Constitución de 2008 es reivindicada electoralmente por la ciudadanía, trastocando las relaciones de fuerza del campo político. Pero en la medida en que se plantea una ruptura y una proyección, las normas mismas requieren de intervención inmediata y decisiva para su aplicabilidad, adoptando la dinámica acelerada de primeras operaciones que ponen en

marcha el cambio. No se trata de una transición del país de papel al país real, sino de una contigüidad complementaria y persistente entre la dimensión simbólica y la dimensión práctica del poder. Sobre todo en los primeros momentos de toda revolución se han de tomar decisiones que estructuren las condiciones de posibilidad para toda acción posterior. La acción revolucionaria no es entonces la mera aplicación de una norma, sino la condición que hace posible la inscripción de esa norma. En el corto plazo, los cambios sociales profundos necesitan de muchos factores; el número uno es la acción política. Todo lo demás es número dos.

Este énfasis es necesario porque, algunos años más tarde, hay quienes olvidan (o quieren olvidar) esta prioridad. Y hay resistencias que comienzan por la desmemoria. Actualmente, una de las críticas más recurrentes señala que la Revolución Ciudadana es solo coyuntural (no es “revolucionaria”, dicen los conservadores de izquierda y de derecha), porque se encuentra atada a la redistribución social (“populista” dirían algunos) permitida por una ocasión fortuita de altos precios del petróleo (varios mencionan un “ciclo de *commodities*”). Esta objeción apunta a morigerar los efectos positivos de la acción gubernamental.

En efecto, los precios del petróleo y otros recursos naturales obedecen a las fluctuaciones en el mercado global, pero estas fluctuaciones no son naturales como suponen los libros de texto de la economía neoclásica, sino que obedecen a circunstancias políticas a nivel local, regional y global; nunca al puro azar. Tanto la desaceleración del crecimiento de China y de otros mercados emergentes, como la apreciación del dólar, las guerras en Oriente Medio, el acuerdo antinuclear con Irán, etcétera, son condicionantes de peso que obedecen a manejos políticos complejos, en los que no es posible profundizar en este trabajo, pero que cabe enmarcar en la fase recesiva del ciclo de acumulación neoliberal. Es decir que no se trata de un ciclo “natural”, sino geohistórico y de economía política; y

por ello mismo es posible, y necesario, no ceder al derrotismo y plantearnos alternativas. (Volveremos sobre este asunto mas adelante, en la sección Hacia el horizonte poscapitalista

Para enfrentar el fatalismo de la oposición tenemos, en primera instancia, que reflexionar sobre dos cuestiones básicas: primero, la política es un proceso activo donde los seres humanos somos agentes de la historia, que no se puede subsumir en tendencias seculares de la economía; segundo, toda noción de responsabilidad política se opone al determinismo, y por ello mismo el argumento del “ciclo” en sentido determinista es autocontradictorio. En pocas palabras nosotros podemos cambiar nuestro futuro si somos sus agentes, no su sustancia; porque la política es el arte de lo posible, y solo será la política la que nos permitirá enfrentar los obstáculos.

Este resulta un momento oportuno para evaluar retrospectivamente, aunque solo de manera sintética, el peso de las acciones estructurantes como intervenciones políticas que marcan puntos de inflexión histórica en la nueva matriz de poder ciudadano en ruptura con el proyecto neoliberal. Tres acciones que tomó este gobierno inmediatamente después de asumir el mando ejecutivo, y a la par del debate constituyente, son especialmente relevantes: el resarcimiento de los dos mayores atracos sociales en la historia del país, con la auditoría de la deuda externa y el cobro del salvataje bancario de 2000, y la recuperación social de las rentas petroleras. Se trata de reconstruir sintéticamente la concentración política inmediata de lo que podríamos denominar el Año cero de la Revolución Ciudadana.

¿Qué viene primero: la deuda o la vida?

Bajo el lema: “Primero es la vida, después es la deuda” el Gobierno conformó en julio de 2008 la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC) con la participación de economistas, abogados y representantes de

organizaciones sociales, tanto nacionales como internacionales. En medio de la investigación se iniciaron disputas que llevaron a la expulsión de los representantes del FMI del país (tenían oficina propia en el Banco Central), y los congresistas de oposición intentaron (sin lograrlo) llevar a juicio político al ministro de Economía, Ricardo Patiño, quien presidía la Comisión.

El informe final de la CAIC (2008) demostró que entre 1970 y 2005 la deuda externa (privada y pública) pasó de USD 241 millones a USD 17 mil millones; en promedio, representó 61% del PIB de este período. Los intereses de la deuda representaban en 2006 el 200% de los ingresos fiscales petroleros. A pesar de los compromisos oficiales, apenas 14% de los créditos recibidos se utilizaron para proyectos de desarrollo (agua potable, energía, irrigación, transportes, telecomunicaciones, infraestructura social y apoyo a las empresas); el 86% restante sirvió para pago de intereses.

En el período entre 1989 y 2006 más de USD 13.500 millones salieron del bolsillo de los ecuatorianos para reflotar a los diferentes acreedores extranjeros; sin embargo, la deuda siguió aumentando. De hecho, el presidente Osvaldo Hurtado decidió en 1983 que el Estado asumiría la deuda externa de las empresas privadas, y en el año 2000 el presidente Lucio Gutiérrez, a través de su ministro de Economía Mauricio Pozo (ver apartado), cedió a la solicitud del FMI de establecer un fondo de ahorro para absorber las ganancias de los altos precios petroleros que serían destinados “para estabilizar déficits de cuentas externas”; en la práctica, servicio de los intereses de la deuda externa. (Este fondo fue eliminado por el presidente Correa cuando ocupó el cargo de ministro de Economía en 2005).

A fin de cuentas, la CAIC confirmó que muchos tramos de los Bonos Global 2012 y 2015 eran deuda ilegal e ilegítima. El Gobierno suspendió el pago de estos títulos y se propuso a los acreedores una reestructuración de la deuda. En junio de 2009, esta estrategia rindió frutos cuando Patiño consiguió

readquirir títulos de deuda avaluados en USD 3.200 millones por USD 900 millones; es decir, con una reducción de entre un 65-70% de su valor. Teniendo en cuenta los intereses que el país ya no tiene que pagar, ya que se renegociaron títulos que vencían en 2012 y 2030, el erario público ahorró alrededor de USD 7.280 millones para los próximos 21 años. Como resultado, la deuda de Ecuador descendió de USD 17.475 millones en 2008 a USD 13.686 millones en mayo de 2011.

Al mismo tiempo que se hacía esta renegociación se debatía la nueva Constitución, que señala límites para el endeudamiento público: que este sea posible solo cuando los ingresos fiscales o de otras fuentes no sean suficientes; que no afecte a la soberanía del país; que los fondos sean destinados para inversión en infraestructura. En concordancia con estos postulados, si en 2006 el porcentaje del presupuesto estatal dedicado al pago de la deuda externa era del 24% en 2014 pasó al 7%; mientras que la porción del presupuesto estatal destinada a los gastos sociales aumentó del 12% al 25%.

¿Es peor robar un banco o fundar uno?

En Ecuador, que los delincuentes asalten bancos es un problema social menos grave que el asalto de los propios bancos a la sociedad. Un segundo ejemplo de intervención política decisiva ha sido la conformación en abril de 2007 de la Comisión Especial para la Investigación del Salvataje Bancario (CISB) que busca esclarecer cómo un grupo de banqueros esquilmaron los fondos de varios millones de ecuatorianos.

Durante la campaña presidencial de 1998 varios banqueros financiaron al vencedor, Jamil Mahuad. Una vez iniciado su período en agosto, amparándose en la Constitución de 1998, el Banco Central comenzó a emitir créditos destinados a la banca privada para solventar la crisis financiera global, agravada en el país por la caída de los precios del petróleo y los estragos que

provocó el fenómeno de El Niño.⁸ En marzo de 1999 Mahuad decretó el congelamiento de los depósitos en el sistema bancario privado, un estimado de USD 1.840 millones (los depósitos de menos de 2 millones de sucres por una semana, y los de más por un año. Vale recordar que 2 millones de sucres terminaron por equivaler, con la posterior dolarización, a 80 dólares). En enero del año siguiente el Presidente decretó la dolarización de la economía devaluando el sucre en 500% de un día al otro (el tipo de cambio pasó de 5.000 sucres por dólar a 25.000). En medio de las protestas sociales, Mahuad fue derrocado cuando las FF.AA. le retiraron su apoyo.

Los informes de la CISB fueron declarados reservados por la Fiscalía, y aún no se han hecho públicos. Pero las cifras reveladas durante las investigaciones muestran que las decisiones del gobierno de Mahuad permitieron que se esfumaran los ahorros de los ecuatorianos: en 1998 en el país se registró una fuga neta de capitales de USD 422 millones, y en 1999 de USD 891 millones; con la dolarización los ecuatorianos perdimos cuatro quintas partes del valor de nuestros depósitos y el dinero en nuestros bolsillos. Diecisiete bancos privados quebraron (73% del sistema) y el Gobierno gastó las reservas públicas para rescatarlos (alrededor de USD 1.400 millones en los dos años de la crisis, recursos que nunca fueron devueltos).⁹ Durante el año 2000 el PIB per cápita cayó 32%, la pobreza por ingresos llegó al 71%, y entre 1999 y 2006, 884.612 ecuatorianos tuvieron que migrar en busca de mejores oportunidades.

-
8. Lo señalado en la Constitución fue complementado por la Ley de Garantía de Depósitos, aprobada por la coalición legislativa entre PSC y DP (partido del presidente). Esta Ley creó la Agencia de Garantía de Depósitos que transfirió, mediante varios decretos presidenciales, recursos de las cuentas públicas a la banca privada.
 9. Solo en la Corporación Financiera Nacional se asumieron en ese período créditos para la banca privada por alrededor de 1.000 millones de dólares.

Pero quizás el dato más significativo que se reveló durante el 2008 fue que la deuda con el Estado del Grupo Isaías, exaccionistas de Filanbanco, era de USD 661,5 millones; mientras que la del Grupo Peñafiel, expropietario del Banco de Préstamos, era de USD 212 millones. En julio de 2007 una AGD, reconfigurada para el cobro de la deuda a los banqueros conforme a la Ley de Reordenamiento en Materia Económica y Tributaria, procedió a la incautación de 741 empresas (322 de propiedad de los hermanos Roberto y William Isaías, entre ellas tres canales de televisión, empresas agrícolas, de comercio, de seguros, de construcción; yates, aviones y otro tipo de bienes inmuebles; y 419 empresas más, de propiedad de Alejandro Peñafiel).

Los bienes más valiosos se subastaron para devolver su dinero a los perjudicados por la corrida bancaria y recuperar los recursos del erario público; los canales de televisión TC Televisión y GamaTV pasaron a ser medios públicos, y tras otorgar un crédito a largo plazo a través de la Corporación Financiera Nacional, los trabajadores adquirieron el 12% de las acciones del primero y el 22% de las del segundo. No obstante, en 2014 los costos del salvataje ascendían a USD 8 mil millones, de los cuales USD 2.300 millones aún están impagos.

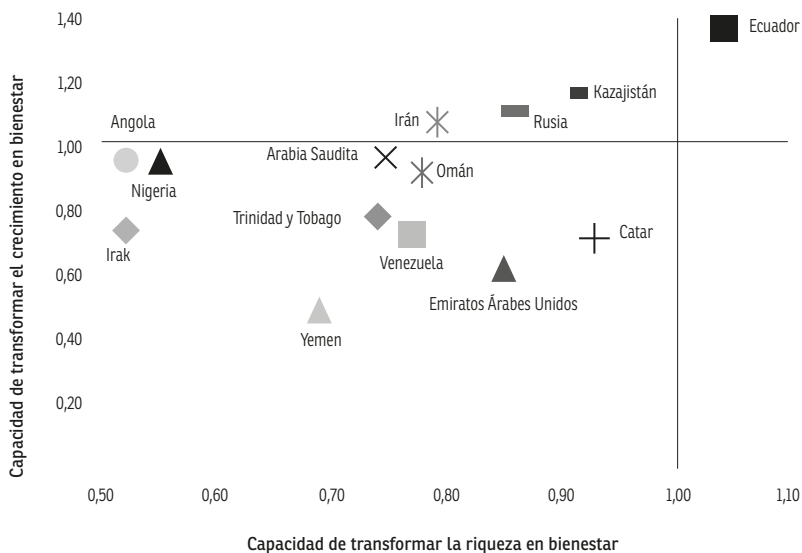
¿País rico, pueblo pobre?

Es primordial reseñar aquí la recuperación social de las rentas petroleras. Gran parte de la riqueza nacional se ha perdido históricamente por decisiones de gobierno que favorecieron a las grandes transnacionales petroleras. En octubre de 2007 el presidente Correa emitió el Decreto Ejecutivo n° 662 con la intención de reformar la Ley de Hidrocarburos para que las empresas petroleras multinacionales reviertan al Estado el 99% de las ganancias extraordinarias obtenidas por los altos precios (antes el reparto era del 50%). También

se anunció la intención del Estado ecuatoriano de reincorporarse a la OPEP (Organización de los Países Exportadores de Petróleo), que había dejado desde 1992 para poder incrementar su producción. En diciembre se iniciaron así complejos procesos de renegociación con cinco compañías: City Oriente, de Estados Unidos; Petrobras, de Brasil; Repsol-YPF, de España-Argentina; Perenco de Francia; Andes Petroleum, de China; y Canadá Grande, de Corea. Al comenzar el año 2008, las petroleras extranjeras aceptaron renegociar las ganancias extraordinarias de los precios de venta del petróleo en el mercado internacional.

A la par de la renegociación, es evidente que traducir estos recursos económicos en beneficios sociales requiere mayores esfuerzos. Sobre esta cuestión, los estudios señalan la recurrente debilidad estructural de los gobiernos en países con abundantes recursos energéticos, debido a factores como la injerencia de las grandes transnacionales, o las redes de corrupción en torno a la enorme cantidad de dinero que mueven estos negocios. En una medición de la relación entre la renta petrolera de los países en que esta representa más del 10% del PIB, y el crecimiento/bienestar social, Ecuador destaca como el país más eficiente y eficaz en convertir estos ingresos en metas de políticas sociales.

Gráfico 4. Capacidad de traducir renta petrolera en beneficios sociales¹⁰

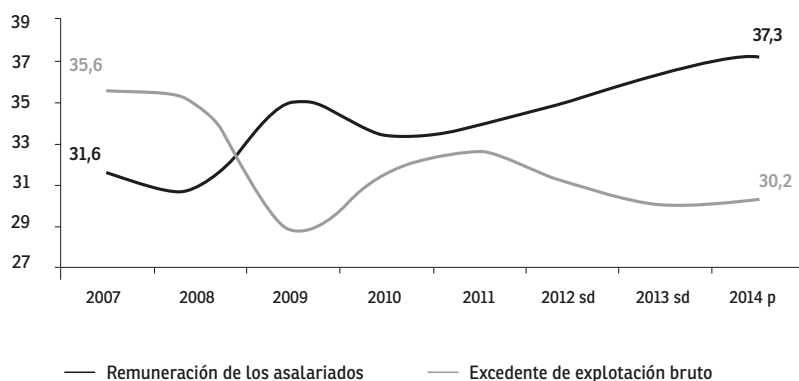


Fuente: Boston Consulting Group, 2015.

Así se implanta un nuevo esquema (re)distributivo de la riqueza, que se traduce en cambios tangibles en la estructura de la distribución primaria del ingreso, que se caracteriza por un creciente incremento de la participación de los trabajadores en el ingreso y un correlativo descenso de la participación de los capitalistas.

10. Esta medición la realiza el Boston Consulting Group en una muestra de 148 países, calculando el indicador a partir de la relación entre el PIB per cápita (datos del BM) y el bienestar social medido en tres dimensiones: económica (estabilidad y empleo); inversión social (salud, educación, infraestructura); y sostenibilidad (ambiente, gobernanza, sociedad civil y distribución del ingreso). Los detalles se pueden consultar en <https://www.boyden.com/mediafiles/attachments/9820.pdf>

Gráfico 5. Estructura porcentual de la distribución primaria del ingreso (2007-2014)



Fuente: BCE.

Nota: la participación restante es ingreso mixto y participación estatal.

Estos indicadores precisamente reflejan en términos cuantitativos los efectos de la acción política. Son resultados que señalan una primera refutación del determinismo economicista, pero no la única ni quizás tampoco la más relevante. Para reflexionar sobre esto, consideremos más detenidamente el argumento conservador, por ejemplo en una formulación reciente por parte del banquero Guillermo Lasso, candidato presidencial de oposición: “Podríamos decir que estamos sufriendo la ‘crisis de la abundancia’. Para entenderlo mejor, imaginemos que una familia gana la lotería y de la noche a la mañana abandona toda su rutina y decide vivir de esa nueva fortuna. Compran una casa nueva, cambian su coche, viajan, gastan... pero cuando se termina el dinero, ahí se ve la cruda realidad” (entrevista con libremercado.com). Así el mal de muchos parece el consuelo de unos pocos agoreros del desastre –en Ecuador, y también en el resto de América Latina–. Pero notemos que el argumento es similar y, en términos estructurales, equivalente a la acusación de “populismo” que esgrimían los

neoliberales a finales del siglo xx, cuando cargaban a la política social con el peso de la culpa por los desequilibrios macroeconómicos (ver apartado).

Teniendo en cuenta esta homología estructural del discurso conservador, podemos plantearnos una respuesta que vaya más allá de refutar los cuestionamientos, que en el fondo intentan morigerar los resultados positivos de la acción gubernamental de la izquierda. De lo que se trata no es solo de impugnar a los opositores, sino sobre todo de volver a la hipótesis revolucionaria del cambio posible mediante una reflexión más detenida, de tres duraciones; si en primera instancia expusimos el tiempo inmediato de la acción política estructurante, esta acción ya nos empuja hacia una perspectiva de media duración para constatar si el respaldo a la Revolución Ciudadana se restringe a la mera cooptación económica o proviene de una real capacidad de gobierno para reafirmar aspiraciones ciudadanas. Esta exploración nos demandará luego considerar la larga duración, que se proyecta hacia el futuro, para preguntarnos de qué depende que una crisis se convierta en crisis de recuperación o en crisis de superación. En este sentido, de la media duración se ocupan el siguiente apartado en términos de reafirmación ciudadana, y el que viene a continuación en términos de formación de nuevas ciudadanías; mientras que la reflexión prospectiva de más larga duración se tratará en la sección, en términos de acumulación.

Reafirmaciones ciudadanas

La gestión gubernamental no es solo una captación de recursos para la redistribución, sino que se traduce en la implantación nacional del nuevo proyecto de socialismo del buen vivir porque proviene de y reafirma la nueva topografía ciudadana del pacto constituyente. Es decir que la reapropiación social de la riqueza no solo cumple con lo que deseamos los ciudadanos, sino que también, en tanto da cabida a la propia condición de ciudadanía, estimula la apertura de expectativas sobre lo

posible: el buen vivir aparece como un horizonte abierto, preñado de anhelos por cumplir.

La política revolucionaria como reafirmación ciudadana se puede apreciar entonces como un experimento progresivo de economía política por superar una falta, un todavía que no está latente en la negación del presente. Esta intención involucra vincular la mentada consolidación política con la estabilidad económica como condición de posibilidad de la primera, hecho inédito en la historia del país: a pesar del escenario de crisis a nivel mundial, el PIB ha crecido 4,3% promedio entre 2007 y 2014 (compárese con 3,2% promedio de América Latina, datos de la Cepal). En este período, el PIB *per capita* creció 45% en términos reales. De este crecimiento, la Revolución Ciudadana ha destinado en promedio 11% del presupuesto del Estado a la inversión social (casi USD 9 mil millones, tres veces más que todos los gobiernos juntos desde el retorno a la democracia en 1979).

Esta inversión social ha permitido contrarrestar las tendencias de disyunción de la ciudadanía impulsadas por el proyecto neoliberal, tendencias que se expresaron en la mercantilización de esferas públicas que se traducían en procesos de exclusión: sistemas diferenciados en el acceso a la salud, a la educación, a la seguridad social, en donde estos derechos se ejercían en función del poder adquisitivo. Esto condujo a la concentración de las oportunidades, aumentó las desigualdades y quebrantó la cohesión social. Se trata de tendencias que se están revirtiendo en la actualidad gracias a las operaciones de reafirmación ciudadana que buscan superar la prehistoria (anti)social del neoliberalismo y escribir una nueva historia plenamente social, que se puede leer en la mejoría de las condiciones de vida en algunos indicadores fundamentales:

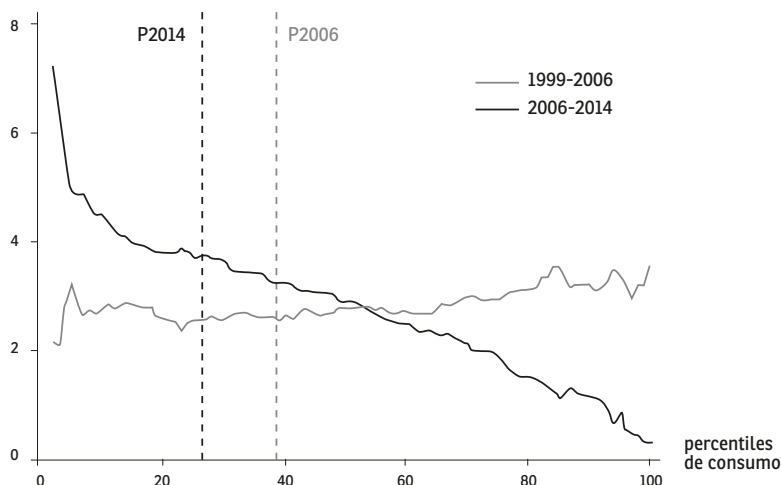
- Empleo y salario: el desempleo bajó de 10,4% a 4,8% (la tasa más baja de América Latina), y el salario básico que antes cubría 40% de la canasta básica (USD 160) hoy cubre el 100% (USD 366).

- Seguridad social: mientras en 2007 solo 26% de los trabajadores con ocupación plena estaban afiliados al seguro social, en 2014 lo están 67%.
- Educación básica: la tasa neta de matrícula subió del 92% al 96% en los últimos siete años, y el total de matriculados en el sistema público aumentó de 2.604.000 estudiantes a 3.479.000.
- Educación superior: con la recuperación de la gratuidad de la educación superior se duplicó la matrícula del 40% más pobre, de los indígenas y de los afroecuatorianos.
- Salud: la desnutrición bajo del 1,1% al 0,4%, y las consultas en salud pública aumentaron 270%.

Todo ello ha hecho posible que entre 2007 y 2015 la pobreza y las desigualdades disminuyan sistemáticamente, lo que significa la restitución de capacidades ciudadanas. La pobreza por ingresos cae del 36,7% al 23,3%; y la pobreza extrema se reduce ocho puntos, ubicándose en 8,3%. La pobreza urbana por ingresos baja del 24,3% al 16,4%; mientras que la rural se desploma del 61,3% al 35,3%. El hecho fundamental es que este crecimiento de la riqueza ha sido a favor de los más pobres, lo que ha marcado una aproximación hacia el centro. La velocidad de crecimiento de los ingresos ha sido mayor en los percentiles más pobres que en los más ricos. Dicha situación es la evidencia tangible de que la nueva matriz de poder ciudadano apunta a un proceso igualitario de confluencia socioeconómica entre los ecuatorianos.

Gráfico 6. Tasa de crecimiento anual del consumo según percentiles, 1999-2006 y 2006-2014

tasa efectiva anual



Fuente: Encuestas de Condiciones de vida; varios años.

Elaboración: INEC.

En la actualidad, el quintil más pobre ha duplicado su ingreso mensual *per capita*: mientras en 2007 la proporción entre el ingreso del 10% más rico y el del 10% más pobre era de 41 veces, en la actualidad es de 25. Entre 2007 y 2013 el coeficiente de Gini disminuye del 0,55 al 0,49 (en el mismo lapso América Latina redujo dos puntos, de 0,52 a 0,50, según datos de la Cepal).

En esta misma dirección, a la par que las elecciones muestran una legitimación de la Revolución Ciudadana distribuida territorialmente, hay también un proceso de confluencia en la distribución geográfica de la riqueza; es decir, la velocidad de reducción de la pobreza es mayor en aquellas provincias que tenían mayores niveles de pobreza antes del proceso de cambio.

Empleando un membrete descriptivo podemos constatar que entre 2003 y 2014 hubo un incremento de la clase media que pasó del 15,3% al 31,5% (PNUD, 2016).

En suma, lo que muestran los datos es que las condiciones materiales (tanto absolutas como relativas) han mejorado sistemáticamente durante los nueve años de Revolución Ciudadana. Ha disminuido la pobreza, la desigualdad y se ha democratizado el acceso a derechos sociales. Estas reafirmaciones ciudadanas en el plano objetivo también suponen una revolución de las expectativas al alza. Hoy en día Ecuador tiene el mayor aumento a nivel latinoamericano en el “índice de satisfacción con la vida” (cuarto en el mundo). Teniendo como referencia los cuestionarios del Informe Latinobarómetro (latinobarometro.org), podemos observar cómo cambian positivamente otras perspectivas.

Una de las preguntas realizadas en el cuestionario del Informe Latinobarómetro fue la siguiente: “En términos generales ¿diría usted que Ecuador está gobernado para el bien de todo el pueblo?” Respecto a esto en 2007, el 11,3 de ecuatorianos contesta afirmativamente (8º lugar en América Latina); en 2015, el 56% (1º). Otra de las preguntas fue “En general, ¿diría usted que está satisfecho con el funcionamiento de la democracia en Ecuador?”. En 2007, el 21,9% contesta “muy satisfecho” o “más bien satisfecho” (8º); en 2015, el 60% (2º). La siguiente pregunta del Informe consistió en “¿Cuán justa cree usted que es la distribución del ingreso en el país?”. Cuya respuesta fue que en 2007, 21,1% consideran que es “justa” o “muy justa” (6º); en 2015, 49% (1º). La última pregunta que citaremos aquí fue “¿Cree usted que ha progresado la reducción de la corrupción en las instituciones del Estado en estos últimos 2 años?”. En 2007, 22,6 % de los ciudadanos consideran que “mucho” o “algo” (6º); en 2015, 52% (1º).

Los indicadores objetivos y subjetivos evidencian así un amplio respaldo al proceso de cambio; pero se trata todavía de datos que capturan opiniones inmediatas. Para que este

proyecto tenga implantación más duradera, son imprescindibles también acciones estructurantes orientadas al cambio de las mentalidades y la formación de una nueva ciudadanía. En este punto podemos volver a la cuestión de la universidad (abordado en) en su doble faz: como máquina de reproducción social pero también como medio de emancipación y expansión de libertades.

Mediaciones emancipadoras

Se puede señalar como una característica diferenciadora de la Revolución Ciudadana, por su origen social y sus principios, su especial atención a la educación superior como una palanca social y un fundamento para la conformación del nuevo país. En su doble carácter de aparato generador y regenerador de pensamiento, la universidad aparece como el punto de fuga para proyectar las líneas maestras de una nueva sociedad. Esta dualidad de la universidad es un asunto ineludible en los debates de izquierda sobre el cambio: hay una corriente muy difundida que piensa la (contra)hegemonía solo en términos de batalla de las ideas, pero descuida tanto los factores institucionales como la dimensión estructural del cambio, y estos aspectos tienen que ir de la mano para que los cambios sean profundos a la vez que duraderos. Con esta previsión, este apartado se ocupa de las prácticas institucionales en la media duración, retomando el caso de la universidad; y la sección Hacia el horizonte poscapitalista se enfoca en la larga duración estructural en términos de acumulación.

En nuestra situación, el primer desafío a superar para la revolución universitaria se presentó en forma de una nueva disyuntiva –que hemos visto en la base de la ideología neoliberal–: o la calidad de la educación superior o la democratización. En la mayoría de estudios y experiencias sobre política educativa se suelen tratar ambos términos como opciones que van en direcciones opuestas; y los procesos de reforma en la región han comenzado con un *trade off* entre acceso y

calidad. Aquellos países que tuvieron como objetivo la calidad construyeron un sistema de élite poco democrático, y aquellos que buscaron democratizar lo hicieron con bajos estándares de calidad. El desafío consistió en asumir los dos objetivos paralelamente.

El primer paso en esta dirección fue (sigue siendo) la evaluación de las universidades por primera vez en la historia del país, categorizándolas por niveles de calidad. Un proceso de estas características se había intentado desde el retorno a la democracia en 1979, pero los resultados finales de la investigación de 1980-1988 fueron ocultados y no se emprendieron reformas.¹¹ En el período 1989-2006 varios intereses locales se afincaron en la fundación de 38 universidades privadas, como favores políticos aprobados a través del Congreso, sin ningún criterio técnico. De esta manera el 54% de la oferta se privatizó, empujando hacia abajo la calidad del sistema en su conjunto. Esta situación puso en cuestión el supuesto neoliberal de que, en la educación superior, el libre mercado al aumentar la oferta amplía oportunidades, y que la competencia conduce a la calidad; por el contrario, la cantidad no implicó democratización, sino una estafa social.

En contraste con el proyecto neoliberal, durante los últimos nueve años el número de universidades se redujo, y aumentó tanto la matrícula como la calidad. En una decisión inédita pero que tuvo gran respaldo social, luego de una evaluación técnica con estándares rigurosos, el gobierno clausuró por falta de calidad 17 universidades privadas (fundadas durante el período neoliberal), 44 extensiones y 129 institutos técnicos y tecnológicos privados. De manera paralela, puesto que la prioridad

11. El informe del Conuep del período 1980-1988 muestra ya las condiciones alarmantes en que funcionaban las universidades y da señales de las tendencias neoliberales que se acentuarían en los años noventa e inicios del siglo XXI. Oculto durante mucho tiempo, el informe fue publicado el año pasado por el Consejo de Educación Superior (ver Pacheco, 1991).

ha sido precautelar el derecho a la educación superior, se efectuó un enorme plan de contingencia que permitió que más de 40.000 estudiantes y egresados de las instituciones suspendidas prosigan sus estudios en otras instituciones de calidad.

Luego de esta primera depuración del sistema, la pregunta pertinente es si se están produciendo circuitos diferenciados de calidad. Usualmente se suelen construir sistemas en que la calidad genera estratificación social: instituciones de baja calidad para pobres y de alta calidad para ricos. El objetivo de la Revolución Ciudadana en este ámbito ha sido aumentar la calidad para que esta sea igualmente buena para todos.

En este sentido podemos confirmar que actualmente hay una aproximación hacia arriba de las instituciones en términos de calidad. Esto también es efecto de una nueva fórmula de distribución de recursos, más homogénea a nivel de estudiantes. Mientras que antes de la nueva distribución la razón entre la universidad que más recibía recursos y la que menos lo hacía era de 21 veces, en la actualidad dicha diferencia es de tres veces. Así se garantiza un mínimo de recursos por estudiante y el presupuesto es asignado en función de desempeño académico en términos de calidad, investigación científica y eficiencia interna y administrativa, ponderado por la matrícula de cada institución.

El sistema se está consolidando de esta manera para que únicamente puedan seguir funcionando universidades con niveles de calidad que no construyan estratificación social; es decir, que cualquier ciudadano que vaya a cualquier universidad sepa que sea cual fuere su elección tiene la garantía de un aprendizaje similarmente bueno al de cualquier otra universidad del país.

Junto con una nueva distribución de recursos, el presupuesto destinado a la educación superior se ha incrementado, y actualmente alcanza 2% del PIB (el porcentaje más alto en las Américas; en los últimos nueve años, más de USD 12 mil millones). Esta medida ha permitido que en el período

2006-2014 la matrícula se incrementó en 140 mil estudiantes, con un crecimiento del 4,1%. Esta tasa de crecimiento ha sido el doble del crecimiento poblacional. Actualmente en el sistema de educación superior hay 736 mil estudiantes. Este aumento ha venido acompañado de procesos de democratización en el acceso a la educación superior: hoy siete de cada diez ecuatorianos que acceden a la universidad provienen de familias en que los padres no asistieron a este nivel educativo (aproximadamente 100 mil estudiantes). En términos generales, la probabilidad de ser primera generación que ingresa a la universidad fue cuatro veces más alta en el 2014 que en el 2006. Este fenómeno reafirma la movilidad social intergeneracional.

Es importante también resaltar que en los últimos tres años hay un incremento importante del porcentaje de estudiantes (alrededor del 70%) que ingresan a las universidades provenientes de colegios públicos. Más allá de la estadística descriptiva, en términos globales los resultados muestran que los grupos normalmente excluidos –tanto por motivos actuales (que se sintetizan en los ingresos que consiguen), como por razones estructurales (manifestadas en el acceso a la educación que tuvieron los padres) y por motivos socioculturales (como los prejuicios de raza o género)– han aumentado la probabilidad de acceder a la educación superior.

En paralelo, el gobierno se ha embarcado en la creación de cinco universidades públicas de primer nivel, como proyectos estratégicos que ya están en funcionamiento para la transformación del país: Yachay Tec, en el centro de la primera ciudad del Conocimiento en América Latina, concebida para la innovación y producción tecnológica; Ikiam, la universidad para la generación de Bioconocimiento en la Amazonía, uno de los reservorios más grandes de biodiversidad del planeta; la UNAE, Universidad Nacional de Educación para la formación de los formadores de las futuras generaciones; la Universidad de las Artes, para incentivar el ingenio, la creación y difusión en este

ámbito; y el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), la universidad de posgrado del Estado para la formación de los servidores públicos.

También hay que añadir que otra meta principal en este período ha sido la formación de posgrado. Debido a la necesidad urgente de este nivel de formación se implementó la política pública de becas más ambiciosa de la historia del país: desde 2007 hasta el presente se han invertido más de USD 600 millones para becar a más de 15.200 ecuatorianos que se encuentran estudiando en las mejores universidades del mundo. La planificación realizada ya está permitiendo que al regresar los becarios, se incremente la oferta de posgrado en especializaciones que en este momento son escasas o de las que carece el sistema y necesita el país.

Al mismo tiempo se está respaldando la formación técnica y tecnológica. El gobierno aprobó recientemente un proyecto de inversión de USD 308 millones para la creación de 34 institutos técnicos y tecnológicos a lo largo de todo el país. Son institutos de formación dual que buscan fomentar el aprendizaje a través del hacer (*learning by doing*), para articular de mejor manera educación y trabajo.

Esta rearticulación entre educación y trabajo es una meta para todo el sistema de educación superior, que se inscribe en la consigna de recuperar la misión social de la universidad. En esta dirección, a la par que mejora la calidad de la oferta y se democratiza el acceso, se están efectuando acciones para que las trayectorias académicas sean pertinentes para atender las necesidades del país. Pero en tanto las aspiraciones son de transformación, la nueva concepción de la pertinencia no alude solo a las necesidades actuales de formación, sino a los cambios proyectados en el sector productivo, en el gobierno, en el libre ejercicio profesional, en el arte y la cultura, en la democracia, etcétera. Esta orientación de pertinencia social no será inmediata, está atada a los tiempos de reconversión institucional y a los plazos académicos (como mínimo los estudios universitarios

duración de cuatro a cinco años y los estudios técnicos al menos tres años); pero ya se puede confirmar que en el 2015 se ha conseguido aumentar en 14% el porcentaje de carreras pertinentes.

En el fondo, el objetivo ulterior de la nueva universidad es la transformación de la sociedad. Lo apuntado permite señalar que el proceso de la Revolución Ciudadana en la educación superior, como en los demás ámbitos sociales, ha alcanzado muchas metas; pero faltan más por alcanzar. En la promesa constitucional del buen vivir, más allá de la redistribución del ingreso y el crecimiento de la producción, etcétera, se halla la recuperación ciudadana de bienes públicos como la educación, la salud y la seguridad social. En el largo plazo, estos logros serán sostenibles si la ciudadanía se apropia de los cambios y los continúa reafirmando activamente; pero también será imprescindible que lo avanzado permita concebir, imaginar y efectuar nuevos sentidos y nuevas prácticas sociales emancipatorias, que nos empujen hacia adelante y eviten el anquilosamiento. Por eso la universidad es pieza fundamental del cambio.

Solo una nueva inteligencia ciudadana nos permitirá comprender que ninguna crisis se debe solo a fallas de acumulación, sino también y ante todo a fallas de pensamiento, de ingenio y creatividad para buscar soluciones. Renunciar a la hipótesis revolucionaria del cambio posible y resignarnos a que nuestros objetivos se subordinen al fatalismo de los ciclos de acumulación del capital sería una derrota histórica. No solo en Ecuador, en toda América Latina es preciso superar el determinismo de los regímenes extractivistas para evitar que las rentas del suelo se conviertan en el factor determinante de nuestro futuro; de otra manera claudicaríamos ante un nuevo dependentismo. Para superar este reto es fundamental que pensemos y actuemos de manera estratégica, para no solo salir temporalmente de las crisis de acumulación, que son consustanciales al régimen capitalista, sino sobre todo para acercarnos cada vez más al horizonte poscapitalista que conforma el núcleo duro de la vida buena.

Hacia el horizonte poscapitalista

En este punto es necesario ampliar el enfoque desde el ámbito nacional al escenario mundial. Nos encontramos en un momento de transición, y la emergencia en América Latina de gobiernos contrahegémicos con impulsos antineoliberales, y que postulan un nuevo orden social procomunes, ha sido posible en el marco de la integración regional, el declive de la hegemonía económica de los Estados Unidos y el desgaste de la ideología del libre mercado. En este momento histórico de cambio, en que nuevos poderes aparecen en la escena, debemos actuar con inteligencia para que los proyectos de izquierda, en conjunto, no sean solo episódicos –final de un ciclo como vaticinan algunos– sino más duraderos.

En este sentido nos enfrentamos ante una disyuntiva: podemos concentrar nuestras fuerzas en restaurar las rentas del régimen de acumulación primario-exportador y secundario-importador, e ingresar nuevamente al ciclo “natural” de reproducción-crisis del sistema capitalista, o mirar más allá, hacia el horizonte poscapitalista. Por supuesto, nuestros pueblos todavía tienen muchas carencias, hay demasiada pobreza y desigualdad aún. Pero precisamente por esta circunstancia debemos plantearnos la disputa renovando los términos de los “privilegios del atraso”: el movimiento por la acumulación solo tiene sentido táctico; la posición estratégica es a favor de la vida buena.

Es decir, lo que primero está en disputa son las alternativas *de* acumulación, y luego las alternativas *a* la acumulación capitalista. La secuencia *primero* y *luego* tiene aquí un estricto significado lógico, no cronológico. Luchamos no solo por la negación de los males del neoliberalismo y su reemplazo por los bienes del socialismo, sino sobre todo para afirmar la vida en nuevos modos de convivencia, nuevas formas de relacionarnos como iguales, nuevas maneras de evaluar qué es lo importante y qué no lo es. Esto implica destruir ese saber heredado

que está enquistado en nuestras mentes. Uno de los mayores impactos de la ideología neoliberal fue precisamente la imposición del pensamiento único, con la creencia de que el fin de la historia había llegado con la democracia neoliberal, puesto que no había alternativas, y una de las mayores trampas para la crítica contrahegemónica sería precisamente quedarse enquistada en la impugnación, sin plantear alternativas concretas, reales y radicales.

Alternativas de acumulación: economías de recursos infinitos

La monopolización neoliberal del pensamiento autorizado no es casual, porque precisamente la mayor ganancia en las cadenas de valor de la economía global está generada actualmente por el uso intensivo de información y tecnologías. Este es un aspecto clave del nuevo escenario geopolítico: luego de una fase de expansión material de la producción mercantil (1945-1975), el ciclo de hegemonía estadounidense está atravesando una fase recesiva de acumulación inmaterial, que se manifiesta en el tránsito de la producción industrial a la financiarización de la economía y la concentración del valor en las nuevas formas de explotación de los bienes comunes, sobre todo el conocimiento (para esta periodización ver Arrighi, 1994). Esta mutación geohistórica de grandes dimensiones podemos concebirla en términos de economía política como un tránsito del capitalismo industrial al capitalismo cognitivo, lo cual no quiere decir que otros regímenes de acumulación no involucraron el conocimiento; por el contrario, busca problematizar el régimen actual en términos más específicos, con una orientación política práctica.

Sucede que el régimen de acumulación en el presente ha comenzado a aprovechar intensivamente el conocimiento como la más importante fuente de valor agregado; de manera que en la actual “sociedad de la información” el conocimiento tiene un precio cada vez más alto. El valor de cambio se concentra ya

no en la manufactura sino en la mentefactura. Se estima que el conocimiento económicamente útil se duplica cada cinco años; cada vez que transcurre este período, los “pobres” son el doble de “ignorantes” (Innerarity, 2011: 19). Dicha pobreza cognitiva introduce una nueva disyunción subjetiva, una nueva posición de exclusión en la topografía ciudadana que podemos denominar la posición del “cognitariado”, que se encuentra sometido a nuevas relaciones de dominación, nuevas formas de explotación y de alienación. Dos características son especialmente representativas de este fenómeno: la subsunción de los sujetos bajo la lógica del capitalismo cognitivo es más generalizada en la medida en que explota un bien común de todos los seres humanos; la dinámica de esta explotación es más difusa, y por ello mismo las líneas de contradicción y de antagonismo son más dúctiles, más permeables, se doblan sin romperse. Así que la opción emancipatoria requiere en este preciso momento una apuesta por politizar esta brecha cognitiva.

Para comenzar con esta tarea es imprescindible recordar que la brecha cognitiva es artificial, construida en circunstancias históricas y por agentes políticos específicos; la capacidad de aprender y crear, imaginar, concebir e inventar es parte de la inteligencia humana, y su naturaleza no es comercial –como nos quiere hacer creer el sentido común capitalista–. Solo cuando esta capacidad humana es cosificada como una mercancía, en modos de regulación con instituciones específicas para la explotación humana y la acumulación del capital, se vuelve imperativo poner un precio al conocimiento para crear una relación mercantil entre oferta y demanda.

El capitalismo cognitivo naturaliza así la forma mercantil del conocimiento –entre otras capacidades humanas y cualidades del entorno natural– como si se tratara de un factor más de la producción. De aquí proviene la falacia de que el valor económico del conocimiento se deriva de cualidades “inmanentes”, más que de relaciones sociales contingentes, históricamente condicionadas. Esto legitima, a su vez, la idea de que

los acaparadores cognitivos merecen una mayor “parte” en la distribución de la riqueza social.¹²

Pero hay una característica peculiar del conocimiento que lo vuelve potencialmente disruptivo. Todo régimen de acumulación capitalista obedece a una ecuación lineal de recursos finitos, una economía de la escasez. Los bienes que se intercambian son finitos y discretos; se da algo a cambio de algo. En contraste, las ideas, los saberes y la creatividad que se comparten no se pierden, se pueden sumar en un continuo de acumulación sin límites. Y estos conocimientos son cualidades propias de todos los seres humanos, son *bienes comunes*, abundantes, que cotidianamente compartimos sin menoscabo. Toda actividad económica requiere de propósitos y aspiraciones, expectativas y un saber hacer para llevar a cabo las acciones propuestas. Este conjunto de saberes, que nos permiten relacionarnos con otros y con el entorno, desbordan la economía, y son una cualidad inherente a los seres vivos. Son potencias comunes que permiten la producción y reproducción de la vida.

Potencia de los comunes¹³

Esta potencia común y de los comunes nos permite pensar que es posible pasar de una acumulación de recursos finitos (como la renta de los recursos naturales) a una acumulación de recursos infinitos, una economía de la abundancia basada en el conocimiento, que permita gestionar y aprovechar socialmente los

-
12. Seguimos aquí de cerca el argumento de Polanyi (1944) acerca de la mercantilización de la tierra y el trabajo; por supuesto, las características propias del conocimiento incrementan aceleradamente la velocidad de la acumulación y hacen más rígidas sus regulaciones; pero por ello mismo, también abren nuevas posibilidades emancipatorias.
 13. Para una discusión más profunda sobre la “potencia de los comunes”, planteada en esta sección, véase Ramírez, 2014.

saberes, la innovación y la creatividad para el buen vivir. Esta cuestión es decisiva en nuestras circunstancias por al menos dos motivos: evitar la inclinación a que el enfoque en la lucha política se separe de la lucha económica, que la disputa por los recursos postergue la disputa por la acumulación como tal; y también porque la reconexión entre política y economía debe permitirnos hilvanar el hilo rojo de la historia. Ya las primeras formulaciones del socialismo científico y utópico expresaban, y hacían soñar con que una sociedad justa sería una sociedad de abundancia –no de la escasez, como asume el postulado básico de la economía neoclásica.

A diferencia de otros modelos productivos, un régimen de acumulación basado en el aprovechamiento colectivo de los conocimientos y la creatividad tiene un fundamento social en la abundancia de los saberes, el ingenio y los bienes culturales. Es decir, la integración social basada en la emancipación del conocimiento se rige potencialmente por la métrica de los rendimientos crecientes de escala (y no decrecientes, como suele pasar en otros sectores de la economía; véase Ramírez, 2014).

Esta posibilidad está ligada a la urdimbre de las nuevas relaciones sociales de producción en las cuales la información, digitalización y el abaratamiento de los costes de (re)producción tienden a cero (Rifkin, 2014), lo cual permite la difusión exponencial de la información y su acceso libre. Esto también puede abrir la imaginación para pensar en nuevas formas de diálogo intersubjetivo, y por lo tanto alternativas de debate democrático y participación ciudadana.

Un radical pragmatismo de izquierda debe permitirnos distinguir y vincular la cooperación de millones de cerebros (inteligencia colectiva) para aprovechar la potencia común de los conocimientos basados en la digitalización, en la información y en el acceso abierto de las tecnologías en todos los rincones del mundo. Esta manera de presentar la cuestión no omite los desafíos de la política como articulación de los aliados y derrota de los adversarios. Por supuesto que la fuerza y el consentimiento

son cuestiones fundamentales, pero aquí planteamos abordar estas cuestiones estratégicamente desde la disputa de la acumulación, debido a que es preciso (re)politizar las subjetividades del capitalismo cognitivo. Y a partir de esto contrarrestar las patologías sociales que introduce la expropiación de los comunes, que de manera similar a la acumulación mercantil, se caracteriza por la contradicción flagrante entre la sobreabundancia de bienes a la par que el desempleo, la exclusión y alienación de las personas.¹⁴

Modos de expropiación/reapropiación

Insistimos en apuntar que los conocimientos no son bienes inherentemente escasos, y solo adquieren la forma de mercancías costosas cuando se hacen artificialmente escasos y se establecen barreras para su acceso. Históricamente, los conocimientos se han producido fuera del mercado, en instituciones como universidades, gremios profesionales, corporaciones religiosas, instituciones estatales, etcétera, y han sido

-
14. En la actualidad se plantea un debate en América Latina en torno a las demandas de las “nuevas clases medias” que, se señala, emergen como resultado de las políticas redistributivas de los gobiernos de izquierda. Se trata de un asunto prioritario para la agenda política, pero los términos en que está planteado confunden la causa con los efectos: cuando se alude a tales demandas se da ya por supuesto que están constituidas las supuestas “clases medias”, lo que implica rebasar el valor descriptivo de la expresión al pretender derivar lo que, en términos clásicos, podríamos denominar una “conciencia de clase” solo en función de indicadores monetarios (ingreso/consumo). Es decir que la lógica epistémica de la economía neoclásica se pretende trasponer en crítica social. En cambio aquí proponemos tratar este asunto desde la propia constitución de las subjetividades sobre el trasfondo del nuevo régimen de acumulación cognitiva. Esto permite pensar en clave de economía política a los sujetos colectivos como procesos relacionales más que como entidades fijas, lo que tiene (se propone) efectos prácticos muy distintos.

recompensados con patrocinio, premios, prestigio, o ingresos vinculados con estatus (más que con rendimiento económico). Pero esta tendencia histórica se ha roto con la introducción masiva de modos de regulación para la expropiación cognitiva.

Los Modos de Regulación para la Expropiación Cognitiva (REC) son los entramados normativos, institucionales y prácticos que permiten al capitalismo cognitivo acaparar información, conocimiento y creatividad. Los capitalistas están conscientes de que la economía basada en el conocimiento tiene un gran potencial, por eso están implementando estrategias para su privatización. Los REC introducen una profunda reorganización social para explotar económicamente el conocimiento, y hay tres aspectos fundamentales de esta reorganización social:

- Primero, el conocimiento deja de ser una parte orgánica inseparable de todo trabajo creativo y se diferencia del trabajo manual, se codifica y se separa de los productos materiales para adquirir una forma autónoma en sistemas expertos, máquinas inteligentes o servicios inmateriales.

- Segundo, el conocimiento es separado de sus contextos sociales y se integra en órdenes institucionales mercantiles, en los que el código de operación es rédito/no rédito en lugar de verdadero/falso, sagrado/profano, etcétera.

- Tercero, el conocimiento deja de circular en unidades económicas autónomas (hogares, templos, universidades), mediante reciprocidad o redistribución, y es asignado mediante mercados competitivos orientados por la ganancia.

El conocimiento puede ser así explotado bajo las distintas formas de “propiedad intelectual” que confieren pertenencia sobre objetos ideales, inmateriales o intangibles, y las correspondientes regalías que se deben pagar para acceder a tales conocimientos. La principal norma de los REC es la fórmula I+D+I (Investigación + Desarrollo + Innovación). Esta fórmula ha tenido éxito para los países de desarrollo industrial temprano, que impusieron reglas de juego a los demás países del globo; en el presente, el manejo de la propiedad intelectual

y las reglas de la Organización Mundial del Comercio se han convertido en instrumentos de dominación. Además de las formas tradicionales (patentes, marcas registradas, secretos comerciales, derechos de diseño, derechos patrimoniales de reproducción, etcétera), cada día se están inventando nuevas (derechos de bases de datos, protecciones para topografías de semiconductores, denominaciones de origen, derechos de performance, etcétera).

¿Qué tipo de conocimientos y qué procesos se deben auspiciar en un proyecto contrahegemónico? Una política emancipadora jamás podrá orientarse por un modelo privatizador del conocimiento, concentrando los beneficios de la ciencia, tecnología e innovación en pocas manos. Esto conduciría al fracaso social absoluto, a nuevas formas de desigualdad y concentración de la riqueza. La alternativa es buscar modos de generación y aprovechamiento del conocimiento como bien común, libre y abierto, para maximizar su beneficio social.

Por eso en la actualidad se impone que desde el sentido (no) común contrahegemónico nos planteemos un cambio radical, que no consista simplemente en gestionar este nuevo régimen de acumulación para “mejorarlo”, sino en dar un giro de timón para una acumulación alternativa. Mientras los grandes acumuladores del proyecto neoliberal migran hacia paraísos fiscales para ocultar sus fortunas, el proyecto del buen vivir debe conducirnos a “paraísos de conocimientos abiertos para el bien común de la humanidad” (Ramírez, 2014).

Para esto, frente a los modos de expropiación del capitalismo cognitivo basados en la fórmula I+D+I, podemos plantearnos un nuevo Modo de Reapropiación Social del Conocimiento: Investigación Socialmente Responsable + Emprendizaje Social y Solidario + Innovación Social (In + Em + InS). Este nuevo modelo se basaría en un aprendizaje cooperativo abierto para emanciparnos socialmente, vivir y convivir bien. Sus bases no solo se asentarían en una ética emancipatoria, sino que también la gestión común y el beneficio social serían más eficientes

económicamente que los modelos de privatización del conocimiento: el conocimiento abierto permite una más rápida y completa distribución; facilita la coordinación entre agentes; reduce el riesgo de duplicación entre proyectos e incrementa la probabilidad de éxito en descubrimientos e invenciones, entre otras ventajas.¹⁵

Por otra parte, un sistema cerrado de conocimiento sería inviable para procesos que deben buscar la eficacia y eficiencia a través de tácticas tales como desagregación tecnológica, ingeniería inversa y transferencia tecnológica generalizada. Además, la acumulación alternativa de conocimiento para el buen vivir requiere colocar en el centro de atención política el talento humano y el desarrollo de las capacidades para la generación de conocimiento. Por eso impulsar avances en educación y ciencia ha de ser uno de los principales objetivos.

Solo la democratización de la educación de calidad y la garantía de contar con modos de reapropiación de conocimiento abierto y creativo permitirán tener las condiciones para generar el conocimiento como bien común y recurso compartido por las sociedades. No obstante, la suma de las partes no garantiza la formación del todo si esta no viene acompañada del deseo y la voluntad de construir regímenes cognitivos contrahegemónicos, en que la disputa por el qué del conocimiento nos permita librar la batalla de las ideas a nivel mundial.

Disputas Sur-Norte: biodiversidad y conocimiento

La economía que nace del capitalismo cognitivo basa en gran parte su fuente de riqueza en el conocimiento que puede descifrarse a partir de entender el comportamiento y asir la

15. Para más análisis de la eficiencia de los sistemas abiertos de conocimiento, véase Foray (2006) y Chang & Grabel (2004).

información que tiene la biodiversidad natural. En la economía política de las relaciones internacionales deberíamos preguntarnos ¿cuánto cambiaría la distribución mundial de la riqueza si se le da valor al patrimonio ambiental de cada país? ¿Qué sucedería en la distribución de la riqueza a nivel mundial si se contemplase el pago a la deuda ecológica? Un análisis del capital en el siglo **xxi** serio no puede dejar de lado el análisis del patrimonio natural y su relación con los modos de producción y acumulación de riqueza dentro de una economía –nacional o mundial– (Ramírez, 2016).

La geopolítica mundial ayuda a entender por qué no se valora económicamente como debería el patrimonio ambiental; la mayor cantidad de biodiversidad está en los países del Sur, empero, los mayores generadores de conocimiento están en el Norte (países industrializados). No es casual que a nivel mundial, el bien común “conocimiento” se privatice a través del manejo de la propiedad intelectual hiperpatentizada en los Adpic, en los TLC y los TBI, y que el patrimonio ambiental siga siendo contemplado como un bien público/común mundial de libre acceso. Asimismo, no es fortuito que los países del Norte busquen penalizar los delitos de propiedad intelectual hasta con cárcel en las normativas mundiales, en tanto que la biopiratería (robo de la biodiversidad de los países del Sur) no es sancionada con ninguna penalidad. No es casualidad que Estados Unidos, Japón, Unión Europea y Reino Unido estén en contra de tratar la regulación internacional que prevenga la apropiación indebida de recursos genéticos, en donde se ejerza la obligatoriedad de la revelación de origen.¹⁶ Tampoco es fortuito que los países más biopiratas de recursos genéticos ecuatorianos sean sobre todo aquellos países con alto desarrollo tecnológico: Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Australia (véase Senescyt-Iepi,

16. Así se pronunciaron en la 30^a Reunión Intergubernamental de Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore, organizada por la OMPI en junio del 2016.

2016).¹⁷ Existe un proceso indebido de expropiación de recursos genéticos, que son procesados y transformados en bienes y servicios que luego son comercializados en el mundo, incluido los países del Sur de donde provienen los recursos genéticos.

En este marco, una paradoja que resulta de la nueva geopolítica internacional es que luego de que los países más industrializados dilapidaron su patrimonio natural edifican una arquitectura institucional en que la mayor fuente de riqueza proviene de un sistema productivo que no depreda el medio ambiente. En efecto, en el capitalismo cognitivo, al ser las ideas las que otorgan valor estas en sí mismas –*a priori*– no generan depredación ambiental. Los “bárbaros” o “poco civilizados” son los pueblos del Sur que todavía requieren de fuentes materiales para generar riqueza y satisfacer necesidades para sus ciudadanos. Los “civilizados” occidentales trasladan sus industrias a países en donde la mano de obra es barata y donde todavía existe biodiversidad para ser explotada: *made in China; designed in Paris*. Un proyecto revolucionario debe saber que no puede caer bajo la misma mirada del capitalismo depredador, que por generar más acumulación dilapida la biodiversidad.

Una de las aristas de la estrategia de acumulación basada en bioconocimiento (Ramírez, 2016) está vinculada entonces a la generación de la información que tiene la vida de todas las especies y los recursos naturales (patrimonio natural y cultural). Privatizar la propiedad del patrimonio sería el primer eslabón de la privatización/mercantilización del conocimiento dado que permitiría avanzar en un proceso de acumulación privada. El patrimonio tangible e intangible y su información deben ser

17. El Estado ecuatoriano reveló en el *Primer informe sobre biopiratería en el Ecuador* (Senescyt-Iepi, 2016) el uso indebido de recursos genéticos endémicos ecuatorianos de 16 patentes y 112 solicitudes de patentes. En el Gráfico 3, en la pág. 10 del informe, se puede observar el *ranking* de los países más biopiratas y las principales especies endémicas que han sido ilegalmente apropiadas por empresas de los países industrializados.

propiedad común de los pueblos, resguardada por un Estado que no esté subordinado a los intereses de la clase capitalista.¹⁸ En el caso de que dicha información provenga de pueblos ancestrales o que se encuentren en sus tierras, estos deben participar del uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales, siempre y cuando sea voluntad de los mismos usarlos. No puede haber ningún tipo de apropiación de un tercero dado que el saber ancestral es inalienable. En la disputa conocimiento-biodiversidad está la viabilidad de conseguir un nuevo patrón de acumulación no capitalista.

Regímenes contrahegemónicos

En términos geopolíticos es necesario manejar, monitorear y proteger el conocimiento para asegurar su sostenibilidad y preservación por parte de la sociedad, no solo a nivel nacional, sino también internacional. En nuestro contexto resulta imprescindible la coordinación de esfuerzos en términos de integración regional. Para que la apropiación del intelecto colectivo, el saber social, no sea exclusivamente para provecho de unos pocos, la acción mancomunada es primordial para desplegar líneas de acción pública y políticas específicas en alianza.

En este nuevo escenario es imprescindible la transformación del Estado: pero no se trata simplemente de reivindicar un modelo de comando centralizado, que se oponga cíclicamente al *laissez faire*, sino que más bien hemos de comenzar por asumir la matriz de poder ciudadano de la que la estatalidad es resultado, aspiración e instrumento a la vez. Aquí resulta de poco provecho el debate de sordos entre estatólatras y estatófobos,

18. La investigación de la biodiversidad con el objetivo de desarrollar la industria farmacéutica y agroecológica resulta estratégica para satisfacer necesidades, garantizar derechos y cambiar la matriz productiva.

porque si partimos del hecho de que el poder tiene su asidero tangible en la potencia de los comunes el peso ominoso de la “razón de Estado” se ha de descargar en la operatividad de las acciones, prácticas e intervenciones que se realizan cotidianamente en la razón de los comunes. Razón que ha de articularse federativamente tanto a nivel micropolítico, en escala local y nacional, como a nivel macropolítico, en escala internacional y regional. En este proyecto, el conocimiento es la piedra angular.

Pero a pesar de su relevancia cada vez mayor, el conocimiento no ha estado en el centro de las estrategias del cambio. Ya sea por miopía o por otros intereses, la acumulación del conocimiento se ha enfocado en cada país por separado y se ha encaminado, mayoritariamente, por dos vías: a) una gestión caótica; o, b) una acumulación privatizadora, que forma parte del juego geopolítico mundial articulado a la monopolización del conocimiento. En ambos casos, por omisión o deliberadamente, los Estados han perdido capacidades de política pública para desarrollar sistemas de innovación económica y social para responder a la crisis de acumulación.

Ninguna de estas dos vías es deseable para un proceso emancipador. Por el contrario, es preciso recuperar capacidades de regulación en beneficio de la sociedad; pero esto tampoco debería conducirnos a tratar meramente de volver al monopolio estatal del control burocrático y la planificación centralizada, precisamente la carencia de una adecuada teoría del Estado fue una limitación del socialismo del siglo xx. Las circunstancias actuales, en que la acumulación es virtual, multipolar, acelerada y flexible nos demandan pensar en nuevas formas políticas. Es por esto que nos planteamos alternativas que van más allá del monopolio del poder del Estado para la integración en redes interestatales y sociales multipolares que operen regímenes contrahegemónicos de economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación (ESC+ci). Para entender las diferencias entre las vías antes señaladas y

la alternativa de la ESC+ci, podemos examinar la acumulación del conocimiento desde cuatro grandes definiciones sociales.

Elección 1: ¿Qué tipo de bien? En la gestión caótica no se considera al conocimiento como un bien social; en la acumulación privatizadora el conocimiento es visto como un bien exclusivo de apropiación monopólica. En cambio, en el régimen de ESC+ci el conocimiento se ha de construir como un bien estratégico de interés público y común, de y para la sociedad.

Elección 2: ¿Cómo se aprovecha? En la gestión caótica no hay inversión ni gestión del conocimiento, así que este no genera valor agregado. En la acumulación privatizadora se crean artificialmente monopolios intelectuales concentrando el valor agregado del conocimiento, principalmente en empresas privadas transnacionales. Debido a que hay amplias brechas tecnológicas entre países, la propiedad intelectual protege a aquellos con mayor avance tecnológico. En cambio, el régimen de ESC+ci ha de potenciar el bienestar social a través de la generación y gestión del conocimiento desde una perspectiva pública-común deliberada.

Elección 3: ¿Quién promueve? En la gestión caótica no hay financiamiento para la ciencia, tecnología ni innovación. En la acumulación privatizadora la inversión proviene del sector privado (y sus réditos también regresan a él). En cambio en el régimen de ESC+ci el apoyo se debe sustentar en la microfinanciación colectiva masiva con el objetivo de democratizar la propiedad de la innovación, a la par que estimulando la cooperación pública internacional (subsidios, fomento a la banca de desarrollo e incentivos) para que el sector privado arriesgue en innovación (a través de sistemas de capital semilla, capital de riesgo, capital ángel) buscando el mayor beneficio social.

Elección 4: ¿Para beneficio de quién? En la gestión caótica el conocimiento carece de función objetivo. En la acumulación privatizadora, la función objetivo es maximizar las utilidades derivadas del conocimiento para el financista privado. En el régimen de ESC+ci, la función objetivo será maximizar las externalidades

positivas que se derivan del conocimiento (incluyendo aquel conocimiento que no prosperó científicamente), poniendo un especial énfasis en incentivar la retribución para el creador/innovador (y no únicamente para el financista).

Tabla. Regímenes de acumulación cognitiva

	Gestión caótica	Régimen privatizador	Régimen de ESC+ci
Naturaleza del conocimiento	No se considera un bien.	Se considera un bien privado.	Se considera un bien común y de interés público.
Gestión económica	No se gestiona el conocimiento, y este no genera valor agregado.	Se crean monopolios para concentrar el valor agregado.	Se potencia el bienestar social a través de la gestión social del conocimiento.
Función objetivo	No hay derechos de propiedad privada; no se estimula la innovación.	Maximización de las utilidades derivadas del conocimiento para el agente privado.	Maximización social de las externalidades positivas del conocimiento.
Inversión	No existe.	Prima el financiamiento privado.	Fuerte inversión social y pública e incentivos.

Fuente y elaboración: Propia.

Implícita o explícitamente, detrás de un proyecto de reapropiación social del conocimiento se encuentran aspiraciones sobre lo que ha de ser la sociedad. Aparejado al proyecto neoliberal de fines del siglo xx e inicios del XXI se configuró un régimen de acumulación del conocimiento reflejo de la sociedad que se anhelaba construir: un régimen privatizador de recursos (artificialmente) escasos para una sociedad del egoísmo individualista, funcional al capitalismo cognitivo. En sentido contrario, al disputar la acumulación de riqueza monetaria/riqueza cognitiva y su regulación privada/social estamos disputando ya una acumulación

alternativa, y con ello vislumbramos una nueva sociedad de los comunes basada en una economía de recursos infinitos. Con la propuesta de la acumulación del conocimiento como un bien común estamos proponiendo ya el *qué* y el *cómo* de una acumulación alternativa. Pero aún nos falta disputar las alternativas a la acumulación.

Alternativas a la acumulación: tiempos bien vividos

Como se deja translucir en la Tabla 1, bajo cualquier forma que se mida la pobreza y la desigualdad en el período de la Revolución Ciudadana existe una reducción sistemática de ambas. Lo importante es que tal reducción se da tanto en el bienestar objetivo como en el subjetivo. Quizá lo que destaca es que la reducción más drástica se produce en la caída de la pobreza estructural, la pobreza según necesidades básicas insatisfechas (NBI) y pobreza multidimensional. En este marco, uno de los retos más importantes de un proyecto transformador es que la sociedad, y sobre todo la clase media, tengan conciencia del rol histórico que juega en el proceso de transformación social. Lamentablemente, en los estratos medios y altos se puede detectar que si bien han mejorado objetivamente su bienestar, sus expectativas subjetivas han crecido a mayor velocidad que las materiales, lo cual configura un malestar subjetivo. En otras palabras, entre el 2006 y 2014 crece el porcentaje de personas insatisfechas subjetivamente con sus ingresos monetarios en un grupo de población (clase media y alta) que mejoró sustancialmente su ingreso objetivo, configurando un contrasentido que Ramírez (2016) ha denominado la “paradoja del bienestar objetivo, malestar subjetivo”.

Tabla 1. Cambio en el bienestar objetivo, subjetivo y relativo en la Revolución Ciudadana, 2006-2014

Categorías de bienestar	Cambio 2006-2014 (diferencia en puntos porcentuales)	Tendencia
Pobreza de consumo	-12%	Reducción
Pobreza de ingreso	-10%	Reducción
Pobreza de consumo según LPS	-8%	Reducción
Pobreza de ingreso según LPS	-18%	Reducción
Pobreza de consumo según déficit subjetivo monetario	-8%	Reducción
Pobreza subjetiva (IMS) según LPS	-13%	Reducción
Gini objetivo (cambio porcentual Gini consumo)	-11%	Reducción
Gini subjetivo	-5%	Reducción
Pobreza multidimensional *	-16,50%	Reducción
Pobreza según necesidades básicas insatisfechas	-15,9%	Reducción
No pobres de consumo con déficit subjetivo monetario	26%	Incremento

Fuente: Encuesta de condiciones de Vida (2006-2014)

Elaboración: Ramírez, 2016

Nota: LPS= línea de Pobreza Objetiva; IMS= Ingreso Mínimo Subjetivo

* Período 2009-2015, Fuente: ENENDHU.

Esta situación nos demanda trastocar radicalmente el paradigma (anti)neoliberal: porque en muchas ocasiones seguimos atados al supuesto de que la vida buena equivale al consumo/crecimiento, y disputamos los bienes a producir y la productividad, pero no necesariamente la acumulación como tal. Para problematizar esta cuestión detengamos por un momento la lectura, preguntémonos ¿cuál es la importancia de lo que nos ocupa? En Ecuador trabajamos en promedio ocho horas y media diarias, y dedicamos a las adquisiciones para consumo media hora; estas nueve horas son el foco de atención de la constelación político-epistémica (anti)neoliberal, que relega así más de la mitad de la vida de las personas.¹⁹ Pero, sobre todo, nos impide problematizar si este es verdaderamente el tiempo de una vida buena.

En cambio, si ampliamos la perspectiva para considerar en su amplitud el espectro del tiempo vital, podemos descubrir ya algunos indicios en otro sentido: la persona promedio dedica 36% de su tiempo semanal a satisfacer sus necesidades biológicas, es decir 60,96 horas a la semana. De esta cantidad de tiempo, 50,5 horas se destinan a dormir (aproximadamente 7,22 horas diarias). En proporción, solo 29% del tiempo la persona promedio lo dedica a trabajar –ya sea remuneradamente o no.

Sin embargo, en las estructuras de trabajo del mundo capitalista no es posible elegir entre trabajo y ocio. Por ello no es casual que el promedio de horas de trabajo en Ecuador sea de 42 horas semanales y que aquellos que tienen un segundo empleo en promedio trabajan 15 horas semanales más –a pesar de que la ley señala que se debe trabajar solo 40–. No olvidemos también que el 10% más pobre por ingreso solo trabaja 35 horas semanales de una manera no voluntaria; que 32% de la población desea trabajar más horas y no puede; o

19. Los datos provienen de la encuesta Enemdu del año 2007.

que de las personas descontentas con su trabajo –32%– señala que esto se debe al exceso de horas de trabajo. La decisión real que toma cada ciudadano es cómo distribuye el tiempo descontando el que, sí o sí, tiene que utilizar para trabajar (remuneradamente o no) y/o para satisfacer sus necesidades. Y aquí cabe la pregunta: ¿es el trabajo lo más importante en/ para la vida?

Del idealismo de los deseos al poder de los comunes²⁰

Por lo dicho, cabe seguir con las interrogantes: si el tiempo de trabajo es una necesidad y no necesariamente una elección, y el salario es un medio y no precisamente un fin, ¿cuánto tiempo dedicamos los seres humanos a otras actividades como el ocio emancipador, el amor y la amistad, la participación en la vida civil o política y la relación de convivencia con la naturaleza? Podemos denominar a estas actividades también “bienes comunes” –como antes hicimos con el conocimiento–, para distinguirlas de las mercancías de consumo, y señalaremos que su diferencia radica en que solo pueden ser disfrutadas en relaciones de reconocimiento, reciprocidad y reflexividad.

En términos económicos podríamos señalar que los bienes comunes son coproducidos y coconsumidos, al mismo tiempo, por los involucrados en la relación. En este sentido, la comunidad misma deviene un bien. Aquí podemos encontrar otra diferencia sustancial: en el concepto de bien se asumen usualmente tanto los deseos ideales como los placeres materiales, pero mientras los deseos son aprovechados por la lógica de acumulación ya que encadenan a los sujetos al ciclo

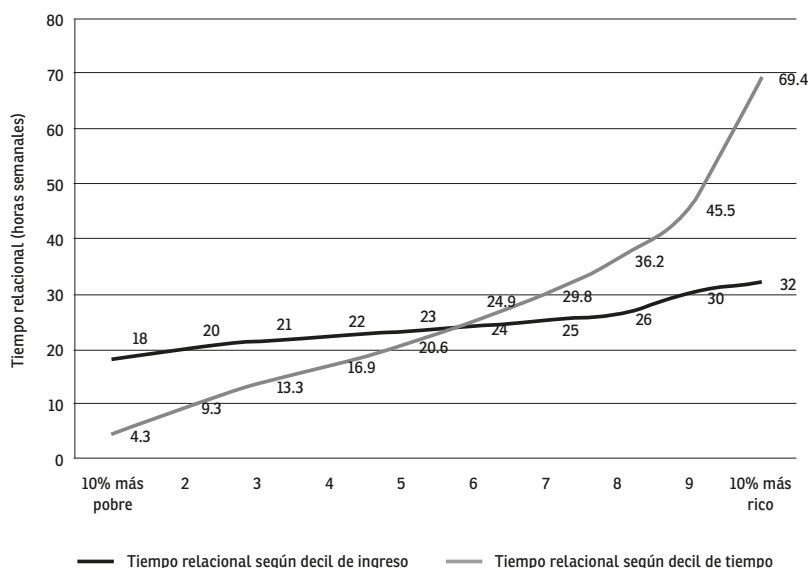
20. Para un análisis detenido del debate planteado en esta sección, véase Ramírez, 2012.

de exacerbación/frustración de los ideales, los placeres tiene un potencial emancipador porque convierten al sujeto de deseo en agente deseante; tienen así un beneficio político como una operación constructiva de socialidad; un beneficio educativo como una pedagogía para la felicidad; un beneficio utópico como una posibilidad anticipada que luego deviene actual; y un beneficio causal como motor de cambio histórico hacia la realización de ese bien.

Sacando las cuentas con esta nueva concepción vemos que el ecuatoriano promedio dedica aproximadamente 24 horas a la semana a los bienes comunes. Esto equivale a 14,3% de su promedio de vida. De este total, 59% es tiempo dedicado a la contemplación y autoconocimiento (14 horas); el 39% se dedica al amor y a la amistad (9,44 horas); y el 2% a la participación pública (0,47 horas). No obstante, si consideramos los comunes de acuerdo al ingreso, ya empezamos a notar diferencias significativas: los ecuatorianos del decil más rico por ingreso trabajaban 6 horas más, duermen 6,8 horas menos y tienen 37 horas menos de bienes comunes a la semana, en comparación con los ecuatorianos que se encuentran en el decil más alto con respecto a los bienes comunes.

Podríamos señalar que los ecuatorianos del 10% más rico por ingreso equiparan USD 467 mensuales con 199 horas mensuales de bienes comunes que podrían dedicar a trabajar menos, dormir más o disfrutar de lo que podríamos llamar “tiempo bien vivido”. Pero, ¿por qué sucede que a veces acumular más ingreso no significa vivir mejor? Porque la lógica de la acumulación nos aísla como individuos y nos induce siempre a querer más, a buscar lo mejor, lo nuevo, lo último; cada mercancía es producida con su fecha de caducidad, su obsolescencia programada. Es el idealismo de los deseos que empuja al consumidor a querer cada día ganar más, comprar más, experimentar más; a nivel macropolítico, cada país está obligado cada año a crecer más, producir más, vender más. Una persona que gana menos es un fracasado y un país que crece menos se encuentra en “crisis”.

Gráfico 7. Bienes comunes según deciles de ingreso y tiempo relacional, 2007



Fuente: Enemdu. Elaboración: Ramírez, 2012

¿A dónde nos conduce esta lógica incrementalista? El régimen de acumulación basado en la explotación del trabajo y la depredación de los recursos naturales se aproxima a sus límites: la concentración de la riqueza en pocas manos y el incremento de los riesgos vinculados con las explotación de la vida ha aumentado vergonzosamente la pobreza y las desigualdades, y está desgastando rápidamente el medio ambiente y los principios mismos de una democracia sustantiva. Es un sistema que, en un plazo no muy lejano, nos conducirá a la catástrofe. Por esto tenemos que pensar seriamente en reemplazar el idealismo de los deseos con el poder de los comunes, el ciudadano activo y responsable ha de desplazar al mero consumidor pasivo, inconsecuente. En este sentido, cabe añadir una consideración adicional.

Bien se vive, mientras se viva mucho y dignamente

Cuando nos referimos a los comunes mediante el indicador del “tiempo bien vivido”²¹ también introducimos una nueva dimensión en el análisis: el tiempo no es solo un indicador cuantitativo, sino que incluye una aspiración normativa, puesto que el tiempo de vida es finito y no acumulable. Si nos preguntan, inmediatamente decimos: quiero vivir mucho tiempo, y en los aniversarios deseamos que los festejados cumplan más años. Es decir que en esta esperanza de acumular lo inacumulable ya nos encontramos con un límite de la economía crematística, y por lo tanto podemos avistar ya un nuevo territorio inexplorado para la política del cambio radical.

Siguiendo esta intuición podemos considerar qué significó para el tiempo vital de los ecuatorianos el cambio histórico introducido por el proyecto neoliberal. Mientras en 1990 el promedio de horas trabajadas era de 43, en el período de auge neoliberal 1995-1997 el trabajo semanal promedio alcanzó 47 horas. Como se señaló antes, el proyecto neoliberal marcó una disyunción de la ciudadanía; demandó mayor mano de obra calificada, desplazando la mano de obra no calificada al sector informal. Los trabajadores con bajos niveles educativos, al ver que la demanda de mano de obra y sus ingresos laborales disminuían en comparación con los trabajadores calificados, se vieron obligados a trabajar más horas a la semana para compensar tal situación. Mientras un ecuatoriano con nivel de educación superior aumentó las horas de trabajo de 42 a 45 horas semanales, un trabajador con nivel primario de educación veía incrementar su tiempo laboral de 45 a 49 horas a la semana.²²

21. Para la propuesta metodológica, véase Ramírez, 2012.

22. Los datos no permiten considerar la autonomía de uso de este tiempo, ni sus contenidos y efectos sociales; por ello es preciso también pensar en la necesidad de nuevos métodos de cálculo e indicadores más precisos

En el período neoliberal observamos un aumento de 2,75 horas semanales de trabajo, por lo que podríamos señalar –simplemente de una manera descriptiva– que, además de incumplir la promesa de incrementar el consumo/utilidad de los ecuatorianos, el proyecto neoliberal también redujo su tiempo bien vivido en aproximadamente veinte minutos semanales (17,3 horas anuales). Si consideramos una población de entre 10 y 65 años, de alrededor de 6,7 millones de personas, podemos afirmar que durante el período 1987-2009 los ecuatorianos perdimos 116 millones de horas de tiempo bien vivido; o, en otros términos, el país perdió 88,4 millones de horas de bienes comunes. Esta pérdida del buen vivir hay que leerla en el contexto del incremento general del desempleo, el aumento de la pobreza y las desigualdades.

El buen vivir resulta así continuamente expropiado por condiciones estructurales de la propia sociedad, como las que involucran el repliegue del Estado y la expropiación de recursos estratégicos (como el petróleo), que indujo la privatización de bienes públicos como la educación superior (impagable y/o de baja calidad); lo que a su vez se tradujo en precariedad laboral y disyunción de la ciudadanía; la desregulación financiera que permitió el atraco bancario y la dolarización, y la subsecuente expulsión de la fuerza de trabajo migrante, la desarticulación de las familias y la corrosión de los vínculos sociales.

Pero la expropiación del tiempo bien vivido va mucho más allá, el paso acelerado de la innovación y la nueva división del trabajo social son las fuerzas propulsoras de una contracción del presente, en el que todo lapso en el cual podemos pensar, participar, amar y compartir en común con un mínimo de

para tomar decisiones de política pública (sobre esta cuestión véase Ramírez, 2012; especialmente el capítulo. 3. Con todo, el propósito aquí es más bien descriptivo e incitador.

constancia se acorta hasta fracciones exiguas. La expansión acelerada de las novedades conduce no solo a suprimir la historia colectiva, sino incluso a diluir la propia memoria, que con ello se vuelve incapaz de proveer guías para la actualidad. El propio presente se contrae en el sentido de que su importancia para el futuro declina; se pierde la racionalidad de lo actual y aumenta la impredecibilidad del porvenir.

En estas circunstancias, podemos cerrar provisoriamente el balance apuntando que la interpelación que ha permitido cimentar el proyecto de Revolución Ciudadana, a la par que otros proyectos progresistas en la región, no es producto solo de una imposición, sino que corresponde a una auténtica capacidad persuasiva. La prosa de la oposición todavía se articula a partir de la poesía revolucionaria fijada en la Constitución de 2008. En el contexto regional, el propio impulso contrahegemónico cobra fuerza cuando la misma derecha se tiene que presentar en público como posneoliberal. Así que en términos ideales, el socialismo del buen vivir ofrece el modelo político más avanzado del actual momento histórico. Pero, aunque ni la oposición ni la disidencia sean capaces de plantear alternativas reales, pueden apropiarse episódicamente de los sentidos del futuro.

Es decir que si bien la unificación general del campo político se realizará bajo la égida de la vida buena, esto no significa que la derecha no sea capaz de desplazar el espectro a su favor si la izquierda es incapaz de absorber orgánicamente las oposiciones y disidencias en su propia esfera, más allá del respaldo electoral que pueda obtener. Por eso cabe insistir en que una política revolucionaria no es aquella que nunca es derrotada; por otra parte, una política conservadora nunca luchará por el cambio. Una política revolucionaria no es una política sin reproche, sino ante todo una política cargada de futuro.

BIBLIOGRAFÍA

Fuentes primarias

- AP-Alianza Patria Altiva y Soberana (2006), *Plan de gobierno del Movimiento PAÍS 2007-2011. Un primer gran paso para la transformación radical del Ecuador*, Quito, fotocopiado.
- Armijos, Ana Lucía, & Marco Flores (1991), “Las políticas económicas aplicadas en la década de los ochenta: respuesta a la crisis”, en Rosemary Thorp, ed. *Las crisis en el Ecuador. Los treinta y ochenta*, Quito, Corporación Editora Nacional.
- Constitución de la República del Ecuador 2008. Disponible en: http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf
- Constitución de la República del Ecuador 1998. Disponible en: <http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Ecuador/ecuador98.html>
- CAIC-Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (2008). *Informe final de la Auditoría Integral de la Deuda Ecuatoriana. Resumen ejecutivo*. Disponible en: http://cadtm.org/IMG/pdf/Informe_Deuda_Externa.pdf
- CAIC-Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (1991). “Los programas de ajuste de la última década”, en Rosemary Thorp, ed. *Las crisis en el Ecuador. Los treinta y ochenta*, Quito, Corporación Editora Nacional.
- Harnecker, Marta (2011), *Ecuador: una nueva izquierda en busca de la vida en plenitud*, (Libro de entrevistas con varios actores de izquierda durante el período 1990-2010.) Madrid, El viejo topo.
- Lasso, Guillermo (2014). “No creo en un modelo en el que el Estado es rico y el ciudadano es pobre”. En: *Libre mercado*.

Disponible en: <http://www.libremercado.com/2014-04-27/guillermo-lasso-no-creo-en-un-modelo-en-el-que-el-estado-es-rico-y-el-ciudadano-es-pobre-1276516860/>

Lucero V., Esteban, & Mauricio Pozo (1998), *El rol del Estado en la política macroeconómica y el sistema financiero*, Informe del Proyecto Mosta presentado al Consejo Nacional de Modernización, febrero, Quito, fotocopiado.

Odeplan-Oficina de Planificación de la Presidencia de la República (1998), *Plan Estratégico de Desarrollo y Seguridad Nacional "Ecuador 2025"*, Quito, Editorial Voluntad.

Pacheco, Lucas (2015 [1991]), *La primera evaluación de la universidad ecuatoriana, 1980-1988*, Quito, Consejo de Educación Superior.

Rodas Chaves, Germán (2000), *La izquierda ecuatoriana en el siglo XX. Una aproximación histórica*, Quito, Abya-Yala.

Fuentes secundarias

Arrighi, Giovanni (1994), *The Long Twentieth Century. Money, Power, and the Origins of Our Time*, Londres, Verso.

Birk, Nanna (2009), *The Participatory Process of Ecuador's Constituent Assembly 2007-2008*, Tesis de maestría presentada en la Universidad de Ámsterdam.

Campuzano Arteta, Álvaro (2005), "Sociología y misión pública de la universidad en el Ecuador: una crónica sobre educación y modernidad en América Latina", en Pablo Gentili y Bettina Levy, eds. *Espacio público y privatización del conocimiento: Estudios sobre políticas universitarias en América Latina* (pp. 401-462). Buenos Aires, Clacso.

Chang, Ha-Joon & Ilene Grabel (2004), *Reclaiming Development: An Alternative Economic Policy Manual*, Londres, Zed Books.

- Conaghan, Catherine M. (2012), “Prosecuting Presidents: The Politics within Ecuador’s Corruption Cases”, en *Journal of Latin American Studies*, vol 44, n°. 04: 649-678.
- Gudynas, Eduardo (2009), “Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual”, en VV.AA, *Extractivismo, política y sociedad* (pp. 187-225), Quito, Centro Andino de Acción Popular & Centro Latinoamericano de Ecología Social.
- Errejón, Íñigo, & Guijarro, Juan (2015), “Post-Neoliberalism’s Difficult Hegemonic Consolidation. A Comparative Analysis of the Ecuadorean and Bolivian Processes”, en *Latin American Perspectives*, vol. 43, n°. 1: 34-52.
- Foray, Dominique (2006), *The Economics of Knowledge*, Cambridge, The MIT Press.
- Innerarity, Daniel (2009), *Una defensa de la esperanza política*, Barcelona, Paidós.
- Lucio Paredes, Pablo (2000), “Sistema financiero y mercado”, en Fernanda Cañete, ed. *La crisis ecuatoriana: sus bloques económicos, políticos y sociales*, Quito, Cedime.
- Pachano, Simón (2008), *La trama de Penélope. Procesos políticos e instituciones en Ecuador*, Quito, Flacso.
- Pachano, Simón (2006), “Ecuador: Fragmentation and Regionalization of Representation”, en Scott Mainwaring, Ana María Bejarano & Eduardo Pizarro, *The Crisis of Democratic Representation in the Andes*, Stanford, Stanford University Press.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD (2016), *Informe regional sobre desarrollo humano para América Latina y el Caribe*, Disponible en: http://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/library/human_development/informe-regional-sobre-desarrollo-humano-para-america-latina-y-e.html
- Polanyi, Karl (1944), *The Great Transformation*. Nueva York: Farrar & Rinehart.

- Porras, Angélica (2009). “Las reformas laborales en el Ecuador”, en *¿Estado constitucional de derechos? Informe sobre derechos humanos en Ecuador 2009*, (pp. 315-329), Quito, Abya-Yala.
- Ramírez, René (2016), *La paradoja del bienestar objetivo y el malestar subjetivo*, en prensa.
- Ramírez, René (2014), *La virtud de los comunes. De los paraísos fiscales al paraíso de los conocimientos abiertos*. Quito, Abya-Yala.
- Ramírez, René (2012), *La vida (buena) como riqueza de los pueblos*, Quito, Instituto de Altos Estudios Nacionales.
- Ramírez, René (2010), “La desigualdad en Ecuador en el contexto macroeconómico, 1990-2006”, en *Igualmente pobres, desigualmente ricos* (pp. 125-149), Quito, Ariel.
- Ramírez, René, & Analía Minteguiaga (2010), “Transformaciones en la educación superior ecuatoriana: antecedentes y perspectivas futuras como consecuencias de la nueva Constitución política”, en *Educación superior y sociedad*, vol. 15, n.º. 1: pp. 129-154.
- Rifkin, Jeremy (2014), *The Zero Marginal Cost Society. The Internet of Things, the Collaborative Commons, and the Eclipse of Capitalism*, Nueva York, Palgrave Macmillan.
- Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología–Senescyt & Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual–IEPI (2016), *Primer informe sobre biopiratería en el Ecuador*. Disponible en: <http://bio024.businesscatalyst.com/assets/reporte-29-de-junio-12-43.pdf>.
- Svampa, Maristella (2013), “El consenso de las commodities y lenguajes de valoración en América Latina”, en *Revista Nueva Sociedad*, No. 244: 30-46.
- Vos, Rob; Taylor, Lance & Paes de Barro, Ricardo (2002), *Economic Liberalization, Distribution and Poverty: Latin America in the 1990s*, Cheltenham, RU, Edward Elgar.

Bases de datos

Boston Consulting Group (2015), *Why Well-Being should drive Growth Strategies*. Disponible en <https://www.boyden.com/mediafiles/attachments/9820.pdf>

CAAP-Centro Andino de Acción Popular. Base de datos de conflictividad social publicados en la revista *Ecuador Debate* (serie 1983-2010). Disponible en: <http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/browse?type=author&value=Centro+Andino+de+Acci%C3%B3n+Popular+%28CAAP%29>

CNE-Consejo Nacional Electoral. Estadísticas electorales 2006-2014. Disponible en: <http://cne.gob.ec/es/resultados/estadisticas>.

Enemdu-Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo. Disponible en: http://www.inec.gob.ec/estadisticas/?option=com_content&view=article&id=130&Itemid=108

Latinobarómetro (2015). Base de datos disponible en: <http://www.latinobarometro.org/latContents.jsp>.

CONSTANZA MOREIRA

La porfiada voluntad de un proyecto: la izquierda uruguaya en la encrucijada latinoamericana

Hace diez años apenas, toda América del Sur parecía destinada a convertirse en un continente progresista; había gobiernos de centro-izquierda, izquierda o “progresistas” en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Colombia parecía quedar aislada, y en Perú resultaban casi inclasificables los gobiernos de Alan García u Ollanta Humala. Florecían los proyectos de integración latinoamericana, la región experimentaba un crecimiento económico sostenido y se hablaba de la “década ganada” por oposición a la “década perdida” de los años ochenta.

Hoy se empieza a escuchar hablar del “fin del ciclo” progresista. La ominosa ceremonia de destitución de Fernando Lugo en Paraguay en 2012, el *impeachment* llevado a cabo contra Dilma Rousseff en 2015, la victoria de Mauricio Macri en las elecciones de 2015 en Argentina, el triunfo de la oposición en las elecciones parlamentarias de Venezuela el mismo año, y

la derrota en las urnas por primera vez de Evo Morales en el plebiscito de 2016, son las señales, para muchos, de un ciclo agotado. Más allá de la evidente intencionalidad política de este juicio, que nos retrotrae inevitablemente a la idea de “fin de la historia” de Fukuyama (1989), es evidente el repunte de las derechas latinoamericanas dispuestas a recuperar el control del Gobierno nacional por las buenas (Argentina) o por las malas (Brasil), en un contexto de desaceleración económica de América Latina y, en muchos casos, de recesión lisa y llana.

La caracterización de la década que pasó es un paso fundamental para comprender la índole del proceso en ciernes. Especialmente porque no todo lo identificamos con la “izquierda”, y las anteojeras ideológicas del pasado (y los prejuicios, y el parroquialismo) nos impidieron comprender la profundidad y el alcance del proyecto que se construía. También el hecho de menospreciar procesos de cambio más atados a liderazgos que a partidos, de no comprender cabalmente el fenómeno del “populismo latinoamericano”, y el de haber sido, con suerte, constructores de teoría al mismo tiempo que estábamos en el corazón de la praxis, contribuyeron a que no exista un corpus de ideas más o menos sistematizada sobre lo que fue el “giro a la izquierda” en la región. Esto ocurre en circunstancias en las que ya deberíamos estarnos preguntando cómo afrontar la reversión conservadora que se está procesando en muchos de nuestros países.

La década larga del progresismo latinoamericano

Desde la asunción del gobierno de Luiz Inácio “Lula” da Silva en Brasil, en 2003, y tras la celebración de la V Cumbre de Líderes Progresistas ese mismo año en Londres, que reunió a líderes políticos de centro-izquierda en el seminario de Gobernanza Progresista, en el que Lula fue la estrella principal, se había comenzado a usar la expresión “gobiernos progresistas” para

designar los sucesivos triunfos de Lula en Brasil (2002), Néstor Kirchner en Argentina (2003) y Tabaré Vázquez en Uruguay (2004). Claro está que antes de ello existía el antecedente de la Concertación en Chile (desde 1990) y el triunfo de Hugo Chávez en Venezuela (en 1998). Pero como ambas izquierdas representaban opciones tan distintas –a la primera se la consideraba una coalición entre un partido de centro (Partido Demócrata Cristiano) y un partido de izquierda (Partido Socialista), que difícilmente podía ser considerada “de izquierda”, y a la segunda se la tachó rápidamente de “populismo”–, la expresión “giro a la izquierda” no se usó, sino hasta que Lula, Kirchner y Tabaré ganaron las elecciones en el Cono Sur. Y eso, a pesar de que lo que vendría a ser luego el fenómeno del “kirchnerismo” nunca fue adoptado por las izquierdas como propio, sino como un fenómeno hasta cierto punto ajeno, con el que resultaba difícil identificarse. La propia crítica de la izquierda al populismo, el apego a los formatos partidarios clásicos y la difícil identificación de la izquierda con lo “nacional-popular”, hicieron que muchas veces la inclusión de estas experiencias dentro de un campo común no estuviera disponible, ni en el campo del periodismo, ni en el de las ciencias sociales latinoamericanas (aunque en la práctica, fueron los propios Gobiernos los que construyeron una perspectiva latinoamericana común y compartida).

Con las victorias del Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil, del peronismo (revisitado) de Kirchner en Argentina, y de Tabaré Vázquez en Uruguay, la expresión “giro a la izquierda” se hizo común, e incluso más después del triunfo de Evo Morales en Bolivia (2005), de Rafael Correa en Ecuador (2006) y más tarde de Fernando Lugo en Paraguay (2008).

Sin duda, la victoria de Evo Morales representó un hito inédito: no solamente gobernaba un indígena, sino que lo hacía por una amplísima mayoría, tan repetida en los años siguientes que volvería obsoleta la costumbre de apelar al mecanismo de elección indirecta para elegir presidente, costumbre instaurada

como regla a lo largo de la “tercera ola” de la democracia boliviana. Ese indígena aimara, expulsado del Congreso tres años antes de convertirse en presidente, y que representaba a la porfiada Bolivia cocalera, sobreviviente de años de una política de erradicación de sus cultivos llevada a cabo por Estados Unidos a cambio de sostener buena parte del gasto de las arcas del Estado, se transformó no solo en el principal líder del país, sino en un referente internacional de la lucha de los pueblos originarios por “descolonizar” América Latina.

El triunfo de Correa en Ecuador tuvo similitudes con lo sucedido en Paraguay y con Bolivia al mismo tiempo. A pesar del diferente carácter del protagonista principal –un economista, no devenido del cerno de las “clases populares” como en Venezuela, Bolivia, Brasil o Paraguay–, este país consigue su estabilidad democrática recién con Correa. Recordemos que Abdalá Bucaram (1996-1997) había sido destituido por “incapacidad mental”, Jamil Mahuad (1998-2002) había renunciado y también Lucio Gutiérrez (2003-2005). Desde su triunfo hace una década, Correa ha logrado no solo culminar el mandato, sino retener por tres veces el gobierno, consolidado una alianza política sólida, a pesar de haber partido de la circunstancia inédita de ser elegido sin bancada parlamentaria propia.

Dos Estados nacionales a los que con gusto se les hubiera llamado “estados fallidos”¹ (clasificación nada inocente, puesto que siempre conllevó la justificación de una intervención externa), se recuperaron gracias a mandatarios fuertemente identificados con planteos de izquierda, nacionalistas

1. El término “estado fallido” fue originalmente introducido en el campo académico por Helman y Ratner (1993), para referirse a un Estado que, a pesar de ser formalmente soberano, adolece de gran debilidad y falla en la garantía de la provisión de bienes políticos y servicios básicos a su población. La comunidad científica ha considerado como mínimo “ambiguo” a este término, y la caracterización ha servido para justificar pretensiones intervencionistas.

y populares. Jamás los inventores de la idea de los “estados fallidos”, por supuesto, dijeron una sola palabra a este respecto.

Dos años después, en 2008, asistíamos a lo que parecía imposible: la victoria de Lugo en Paraguay poniendo fin a 61 años de hegemonía colorada. Este cura de la teología de la liberación no solo era un candidato insólito para un país acostumbrado a políticos estancieros, empresarios o militares, sino que ascendió casi sin partidos (en un país donde los partidos datan del siglo XIX), y lo hizo en base a un carisma propio, que desarrolló empatía al mismo tiempo con los pobres urbanos, el campesinado marginado y las juventudes universitarias. Habiendo conseguido unos pocos escaños en el Senado y en la Cámara de Diputados, el triunfo de Lugo duró poco (fue rápidamente sometido a juicio político en 2012), pero mientras duró, alumbró los oscuros rincones de la política paraguaya, despertó expectativas políticas que parecían dormidas, movilizó decenas de miles de paraguayos a lo largo y a lo ancho del país, y puso en jaque a un *statu quo* político que parecía inamovible. América Latina “descubrió” Paraguay, durante los menos de cuatro años en los que Lugo logró sacar al país de su aislamiento político e intelectual, y de su resignación social y cultural.

A la confirmación de estos gobiernos se sumaron algunos otros cambios: la construcción del fenómeno “K” en Argentina con la presidencia de Néstor Kirchner primero y de Cristina Fernández por dos períodos consecutivos después; el cambio en la Concertación en Chile (con un corrimiento a la izquierda, producto del mayor peso del Partido Socialista en ella –con las presidencias de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet– y de la posterior incorporación del Partido Comunista –a través de la carismática figura de Camila Vallejo, exreferente del movimiento estudiantil–; la aparición del “fenómeno Mujica” (sumando Uruguay al rostro popular de la América Latina en construcción), y el cambio de Lula por Dilma en Brasil (evidenciando que el PT venía a consolidarse como opción política, más allá de sus referentes).

La larga década del “progresismo” latinoamericano vino acompañada de un crecimiento sin precedentes², producto, entre otras cosas, de un aumento en los precios de las materias primas de las que dependen economías latinoamericanas de débil o precaria industrialización. También la región fue receptora de inversión extranjera directa³, producto de la crisis de las economías del Norte. China ayudó a nuestro despegue transformándose en el principal inversor de la región, y Estados Unidos perdió peso, económicamente primero y políticamente después. Con ello ganamos algunos grados de libertad, lo que unido a políticas “progresistas” de diversa entidad, permitió reducir la vulnerabilidad económica de nuestros países, ganar grados de libertad en el manejo de nuestras variables macroeconómicas, mejorar el salario y las condiciones de vida de los trabajadores⁴, y reducir la pobreza y la desigualdad⁵ que dejaron de ser la “marca” de nuestra existencia como región.

El “viento de cola” no lo explicó todo; la mayoría de los resultados económicos y sociales son explicados por un golpe de timón en la política de estos países que pasaron de la desregulación a la regulación laboral, de la apertura indiscriminada al proteccionismo, de la privatización a la reapropiación de activos públicos, del “libre juego del mercado” a la intervención decisiva del Estado, de medidas únicamente orientadas a mejorar el “clima de negocios” a medidas orientadas a la protección de

-
2. El PIB total de América Latina y el Caribe alcanzó un pico de 6,2% en 2010 (Cepal 2015).
 3. La inversión extranjera directa neta en América Latina y el Caribe pasó de USD 34.250 millones en 2006 a USD 137.435 millones en 2014 (Cepal 2015).
 4. El desempleo en América Latina y el Caribe cayó del 11,2% en 1999, al 6,2 en 2014 (OIT 2013, 2014).
 5. El porcentaje de personas en situación de pobreza en América Latina pasó del 43,9% en 2002, al 28% en 2014 (Cepal 2014). En tanto, la desigualdad media por el Índice de Gini se redujo del 0,547 en 2002 al 0,497 en 2013 (Cepal 2014).

los derechos de los trabajadores, de la restricción de las capacidades organizativas del campo popular a su promoción activa y su reconocimiento, y en fin, de la “economía decide” a la “política decide”. Esto sustrajo a América del Sur de su condición de región subordinada y la insertó en el mapa del mundo como un “global player”: se la escuchó claro y distinto en el mundo en campos de política muy diversos: drogas, patentes, comercio, derechos humanos, regulación financiera y democracia.

Las discusiones sobre qué significaba ser un “gobierno de izquierda” se dieron interminablemente en estos años. Más allá del cariz propiamente político que tomaron las mismas (el que diferenció, por ejemplo entre “buenas” izquierdas –responsables, socialdemócratas– y “malas” izquierdas –populistas– ⁶), hubo interminables discusiones dentro del propio campo de la izquierda. Para muchos un gobierno debía ser calificado “de izquierda” atendiendo a la orientación ideológica de su constitución partidaria; un gobierno de izquierda sería aquel que esté conducido por partidos de izquierda. Pero esto no resolvía el problema de gobiernos conducidos por partidos de izquierda pero completamente condicionados por coaliciones dentro de las cuales se podía encontrar partidos más de centro, o de derecha (como en Brasil o en Chile), y menos aun la de gobernantes claramente identificados “a la izquierda” sin partido en el momento de asumir (como Correa en su inicio). Peor aun, gobiernos de corte “nacional-popular” como los del kirchnerismo, sin clara identificación con las izquierdas pero con una agenda, programa o políticas claramente de izquierda, no hubieran entrado nunca en esta definición.

Hoy nos damos cuenta de la futilidad de estas precisiones, que debieran haber servido más para avanzar en el conocimiento de nuestros diversos proyectos políticos, que para

6. Vale recordar la metáfora que, en su momento, Álvaro Vargas Llosa utilizó para caracterizar a las “izquierdas vegetarianas” (Brasil, Chile, Uruguay) y las “izquierdas carnívoras” (Bolivia, Ecuador y Venezuela).

diferenciarnos los unos de los otros. Sobre todo, cuando vemos las amenazas de privatizaciones en Brasil, la reducción de empleos públicos en Argentina, el tratamiento dado a los llamados “fondos buitres” por Macri, el talante de sus gabinetes (completamente empresarial en Argentina, o completamente blanco y masculino en Brasil), la preferencia por sus políticas (aumento de tarifas públicas, eliminación de subsidios, reducción de derechos laborales, etcétera) y sus preferencias en materia de política exterior (alianza con Estados Unidos, reducción de los acuerdos regionales a meros tratados comerciales, medidas de apertura y negociación de tratados de libre comercio con los “grandes”, o incluso peor, pedidos de discriminación de los gobiernos de izquierda en el Mercosur y aislamiento de Venezuela). Es tan fácil identificar a la derecha, que debiera ser igualmente fácil identificar lo que entra en el campo de “la izquierda”, incluso cuando debamos renunciar a este concepto e inventar otro nuevo.

Es que hemos hecho izquierda sin tener una teoría, o tan siquiera una guía muy precisa o una estrategia definida. Sabíamos la magnitud de los problemas que enfrentábamos, y los enfrentamos con coaliciones más o menos abiertas (como en Brasil o Chile), con presidentes más o menos fuertes (como Chávez o Correa), o con partidos más estructurados y dueños de sus propias bancadas parlamentarias (como en Bolivia o Uruguay). Las relaciones con los aliados del campo social o cultural no fueron del todo fáciles, pero en general, los gobiernos de izquierda les abrieron un frente de garantías institucionales y organizativas que les permitieron a las organizaciones potenciarse (entre otros, defensa de los fueros sindicales, ampliación del derecho de protesta, débil intervención policial en las manifestaciones públicas, o incorporación de organizaciones sociales en la definición o ejecución de la política pública). En contrapartida, las organizaciones y movimientos sociales nos recompensaron con su fuerza y capacidad de movilización y

mostraron ser los últimos aliados cuando llegó la hora de la derrota.

Frente a todo esto nos movimos con la misma brújula sin saberlo: desafiamos al poder de los grandes medios de comunicación (se promovieron ambiciosas leyes en Argentina, no tan ambiciosas en Uruguay, y en Venezuela, Bolivia o Ecuador los Gobiernos decidieron generar sus propios medios informativos); recuperamos activos públicos (en Bolivia la nacionalización de los hidrocarburos, en Paraguay la negociación por la represa de Itaipú, en Argentina la estatización de Aerolíneas y la seguridad social, en Venezuela la negociación por Pdvsa entre otros); mejoramos las condiciones de vida de los trabajadores aumentando el salario real, formalizando empleo, aumentando el salario mínimo⁷, incrementando considerablemente la inversión pública, recuperando soberanía y fortaleciendo nuestros estados nacionales.

La práctica política precedió a la teoría, como casi siempre. Se fueron abordando problemas mientras la ciencia política y la economía reaccionaron tardía y tibiamente a involucrarse en una cierta teorización del “éxito latinoamericano”. Una parte pretendió mantenerse abiertamente separada de todo esto, usando la “teoría” sobre el populismo en forma arbitraria para descalificar las experiencias de Venezuela, Bolivia y Ecuador, para diferenciarlas de las más “serias” de Brasil, Chile o Uruguay.

Los intelectuales que nos involucramos en política apenas tuvimos tiempo para pensar y teorizar sobre la marcha. Aprendimos en la práctica algunas cosas: que no existe un *trade off* entre salario y empleo, ni tampoco entre empleo y formalización. Hoy sabemos que la inversión pública y el consumo

7. El promedio ponderado del Índice de Salarios Medios Reales para América Latina pasó de 115,7 (2005) a 158,4 (2014) (Año 2000 = 100) (OIT 2015: 135).

interno son fuertes dinamizadores de la economía y que no hay redistribución posible si solo se grava a los trabajadores. Y que no se puede gravar al capital si no tenemos información sobre la propiedad de activos y la rentabilidad de las empresas. Y que se vuelve muy difícil hacer esto sin una reforma tributaria que enfrentará la resistencia de los grandes e involucrará a las clases medias volviéndola tremendamente impopular. Pero que hay que hacerla, puesto que no seremos capaces de sostener ninguna redistribución posible si no hay un importante crecimiento económico. Y la izquierda debe estar preparada también para épocas de escasez.

Hoy sabemos que las experiencias de la democracia directa no solo no se contrapusieron a la democracia participativa, sino que aumentaron la satisfacción con la democracia en todo el mundo, y que los gobiernos de izquierda mejoraron la calidad y extensión de los derechos de las mujeres, los trabajadores, los indígenas y los negros en toda la región. Sabemos que fuimos ejemplo de resistencia al “neoliberalismo” mientras Europa enfrentaba un ajuste brutal. Nos desembarazamos del Fondo Monetario Internacional, recuperamos Cuba, descalificamos a George W. Bush públicamente sin preocuparnos por las represalias, ganamos grados de libertad relativa con la política policial y económica de Estados Unidos, desafiamos el modelo prohibicionista de las drogas en las convenciones internacionales, plantamos coca y legalizamos la marihuana, tuvimos la tasa más alta de presidentes mujeres de América Latina y el segundo promedio más alto de participación femenina en Parlamentos después de Europa.

Inventamos el Estado plurinacional y la descolonización doscientos años después de nuestros procesos de independencia. Desempolvamos a Bolívar, a Artigas y a San Martín. Recuperamos la noción de lo “nacional-popular”, nos reconocimos negros e indígenas, superamos la crisis de desempleo creando millones de empleos y reformamos la seguridad social para que los derechos no fueran más dependientes del empleo

formal. Reconocimos que el Estado siempre debe ayudar a los pobres, y que eso significa ayudar a mujeres y niños a quienes dimos la titularidad de tierras y crédito a lo largo y a lo ancho del continente. Creamos nuestras propias organizaciones, como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), o el Banco del Sur y pusimos líderes progresistas al frente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que intentó sin mayor éxito, volver a incorporar a la Cuba separada.

El mundo nos miró con asombro y admiración, también con escepticismo, y abrió un compás de espera. Tuvimos héroes, príncipes modernos, al decir de Maquiavelo, que ascendieron no por fortuna o herencia familiar, sino por pura inteligencia y voluntad, y sintonizaron con el pueblo como no lo había hecho la política tradicional desde hacía décadas. Los Chávez, los Kirchner, los Evo, los Mujica, las Cristinas hipnotizaron audiencias, sembraron esperanzas en el corazón del pueblo, y revivieron la rebeldía aletargada y largamente reprimida por las armas primero y la economía después.

Mientras tanto la derecha se rearmó; tuvo tiempo, aliados, recursos. Contaron con los medios de comunicación y el Poder Judicial, y se crearon nuevos socios que no estaban en la vieja formulación de la izquierda sobre “la oligarquía” (identificada entonces por los propietarios del capital, el imperialismo, la banca internacional y el gran empresariado nacional y transnacional). Allí donde la política avanzaba, el derecho frenaba. Allí donde el impulso contracultural de músicos, escritores, artistas, maestros, profesores, intelectuales deconstruía la “ideología dominante”, los medios de comunicación la sembraban en informativos, telenovelas y titulares. La concentración de la izquierda en la labor de gobernar, su apartamiento de sus bases sociales, sus alianzas –siempre fracasadas– con la derecha, sus concesiones al gran capital, las dificultades de avanzar en un proyecto regional que permitiera superar las limitaciones de los acotados mercados de capitales y la

fragilidad de las cadenas de valor nacionales, fueron parte de sus debilidades.

En Brasil y Argentina, la izquierda ha sufrido un gran revés. El Paraguay de Lugo ha retrocedido, si no al punto de partida, al de antigua guarida de élites depredadoras. Colombia y Perú siguen derroteros que profundizan la dependencia con Estados Unidos y se alían junto con Chile, en la Alianza del Pacífico que los aparta de una América Latina unida. México está lejos y aislado de nosotros. América Central libra su propia lucha con gobiernos de izquierda en Cuba, Nicaragua y El Salvador. Aquí en el sur, Evo perdió la posibilidad de ser reelegido y Bolivia necesita afirmar un liderazgo capaz de mantener todo unido, mientras Correa enfrenta la resistencia creciente de una impopularidad asentada en las clases medias y en algunos movimientos de base que no logran alinearse con las políticas de Gobierno.

Frente a este *impasse* que viven las izquierdas latinoamericanas, y viendo cuán lejos quedan nuestras diferencias frente al avance de la derecha, es necesario hacer un balance de nuestros aciertos y nuestros errores, sin concesiones, sin indulgencias, y con la urgencia que la hora imprime.

Uruguay enfrenta hoy una encrucijada particular: los gobiernos del Frente Amplio (FA) transformaron estructuralmente al país. Desde los años cincuenta, no habíamos tenido una década larga de crecimiento, con aumento de empleo, reducción de la pobreza y avance lento pero firme en salud, educación y derechos. El Partido Colorado (PC), que fue el partido protagónico de la construcción del Uruguay a lo largo del siglo xx, hoy se encuentra en su mínima expresión. El FA y el movimiento sindical son las bases de organización de la acción colectiva de los sectores populares en Uruguay. Pero hoy el país se encuentra ante la posibilidad de un ciclo recesivo; el Gobierno ensaya un “ajuste” en clave progresista (no reduce el gasto, y busca aumentar la recaudación, gravando en forma progresiva), y el FA no sale de un cierto marasmo político, producto de estar

entre un Gobierno muy tironeado “por derecha” y unas bases sociales que expresan desencanto por lo que consideran logros insuficientes y precarios de una década larga de administración frenteamplista.

Aun así, y con tres años largos de gobierno por delante, con mayorías parlamentarias propias, y con una economía que todavía sigue estable y sin grandes problemas estructurales, Uruguay deberá seguir siendo una vela prendida al socialismo en este lado del mundo. Si la política exterior o económica del país (en manos de los sectores del FA menos a la izquierda) no juegan un papel a la altura de este desafío, y van defecionando en sintonía con las derechas de la región, habremos perdido todo: la izquierda uruguaya habrá perdido su propia convicción, y la izquierda latinoamericana, un aliado.

Uruguay en la alborada de su cambio

En 2004, por primera vez en su historia, un partido diferente al de los “fundacionales” de la historia del país, el Partido Colorado (PC) y el Partido Nacional (PN), ganaba las elecciones en el Uruguay. Lo hacía por razones propias y ajenas. Las ajenas reflejaban el devastador resultado que había tenido la crisis de 2002 sobre los partidos que habían compartido poder desde el siglo XIX, y que no fue entendida por el electorado como una crisis más sino como el corolario de medio siglo de estancamiento. Las razones propias del éxito refieren a la acumulación política que fue capaz de hacer, luego de su aparente aniquilación por la dictadura, el FA, el movimiento sindical y las organizaciones sociales y políticas del campo popular.

Para entender el largo proceso que termina con la crisis de 2002 y desplaza a los partidos tradicionales en Uruguay de su condición protagónica en la arena política, debemos hacer un poco de historia. Luego de la “década de oro” de 1950, el Uruguay moderno, secularizado y democráticamente ejemplar,

se encontraba en franco deterioro. La crisis de estancamiento que comienza a fines de la década de los años cincuenta conduce a la radicalización política de los sesenta (con la consolidación política del movimiento sindical en una sola central; la emergencia del grupo guerrillero Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros –MLN-T–, y la creación en 1971 del FA), y a la respuesta represiva de los setenta, que termina con el golpe de Estado en 1973.

El impacto de la dictadura en Uruguay es tremendo en todos los aspectos. En primer lugar, es una dictadura brutalmente represiva, con una tasa de presos políticos que ostenta ser la más alta de América Latina, con prisiones que se prolongan por décadas, con torturas sistemáticas en las cárceles, práctica del terror sobre la población civil a lo largo del período, represión de todas las libertades civiles, proscripción de todos los partidos políticos e ilegalización de todas las organizaciones sindicales. En segundo lugar, es un fracaso económico; profundiza la crisis, aumenta la desigualdad en el país más igualitario de América Latina, consolida bolsones de pobreza que se revelarán en los años siguientes inmunes a cualquier crecimiento, y reduce el crecimiento y el empleo. Esto, unido a lo anterior, provocará migraciones masivas de uruguayos al exterior, lo que se conoce como “la diáspora” uruguaya. Durante la dictadura se produce una verdadera transformación estructural de nuestra economía, con la apertura comercial “al mundo”, la liberalización financiera (se privatiza la banca pública y comienza a extranjerizarse la banca privada) y la privatización de activos (Olesker 2001), entre otros.

La transición a la democracia en Uruguay en la primera mitad de los años ochenta, dejó un regusto amargo. Si bien habíamos recuperado las libertades civiles y políticas, le habíamos dicho “NO” a la propuesta de reforma constitucional de

los militares⁸, y estos habían acabado cediendo el control del Gobierno; las elecciones de la transición se hicieron con la proscripción de los principales líderes políticos del PN y del FA, alzándose una vez más con la victoria el PC (habiendo sido el presidente colorado, Juan María Bordaberry, quien había dado el golpe de Estado de 1973). Se le llamaba la “restauración democrática”: parecía que el Uruguay que emergía luego de la larga década de la dictadura (1973-1985) era igual al que había sucumbido a ella.

Aún permanecían intocadas muchas instituciones “intervenidas” por la dictadura (como las propias Fuerzas Armadas), y tibiamente cambiadas otras, como el Poder Judicial. Los pactos emanados de la llamada Concertación Nacional Programática (Conapro)⁹, que había convocado a decenas de organizaciones de la sociedad civil a discutir sobre las principales reformas a ser acometidas por el Gobierno que se instalara, y que sirvieron de base para la movilización popular durante la transición, amenazaban con quedar sin efecto. La salida de la dictadura había sido “pactada” y protagonizada por el PC, que finalmente

-
8. En noviembre de 1980 se celebró un plebiscito constitucional promovido por el régimen cívico-militar que se encontraba en el gobierno, con miras a reformar la Carta Magna y, entre otras cosas, institucionalizar la participación de las FF. AA. en el poder. A pesar de las condiciones fuertemente adversas en las que se llevó adelante la consulta popular, la oposición a la dictadura se impuso en las urnas con el 57% de los sufragios, rechazando así el proyecto de reforma.
 9. La Conapro fue un ámbito multipartidario y multisectorial creado a fines de la dictadura con el propósito de formular propuestas para resolver los principales problemas que abatían al Uruguay de la época. El espíritu era que esas propuestas se pusieran en marcha a partir de la asunción del nuevo gobierno democrático en 1985, independientemente del partido político que triunfara en las elecciones. La Conapro estuvo compuesta por el PC, el PN, el FA, la Unión Cívica y diversas fuerzas sociales, gremiales y empresariales. Previamente a los comicios de la transición, en 1984, los presidenciables de los cuatro partidos firmaron los acuerdos de la Conapro.

había triunfado en las elecciones de 1984. Nada más asumir, se había buscado con ahínco una amnistía para los militares acusables de violaciones a los derechos humanos, y esta no solo había triunfado por acuerdo del PN y el PC, sino que los intentos del FA y del movimiento sindical por derogar la denominada “Ley de Caducidad” (así se llamó la ley de amnistía) habían perdido en las urnas, y por una buena diferencia. El país parecía otro. Un país domesticado.

La década larga de los noventa que se inicia tras el fin de la dictadura y el triunfo del FA en el gobierno del departamento de Montevideo, el principal distrito electoral del país, está caracterizada por un doble movimiento pendular: por un lado, el afán de las administraciones blancas y coloradas por impulsar su agenda de “reforma económica” bailando al son de las recomendaciones de los organismos internacionales y las presiones liberalizantes del FMI, y por el otro, la resistencia del FA, el movimiento sindical y sus organizaciones aliadas. El período bien puede ser caracterizado por la famosa frase del intelectual uruguayo Carlos Real de Azúa “el impulso y su freno”¹⁰: a los impulsos reformistas del Gobierno se oponían mecanismos de democracia directa usados para impedir o frenar iniciativas liberalizantes¹¹ o promover iniciativas soberanistas¹². Durante

-
10. El clásico libro de Real de Azúa (1964) plantea que las reformas progresistas impulsadas por el llamado “primer batllismo” (1903-1933), y continuadas luego por sucesivas administraciones también coloradas –particularmente por los gobiernos del llamado “segundo batllismo” (1946-1958)– a pesar de los avances que significaron traían consigo su propio freno.
 11. Como el referéndum de 1992, que derogó la llamada “Ley de Empresas Públicas”, que habilitaba la privatización parcial de Antel, la empresa de telecomunicaciones estatal, y el referéndum de 2003, que derogó una ley que autorizaba la asociación con privados de la empresa de combustibles Ancap, y eliminaba su monopolio en la importación de combustibles.
 12. Ejemplo de ello fue el triunfo del llamado “Plebiscito por el Agua” en 2004, por el cual se aprobaron por la vía de la reforma constitucional una serie de normativas sobre el derecho y el uso de los recursos hídricos del país.

este período la izquierda cobró fuerza, los partidos Nacional y Colorado se debilitaron, el Frente Amplio duplicó su electorado entre 1989 y 1999, y a pesar de que una reforma política le impidió alzarse con el Gobierno en 1999, cuando ya era el partido más grande del sistema, consagró su triunfo definitivo en 2004.

Las razones propias del triunfo no tienen que ver con el desgaste de los partidos fundacionales, que quemaron lentamente su credibilidad histórica ensayando siempre el mismo proyecto destinado a fracasar una y mil veces (el del Uruguay “pradera-frontera-puerto”, exportador de ganado, importador de bienes industrializados, despoblado y reconvertido a plaza financiera), sino con la capacidad de acumulación política, social y cultural que supo hacer la izquierda uruguaya. En efecto, el FA se originó como un gran frente social y político que incorporó no solamente las izquierdas en conflicto a lo largo del siglo xx latinoamericano (socialistas, comunistas, socialdemócratas), sino que sumó democristianos y grupos políticos y personalidades que se fueron escindiendo de los partidos tradicionales (primero antes de la dictadura, cuando los partidos fundacionales fueron apoyando veladamente las medidas represivas contra el movimiento popular y sus organizaciones, pero también después, cuando en los noventa constataron su defección en relación con lo que habían sido los cimientos de la sociedad uruguaya: solidaridad, colectivismo, estatismo).

El FA no fue solo un frente político sino también social. Su principal aliado, el movimiento sindical, superó la represión de la dictadura y los intentos “amarillistas” sobrevinientes y se rearticuló con fuerza y lucidez en la transición hacia la democracia, aunando lo nuevo (el Plenario Intersindical de Trabajadores, la expresión del movimiento sindical que emerge de la dictadura) y lo viejo (la Convención Nacional de Trabajadores, la vieja central sindical anterior a la dictadura) creciendo en cada acto de resistencia al neoliberalismo. También el movimiento sindical desafió su propio “fin de la

historia”, augurado por muchas teorías que preanunciaban su derrumbe definitivo ante la fatal combinación de la flexibilización laboral, las tercerizaciones, la pérdida de peso del empleo público y el “empreendedorismo” como concepción.

Junto al movimiento sindical se agrupaban diversas organizaciones sociales en un arco de la más diversa expresión: el cooperativismo de vivienda que jugó un rol fundamental luchando contra leyes de propiedad horizontal en la época de la dictadura; el movimiento feminista de antes y ahora en defensa de los derechos sexuales y reproductivos y denunciando la desigualdad y la explotación de las mujeres; la lucha de las organizaciones de derechos humanos por Verdad y Justicia a lo largo de los años 90, a pesar del fracaso del referéndum contra la Ley de Caducidad en 1989; la lucha de los sindicatos de maestros y profesores en defensa por la enseñanza pública; la lucha de los trabajadores de la salud contra los intentos de reforma privatizadores del sector, por mencionar solo algunos. Todas estas sumaban expresiones de resistencia al neoliberalismo en un país donde la solidaridad entre las clases medias y los trabajadores había dado como resultado una sociedad relativamente más igualitaria, menos individualista, y donde el rol del Estado como “escudo de los débiles” (una vieja consigna batllista), no podía ser borrado de la memoria colectiva con tanta facilidad.

El FA se transformó en el principal partido del Uruguay quince años después de la transición democrática (en las elecciones de 1994 obtuvo un porcentaje de votos similar al del PC y el PN, y cinco años después los superaba por más de diez puntos). Y lo hizo porque fue capaz de representar el conglomerado de ideas, preferencias y afectos sociales de los grupos más dinámicos, progresistas y modernos de la sociedad uruguaya: los trabajadores organizados, la universidad pública, los estudiantes, las clases medias. Fenómenos posteriores, vinculados al propio ejercicio del Gobierno en la capital del país, y al crecimiento de los sectores liderados por José “Pepe” Mujica le darían, asimismo, una gran capacidad de

convocatoria en los sectores pobres y más marginados de la sociedad. Con esto, se completaba un ciclo virtuoso de representación, que solo vendría a ser desafiado con el ejercicio continuado del FA en el Gobierno, que iría progresivamente desolidarizando partes de ese conglomerado y, posteriormente, conduciendo a la caída electoral del FA. Esta progresiva fragmentación del conglomerado inicial y pérdida vincular entre clases y personas, se hizo tanto en beneficio de la representación política de una izquierda “a la izquierda” del Frente Amplio (un pequeño partido escindido del FA obtuvo una banca de diputado en la última elección) como de los partidos de centro-derecha, producto de la pérdida de predicamento de la izquierda entre las clases medias altas, y de una campaña negativa llevada a cabo por representantes de estas mismas clases, sistemática y continua a lo largo de una década. Nuevamente, errores propios y aciertos ajenos pueden contarse en este resultado, pero antes, vale la pena hacer un breve recuento de los logros de los dos primeros gobiernos frenteamplistas.

La gran ilusión: el primer gobierno del Frente Amplio

En 2004 el FA ganó las elecciones nacionales con 50,45% de los votos, obteniendo mayorías legislativas propias. No tuvo más dificultades para implementar su programa de gobierno que sus propias contradicciones internas, y el enfrentamiento, muchas veces, con sus bases aliadas (especialmente en el campo de la educación, pero también con organizaciones ecologistas, con organizaciones feministas, y en el campo de los derechos humanos, entre otros).

La conformación del gabinete ministerial llevó un tiempo inusualmente largo y confirmó algunas certezas. La primera de ellas fue que el gabinete iba a representar el equilibrio de las

distintas fracciones del FA¹³. La segunda certeza confirmada fue que Tabaré Vázquez se iba a reservar un poder propio importante, invistiendo en el gabinete al menos a una tercera parte de ministros “propios”. Luego de esto, el apartamiento de los órganos de decisión del FA fue inmediato; el presidente no se reunió con su fuerza política sino hasta el segundo año de gobierno, a propósito de un tema referido a los derechos humanos¹⁴, para confirmar que el suyo no sería un “cogobierno” con la fuerza política. La popularidad de Tabaré, el gran apoyo que recibe ese primer gobierno y su distanciamiento con el Frente Amplio, refuerzan la debilidad de este último. Al mismo tiempo, la incorporación a cargos de gobierno de los líderes más importantes de la estructura partidaria

-
13. El FA es un partido con al menos seis fracciones políticas relevantes, cada cual con su propia estructura, dirección y base. Hacia 2004, la fuerza política contaba en su interior con una veintena de grupos políticos, sin embargo, menos de la mitad obtuvieron representación parlamentaria en dichos comicios: Espacio 609 (E609), Asamblea Uruguay (AU), Partido Socialista (PS), Partido Comunista (PCU), la Confluencia Frenteamplista (Confa), Partido Demócrata Cristiano (PDC), Alianza Progresista (AP), Vertiente Artiguista (VA), Nuevo Espacio (NE) y Corriente de Acción y Pensamiento - Libertad (CAP-L). En las elecciones nacionales subsiguientes (2009 y 2014), la pluralidad de sectores frenteamplistas se ha mantenido y hasta se ha incrementado, pero continúan teniendo mayor peso el E609, el PS y el ahora denominado Frente Líber Seregni (FLS, que nuclea a AU, el NE, PDC y AP). También han marcado presencia en el Parlamento nuevos sectores como Compromiso Frenteamplista (Lista 711), del vicepresidente Raúl Sendic, y Casa Grande.
 14. En dicha oportunidad, la fuerza política había solicitado al primer mandatario una audiencia en el marco de un controversial proyecto del ley propuesto por el Poder Ejecutivo que retomaba una iniciativa previa de un legislador colorado fuertemente vinculado a la corporación militar (Daniel García Pintos), y estaba orientado a reparar económicamente a familiares de civiles y militares caídos en el “enfrentamiento armado con la sedición”. En la propuesta presentada se contemplaba también el resarcimiento a familiares de personas desaparecidas en las décadas de los 60y 70. El proyecto, que ingresó en el Parlamento en 2007, no fue bien recibido por la fuerza política, en la medida que se leía que se equiparaba la reparación de víctimas y victimarios juntos.

generó un efecto “disciplinante” sobre su propia bancada, y con la excepción de la renuncia de un diputado (Guillermo Chifflet) en ocasión de la aprobación de la Operación Unitas, o la negativa del Partido Comunista a votar la Ley de Educación, la fuerza política no tuvo capacidad de resistir a Tabaré más que hacia el fin del período. Fue entonces cuando el FA enfrentó con relativo éxito la decisión del primer mandatario de “elegir” a su sucesor en la carrera presidencial: el contador Danilo Astori, apoyando a José Mujica como postulante y sosteniendo la candidatura de este último hasta que derrotó a Astori en las elecciones internas de abril de 2009.

Los primeros actos del nuevo gobierno, que asumió en marzo de 2005, son inequívocamente, sin embargo, “de izquierda”, y la diferenciación entre el gobierno del FA y un siglo de administraciones blancas y coloradas es nítida y precisa. El primer acto con el que Vázquez asume el gobierno es la reanudación de las relaciones diplomáticas con Cuba, interrumpidas durante el gobierno de Jorge Batlle (2000-2005), y el segundo, la instalación del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que tendría a su cargo la implementación del Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social (Panes), llamado “buque insignia” del Gobierno. Hacia el mes de octubre, el Panes había logrado cumplir sus objetivos iniciales y cubrir toda la población que pretendía cubrir. Transformado esto luego en una política permanente quedó claro que, con la llegada de la izquierda al gobierno, los planes de combate a la pobreza y la marginalidad serían no solo una política “para épocas de crisis”, sino una política permanente, en claro contraste con la perspectiva anterior de que la pobreza se resolvería con el crecimiento del país.

Un segundo acto del gobierno entrante, en fuerte contraste con la administración anterior, fue el enfoque dado al tema derechos humanos. La postura histórica y original de “Verdad y Justicia” había ido cediendo paso a concepciones más contemporizadoras con el estado de las cosas que se había instalado en el Uruguay a lo largo de los años noventa (la impunidad lisa y llana). Ya en el

Congreso del Frente Amplio de 2003, que comprometió el programa de gobierno para el período 2005-2010, logró vencer la moción de no anular la Ley de Caducidad y de trabajar, en cambio, en el espacio legal que la ley habilitaba. Cuando asume el gobierno, Tabaré Vázquez, anuncia que aplicará el artículo 4^{to} de la Ley de Caducidad que le permitía al Poder Ejecutivo realizar investigaciones o facultar al Poder Judicial a hacerlo en todo lo que la ley no prohibiera (delitos económicos, desapariciones forzadas, secuestro de niños). Se resolvió indagar acerca del destino de los detenidos desaparecidos, solicitando a las FF. AA. información –que nunca dieron– y realizando excavaciones en predios militares en los que se habrían realizado enterramientos clandestinos. También se dio vía libre a la acción judicial en casos no comprendidos dentro de la ley, y finalmente, se resolvió permitir las extradiciones que fueran resueltas afirmativamente por el Poder Judicial. Se producen en este período los primeros procesamientos, y especialmente el muy emblemático de Juan María Bordaberry, el expresidente colorado autor del golpe de Estado. Hacia el fin del período (2009), la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declararía inconstitucional la Ley de Caducidad.

Un tercer eje que marca la afirmación del Gobierno es la reinstalación de los Consejos de Salario (la negociación tripartita entre Estado, trabajadores y empresarios para determinar laudos salariales y condiciones de trabajo, creada en 1943, reinstalada después de la dictadura y desmantelada a inicios de los años noventa). La nueva normativa se amplía al sector público, al tiempo que se aprueba una ley de fueros sindicales, se deroga la normativa relativa a las desocupaciones de lugares de trabajo tomados por sus trabajadores, y se aumenta el salario mínimo nacional (que se duplicó hacia el fin del período¹⁵).

15. Cuando el FA asumió el gobierno en marzo de 2005, el salario mínimo nacional era de 2.050 pesos uruguayos (equivalentes a USD 80,4 dólares de la época), al terminar su primer mandato ascendía a 4.799 pesos (USD 247 dólares en marzo de 2010), y para fines del segundo período se ubicaba en los 8.960 pesos (USD 368).

Todo esto produce un claro vuelco del Estado hacia la protección de los trabajadores y las organizaciones sindicales, y aunque hay algunos amagos de resistencia por parte del sector empresarial (expresados, por ejemplo, en un *lock out* de las patronales del transporte, apoyadas por los grandes estancieros rurales en 2006, levantado luego de arduas negociaciones con el Gobierno), estos no van más allá de acciones legal ante la Organización Internacional del Trabajo –OIT– (relativas a reclamo por huelgas y ocupaciones de los lugares de trabajo).

La seguridad pública también estuvo presente en ese año inaugural, y el Gobierno amaga por izquierda aprobando la Ley de Humanización y Modernización del Sistema Carcelario y poniendo al frente de la cartera a reconocidos voceros de una perspectiva de seguridad contraria a la “mano dura”. El fracaso es importante: los medios de comunicación se oponen en bloque a la estrategia “blanda” del Gobierno, y la oposición fustiga todos los días con el mismo tema. En años siguientes, medios de comunicación, operadores de las encuestas de opinión y partidos políticos de la oposición trabajarán conjuntamente para instalar el asunto de la seguridad pública como tema principal del Uruguay, reclamando endurecimiento de penas y aumento de los controles policiales. Durante el gobierno de Mujica se produce un endurecimiento generalizado de penas, un aumento del poder represivo de la policía (en manos de uno de los principales líderes del Espacio 609 - Movimiento de Participación Popular, Eduardo Bonomi) y en general, el abandono de cualquier perspectiva distinta a la “tolerancia cero” para la delincuencia.

Finalmente, la política exterior experimenta un vuelco hacia la derecha importante, al que el canciller Reynaldo Gargano enfrenta con algunos –pocos– logros, como resultado del diferendo con Argentina por la instalación de las plantas de celulosa sobre el río Uruguay y el propio talante del presidente Tabaré (y de su equipo económico), proclive a mantener un vínculo “carnal” con los Estados Unidos –que es, en su momento, el

principal socio comercial– y generando un distanciamiento grande con la Argentina “K”.

Las diferencias con Argentina, la orientación en materia de política exterior del presidente y la debilidad del FA en esta discusión, alentaron la búsqueda de acuerdos de comercio extraregionales. Se firmó un tratado relativo a la Protección Recíproca de Inversiones con Estados Unidos (BIT por su sigla en inglés) y se buscó un acuerdo de libre comercio con este país, que pudo ser frenado por la intervención de Brasil ocasionando la primera disputa grande del Ejecutivo con el Frente Amplio. El corolario fue la venida de Bush a Uruguay, en la clara búsqueda de un “aliado” regional frente a la enemistad declarada hacia Estados Unidos por Argentina y Venezuela, y su distanciamiento de Brasil, donde el PT se iba comprometiendo en la búsqueda del Diálogo Sur-Sur e imponiendo políticamente a Itamaraty (que fuera indiferente durante décadas a cualquier cambio de gobierno).

Entre las reformas más importantes del período y las únicas reformas estructurales que serían finalmente pasibles de ser aprobadas a lo largo de los tres períodos frenteamplistas, se cuentan la tributaria, la de la salud y el intento de reforma de la educación.

La reforma tributaria fue un ambicioso proyecto que instaló el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, que fue progresivo (según los ingresos de las personas), y dual (entre el pago de rentas por capital y por ingresos, gravadas de diferente manera). Durante la discusión de esta iniciativa, y de otra que establecía la autonomía del Banco Central (y que fue modificado parcialmente), se hizo evidente que además del poder del presidente, el gobierno del FA consolidaba otro poder político que dominaría el escenario de la próxima década: el poder del llamado “equipo económico”.

Esta reforma tuvo efectos positivos y progresivos en materia de recaudación, aunque generó un impacto negativo en la opinión pública, que resistió fuertemente la suba de los tributos. En particular, la aplicación de impuestos a las jubilaciones

enfrentó una demanda de inconstitucionalidad que fue atendida favorablemente por la SCJ, y que obligó al Gobierno a instalar otro tributo, el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS)¹⁶, no impugnado, que tuvo similares efectos. La reducción del IVA (a 23%), que acompañaría al Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), se concretó en forma muy parcial, y la capacidad recaudatoria del Estado subió más allá de lo previsto. Esto permitió el aumento de los salarios públicos, cumplir con el compromiso de destinar 4,5% del Producto Bruto Interno (PBI) a la educación, la financiación de la reforma de la salud, el incremento de la inversión pública (especialmente durante el gobierno de Mujica) y la financiación de todos los programas sociales.

La reforma sanitaria también fue una iniciativa ambiciosa (Daniel Olesker, quien se desempeñara como ministro de Desarrollo Social primero y de Salud Pública luego, la denominó “protosocialista”), que creó un fondo único de salud que financiaba a distintos prestadores (públicos y privados), desvinculando progresivamente el pago de bolsillo de los usuarios con su acceso a la prestación, e incorporando sucesivamente a distintos grupos de población (los jubilados, los hijos menores de 18 años de edad, entre otros). Aunque creó un impuesto adicional a los trabajadores formales (4,5% para los trabajadores sin hijos menores de 18 años, 6% para los trabajadores con hijos menores a esa edad), y la calidad de la atención no mejoró en proporción, fue una reforma estructural que permitió enfrentar la privatización progresiva del sistema. La reforma sanitaria resolvió los problemas de desfinanciamiento del mutualismo, mejoró la calidad de la atención en el sector público, y consiguió reconocimiento y apoyo entre todos los operadores del sector. Las luchas contra las corporaciones médicas fueron

16. El IASS, creado en 2008, grava a los ingresos de jubilaciones y pensiones de instituciones públicas y empresas privadas localizadas en territorio nacional.

–y continúan siendo– sistemáticas y permanentes en todo el período.

Finalmente, tras la realización de un multitudinario Congreso Nacional de la Educación¹⁷, se aprobó una Ley de Educación que optó por el camino “del medio” en relación con las demandas de los docentes y del sistema político; ni le devolvió a los organismos de la educación su vieja autonomía, ni transformó estructuralmente una educación completamente balcanizada entre las instituciones de enseñanza primaria, las de secundaria (los liceos por un lado y la educación técnica por el otro) y la Universidad de la República. Fue una reforma “institucionalista” que creó varios organismos destinados a abrir canales de comunicación y coordinación entre las distintas partes del sistema. Si bien mejoraron los recursos asignados al sector (se comprometió y llevó a cabo la meta de asignar 4,5% del PIB a la educación), y los salarios docentes crecieron, la Ley de Educación no concitó apoyo ni por izquierda ni por derecha, ni social ni político. Asimismo, la conflictividad con los gremios de la enseñanza fue alta a lo largo del período, desolidarizándolos progresivamente con el gobierno del FA, lo que se profundizó durante los gobiernos de Mujica (cuando el presidente protagonizó varios enfrentamientos con los mismos) y se terminó de consolidar con el actual gobierno de Tabaré (que llegó a decretar la “esencialidad” de la educación para enfrentar las huelgas de los gremios por el presupuesto nacional).

El final del primer período de Vázquez estuvo signado tanto por los intentos reeleccionistas del presidente¹⁸ (o en su límite,

-
17. Dicho congreso se llevó a cabo entre noviembre y diciembre de 2006, como espacio de síntesis y definición de un “Debate Educativo” que se había estado procesando desde el año anterior (con aportes de individuos y organizaciones públicas y privadas vinculadas con la educación), y como instancia de elaboración de las bases de la Ley de Educación finalmente resultante.
 18. Hacia noviembre de 2008, un grupo de dirigentes políticos –secretarios de Estado incluidos– y figuras públicas de renombre afines al entonces presidente Vázquez iniciaron una campaña de recolección de firmas en

por designar a su sucesor), como por el debate de la despenalización del aborto. Los magros resultados obtenidos en derechos humanos llevaron, asimismo, a las organizaciones de derechos humanos a convocar un plebiscito para anular la Ley de Caducidad, iniciativa que contó con el apoyo del movimiento sindical y la renuencia a comprometerse de los principales líderes políticos del FA (Mujica, Tabaré y Astori), quienes acompañaron la iniciativa prácticamente cuando el movimiento social ya había conseguido las firmas para hacerla efectiva, y mantuvieron silencio sobre el tema durante toda la campaña electoral del 2009.

La propuesta de despenalización del aborto significó quizá la manifestación más saliente de la distancia entre el primer mandatario y su propio partido. El proyecto de ley correspondiente, que había sido aprobado en ambas cámaras legislativas por una diferencia mínima (conquistada con trabajo y esfuerzo sistemático por parte de las organizaciones de mujeres y de algunas legisladoras tenaces que enfrentaron las preferencias del propio presidente, opositor declarado al proyecto¹⁹), fue dejado sin efecto por el veto presidencial impuesto por Vázquez. Y no solo eso, sino que este renunció a su afiliación al Partido Socialista por ser dicho sector uno de los más firmes en la defensa de la despenalización del aborto.

La popularidad con la que Tabaré finalizó su mandato es muy alta: superaba 60% (según datos de la consultora Interconsult), y es producto, entre otras cosas, de pronunciamientos “por derecha”, como el veto a la despenalización voluntaria del embarazo, o su acercamiento a Estados Unidos

todo el país para promover una reforma constitucional que habilitara la reelección inmediata de la primera magistratura. El objetivo era hacer formalmente posible la postulación de Tabaré para las elecciones nacionales del año siguiente. El “Movimiento Tabaré 2009” cosechó unas cien mil firmas y finalmente se desactivó.

19. Tal fue el caso de la senadora del Partido Socialista Mónica Xavier, tiempo después elegida presidenta del FA en las elecciones frenteamplistas de 2012.

en materia de política exterior. En efecto, obtiene solo 17% de desaprobación (*ibidem*)²⁰, de lo cual se desprende que su aprobación iba más allá del electorado frenteamplista, recogiendo adhesiones entre votantes blancos y colorados. Sin embargo, esta no será suficiente para investir a su “heredero”, el entonces ministro de Economía y Finanzas Danilo Astori, que pierde la elección interna de 2009 contra José Mujica por 52,1% a 39,6%.

Mujica ha sido el candidato a presidente de la República por el FA más controvertido (y más cuestionado, sin duda, dentro de las propias filas frenteamplistas) en las cuatro décadas de historia de esta fuerza política. Exguerrillero tupamaro, cultivador de flores, sin títulos ni una educación formal acabada, poseedor de un inmenso carisma, Mujica es cualquier cosa menos el espejo de “M’hijo el Dotor”²¹. Su elección fue considerada “de riesgo” por parte de más de un analista político uruguayo, dada la esperable resistencia de las clases medias urbanas y educadas a un liderazgo popular de esas características. Era de riesgo, además, en un doble sentido. En primer lugar, porque enfrentaba la resistencia de la llamada “ala moderada” del FA (Frente Líber Seregni, Partido Socialista), donde se albergaban el poderoso equipo económico y los grupos más afines a Tabaré Vázquez. En segundo lugar, porque para la “mesocracia” uruguaya, un candidato como Mujica podría significar un riesgo cultural y político, más que económico (ya que era por demás moderado en política económica). Sin embargo, gracias al liderazgo y carisma de Mujica, Uruguay se transformó en un país conocido a nivel

20. Ver nota publicada en la BBC: “Uruguay: Tabaré Vázquez termina con buena nota”, 22/2/2010. Disponible en: http://www.bbc.com/mundo/america_latina/2010/02/100222_2001_uruguay_vazquez_gz.shtml [Consultado el 14/6/2016].

21. En el imaginario nacional, dicha expresión coloquial, que oficia de título de una obra teatral del aclamado dramaturgo uruguayo Florencio Sánchez, representa la idea de movilidad social ascendente de ciudadanos de origen humilde, a través de su formación académica en la enseñanza pública.

mundial. Fue el resultado inesperado de la elección de riesgo más importante que enfrentó la izquierda desde que estuvo en el gobierno. Desde el punto de vista de su capacidad transformadora del partido, sirvió para poco: a menos de un año de asumir Mujica, Tabaré ya se preparaba para la vuelta. Y, paradoja de la historia, Mujica sería su principal impulsor.

Como te digo una cosa te digo la otra: el gobierno de Mujica

El gobierno de Mujica asumió tremendamente condicionado. Una dura negociación entre el nuevo presidente y Danilo Astori, para que este último asumiera la vicepresidencia de la República, devino en la cesión de toda la gestión económica al segundo de a bordo, incluyendo el Ministerio de Economía y Finanzas, la presidencia del Banco Central y la cabeza de la Dirección General Impositiva (DGI). Mujica reservó para sí solo la dirección de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) generándose la idea –absolutamente exagerada y amplificadas por los medios de comunicación– de que había “dos equipos económicos”.

Aunque Mujica nunca llegó a concretar un equipo económico propio, es verdad que había posiciones diferentes en materia de política económica que se evidenciaron desde el principio, pero cobraron fuerza en el segundo período de gobierno del FA. Las posiciones respecto a la reforma tributaria, la autonomía del Banco Central, la inversión externa, las políticas sectoriales, o la política monetaria, evidenciaban no solo preferencias políticas distintas, sino también diferencias en el diagnóstico de la situación.

La discusión sobre política económica tuvo un correlato inmediato en la política exterior, como ya se había evidenciado con crudeza en el primer gobierno: los más “moderados” del FA eran, al mismo tiempo, los más críticos con el Mercosur y los más partidarios de celebrar un acuerdo de libre comercio con

Estados Unidos. El Congreso del FA de 2008, que había elaborado el programa de gobierno para el período 2010-2015, tomó nota de estas diferencias e incluyó algunas definiciones importantes que zanjaban la cuestión “por izquierda”: el abandono de cualquier Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, y la apuesta firme a la continuidad del Mercosur.

Aunque Mujica poco pudo hacer en política económica, tuvo importantes ventajas que le permitieron darle una impronta propia a su gobierno y tener control de la política agropecuaria, de las empresas públicas, de las políticas sociales y de la política exterior. La primera ventaja importante fue que el país creció en todo el período a una tasa promedio 4,5%. En consonancia con ello, Mujica tuvo margen de maniobra para innovar. Aumentó los fondos para el desarrollo económico del interior del país, que se vio enormemente beneficiado durante su gobierno (lo que le valió una enorme popularidad entre los sectores rurales, no solo en aquellos movilizados décadas antes por el también líder guerrillero Raúl Sendic padre, con sus “marchas por la tierra”, sino entre el empresariado rural en general), nombró a su ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de entre los arroceros “emprendedores”, e impulsó una política de inversiones en minería, puertos y celulosa, que le trajo amigos, y también enemigos.

En segundo lugar, Mujica consiguió mantener bajo su control las empresas estatales más importantes, como la telefónica (Antel) y la petrolera (Ancap). Desarrolló desde allí un ambicioso plan de inversión pública con la expansión de la fibra óptica y las celebraciones de contratos petroleros con las principales multinacionales del mundo para la explotación en la plataforma marítima, así como para la exploración del mineral de hierro en la zona de Valentines. Muchas de estas inversiones fueron severamente observadas en el período siguiente (las relativas al petróleo), algunas quedaron por el camino (la minería), pero otras prosperaron (la telefónica, la energética), y le permitieron a Uruguay hacer frente a los problemas logísticos

y energéticos que comenzaban a manifestarse en el país luego de una década de crecimiento económico.

En tercer lugar, Mujica controló buena parte de las políticas sociales. Aunque el sistema de transferencias a los sectores más pobres mantuvo en líneas generales el mismo diseño y recursos heredados del período anterior, el presidente fue conquistando paulatinamente el control de la política de vivienda (creó el llamado Plan Juntos²²), aprobó un fondo especial para empresas recuperadas gestionadas por los trabajadores (Fondo de Desarrollo –Fondes–²³), aumentó la cartera de parcelas del Instituto Nacional de Colonización para darles tierras a los pequeños colonos, entre otros.

Muchos e importantes avances en la agenda de derechos han sido adjudicados a Mujica, aunque la mayoría no contó con su iniciativa. El primer hito en la agenda de derechos del período fue la definitiva aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (Nº 18.987), norma que debió resistir luego un intento de derogación por parte de la oposición²⁴. Ni Mujica en particular, ni su grupo político se han destacado nunca por adherir a la causa de los derechos de las mujeres; antes bien, Mujica ha sido un adversario declarado del “feminismo”, al que acusó repetidas veces de ser protagonizado por

22. Dicho Plan nació orientado a estimular la construcción de viviendas en los sectores más pauperizados de la sociedad.

23. El Fondes surgió con el objetivo de apoyar proyectos productivos vinculados a sectores estratégicos y con participación de sus trabajadores en la dirección del emprendimiento.

24. La oposición política a la flamante ley, respaldada por organizaciones religiosas, emprendió una campaña de recolección de firmas para someter la (re)consideración de la ley a referéndum. Sin embargo, no lograron captar 25% de las voluntades necesarias para ello, alcanzando menos de 9% de las adhesiones en las urnas, con lo cual el referéndum nunca llegó a habilitarse.

mujeres “de clase media”²⁵. Pero habida cuenta de la reacción de las organizaciones de mujeres contra Tabaré Vázquez en ocasión del veto contra la ley que despenalizaba el aborto, las mujeres del FA comprometieron a la fórmula Mujica-Astori a no vetar la ley cuando fuera nuevamente presentada.

Una segunda iniciativa, la del Matrimonio Igualitario (leyes N° 19.075 y 19.119), que permitía el casamiento entre personas del mismo sexo, también fue aprobada durante el período, y enfrentó mucho menos resistencia que la despenalización del aborto.

Finalmente, una tercera ley de la agenda de derechos muy controversial, y que recibió el apoyo directo del presidente, fue la Ley de Control y Regulación de la Importación, Producción, Adquisición, Almacenamiento, Comercialización y Distribución de la Marihuana y sus Derivados (N° 19.172), que habilita al uso medicinal y recreativo de esta droga. Esta iniciativa no solo le valió fama a Mujica en el mundo, sino que puso al Uruguay en un lugar de destaque en la lucha de algunos países de América Latina contra el paradigma prohibicionista de los Estados Unidos, habida cuenta de que el mismo solo había redundado en un endurecimiento del narcotráfico, de la economía subterránea a él asociada, y de una criminalidad intensa y creciente en todos nuestros países.

Finalmente, es destacable la posición del gobierno de Mujica en materia de política exterior, que significó un cambio de

25. En declaraciones vertidas a los periodistas Andrés Danza y Ernesto Tulbovitz, y recogidas en el libro *Una oveja negra al poder. Confesiones e intimidades de Pepe Mujica* (2015), Mujica expresó respecto al feminismo: “El 60% del Plan Juntos son mujeres solas con hijos. ¿Vos creés que apareció una organización feminista? No, esas son todas intelectuales con sirvientas. Y el Frente Amplio tiene el caudal más grande de esas intelectuales insoportables” (pp. 154-155). Y agregó luego: “La inmensa mayoría de las mujeres son las que se quedan con los hijos y mucho más en las clases más bajas. Hay que hacerles un monumento. No acompaño el feminismo ese que está de moda. Las mujeres son muy importantes y valen mucho más que esas modas. (pp. 257).

rumbo importante con respecto a la política anterior. Colocó en la Cancillería a un funcionario de carrera, Luis Almagro, quien actualmente ocupa la Presidencia de la OEA. El canciller Almagro desarrolló una vasta actuación en el campo de los derechos humanos, siendo el autor del primer proyecto para anular definitivamente la Ley de Caducidad; mantuvo fluidas relaciones con los países vecinos (restaurando las relaciones con Argentina, muy deterioradas por el episodio de las papeleras en el río Uruguay); participó activamente en la Unasur; y borró, al menos durante el período, la sensación de que en política exterior el rumbo del Gobierno no se alineaba precisamente con el “giro a la izquierda” en la región. Sin duda, esto no fue un logro atribuible solo al canciller Almagro, sino principalmente a Mujica, que supo desarrollar vínculos cercanos y amistosos con la mayoría de los mandatarios latinoamericanos. “Pepe” se transformó en un líder reconocido en el mundo entero, destacando por sus emotivos discursos contra el consumismo y a favor de la solidaridad y fraternidad humana, y especialmente por su austeridad personal, lo que le valió el título del “presidente más pobre del mundo”. Siendo ya primer mandatario, continuó viviendo en su misma casa en una chacra en Montevideo, donó la gran mayoría de su sueldo para políticas sociales, y su “aura” de exguerrillero y persona llana y sencilla le valió un lugar en el podio junto a otros presidentes “populares” de América Latina, como Evo Morales en Bolivia o Hugo Chávez en Venezuela.

A pesar de todas estas ventajas relativas, y del control que Mujica mantuvo sobre importantes áreas estratégicas del Estado y la economía, el país siguió siendo altamente dependiente de la inversión extranjera directa, y Mujica predicó bajo el lema de “capitalismo en serio” lo que era su verdadera posición en esta materia. Para el socialismo reservó “una vela” (las empresas autogestionadas), pero en el sector agropecuario, minero y petrolero, se pronunció por una estrategia de claro apoyo a la inversión extranjera y de concesiones importantes en términos impositivos a los capitales transnacionales (incluyendo la

profundización de la política de zonas francas, la celebración del acuerdo con la empresa forestal “Montes del Plata”²⁶, los contratos con las petroleras ratificados en 2012 y el aterrizaje de una empresa india-inglesa, Aratirí, para la explotación de hierro en Uruguay²⁷). En temas tales como en la construcción de un puerto de aguas profundas para barcos de gran calado, o en el impulso a una planta regasificadora de gran porte, apostó a una inversión en clave de región, aunque con muy magros resultados.

En materia económica, y a pesar de algunos pocos esfuerzos personales por aumentar la presión tributaria sobre el capital (como la aprobación del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales –ICIR–, luego declarado inconstitucional²⁸), Mujica pareció rendirse a la evidencia de que el equipo económico de Danilo Astori era el que mejor lo sabía hacer, y en la votación del Presupuesto y en cada Rendición de Cuentas, ambos mantuvieron una posición alineada. A pesar de ello, a partir del segundo año de gobierno se instaló con fuerza un tópico que no había estado sobre el tapete durante el primer mandato del FA: el tema de la distribución del ingreso y de los pocos resultados del Gobierno en esta materia, habida cuenta de la dualidad en la reforma tributaria (que grava distinto a las rentas derivadas del salario que del capital), de la política de inversiones (fuertemente exoneradora de los emprendimientos, de la política de zonas francas para grandes inversiones) y de una política de ajustes salariales más que prudente (y controlados por la inflación).

26. Montes del Plata es una compañía orientada a la producción y exportación de pulpa de celulosa fundada en Uruguay, en 2009, a partir de la unión de otras dos empresas del sector forestal, la chilena Arauco y la sueco-finlandesa Stora Enso.

27. El proyecto Aratirí es un emprendimiento de megaminería a cielo abierto para la extracción de hierro, propuesto por la firma multinacional Zamin Ferrous para su implementación en Uruguay.

28. El ICIR había sido impulsado por la vía legislativa durante el mandato de Mujica, destinado a gravar a los propietarios de terrenos que superaran las 2.000 hectáreas de índice Coneat 100.

Uno de los fracasos más importantes del período fue el quiebre de la empresa aérea uruguaya, Pluna S.A., que ya había sido parcialmente privatizada en 1995, al asociarla con Varig, y luego reprivatizada durante el primer mandato de Tabaré Vázquez, por iniciativa del equipo económico, pero aún dejando al país con una aerolínea de bandera. El fracaso en la gestión de Pluna, los juicios millonarios, las centenas de trabajadores que perdieron su empleo en este marco, y la debilidad y desprolijidad mostradas en todo el proceso de remate de los aviones y cierre final de la empresa, dejaron a la administración Mujica muy mal parada, llevando ante la Justicia a cuadros de primera línea del Gobierno, que quedaron finalmente inhabilitados para la gestión pública (entre ellos el ministro de Economía y Finanzas y el presidente del Banco República, ambos pertenecientes al “equipo económico” del vicepresidente Danilo Astori). El episodio de Pluna se uniría, en el período gubernamental siguiente, a la crítica situación financiera y patrimonial de la petrolera Ancap, y ambos episodios terminarían en la órbita del Poder Judicial, sembrando enormes dudas sobre la “ética en la función pública” que había prevalecido en ese período, aunque el propio Mujica salió relativamente indemne de toda esa situación.

Los principales fracasos del gobierno de Mujica hay que buscarlos en el campo de lo ideológico y de lo político. Por un lado, hubo retrocesos evidentes en materia de seguridad pública, derechos humanos y FF. AA. Por otro lado, se produjo un intenso distanciamiento con los gremios de la educación, la universidad pública y los funcionarios del Estado, producto de una visión “antipática” del Estado, que juntó las visiones más “liberalizantes” del equipo económico con la desconfianza de los tupamaros a la institucionalidad pública. Finalmente el temprano apoyo que Mujica compromete por la vuelta de Tabaré Vázquez a la presidencia de la República, generó el *impasse* en el que la izquierda se encontró y se encuentra, en lo que es su tercer y podría ser su último mandato.

En el área de los derechos humanos y la seguridad pública, se podría sostener que el ADN de la izquierda “armada” le jugó una mala pasada al FA, al involucrar en el control de los aparatos armados del Estado (FF. AA. y Policía Nacional) a dirigentes que venían de los cuadros de la guerrilla (Eleuterio Fernández Huidobro como ministro de Defensa Nacional y Eduardo Bonomi como ministro del Interior). El resultado fue una avanzada de visiones autoritarias y represivas en materia de seguridad ciudadana, y un acercamiento “político” a los militares que colocó al Gobierno en una casi complicidad con las políticas de encubrimiento de lo sucedido durante la dictadura. Hacia el final del período, la oposición logró orquestar un plebiscito para bajar la edad de imputabilidad penal, que casi logra ser aprobado.

Uno de los primeros fracasos de Mujica, más simbólico que material, no es solo el hecho de no haberse comprometido con la agenda de los derechos humanos, sino haberse opuesto al paradigma “Verdad y Justicia”, tanto en el terreno de lo discursivo como en de las políticas efectivas. La idea de que los padecimientos sufridos durante la cárcel habían sido, de algún modo, “buscados” por el hecho de haber protagonizado acciones armadas contra el Estado de Derecho, hizo que una buena parte de los tupamaros se distanciara del resto de la izquierda —como lo había estado en el inicio—²⁹. El desprecio que muchos tupamaros mostraron hacia los reclamos de reparación económica por los daños sufridos durante la dictadura, y su casi

29. El Frente Amplio aprobó la incorporación del MLN-T a sus filas en 1989, tres años más tarde de haber recibido la solicitud formal de ingreso correspondiente, y tras sortear resistencias internas no menores. Los exguerrilleros impulsaron entonces la creación del Movimiento de Participación Popular (MPP) y posteriormente del Espacio 609. La incorporación de los tupamaros al FA también enfrentó reticencias desde dentro del propio MLN-T, que prefirió postular a los dirigentes no tupamaros Helios Sarthou y Hugo Cores al Parlamento “burgués”, en lugar de candidatear a sus propios cuadros políticos.

desestimación respecto de otras violaciones a los derechos humanos realizadas a “civiles” (exilio, delitos económicos, cárceles prolongadas), indujo a muchos, en especial al actual ministro de Defensa Nacional, a adoptar un discurso lindero al de la llamada “teoría de los dos demonios”. Expresiones tales como que “esto se terminará cuando nos muramos todos”, repetida en múltiples oportunidades por Mujica³⁰, o que “capaz” que “torturando” a los militares se podría “obtener información”, como llegó a ironizar Fernández Huidobro³¹ no solo no ayudaron a dismantelar la impunidad vivida en el Uruguay durante treinta años de democracia, sino que alentaron a muchos en la idea de que las FF. AA. y los viejos guerrilleros habían sellado una suerte de “pacto” que pervivía hasta nuestros días.

Ya Tabaré Vázquez nos había habituado a un discurso ambiguo sobre estos temas. Había impulsado una ley de reparación que equiparaba a las víctimas del terrorismo de Estado

-
30. En plena campaña electoral de 2009, entrevistado por un periódico argentino, Mujica reflexionó respecto a la violación de los derechos humanos durante la dictadura y la Justicia: “en lo personal, he pensado: si me dicen la verdad, te conmuto la pena. Si lo que me interesa es la verdad. Pero, ¿las sociedades se bancan eso? Porque la Justicia tiene un hedor a venganza de la puta madre que lo parió. Y tengo la conciencia de que lo que pasé no me lo va a devolver nadie. Tengo que cargar con eso como una mochila, una cicatriz, como si uno hubiera tenido un accidente, una enfermedad”. *Diario La Nación*, 13/9/2009. Disponible en: <http://www.lanacion.com.ar/1173730-no-se-que-ideologia-tienen-los-kirchner> [Consultado el 14/6/2016].
31. En el marco de una polémica entre el ministro de Defensa Nacional y el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), una organización no gubernamental con larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos que cuestionó a Fernández Huidobro por la falta de datos precisos en la búsqueda de la Verdad y la Justicia, el secretario de Estado declaró textualmente a la prensa: “No tengo información. Si Serpaj me autoriza a torturar, yo capaz que le consigo información”. Expresiones recogidas por el informativo de Canal 10, “Subrayado”, y reproducidas en el diario *El País*, 19/12/2014. Disponible en: <http://www.elpais.com.uy/informacion/serpaj-autoriza-torturar-informacion-desaparecidos.html> [Consultado el 14/6/2016].

con las víctimas de “la sedición”³², había hablado de la lucha de “hermanos contra hermanos”³³, evitando la referencia al “terrorismo de Estado”, e incluso había aventurado la idea de proponer una suerte de “reconciliación nacional” que había desagradado a propios y ajenos. Las organizaciones de derechos humanos, que ya habían presenciado estas dilaciones y ambigüedades en torno al tema, habían hecho sus esfuerzos para anular la Ley de Caducidad juntando firmas para convocar a un plebiscito. Tanto Mujica como Vázquez vacilaron inicialmente respecto a esta propuesta de solución³⁴ que finalmente se frustró al alcanzar 48% de los votos cuando era necesario superar 50% para su aprobación. Las culpas por el resultado recayeron sobre varios, pero especialmente sobre el FA por su

32. Ver nota al pie N°13.

33. El día de su asunción de su primer gobierno, el 1 de marzo de 2005, Vázquez expresó: “Se publicará lo que se sabe, se publicará lo que se conoce, no con el fin de alimentar odios, no con el fin de llevar a nadie frente a la Justicia, fuera de lo que establece la Ley de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, sino para que –uruguayas y uruguayos– lo que pasó nunca más en el Uruguay, nunca más, nunca más hermanos contra hermanos, uruguayas y uruguayos (...) asimismo –uruguayas y uruguayos– de la misma manera, porque madres son todas madres, quienes han sido madres y quienes han deseado ser madres, padres son todos padres y quienes han querido ser padres o han sido padres, hermanos son todos hermanos, uruguayos somos todos, uruguayos, y a todos nos duele cuando perdemos seres queridos; el Gobierno promoverá rápidamente, sin distinción de clase alguna, la reparación de todas las víctimas de los hechos acaecidos en aquellos terribles años que tanto hirieron y dividieron a la sociedad uruguaya, de todos, de todos, uruguayas y uruguayos”. Discurso íntegro disponible en: http://archivo.presidencia.gub.uy/_web/pages/vazquez06.htm [Consultado el 14/6/2016].

34. Mujica aportó su rúbrica para anular la Ley de Caducidad en agosto de 2008, casi un año después de lanzada la campaña por la recolección de firmas. En tanto, Vázquez, que había rechazado originalmente la iniciativa, declaró públicamente su apoyo a la misma mientras se encontraba de gira por el exterior, y horas antes de que en Uruguay se entregaran formalmente las 324.823 firmas recogidas al Parlamento.

falta de compromiso, y sobre Mujica y Astori, quienes no habían hecho campaña por el tema.

Ya con Mujica como presidente, este clima alentó a un largo debate y a varias iniciativas legislativas tendientes a eliminar la Ley de Caducidad del ordenamiento jurídico nacional, en especial a anular sus efectos y permitir la apertura o reapertura de los juicios, con miras a dar cumplimiento a lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la OEA en su sentencia para el caso “Gelman vs. Uruguay” (febrero de 2011): “El Estado debe garantizar que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, al carecer de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir u obstaculizar la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos, no vuelva a representar un obstáculo para la investigación de los hechos materia de autos y para la identificación y, si procede, sanción de los responsables de los mismos, de conformidad con los párrafos 253 y 254 de la Sentencia” (p. 85).³⁵

El primer proyecto de ley presentado para anular la ley de Impunidad evidenció la índole de las resistencias dentro y fuera de la izquierda a la “revisión” de lo sucedido durante la dictadura. Aunque los historiadores habían hecho lo suyo y el sistema educativo también (con gran reticencia de los partidos de la oposición) en materia de “historia reciente”, la comparecencia de militares, policías y civiles ante la justicia era otra cosa, y ponía en entredicho la relación del FA con las FF. AA. Así, ese primer proyecto

35. El caso de la ciudadana argentina María Claudia García Iruetagoiena de Gelman, secuestrada en su país, en 1976, cuando cursaba su séptimo mes de embarazo, trasladada clandestinamente a Uruguay y desaparecida luego de dar a luz, fue presentado ante la CIDH de la OEA en enero de 2010. Los denunciante fueron la hija de María Claudia, Macarena Gelman (quien nació en cautiverio, fue dada en adopción a una familia uruguaya, y no conoció su verdadera identidad hasta el año 2000) y el abuelo de esta última, el poeta Juan Gelman.

elaborado por la bancada parlamentaria frenteamplista, sin que el Poder Ejecutivo se comprometiera, fracasó por la interposición del propio presidente Mujica, quien primero compareció ante la bancada de diputados para exponer su opinión “personal” sobre la inconveniencia del texto y luego, cuando se empezaron a escuchar voces discrepantes dentro del FA, llamó públicamente a votarlo para preservar la unidad de la fuerza política.

Fracasada esa iniciativa conocida como el “Proyecto de Ley Interpretativa de la Ley de Caducidad” en mayo de 2011 (el proyecto no fue aprobado por el voto de un diputado “disidente” de la bancada del FA, perteneciente al grupo de Mujica), con grandes consecuencias para la izquierda y para la legitimidad de su discurso por Verdad y Justicia, se intentó con otro texto de características similares. Este tendía más bien a evitar que se computaran en los plazos de prescripción de los delitos cometidos en la dictadura, los años durante los cuales la ley había estado vigente. Si bien se habían tipificado los delitos de “lesa humanidad” con la aprobación de la Ley N° 18.026 (Ley de “Cooperación con la Corte Penal Internacional en materia de Lucha contra el Genocidio, los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad”) de 2006, eso había sucedido con posterioridad a la fecha en que habían sido perpetrados, con lo cual, en atención al principio de irretroactividad de la ley penal más gravosa, los plazos de prescripción comenzaban a vencer en noviembre de 2011 y ya nada más podría ser juzgado. Una serie de iniciativas fueron tomadas para evitar que todo el proceso volviera a caer en la oscuridad³⁶.

36. Entre otros, cabe citar la revocación de los actos administrativos de Gobiernos anteriores a los del FA que habían desestimado procesos por estar comprendidos en la Ley de Caducidad, las centenas de juicios que se presentaron en esos días en diversos juzgados del interior del país, ante la amenaza de la prescripción, y la propia ley llamada de “imprescriptibilidad” (Ley N° 18.831 de “Pretensión Punitiva del Estado. Restablecimiento para los delitos cometidos en aplicación del Terrorismo de Estado hasta el 1° de marzo de 1985”), finalmente promulgada en noviembre de 2011.

En este marco, cabe consignar el apartamiento de la jueza penal Mariana Mota, especializada en Derechos Humanos, y en cuya sede había recaído buena parte de los procesos en curso. La doctora Mota fue desplazada desde la órbita penal a la civil, con la complicidad del Poder Ejecutivo, especialmente del presidente Mujica³⁷ y del ministro de Defensa Nacional Fernández Huidobro³⁸.

Otro retroceso que experimentó la izquierda en el campo de la lucha ideológica y cultural, fue en el tema de la seguridad pública. El gobierno de Mujica priorizó absolutamente la seguridad pública como un pilar fundamental de su política, y el Ministerio del Interior fue la cartera que recibió las mayores partidas presupuestales del período. Colaboró a ello el hecho de que el ministro del área, Eduardo Bonomi, exguerrillero, fuera la mano derecha de Mujica. El tema estuvo en el debate público

-
37. En una entrevista concedida al diario argentino *Página 12* (19/3/2012), la jueza Mota expresó respecto al esclarecimiento de los crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar en Uruguay que: “No hay una promoción de los derechos humanos para que esta situación, que es nacional y nos marcó a todos, se esclarezca. Es bien diferente al Gobierno argentino en esa materia. Mujica y el ministro de Defensa fueron rehenes de la dictadura. Tal vez por eso no puedan ver con objetividad un proceso dictatorial que los tuvo como víctimas” (entrevista completa disponible en: <http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-189930-2012-03-19.html>, consultada el 14/6/2016). Frente a estas declaraciones, el entonces presidente Mujica manifestó su asombro por el hecho de que la Suprema Corte de Justicia no hubiera tomado cartas en el asunto (ver crónica del portal *El Espectador* del 14/2/2013, disponible en: <http://www.espectador.com/sociedad/258515/repercusiones-ante-el-traslado-de-mariana-mota>, consultada el 14/6/2016).
38. Mota y Fernández Huidobro habían tenido importantes discrepancias, no solo en materia de derechos humanos, sino también a propósito de la desaparición y posterior búsqueda de un avión *Air Class* estrellado en aguas del Río de la Plata en junio de 2012, cuyos restos fueron hallados un mes más tarde, arrojando el saldo de dos víctimas mortales (el piloto y el copiloto de la aeronave). Previo a su traslado a la esfera civil, la investigación judicial de este siniestro estaba justamente a cargo de la jueza Mota.

durante los cinco años de mandato, aprobándose varios proyectos que aumentaron penas, recortaron libertades, colaboraron notoriamente con el crecimiento de la población carcelaria y colocaron a la “minoridad infractora” en el centro de la discusión³⁹. Como resultado, hacia el fin del período, la oposición juntó rápidamente las firmas que le permitieron celebrar un plebiscito para bajar la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años de edad. Si la iniciativa de reforma constitucional no triunfó en 2014, fue porque buena parte de la izquierda que se había opuesto a la agenda de “mano dura”, se unió a un intenso movimiento de jóvenes movilizados a lo largo y a lo ancho del país en la llamada Comisión “No a la Baja”. Esta fue la última movilización política de gran intensidad que convocó a los jóvenes, luego de la derrota del denominado “voto rosado” para anular la Ley de Caducidad cinco años antes.

Un retroceso más a anotar fue la defección en toda la línea de la relación entre el FA y las FF. AA. durante el período de Mujica, dada la connivencia del ministro de Defensa Nacional con la corporación, su defensa irrestricta de la misma y su cuidadoso celo respecto a su presupuesto, funciones y legitimidad. El resultado de ello fue un aumento del poder político de los militares, el abandono de las propuestas programáticas del FA tendientes a devolver a la órbita civil actividades e instituciones que habían sido “militarizadas” durante la dictadura (como la aviación civil, la marina mercante, el cuidado de parques nacionales, o el servicio meteorológico), y la incursión del Ejército en diversas actividades “civiles” con el objetivo de mejorar su imagen.

39. En materia de seguridad ciudadana, durante el período de Mujica se aprobaron leyes tales como la N° 18.771 “Instituto de Responsabilidad Penal Adolescente. Creación”; la N° 18.778 “Adolescentes en Conflicto con la Ley. Mantenimiento de Antecedentes Judiciales en los Casos que se Determinen”; la N° 19.007 “Delitos contra la Administración Pública y de Tráfico de Pasta Base de Cocaína. Aumento de las Penas en Determinados Casos”; la Ley N° 19.120 “Faltas y Conservación y Cuidado de los Espacios Públicos”.

En el campo de la “reforma del Estado”, tan preconizada durante la administración de Tabaré Vázquez como “la madre de todas las reformas” e igualmente jerarquizada durante el gobierno de Mujica, se avanzó poco, aunque se aprobó un nuevo Estatuto del Funcionario Público. Las negociaciones entre trabajadores estatales y Gobierno fueron muy complicadas durante todo el período. Los discursos de Mujica francamente antipáticos al funcionariado público, su desprecio por los intelectuales, su concentración casi exclusiva en la enseñanza técnica y la continua defensa que hacía de la experiencia “real” por oposición a “los libros”, hicieron que aquel primer discurso con el que inauguró su mandato ante el Parlamento, y en el que la educación tuviera un papel tan destacado, se viera después empañado y oscurecido por discursos que lo acercaron más al “pobrismo” que a la “ilustración”⁴⁰.

El resultado fue un distanciamiento grande ya no del presidente sino de todo el Frente Amplio con los gremios de la educación y algunos gremios de funcionarios públicos, que redundó en la creación de otro espacio “sindical”, al que el movimiento sindical observa con preocupación, y que puede terminar, en un futuro no tan lejano, en la pérdida de la unidad del movimiento sindical, un gran logro de los años sesenta que abonó el camino para el crecimiento de una izquierda unificada.

La tentación restauradora y sus límites: el segundo gobierno de Tabaré

La vuelta de Tabaré a la presidencia de la República, luego del período de Mujica, pareció la “crónica de una muerte anunciada”. Casi todos los grupos del FA clamaron por su retorno,

40. En el citado libro de Danza y Tulbovitz (2015), Mujica expresó: “Hay que juntarse y hacer mierda a esos gremios [de la enseñanza], no queda otra. Ojalá logremos sacarlos del camino” (p. 254).

lo fueron a buscar a su casa (literalmente) y uno de los primeros grupos en apoyarlo fue el del presidente Mujica, quien puso toda su popularidad al servicio de la candidatura de aquel. Con esto, el Frente Amplio hipotecó el desafío de la renovación generacional, volviendo a ensayar la solución “que ya había funcionado una vez”, sin darse cuenta de que los tiempos habían cambiado, de que el gobierno de Mujica había puesto mucha cosa patas para arriba, y de que se necesitaban urgentemente figuras de recambio generacional en un escenario en el que el presidente saliente tenía casi ochenta años, y el presidente entrante los cumpliría al terminar su mandato.

Pero Tabaré Vázquez no solo no representaba una renovación generacional de la izquierda, sino que para muchos significaba una vuelta atrás en las políticas en las que el gobierno de Mujica había innovado: en la política económica, en la política exterior, en las políticas de salud sexual y reproductiva y en las políticas de drogas. La agenda de derechos, con su despenalización del aborto, la legalización del cannabis, entre otros, se vería fuertemente enlentecida en su aplicación, a inicios de la nueva administración de Vázquez. También frente a la tímida iniciativa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) (Nº 19.307), aprobada al fin del período, luego de años de debate y controversias, Tabaré Vázquez decidió no hacerla efectiva hasta que la SCJ se expidiera sobre la constitucionalidad de la medida, revelando, una vez más, la enorme debilidad de la izquierda frente a los medios de comunicación⁴¹.

41. Desde que el Poder Ejecutivo comenzó a redactar el proyecto de LSCA (2011), pasando por su aprobación en el Parlamento (2014), y la interposición de recursos de inconstitucionalidad ante la SCJ (2015), han transcurrido más de cinco años. La SCJ ha comenzado a fallar a favor de la Ley –solo tres artículos de 200 que tiene la norma, y de forma parcial, han sido declarados inconstitucionales. La reglamentación de la ley aún no se ha concretado.

La continuidad del equipo económico, débilmente desafiada durante el mandato de Mujica, se veía asegurada durante el gobierno de Tabaré, ya que el propio exvicepresidente Danilo Astori volvía a ser el ministro de Economía y Finanzas. Finalmente, en política exterior, la designación como canciller del también exvicepresidente Rodolfo Nin Novoa, firme partidario del “regionalismo abierto”, perteneciente a las alas “moderadas” del FA y alineadas con el equipo económico, auguraba una vuelta atrás en nuestro alineamiento en la región, y luego de los cambios de gobierno en Brasil, Argentina y Paraguay, un franco retroceso en cualquier materia relativa a la “patria grande”. La Cancillería decidió impulsar una revisión de la resolución 32/00 del Mercosur con miras a “liberalizar” los acuerdos con terceros países de los socios de la región; abogó por la entrada de Uruguay en el Trade in Services Agreement –TISA– (lo cual no se concretó porque la orgánica del FA le pidió al Gobierno que se retirara de las negociaciones); celebró la retomada de los acuerdos con el Gobierno de Macri; se desolidarizó con Venezuela (país con el que se registraron duros entredichos inconcebibles en la era anterior Mujica-Chávez) y, aunque reaccionó “con preocupación” ante la situación brasileña, no realizó declaraciones frente al *impeachment* que pudieran comprometer su futura relación con el brasileño Michel Temer.

Algunas de las políticas desarrolladas durante el gobierno de Mujica, y que pertenecían al cerno de su gestión, fueron objeto de grandes transformaciones, y perdieron prioridad, en el gobierno de Tabaré: el Fondes, que apoyaba a las empresas recuperadas por los trabajadores, tuvo que ser compartido con la pequeña y la mediana empresa, y su gestión estuvo “bajo la lupa”. El Plan Juntos, para la erradicación de la vivienda insalubre, salió de la gestión de Presidencia y pasó a revestir como un rubro más en la cartera de Vivienda. La regulación del cannabis, su venta en farmacias y su consumo medicinal permanecieron en latencia durante el primer año y medio de

este segundo mandato de Vázquez, y solo los clubes de autoconsumo y los cultivadores fueron la señal de que, en este aspecto, algo había cambiado.

Para peor, la economía había cambiado. Si el primer gobierno de Tabaré había experimentado un proceso de crecimiento económico a 6% promedio, y el gobierno de Mujica había gozado de un sólido crecimiento anual de 4,5%, la segunda presidencia de Tabaré inició con una proyección de 2,5%, convertida rápidamente en 0,5% durante el segundo año, y sin mayores previsiones de mejora para los años siguientes.

El contexto regional había cambiado sensiblemente. Brasil, que había obtenido una victoria nítida en las elecciones de octubre de 2014, se encontraba en una etapa recesiva tanto económica como políticamente, y la salida de Dilma volvía a dejar al Uruguay sin aliado. En Argentina triunfaba Macri, un resultado menos inesperado que el derrumbe del gobierno de Dilma, pero su economía mostraba francas señales de deterioro, y para el Uruguay, esta era una pésima señal. La actividad turística, fuertemente dependiente del país vecino, y uno de los servicios en mayor expansión en el país de la última década, vendría a resentirse fuertemente, producto de esta situación. Todo tenía un cierto aire de finales de los noventa, cuando Brasil devaluó el real y Argentina experimentó su cataclismo financiero. Tabaré, que venía a cerrar con broche de oro su segunda gestión, siendo uno de los pocos privilegiados en repetir gobierno en un país sin reelección⁴², demoró en entender que los tiempos habían

42. Los otros casos de presidentes elegidos en las urnas que repitieron mandato fueron los de José Batlle y Ordóñez (1903-1907; 1911-1915) y Julio María Sanguinetti (1985-1990; 1995-2000). Cabe señalar, empero, que Vázquez fue el único presidente votado dos veces en elecciones completamente libres y bajo todas las garantías impuestas por una poliarquía; los dos mandatos de Batlle y Ordóñez son previos al establecimiento de un orden totalmente poliárquico, en tanto los comicios de 1984 en los que fue investido Sanguinetti por vez primera, se celebraron en dictadura, con candidatos y ciudadanos proscriptos.

cambiado. Y él ya no tenía la energía de entonces para hacer frente a tanta incertidumbre.

Los datos de las encuestas comenzaron, por primera vez, a marcar un deterioro pronunciado en la popularidad del Gobierno, que daba manotones de ahogado entre la difícil aprobación de un presupuesto sin mayores novedades ni incrementos, la movilización de los gremios de la educación a la que intentó enfrentar –desgraciadamente– con un decreto de “esencialidad” para impedir la huelga, completamente ineficaz y altamente contraproducente, y una inseguridad pública que ha continuado altísima, aunque el aumento del desempleo y la retracción del consumo consiguieron desplazarla en la opinión pública de un problema central a un problema más secundario.

La oposición, que había saboreado anticipadamente el triunfo dado el escaso margen anticipado por las (erradas) encuestas de opinión pública, y había logrado instalar dos candidatos en pocos meses, habida cuenta de una campaña mediática carísima y eficaz (personificadas en Luis Lacalle Pou –nuestro Aecio Neves–, que disputó el balotaje con Tabaré Vázquez, y Edgardo Novick, que disputó el gobierno de la capital del país con el actual intendente frenteamplista Daniel Martínez), se aprestaba a desarrollar una estrategia de oposición férrea, con alto desarrollo mediático y altísima judicialización de los conflictos políticos.

En pocos meses se dedicó a destruir el prestigio del Raúl Sendic, propiciando la instalación de una Comisión Investigadora por el tema de la gestión de la empresa petrolera Ancap, que este había dirigido durante los últimos cinco años, y que demostraba un deterioro patrimonial y un déficit de gestión acentuado (también producto de la crisis que afectaba a Venezuela, que vendía crudo a Uruguay a condiciones muy ventajosas). Finalmente, el “descubrimiento” de que el vicepresidente de la República no tenía el título de “licenciado en Genética Humana” con el que se había presentado oficialmente, generó un gran malestar en las propias filas frenteamplistas.

El segundo año, el Gobierno enfrentó dos dificultades mayores. En primer término, se le hizo difícil remontar la caída de la brevísima luna de miel al descontento. Por primera vez, las encuestas mostraban que la oposición era superior en intención de voto al Gobierno, y que la desaprobación del Gobierno era superior a su aprobación. En segundo lugar, el Ejecutivo anunció para su rendición de cuentas del año un aumento de tarifas e impuestos, que fue conocido como el primer “ajuste fiscal” con gobierno de izquierda. En la región, estábamos cada vez más solos, y las dificultades eran por primera vez, claramente superiores a las facilidades.

Lo bueno, lo malo y lo feo de once años de gobiernos frenteamplistas

Cuando uno mira la estructura de la economía y la sociedad uruguaya, las contradicciones de los gobiernos de izquierda saltan a la vista. En estos años, el país procesó un desarrollo capitalista poco menos que espectacular, con algunas transformaciones indudables de su estructura productiva, que lo volvieron menos vulnerable, más competitivo, y diversificaron su producción y su exportación. El país “agrícola” que vino a complementar el ganadero con fuerte despegue de rubros de exportación como el arroz o la soja, el aumento de la actividad turística, la diversificación del comercio exterior y el crecimiento de la inversión externa directa, hablan de este “éxito” económico de un desarrollo capitalista más competitivo y con mejor inserción en el mundo. Pero nada de esto tuvo que ver con el socialismo, ni con sus promesas (aunque el FA no adhiere en sus principios al “socialismo” dada la diversidad de visiones políticas en su seno).

El modelo productivo fue altamente dependiente de la inversión externa directa, que llegó al Uruguay como nunca antes, pero reforzó la instalación de zonas francas a lo largo y

a lo ancho del país, exonerando tributos por miles de millones de dólares y causando siempre entre la izquierda uruguaya la sensación de que teníamos un tratamiento “dual” en cuanto a la inversión nacional y la extranjera, con notoria ventaja para esta última.

La economía social estuvo amparada por las leyes y el apoyo del Estado, aunque no floreció en el período: el movimiento cooperativo continuó su lenta acumulación, pero el cooperativismo de producción siguió siendo residual frente a la empresa capitalista, y el cooperativismo financiero y de consumo que habían perdido pie con la crisis de 2002, no volvieron a recuperarse. La llamada “vela prendida al socialismo” de las empresas recuperadas por los trabajadores, que venía a reforzar la economía social, no llegó a prosperar, y en muchos casos volvieron a quebrar, dejando al Estado en situación de acreedor de deudas incobrables. Muchos emprendimientos cooperativos financiados de esta forma terminaron resultando en centenas de trabajadores en la calle. Al mismo tiempo, la agricultura familiar y la lechería resultaron sectores muy afectados por los cambios, especialmente por la agricultura del secano y por la forestación.

En síntesis: durante los gobiernos de izquierda, el Uruguay procesó una transformación capitalista importante, interesante y positiva. Con la excepción del Partido Comunista, y de algunos pequeños grupos del FA, la mayoría se alineó a la tesis del capitalismo competitivo, al que Mujica llamó “capitalismo en serio”, y a la idea de que una “socialdemocracia” a la europea (o a la neozelandesa, en la versión “mujiquista”) era posible. Ningún líder importante de los personeros del Gobierno se atrevió a formular nada que pudiera escapar a este marco. Las críticas a las políticas económicas fueron muy importantes a lo largo del período, pero el equipo económico se mantuvo incambiado desde el inicio, lo cual generó una brecha importante entre el Gobierno, los aliados en el movimiento sindical y los economistas de izquierda.

La revolución y el socialismo, pues, fueron dejados para la política social, donde se registraron efectivos e importantes avances. Algunos, en clave “socialdemócrata”, y otros en clave de avance en la agenda de la modernidad, siempre inacabada por estas latitudes. Hubo importantes y casi revolucionarios avances en los derechos de las mujeres, de los trabajadores, de la población rural y de los grupos más vulnerables.

Se llevaron a cabo muchas políticas para la población más marginada –a la que se le aseguró por medio de diversos planes un mínimo de bienestar– que llevaron la proporción de personas en situación de indigencia de 2,5% (2006) a 0,3% (2015) (INE 2016). Uruguay avanzó en la erradicación y regularización de los asentamientos poblacionales más precarios, pero el fenómeno no pudo ser erradicado sino apenas contenido. Hubo un notorio aumento de los ingresos de los hogares y del salario real, aunque nunca en tal magnitud como para acompañar el crecimiento económico del país. Mejoró la distribución del ingreso, pasando el índice de Gini de 0,455 (2006) a 0,386 (2015) (INE 2016), y cayó el porcentaje de personas en situación de pobreza de 32,5% (2006) a 9,7% (2015) (INE 2016). Las políticas laborales fueron decisivas en estos avances: la instalación de los Consejos de Salarios, su expansión al sector público, la ley de las trabajadoras domésticas y los trabajadores rurales, el aumento sustancial del salario mínimo y las políticas de formalización del empleo colaboraron enormemente con ello. La reforma de salud hizo lo suyo también al eliminar progresivamente del pago de bolsillo la asistencia integral en el sistema.

En la educación hubo avances efectivos en el mejoramiento de los salarios docentes, en la descentralización de la Universidad de la República, y en el aumento de los recursos destinados a la investigación y el desarrollo.

El interior del país conoció una prosperidad inédita: el aumento de los precios de los *commodities*, la expansión de la agricultura del secano, la ley de descentralización que creó alcaldías y municipios, la expansión de obras

de infraestructura vinculadas a la inversión externa directa, revitalizaron el país.

Las mujeres conquistaron la cuota política para los cargos públicos electivos, la despenalización el aborto, un sistema nacional integrado de cuidados, y mejoras en su acceso a las licencias maternales, aunque continuó altísima la discriminación laboral y la violencia de género.

La población afrodescendiente, la población trans, las comunidades LGBTI, entre otras, fueron objeto de tratamiento de muchas leyes y programas tendientes no solo al combate a la discriminación, sino a su reconocimiento y atención social.

A través de la política laboral, la política social y la legislación, Uruguay logró avanzar en su proceso de modernización y completar un ciclo que algunos denominaron “tercer batllismo”, en referencia a los otros dos períodos históricos de importantes avances y reformas modernizadoras que habían dotado al país de una legislación de “avanzada” en materia de derechos sociales, civiles y políticos (“primer batllismo”) y consolidado la estructura de un sistema de bienestar (“segundo batllismo”) que ni siquiera la dictadura había logrado exterminar completamente, y que funcionaría como resguardo político y moral en la conciencia política de la nación⁴³.

Las principales debilidades del proyecto de la izquierda fueron en aquellos terrenos donde hubo poca o ninguna reflexión teórica: en el de los medios de comunicación, en el de la política “represiva”, en el del tratamiento a la cuestión militar y el del Poder Judicial.

En el campo de los medios de comunicación, la izquierda se encontró pronto empantanada: su dependencia de los mismos

43. La historiografía ubica al “primer batllismo”, también denominado “batllismo temprano”, cuyo líder indiscutido fue José Batlle y Ordóñez, en el período comprendido entre 1903 y 1933, en tanto coloca al “segundo batllismo” o “neobatllismo”, que tuvo a su sobrino Luis Batlle Berres como principal referente, entre 1946 y 1958.

fue creciente, en términos de la construcción de su propia imagen. No intentó su reforma, ni crear medios propios, sino que se adaptó al sistema, lo cual se manifestó en un uso absolutamente discrecional por líderes y grupos (incluyendo a Mujica) de la televisión, la radio y los medios escritos. Al mismo tiempo, la construcción de la “opinión pública” desde los medios y las encuestas de opinión le hizo olvidar a la izquierda cualquier reflexión profunda sobre la forma en que la “ideología dominante” construye sus falsos consensos de opinión, sus prioridades, su agenda. Esto ocasionó, entre otras cosas, unas políticas de seguridad pública que fueron condicionadas por esta “opinión pública” para apuntar al paradigma de la “mano dura”, la “tolerancia cero” y la represión armada de la conflictividad social.

Las políticas de seguridad se transformaron en centrales en un proyecto de izquierda que debía tener otros objetivos. Fueron prioridad presupuestal, y a pesar de ello, la izquierda siempre perdió en este terreno: sus ministros fueron impopulares, la inseguridad siguió creciendo y las cárceles se llenaron de jóvenes pobres. Hubo poca inversión (aunque la hubo) en los delitos de “cuello blanco”, se exageró en el combate al narcotráfico (con la salvedad de la regulación “legal” de la marihuana) y se endurecieron las penas contra los jóvenes. El país experimentó en el período lo que se conoció como “inflación punitiva”. La seguridad fue el talón de Aquiles del segundo y tercer período frenteamplista; el Gobierno no solo no logró llevar adelante una política alternativa, sino que fracasó en la lucha comunicacional y cultural contra el “flagelo de la delincuencia”. La seguridad fue el tema principal de la oposición durante todas las campañas. Los cuerpos armados de la sociedad (la policía y las FF. AA.) fueron reforzados, consolidados, sofisticados, y estarán disponibles para cualquier estrategia de control total de las poblaciones, si alguna vez viniera a producirse un impasse autoritario como los del pasado. Y una parte de la responsabilidad será nuestra.

El avance en derechos humanos fue escasísimo. Luego de once años de gobierno frenteamplista, los procesados seguían siendo un puñado de militares desacreditados, se seguía sin saber prácticamente nada sobre los desaparecidos (de casi doscientas personas detenidas desaparecidas, solo se ha encontrado el paradero de cuatro de ellas) y la cúpula del Poder Judicial expresó su manifiesto desinterés en avanzar con las causas y su orientación general fue dar el asunto por terminado. Más aún, en varias de las declaraciones de inconstitucionalidad que sufrieron las leyes aprobadas durante el período de Mujica, la SCJ había manifestado un activismo especial, y las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial se habían transformado en tensas y distantes. Pero la izquierda no había reflexionado nunca sobre el Poder Judicial y su capacidad de imponerse como un freno frente a los avances normativos de los gobiernos de izquierda. No solamente la formación jurídica estaba en un campo en el que la izquierda estaba ausente, sino que, tampoco, ingenió ningún desafío estructural al poder de la corporación, por el contrario intentó, con poco éxito, al igual que con los medios de comunicación, adaptarse sistemáticamente, contando con que su poder de gobierno (y de aprobar o no recursos presupuestales para la Justicia), valdrían mucho en ese campo de juego. No lo valieron, y el Poder Judicial se manifestó reacio a transformaciones significativas del orden jurídico en los temas relativos a la propiedad privada y la seguridad jurídica de los contratos.

Epílogo: ¿qué hacer? La izquierda latinoamericana ante los retos de la restauración conservadora en la región

América Latina hoy está ante una década compleja. Los precios de los *commodities* han caído afectando a las economías locales, y en las economías altamente dependientes del petróleo como la venezolana, estos impactos son aun mayores. Débilmente

articuladas en una división del trabajo mundial que las deja como proveedoras de materias primas o, en algún caso, encadenándose a la producción de bienes intermedios, las economías latinoamericanas no han superado su condición estructural originaria. La izquierda no ha dado una respuesta eficaz a los problemas del desarrollo dependiente, aunque esta haya sido su principal biblioteca, durante mucho tiempo.

La retracción del crecimiento económico ha alentado a la oposición y, en países como Venezuela o Brasil, es parte de la crisis política, la refuerza y la conduce. Como rezaba un cartel de la Federación de Industrias de San Pablo (Fiesp): “Nosotros no vamos a pagar el pato”. La pregunta es: ¿quién paga el pato en épocas de crisis? “Nosotros no”, dirá el gran capital, los empresarios, los industriales de la Fiesp. La izquierda en el Gobierno impedirá que el ajuste recaiga sobre los trabajadores, los más pobres, las clases medias bajas, los más jóvenes, las mujeres. Para que los poderosos “no paguen el pato” se hace necesario desplazar a la izquierda del Gobierno. Y entonces sí, como con Macri o Temer, el ajuste se convertirá en “tarifazo”, privatizaciones, concesiones a los fondos buitres o reducción del gasto público. Una parte de la crisis política es producida para enfrentar la crisis económica de tal forma que los perdedores y los ganadores estén bien definidos, como siempre.

Sin duda, y más allá de cómo el contexto externo afecta a una región tomadora de decisiones, la forma en que la izquierda ha respondido al mismo revela su precaria eficacia política en términos de crisis. La precariedad de esta eficacia política ha de ser medida en dos dimensiones: en la dimensión interna y en la dimensión externa. En la dimensión interna, la izquierda ha desarrollado una eficacia más que relativa, tanto en la articulación de sus aliados (empresariales, domésticos, políticos: aquí el ejemplo brasileño es el más claro), como en la base social de organizaciones y movimientos (el “apoyo popular” con que se debería contar en épocas de crisis). Tampoco en la dimensión regional e internacional la eficacia política de las izquierdas ha

sido de consideración; los apoyos han sido débiles (como en el caso de Brasil, con la imposibilidad de una declaración conjunta de la Unasur frente al *impeachment* de Dilma) o, peor aun, se han protagonizado enfrentamientos destinados a erosionar a este organismo como base política de la región (como en el caso de Venezuela). La escasa solidaridad interna y externa que enfrentan estos regímenes estrangulados económicamente, y deslegitimados políticamente, es un tema que debe llamarnos a reflexión, y es parte de las debilidades que, pasada la “ola de crecimiento”, quedan a la vista. Una estrategia política de futuro es la de afianzar los vínculos entre todas las izquierdas de la región (en una mirada muy amplia y abarcativa de los fenómenos que pueden ser englobados bajo esta denominación, como señalé al principio de este artículo), habida cuenta de la enorme habilidad que las derechas han desplegado y continuarán desplegando, en su alianza continental (como lo evidencia la creación de la Alianza del Pacífico).

Pero el contexto económico no lo explica todo. En países como Argentina, o Bolivia, o aun Venezuela, el peso de los liderazgos y su incapacidad de recambio han sido elementos determinantes en el triunfo político de las derechas. La escasa capacidad de “transmisión” del capital político de un liderazgo ha ocasionado problemas de sucesión claros en Argentina y Venezuela, y sin duda, lo generará en Bolivia. La importancia del carisma en los procesos políticos del campo popular es un tema poco estudiado, y sobre el que la izquierda debería reflexionar más profundamente.

En tercer lugar, hemos de escuchar con frecuencia que la izquierda “se apartó de sus bases sociales” sin saber a ciencia cierta qué quiere decir esto. En particular, cabe destacar el poco potencial de los gobiernos de izquierda para una gestión “participativa” de sus políticas, y en países como Uruguay destaca especialmente la enorme capacidad que tuvo el Frente Amplio para comprar variados conflictos con sus bases, producto de una brecha cada vez más profunda entre una “burocracia política”

creada por los propios partidos, que manejan la política “desde arriba”, y una base popular, organizada y en movimiento, harta de no ser escuchada y apenas ser llamada a “apoyar” decisiones de un gobierno, a menudo incomprensibles, o finalmente incompatibles. La forma en que los partidos desarrollan y promueven burocracias políticas, poco o nada afines a tomar decisiones compartidas con las bases sociales de estos partidos, es otro tema poco estudiado que le valió a Robert Michels (2003), teorizador de la llamada “ley de hierro de la oligarquía”, muchos sinsabores, y sobre el que hemos reflexionado relativamente poco. Es necesario hacer una reflexión “activa” sobre el desarrollo de nuestras burocracias políticas, una reflexión que tenga como objetivo la transformación de nuestras formas de administrar poder, en aras de construir ese “poder popular” del que hablamos, que está en la génesis misma del concepto de democracia, pero al que hemos honrado tan poco en la práctica.

Finalmente, las izquierdas latinoamericanas seguirán distintos derroteros, en algunos casos buscarán volver a reconquistar el poder perdido (como en Argentina o Brasil), y en otros lucharán para capear la crisis y seguir proyectando conquistas (como en Ecuador, Uruguay, Chile o Bolivia). Para entender la índole de lo que tenemos en común debemos primero hacer un balance de lo que hemos aprendido.

Hemos aprendido sobre las dificultades del “desarrollo nacional” en un contexto de capitalismo periférico y dependiente, (especialmente si es “nacional” y no se hace en una clave regional), y creo que de esas lecciones aprendidas queda bastante luz sobre estos procesos. Ahora sabemos de nuestros fracasos en construir “contrahegemonía” en el campo de los medios masivos de comunicación, y de lo poco claro que estaba ese “cuarto poder” en nuestro análisis y en nuestras perspectivas. Aprendimos muchísimo sobre el Poder Judicial como último recurso del paradigma conservador contra el avance político del progresismo. Sabemos que ser “de izquierda” es ser feminista, estar contra toda discriminación y apoyar la descolonización allí donde esta pueda ser

formulada. Y que nuestras formas de construir “desde arriba”, allí donde ganamos gobierno, fueron mucho más machistas, racistas, centralistas y oligárquicas de lo que podíamos imaginar cuando estábamos en la pura lógica de la resistencia y creíamos en el “hombre nuevo”.

En diez años apenas hemos podido construir las bases de un proyecto inacabado, pero distinto al que heredamos del paradigma de la Guerra Fría y la “era de las revoluciones” latinoamericanas. Esta izquierda, nuestra izquierda, ha cambiado. Hoy tiene otros retos. Y otros contextos. Es democrática y no armada. Es plural y requiere frentes políticos, sociales y culturales que actúen conjuntamente. No ganamos o perdimos revoluciones, pero ganamos en las urnas una y otra vez el derecho a ser gobierno y transformar el Estado. Y hoy, en un momento difícil de nuestro trayecto más reciente, debemos reconocer lo que nos une, lo que nos es común, más allá de la especificidad de cada proyecto histórico y nacional. Debemos latinoamericanizarnos nuevamente si queremos actuar juntos, unida y mancomunadamente, en una región signada por los mismos fracasos y las mismas esperanzas. No fue otro el impulso que dio lugar a este libro. Y es ésta nuestra obligación como intelectuales activos.

BIBLIOGRAFÍA

- Comisión Económica para América Latina - Cepal (2015), *Panorama social en América Latina. Documento informativo*, Santiago de Chile.
- Comisión Económica para América Latina - Cepal (2015), *Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 2015 (LC/G.2645-P)*, Santiago de Chile, 2015. Disponible en: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38713/S1500733_es.pdf [Consultado el 14/6/2016].
- Comisión Económica para América Latina - Cepal (2014), *Panorama social en América Latina*, Santiago de Chile.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos - CIDH (2011), *Caso Gelman Vs. Uruguay (Fondo y Reparaciones)*. Sentencia del 24 de febrero de 2014.
- Danza, Andrés y Tulbovitz, Ernesto (2015), *Una oveja negra al poder. Confesiones e intimidades de Pepe Mujica*, Montevideo, Penguin Random House.
- Fukuyama, Francis (1989), *¿El fin de la historia? Y otros ensayos*, Madrid, Alianza Editorial.
- Helman Gerald y Ratner, Steven (1993), "Saving Failed States", en *Foreign Policy*, vol. 89 (invierno de 1993), pp. 3-20.
- Instituto Nacional de Estadística - INE (2016), *Estimación de la Pobreza por el Método del Ingreso. Año 2015*. Montevideo, marzo de 2016. Disponible en: <http://www.ine.gub.uy/documents/10181/364159/Estimaci%C3%B3n+de+la+pobreza+por+el+M%C3%A9todo+del+Ingreso+2015/3>

21a0edb-d97e-4abo-aa88-e31ce7a22307 [Consultado el 14/6/2016]

Michels, Robert (2003), *Los partidos políticos. Un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas de las democracias modernas*, Buenos Aires, Amorrortu.

Organización Internacional del Trabajo - OIT (2014), *Panorama Laboral de América Latina 2013*, Lima, Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe.

Organización Internacional del Trabajo - OIT (2013), *Panorama Laboral de América Latina 2014*, Lima, Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe.

Olesker, Daniel (2001), *Crecimiento y Exclusión. Nacimiento, consolidación y crisis del modelo de acumulación capitalista en Uruguay (1968-2000)*, Montevideo, Trilce.

Montevideo, junio de 2016

ALFREDO SERRANO MANCILLA¹

El chavismo en Venezuela: orígenes, logros, retos y perspectivas

El 4 de febrero de 1992 se produjo en Venezuela una insurrección militar contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez liderada por el teniente coronel Hugo Chávez. Motivos no faltaban: la pobreza del pueblo en los barrios, en los cerros, en los campos; la pérdida de soberanía e independencia, las privatizaciones a favor de unos pocos. Una democracia que no democratizaba económica ni socialmente. El intento insurreccional fue fallido en cuanto a su objetivo de corto plazo, sin embargo, a medio término, ese momento histórico resultó ser el germen del inicio de la Revolución Bolivariana.

Luego de la rebelión militar, Chávez fue encarcelado durante dos años (1994-1996), al cabo de los cuales comenzó un largo camino que lo llevó a perfilarse como un posible candidato

1. Doctor en Economía. Director del Celag (Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica).

para el cambio en Venezuela, con una propuesta bajo el brazo: la Agenda Alternativa Bolivariana. El 6 de diciembre de 1998, tras una intensa campaña electoral, el Polo Patriótico ganó las elecciones con 56,2% de los votos, 16 puntos por encima del candidato opositor. Así, Hugo Chávez Frías se convirtió en el primer líder de lo que sería el eje no-neoliberal de la región.

A contracorriente de la hegemonía neoliberal a escala global, el chavismo emergió en el escenario político venezolano como una nueva fuerza, con un programa de gobierno profundamente antineoliberal, poniendo fin a cuarenta años de bipartidismo en el país. Luego de décadas de gobiernos que habían favorecido la concentración de la riqueza en manos de pocos grupos económicos, Hugo Chávez llegó al poder como representante legítimo de la grandes mayorías excluidas del país. Con ello, la democracia aparente del puntofijismo² dio paso, después de casi medio siglo, a una democracia mucho más real: representativa, participativa, económica, social y protagónica.

Al tomar posesión de su cargo, Chávez juró sobre una “moribunda Constitución” y prometió dar inicio a un proceso profundo de transformación cuyo puntapié inicial y fundamental sería la convocatoria a una Asamblea Constituyente. En la Venezuela de aquellos años, el movimiento popular surgido a modo de nuevo topo irrumpiendo en el escenario político, modificó la vieja y anquilosada correlación de fuerzas políticas del pasado. La Constitución no podría seguir respondiendo a una realidad del pasado. Por eso rápidamente, el 25 de abril de 1999, apenas dos meses después de que Chávez asumiera la presidencia, el pueblo ya estaba votando en un referéndum la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, como

-
2. El Pacto de Punto Fijo fue un acuerdo entre los partidos políticos venezolanos AD, Copei y URD, firmado el 31 de octubre de 1958, pocos meses después del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez y antes de las elecciones de diciembre de ese mismo año.

consulta vinculante que realizó dos preguntas a la voluntad popular acerca de la sustitución o no de la Constitución de 1961 y, por consiguiente, la aprobación de las bases del funcionamiento de la Asamblea. La mayoría del pueblo venezolano respaldó esta ruptura democrática que apuntaba a democratizar realmente la vida política y económica del país, y a que se eligieran a los representantes del nuevo poder constituyente. Las elecciones para conformar la Asamblea Constituyente se realizaron en julio de 1999: la mayoría fue nuevamente a favor de las filas de Chávez, que obtuvo 125 asientos de 131 (es decir, 95% del total).

La Asamblea Constituyente se instaló el 3 de agosto de 1999 y desde ese momento se estableció un período de seis meses para redactar la nueva Carta Magna. El flamante poder constituyente asumía legítima y legalmente todo el poder político, dando por terminados los poderes concedidos a las instituciones derivadas de un pacto definitivamente prescripto. Después de un proceso dinámico, con mucha participación popular en la presentación y discusión de todo tipo de propuestas, en noviembre se llegó a tener confeccionada una para la Carta Magna, que se sometería a referendo popular el 15 de diciembre. El apoyo nuevamente fue mayoritario: 71,78% de los votos a favor. La nueva Constitución fue promulgada definitivamente por la Asamblea Nacional Constituyente el 20 de diciembre de 1999, y entró en plena aplicabilidad el 1 de enero del 2000.

De esta forma, el siglo XXI se inició con un nuevo contrato social, político y económico para la República Bolivariana de Venezuela, tal el nombre que la Carta Magna establecía. Chávez lo había sostenido desde antes de llegar al poder: no podría haber cambio real sin cambiar el marco constitucional del que se derivaban las leyes que regulaban la vida económica del país. La Constitución vigente hasta 1999 cristalizaba un pacto político caducado: el de las élites dominantes que excluyeron a las mayorías en el contrato social, el pacto del Punto Fijo que defendía a cualquier precio una democracia fingida

sin democratización real en el terreno económico. El obsoleto marco constitucional había privilegiado y permitido la venta de la soberanía, la importación de leyes del exterior a través de tratados bilaterales de inversión, la aceptación de ser arbitrado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) dependiente del Banco Mundial, facilidades para que la inversión extranjera pudiera convertirse en remesas de utilidades netas sin ningún compromiso en el país, etcétera.

La Constitución Bolivariana de Venezuela supuso la apertura de una corriente alternativa al constitucionalismo tradicional y hegemónico. De ahí también el potencial creativo del proceso constituyente venezolano y lo vigoroso de su irradiación hacia el resto del continente. Dicho proceso abrió un horizonte de posibilidades para la región al instalar una agenda que daría lugar a otros procesos de refundación, como el caso de Ecuador y Bolivia, impensables pocos años antes.

Desde la perspectiva económica, la búsqueda de una nueva Constitución era una forma robusta y sostenible de afrontar la transición deseada para poner fin al neoliberalismo. Un acuerdo económico, plasmado en el documento político más relevante del país, sería la base sobre la cual construir la economía que Chávez venía defendiendo: nacionalista, desarrollista, humanista, bolivariana y antineoliberal. La propuesta en lo económico era combinar una doble velocidad en dos dimensiones esenciales: urgencia en resolver el endeudamiento social sin tiempo que perder y urgencia para cambiar la base legal, desde su raíz constitucional, para edificar una nueva estructura económica que requeriría más tiempo político y económico. La intención era dedicar el mayor esfuerzo a satisfacer necesidades básicas en calidad de derechos, como política de Estado, para que todo lo posterior se construyera desde una base humana y social sólida: un pueblo con alimentación, educación y salud satisfechas. Por ello, el texto constitucional apuesta por una humanización integral de la política económica.

Los años de logros políticos, sociales y económicos

Con este nuevo marco constitucional, Hugo Chávez comenzó a forjar una economía real centrada en el pueblo, y no un pueblo al servicio de una economía capitalista. En este sentido, la primera acción en materia de política económica de la Revolución Bolivariana, con el fin de afrontar las urgencias impostergables en las que se encontraba gran parte de la población, fue el Plan Bolívar 2000, lanzado a inicios de 1999, que representó la primera pieza del complejo entramado futuro que constituirán las Misiones Bolivarianas. Se trataba de un plan cívico-militar de orientación cortoplacista, que utilizó medios y recursos de la plataforma militar para intentar dar respuesta a las necesidades de la población en situación de máxima exclusión social. Este plan fue la plataforma de relanzamiento de la política social del Gobierno buscando poner a las Fuerzas Armadas en contacto directo con las comunidades más necesitadas y modificando así el papel del ejército, que desde ese momento, además de ser garante de la defensa del Estado y de las fronteras ante cualquier intento de desestabilización del exterior, asumiría un rol activo en las problemáticas propias internas del país. En este sentido, constituyó el germen de inicio de la fusión cívico-militar que posteriormente se erigiría como un rasgo característico de la Revolución Bolivariana.

La intención por parte del Ejecutivo, innegablemente, era fortalecer los programas de desarrollo y garantizar que los recursos destinados al sector social llegasen efectivamente a la población más empobrecida y excluida con la mayor celeridad posible, evitando las trampas burocráticas de un Estado caduco, sin tener que pasar por los miles de vericuetos remanentes de un Estado de bienestar (en miniatura) fallido. Por ello, el Plan Bolívar 2000 comprendió un conjunto de actividades definidas como de asistencia pública, de mejoramiento, recuperación y/o construcción de viviendas; de infraestructura educativa; de reorganización del sistema de salud pública con énfasis en la

atención primaria, apoyado en la organización comunitaria de la población; un programa de empleo rápido; así como acciones de beneficencia en las comunidades de pobreza crítica y extrema, que incluyó suministros gratuitos de alimentos y de implementos básicos, entre otras acciones similares. En definitiva, este plan marcó la nueva tendencia de la construcción de un renovado Estado, no burgués, participativo, no pasivo ni distante del poder popular. Se trataba solo de un embrión, aún insignificante, de lo que después tomaría la forma de un nuevo Estado que la Revolución Bolivariana conseguiría configurar en la Venezuela del siglo XXI: el Estado de las Misiones.

Complementariamente, durante los primeros meses de gobierno, gracias a la Ley Habilitante promulgada el 23 de marzo de 1999, se llevaron a cabo en simultáneo un conjunto de importantes acciones económicas, de las cuales merecen ser destacadas las siguientes por su importancia estratégica:

1. Ley orgánica de Hidrocarburos gaseosos. El principal objetivo fue organizar y unificar las distintas leyes que regulaban la producción hidrocarburífera en el país; regulando la propiedad pública del petróleo, impidiendo la privatización y estableciendo el control, por parte del Estado, de cualquier empresa dedicada al negocio del petróleo. La principal disposición estableció que la extracción del crudo debe ser competencia del Estado, al menos en 51%, al tiempo que otorgó a Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (Pdvs) una participación de 30% como regalía sobre los crudos extraídos en cualquier yacimiento. Anteriormente ese impuesto era de 16,7%.

2. Ley de Tierras y desarrollo agrario. Tal como lo expresa su artículo 1º, buscó establecer las bases del desarrollo rural integral y sustentable, entendido este como el medio fundamental para el desarrollo humano y crecimiento económico del sector agrario dentro de una justa distribución de la riqueza y una planificación estratégica, democrática y participativa. La ley busca eliminar, además, el latifundio como sistema contrario a la justicia, al interés general y a la paz social en el campo,

asegurando la biodiversidad, la seguridad agroalimentaria y la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario de la presente y de las futuras generaciones. Al mismo tiempo, la normativa buscó garantizar la soberanía alimentaria y finalizar la etapa de importación de alimentos y de infrautilización de los recursos agrarios.

3. Ley de Creación, Estímulo, Promoción y Desarrollo del Sistema Microfinanciero. El objeto de esta ley fue crear, estimular, promover y desarrollar el sistema microfinanciero orientado a facilitar el acceso a los servicios financieros y no financieros, en forma rápida y oportuna, a las comunidades populares y autogestionarias, las empresas familiares, las personas naturales autoempleadas o desempleadas, y cualquier otra forma de asociación comunitaria para el trabajo, que desarrolle o tenga iniciativas para desarrollar una actividad económica, buscando integrarla en las dinámicas económicas y sociales del país. En este sentido, se puede observar la importante acción de creación del Banco del Pueblo Soberano, una institución del sistema microfinanciero de Venezuela con un enfoque de desarrollo soberano, social, sostenible, endógeno y humanista, y orientado a fortalecer la construcción de una nueva economía: la economía comunal.

4. Ley de Estímulo para el Fortalecimiento Patrimonial, Racionalización, Gastos, Transformación, Sector Bancario. La ley reguló las condiciones, requisitos y procedimientos que deberían cumplir para fusionarse los institutos de intermediación financiera; asimismo, en dicho instrumento jurídico se definieron las modalidades de fusión permitidas. En definitiva, se procuraba tener un marco regulatorio que ordenara la reconfiguración del mercado bancario evitando que se produjera un exceso de concentración perjudicial para los intereses del pueblo venezolano.

5. Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos. Declara de interés público general, social y colectivo toda materia relacionada con los arrendamientos de

inmuebles destinados a vivienda. Mediante la misma, el Estado puede implementar cualquier medida que permita desarrollar las bases y mecanismos necesarios que garanticen, a todas las ciudadanas y los ciudadanos el goce del derecho humano a una vivienda y hábitat en condiciones dignas, que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. Esta nueva política económica para la vivienda ha supuesto una verdadera declaración de intenciones, que persigue que la vivienda no sea un objeto cualquiera en las relaciones mercantiles, sino que ha de estar condicionada a una política pública de garantías.

El nuevo marco conceptual de la política social se sustentó, además, en una política de inversión con notable presupuesto público: la inversión social pasó de 7,8% del producto interno bruto en 1998, a 11,8% del PIB en 2001. Esto permitió iniciar de manera decidida un camino de recuperación soberana de las riendas de la economía y una reapropiación de los sectores estratégicos por parte del Estado, posibilitando que pudiera comenzar a saldarse la profunda deuda social que en la última fase del neoliberalismo mantenía a 55% de la población bajo la línea de pobreza. Con esto queda en evidencia que la Revolución Bolivariana no venía a reformar el viejo Estado de Bienestar (en miniatura) venezolano; no era una cuestión de parches ni de reformas marginales.

Pero este proceso incipiente de transformación, así como también las políticas económicas que comenzaban a dar los primeros resultados en favor de las mayorías, debió enfrentar grandes dificultades en esos primeros años, al menos en dos sentidos. En primer término, la herencia de la deuda social venía acompañada por otra aun más complicada de resolver: la herencia de un Estado ciertamente desmantelado, inexistente para desarrollar muchas competencias desaparecidas, y un retal de Estado corporativista, burocratizado al servicio de intereses particulares, poco democratizado en su funcionamiento y en sus objetivos trazados: un Estado útil para el

modelo neoliberal. Cambiar aquello supuso uno de los primeros retos de Chávez como presidente de la república. La transición hacia un cambio de época en lo económico exigía una reconstrucción que no podría hacerse reacomodando el viejo Estado burgués, aparente, incapaz de ser eficaz socialmente, con mecanismos obsoletos. Era necesario poner en marcha la construcción de un nuevo Estado, con el enorme esfuerzo político, económico, social y logístico que ello implica.

En segundo lugar, este proceso se vio truncado en 2002, cuando las fuerzas reaccionarias realizaron una gran alianza contra el chavismo entre los sectores que no estaban dispuestos a acatar las reglas democráticas procedimentales, mediante las que el pueblo había elegido ya al nuevo Gobierno, ni tampoco a respetar una democracia más integral, prevista para democratizar las relaciones económicas. Ese nuevo pacto conservador disfrazaba, bajo el manto de una supuesta defensa de la democracia, las verdaderas intenciones de desalojar como fuera al Gobierno elegido democráticamente por amplia mayoría del pueblo venezolano. Fueron estos sectores los que en abril de 2002 impulsaron un golpe de Estado que sacó del poder a Chávez por dos días, fracasando finalmente debido al fuerte apoyo popular que desató una ola de manifestaciones en todo el país. Posteriormente se recurrió a la estrategia de golpe económico, poniendo en marcha a fines de ese mismo año un paro petrolero y sabotaje económico, con el objetivo de reinstaurar un gobierno cuyas políticas económicas respondieran al capital privado y dar seguridad y confianza a las inversiones extranjeras. La política de reapropiación soberana de la renta petrolera, en origen, a favor de la mayoría social, supuso un cambio muy significativo respecto a lo que el capital transnacional estaba acostumbrado a hacer en Venezuela.

El paro petrolero de 2002 fue una clara respuesta del capital privado contra la democracia, dando muestras inequívocas de que el cambio de época iba a tener que sortear muchos obstáculos. Indudablemente, después de una leve recuperación

económica y social iniciada desde la llegada de Hugo Chávez, el doble golpe del 2002 tuvo consecuencias notables. Después de un crecimiento económico del PIB sostenido en los tres primeros años de la presidencia de Chávez, la caída del PIB petrolero fue de 25,9% en el último trimestre del 2002, y del 39,3% en el primer trimestre del 2003; el PIB total registró una caída de 15,8% durante el cuarto trimestre de 2002 y se redujo en 27% en el primer trimestre del 2003; todo ello debido al sabotaje petrolero que trajo consigo una disminución abrupta de las principales actividades económicas del país. En 2003 el PIB tuvo una contracción de 9,4%.

El efecto sobre la economía real fue inmediato, especialmente en un sector que había disfrutado de una significativa mejora en estos recientes años: el sector laboral. La tasa de desempleo se disparó inmediatamente a 20,7% (el nivel más alto desde 1967), debido, en gran medida a un *lockout*, pues en muchas empresas, fábricas y comercios los trabajadores querían continuar trabajando, pero los dueños tomaron la decisión de parar y esto desencadenó numerosos despidos o penalizaciones en materia salarial por parte de la patronal. Se destruyeron más de 700 mil puestos de trabajo en esos pocos meses. La inflación, que había venido conteniéndose, volvió a ascender hasta 31% en 2002, provocando pérdida de poder adquisitivo que hacía recordar todo aquel endeudamiento social de la época neoliberal.

La reducción de ingresos públicos petroleros por el paro del sector generó un elevadísimo déficit fiscal en 2002 y 2003, porque un mes sin actividad es dejar de obtener muchos ingresos derivados de la venta del petróleo³, principal ingreso del país caribeño; además, la recuperación de la actividad petrolera no es una cuestión inmediata después de los innumerables daños

3. El país dejó de percibir ingresos por cerca de 15.000 millones de dólares, al dejar de vender más de tres millones de barriles de petróleo durante 60 días.

ocasionados a la industria, en todas las cadenas del sistema productivo. La producción total de crudo disminuyó en 68%, tendiendo dicho porcentaje a descender aún más debido a la detención de la producción, a las restricciones de almacenamiento, a la paralización de 29 unidades de compresión en algunas zonas del país y al detenimiento de otras actividades.

Las consecuencias fueron nefastas para la población: hubo escasez de alimentos y gasolina durante y después del paro; la situación tardó en restablecerse conforme a los niveles anteriores a los golpes. Muchas empresas pequeñas y medianas quebraron debido a que dependían de las empresas que agrupaba Fedecámaras para realizar sus actividades. Hubo una notable caída de los depósitos bancarios de 8%. Todas estas cifras económicas tuvieron una traducción inmediata en pobreza y desigualdad; si bien desde 1998 a 2001 la pobreza se había reducido de 49% a 39%, en 2002 y 2003 volvió a subir hasta 41,5% y 54%, respectivamente; la pobreza extrema se había reducido de 21% a 14,2% en el período 1998-2001, pero volvió a subir a 16,6% y 25,1% en 2002 y 2003, respectivamente; la desigualdad había descendido en el período 1998-2001 de un valor del índice de Gini de 0,486 a 0,457, pero volvió a crecer a 0,494 y 0,481 en 2002 y 2003, respectivamente.

Finalmente, el intento del 2002 de frenar un proyecto económico popular fue infructuoso. Chávez sabía que la fuerza política y social que se aglutinó para exigir su retorno también constituía una fuerza económica a su favor para abrir el cambio de época posneoliberal en esos primeros años (para luego caminar hacia otro estadio superior más ambicioso que fue denominado transición hacia el Socialismo Bolivariano del siglo XXI). La Década de Plata, tal como fue propuesta por el propio presidente en el primer Plan Nacional de Desarrollo del 2001, no pudo iniciarse en el año previsto a consecuencia del doble golpe de 2002, pero esto no alteró el reto estratégico transformador, ya que solo tuvo un reajuste para ser iniciada después del golpe, a partir del 2003 hasta el 2012.

Políticamente, Chávez salió reforzado ese año, a pesar de las vicisitudes, porque la mayoría del pueblo le había dicho que no había marcha atrás, que el punto de no retorno estaba superado. Los próximos años, desde 2003 en adelante, el reto de consolidar el proyecto de transición económica (para salir del neoliberalismo) continuaría en marcha. El Estado de las Misiones fue la elección institucional de la Revolución Bolivariana para dar respuesta a la gran deuda social que afectaba cada de una de las esferas de la vida cotidiana del pueblo venezolano, en todos los rincones del país. La Misión no es una ayuda puntual ni parcial, ni de corte asistencialista clásico, sino que se trata de una política pública de alta rentabilidad y eficacia social, que procura involucrar al poder popular en la organización de esta tarea y en la ejecución de la misma; una Misión para cada problema, tantas Misiones como problemas sociales existan. Así, con esta particularidad venezolana, Chávez inventó una nueva fórmula de curar todas las enfermedades sociales derivadas de la deuda social heredada del neoliberalismo.

El proclamado Estado Social de la nueva Constitución tenía así su fiel reflejo en este Estado de las Misiones. Como ya se señaló, los precedentes, en la etapa inicial de Chávez fueron los primeros operativos de instrumentación inmediata a través de la alianza cívico-militar para sectores necesitados, que tuvo como exponentes al Plan Bolívar 2000, al Fondo Único Social, y al Plan de Asistencia Alimentaria Popular. Sin embargo, la paulatina conformación del Estado de las Misiones daría un paso más, porque se trata de una política pública sistematizada, que articula una acción integral con participación popular, procurando tener autonomía suficiente para no replicar las herencias de un fracasado Estado burgués con intentos fallidos de Estado de bienestar a la europea. Así, Venezuela comenzó, ladrillo a ladrillo, a conformar una mega estructura tan arraigada en el pueblo que ni los opositores se atreven a cuestionarla cuando participan en cualquier campaña electoral.

Este nuevo Estado de las Misiones interactuó con las nuevas políticas públicas según avanzaron las circunstancias internas y externas, políticas sociales, culturales y económicas; tuvo que convivir con los diferentes planes nacionales de desarrollo, con los renovados horizontes estratégicos que se iban redefiniendo sin corsé ni vagos anclajes. Desde su surgimiento, el Estado de las Misiones tuvo que recorrer el camino que hay desde un proyecto posneoliberal a otro estadio superior, no tan reactivo sino más propositivo, esto es, el denominado Socialismo Bolivariano del siglo XXI; tuvo que transitar de una economía centrada en cómo resolver las urgencias y necesidades básicas posgolpe 2002 a otra economía en la que las necesidades y demandas se fueron redefiniendo y transformando, gracias justamente a un proceso de cambio muy vigoroso. La progresiva democratización del consumo a favor de toda la población venezolana es un hecho que definitivamente obligó, obliga y seguirá obligando a reacomodar permanentemente el Estado de las Misiones, imprimiéndole una lógica dialéctica, dinámica y no estática.

Nadie puede saber a ciencia cierta si Hugo Chávez tuvo previsto desde un inicio construir sólidamente este Estado de las Misiones, como fórmula para transformar estructuralmente el aparato estatal heredado de las décadas perdidas neoliberales, o si, por el contrario, procuró ir respondiendo coyunturalmente a las urgencias que se venían presentando. Es complicado ahora realizar este tipo de adivinanzas retrospectivamente. Lo importante es certificar que al cabo de una década, más allá de cómo fue previsto desde un inicio, la Década de Plata es un hecho irrefutable que ningún organismo internacional se ha atrevido a cuestionar. Desde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), todos y cada uno de ellos ha destacado los avances en materia de economía humanista, social y popular: reducción de la pobreza, más

justicia en la distribución de los recursos económicos, mejora del empleo y el salario real, resultados positivos en la lucha contra el hambre, aumento del Índice de Desarrollo Humano, democratización de la educación con mejoras significativas en materia de alfabetización, reducción de la mortalidad infantil, mejora en el acceso al agua y a otros servicios básicos, mejora en la salud y mejora en términos de vivienda.

En cifras-resumen, esto se traduce en: a) la pobreza se redujo de 50% a 27,2% en el período 1999-2013, b) la pobreza extrema pasó de 16,9% hasta 8,8% de 1999 a 2013, y la pobreza extrema pero medida por necesidades básicas insatisfechas ha tenido una disminución progresiva desde 10,8% en 1999 hasta 5,5% en 2013; c) la desigualdad pasó de 0,48 a 0,39 de 1998 a 2013 (medida por el valor del índice de Gini); d) en lo alimentario, Venezuela es el país de América Latina y el Caribe más avanzado en la erradicación del hambre: la tasa de desnutrición se redujo de 21% en 1998 a menos de 3% en 2011; se ha pasado de producir 51% de los alimentos que se consumía en 1999 a producir 71% en 2012 (todos son datos de la FAO en 2011); e) Venezuela es el primer país del mundo al que la Unesco le concedió una calificación de 96 puntos (en una escala de 100) en el año 2010, en honor a las metas alcanzadas en materia de inclusión en alfabetización y educación inicial, primaria, secundaria y universitaria; la tasa neta de escolaridad secundaria se incrementó sustancialmente, pasando de 50,7 en 2000 a 74,2% en 2012; y la matrícula universitaria creció de 894.418 estudiantes en el 2000 a 2.630.000 en 2014, ubicando al país en el quinto lugar a nivel mundial; f) la tasa de desempleo pasó de 15,2% en 1998 a 7,8% en 2013, con la creación de más de 4 millones de empleos; el incremento en el empleo formal es de casi diez puntos, mientras que la tasa de participación de los asalariados en la riqueza del país era de 64,3% entre el 2000 y el 2013, la mejora del IDH era cuatro veces mayor que los avances experimentados durante las dos décadas anteriores; g) el IDH del 2013 (0,764)

está considerado en categoría alto; h) la mortalidad infantil se redujo de 25 por 1.000 (en 1990) a 14 por 1.000 (en 2012); i) el 96% de la población tiene acceso ahora a agua limpia; j) en 1998 había 18 médicos por cada 10 mil habitantes, mientras que en la actualidad son 58 por cada 10 mil; k) el hacimiento en hogares se redujo de 14,6% a 9,5% durante esta década; el indicador de vivienda sin servicios básicos bajó de 15,7% a 9,5%; l) la cantidad de pensionados pasó de 387.000 en 1999 a más de 2.521.789 en 2013.

En el período 2003-2012, el Gobierno Bolivariano consiguió crecer, repartiendo sin generar más inflación, por el contrario, la desaceleró a pesar del incremento sostenido en los salarios. Por ejemplo, para el caso del salario mínimo, hay que considerar que el poder adquisitivo real ha mejorado en un 21,5% desde 1998 hasta el 2012; el salario mínimo aumentó mucho más de lo que lo hizo el nivel de precios. Otro aspecto a destacar en esta década ganada en materia macroeconómica es la relación entre el PIB y la deuda pública del Gobierno central, que bajó de 54,3% en promedio para el período 1984-1998, a 28% promedio entre 1999-2013. El desendeudamiento público ha sido otra gran victoria de este período porque permite realmente dotar al proceso de más independencia y soberanía económica hacia futuro.

Si bien durante esos años hubo logros tímidos en la producción de alimentos y otros bienes básicos manufacturados, la velocidad con la que se incrementó el consumo (más democratizado) de los hogares venezolanos fue mucho mayor. Este desequilibrio estructural fue aprovechado, sin lugar a dudas, por el capital privado nacional –en connivencia con el capital transnacional– para dedicar toda la actividad económica a la importación, así como a las tareas de distribución y comercialización. La oferta necesaria de esos nuevos bienes era satisfecha por una estructura económica privada muy concentrada, que disfrutaba del poder de mercado necesario para establecer altos precios. El capitalismo penetró de esta forma en la

reestructuración económica que se estaba produciendo en Venezuela en estos años. El rentismo importador del siglo **xxi** constituye un fenómeno económico propio de países en los que se produce una transformación inmediata de las pautas de consumo de la mayoría de la población, pero sin posibilidad real de satisfacerla mediante una transformación inmediata –a la misma velocidad– de la matriz productiva. La evolución del cambio de la matriz productiva ha sido mucho más lento que el creciente cambio de la demanda interna; en esa brecha se colaron los factores inflacionarios por la vía de estructuras concentradas importadoras, y también de distribución y comercialización.

En el plano internacional, en plena transición geoeconómica mundial, el líder Hugo Chávez supo darle un fuerte impulso a la construcción de mecanismos de integración en la región; su rol fue fundamental para posicionar a Venezuela como un actor de peso en la reconfiguración del mapa geopolítico internacional. En este sentido, en diciembre de 2004 Chávez inició la quijotesca tarea de armar una alianza entre pueblos de América Latina, en forma antagónica a la modalidad de integración neoliberal del capital, el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que seguía creciendo. De esta manera, Venezuela se puso a la cabeza de una propuesta de integración regional contra hegemónica; la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) nació en diciembre de 2004 en una reunión entre Hugo Chávez y Fidel Castro en La Habana. Esta nueva alianza puso de manifiesto la jerarquía que Chávez concedió desde el 2004 en adelante a la dimensión bolivariana en el pensamiento económico y su praxis. Este frente antiimperialista, creado e inventado desde el Sur para el Sur, con los pueblos del Sur, supone una propuesta que combina el oportunismo táctico, adecuadamente, con la visión estratégica de largo aliento para reubicar a Venezuela con América Latina en un nuevo polo privilegiado en la transición geoeconómica en

curso. Chávez había advertido desde tiempo atrás que el mundo unipolar venía en decadencia y que, al mismo tiempo, se iba conformando un nuevo mundo multipolar en el que había que reubicarse con inteligencia estratégica y soberanía. Además, desde el año 2013 Venezuela es miembro pleno de Mercosur, quinta economía del mundo.

A nivel internacional, más allá de las fronteras regionales, Venezuela tiene una posición privilegiada (en la región y en el mundo) y una relación *engrasadísima* con esa economía ya emergida: los BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica). Chávez también logró emancipar a su país del yugo del Ciadi, juez y parte que arbitra las inversiones extranjeras desde la OMC. En suma, es importante afirmar que Venezuela goza de una posición infinitamente privilegiada en términos de inserción geoeconómica a escala mundial.

En definitiva, se puede afirmar que este largo ciclo tuvo importantes logros. El Estado de las Misiones es más que satisfactorio en estos años y se ha constituido como una de las bases esenciales de la época ganada en materia económica. La Revolución Bolivariana planteó la importancia irrenunciable de una etapa de transición en la que nadie se cayera del barco, sino lo contrario, que todos se subieran a él para afrontar el nuevo reto estratégico en los próximos años. El objetivo fue rescatar a cada ser humano para que llevara una vida cotidiana digna. La economía, según lo que propone el chavismo como identidad política y económica, por encima de cualquier otra discusión, ha demostrado tener gran predilección por un rasgo humanista, de fuerte compromiso social y popular.

En el plano de la política, Venezuela entendió que la democracia no solo podría ser circunscrita al plano procedimental, es decir, a ganar elecciones (cosa que Chávez hizo permanentemente y, además, todas ellas avaladas internacionalmente); la democracia integral, la real, debe ser aplicada a muchos otros planos de la vida diaria para el pueblo venezolano. Por esto, Chávez se empeñó en que la riqueza, los derechos sociales, los

servicios básicos, el acceso al consumo, la educación, la salud, y la participación política se democratizaran.

Como balance de la última década y media, hasta el 2013, la Revolución Bolivariana logró revertir parcialmente la correlación de fuerzas económicas desfavorable para las mayorías. Después del golpe petrolero, el chavismo logró una amplia democratización de una base económica material, gracias a las políticas de control efectivo y reapropiación de sectores estratégicos; a políticas económicas y sociales cada vez más redistributivas e inclusivas y a mayor soberanía en la inserción en la economía mundial, acompañada de una nueva arquitectura regional. La centralidad en la economía real en estos años permitió saldar una deuda histórica: la deuda social. La nueva direccionalidad del uso de la renta petrolera (reapropiada en su origen) hacia la construcción de un sólido Estado de las Misiones y la mejora permanente salarial (real) de una mayoría excluida históricamente generó un aumento exponencial del consumo privado, pero también de consumo público.

La inversión social ha sido en este tiempo una cuestión innegociable, manteniéndose muy por encima de 60% del presupuesto, lo que demuestra el carácter social y humanista de la propuesta económica en Venezuela en este cambio de época. Todavía queda mucho por hacer en lo que el mismo Chávez denominó la “Década de Oro”, fase que aún no ha podido iniciarse plenamente por múltiples factores adversos e imprevistos como la propia muerte del presidente Chávez el 5 de marzo de 2013.

La nueva fase: retos y perspectivas

Han pasado más de tres años desde la muerte de Hugo Chávez. Suficiente tiempo para que haya acontecido absolutamente de todo en un país en revolución. Elecciones presidenciales en abril del 2013 con victoria de Nicolás Maduro frente a

Capriles; desconocimiento del resultado electoral por la parte opositora; elecciones municipales –presentadas en clave plebiscitaria– en diciembre del mismo año con el triunfo chavista con gran holgura (casi 11 puntos de diferencia); intento de derrocar al Gobierno con propuesta golpista anticonstitucional (llamada La Salida) y las *guarimbas* que ocasionaron 43 muertes (primer semestre de 2014); un tipo de cambio ilegal (Dólar Today) que crecía exponencialmente en 2015 (desde 173 hasta cerca de 1000); un decreto-Obama que consideraba a Venezuela como una amenaza (julio de 2015); y por último, en diciembre de 2015, la oposición vencía en las elecciones legislativas.

Cualquier identidad política se transforma inevitablemente después de tanta densidad histórica. Es imposible quedar intacto. El chavismo, como cualquier identidad política viva, se nutre de lo que acontece. La incógnita está en cómo se van a metabolizar estos hechos transcurridos. Se inicia así un tiempo para preguntarse qué pretende ser el chavismo en lo político y económico para los próximos años. Se abre una nueva etapa histórica para replantearse cómo resurge tras este ciclo corto tumultuoso; surge en consecuencia un amplio abanico de posibilidades para interpretar lo que debe ser el chavismo de aquí hacia adelante.

El frente externo es muy desfavorable. La guerra económica interna continua haciendo estragos. La emergencia económica obliga a acelerar las respuestas. Toca tomar un camino. Aparecen muchas ventanas. No todas son compatibles entre sí. Toca ordenar la casa. Y hay que elegir qué poner en cada lugar, qué hace cada quién, cómo se reparten las tareas y los recursos, cuáles son las condiciones de vida deseadas para los inquilinos y qué reglas de convivencia (adentro y afuera) son las que darán paz y calma en el hogar.

Sobran los argumentos para afirmar que Venezuela está frente a una emergencia económica. El presidente Nicolás Maduro aprobó, justamente, un decreto de Emergencia

Económica el pasado 14 de enero del 2016. Decretó lo que era evidente, aunque necesario por responsabilidad política: solo cuando se reconoce una situación adversa se pueden encontrar las respuestas efectivas para superarla. El contexto económico en Venezuela es cada vez más preocupante, tanto a nivel externo como interno. Ante tales circunstancias adversas, el Ejecutivo ha puesto en marcha una Agenda Económica Bolivariana con el objetivo de salir adelante.

La caída de los precios del petróleo marca de modo considerable una restricción muy inquietante para las arcas públicas del país. Lo mismo les ocurre a todos aquellos Estados que dependen de este recurso. El precio del petróleo ha sufrido una de sus mayores caídas, prolongadas, desde hace décadas. En junio del 2014, el precio por barril alcanzó los 115 dólares. Sin embargo, desde ese momento se viene produciendo un derrumbe continuado en su precio. En resumen: en el año 2014, el promedio del precio petróleo fue de 88,42 dólares/barril; en el 2015, de 44 dólares/barril; en lo que llevamos de año del 2016, de 27 dólares/barril.

A pesar del leve incremento en los últimos meses (abril-junio 2016), el precio no termina de recuperarse. La disputa geopolítica y geoeconómica es de alto voltaje. No todo es cuestión de exceso de oferta (aunque también) ni de contracción de la demanda. Hay otro factor clave: el interés especulativo de los grandes capitales mundiales que, a partir de los mercados de valores futuros, imponen los precios en el presente. El Congreso de Estados Unidos reconoce que 30% del precio del petróleo se debe a la especulación de los fondos de inversión y los grandes bancos; la consultora Goldman Sachs lo establece en 40%. No será fácil estimar qué sucederá con este fenómeno en el corto plazo. Es todo demasiado imprevisible.

Indudablemente, al día de hoy esto supone una importante restricción para las economías petroleras. La caída de las divisas disponibles para la política económica venezolana es un hecho irrefutable. Aquello que muchos analistas denominaron

“viento de cola a favor” (por los altos precios de las materias primas), hoy se torna viento en contra. El mismo presidente Maduro presentó datos alarmantes en este sentido: en enero de 2016 solo entraron al país unos 77 millones de dólares. Un valor que habla por sí solo si lo comparamos con lo que ocurrió en ese mismo mes en los años anteriores⁴. El pasado año, la economía venezolana ya se vio afectada por este shock negativo de precios del petróleo. Si en los últimos años, la economía venezolana funcionaba habitualmente con alrededor de 40.000 millones de dólares (luego del pago de la deuda externa), en 2015 lo hizo con poco más de 5.000 millones de dólares. La diferencia es abismal, y explica mucho de lo que ha acontecido económicamente en el país. La economía venezolana es altamente elástica con respecto a las divisas disponibles por exportación de petróleo. Es así y ha sido así por décadas.

Pero el frente externo no asfixia únicamente por esta vía. El estrangulamiento financiero internacional contra Venezuela es constante. A pesar de que el país pagó alrededor de 14.000 millones de dólares el año pasado en concepto de deuda externa, el riesgo país jamás se vio mejorado. Todo lo contrario. La prima de riesgo impuesta por las agencias estadounidense de calificación a finales del año 2015 fue de 2.883. Por ejemplo, la de Colombia fue, para esa misma fecha, de 317. Resulta muy sorprendente este tratamiento desigual para dos países que tienen alta dependencia exportadora petrolera. A Venezuela lo discriminan negativamente, penalizándolo; encarecen su deuda y le impiden el acceso al crédito financiero, salvo que obedezca al mandato neoliberal.

La tercera característica del frente externo económico adverso deriva directamente de la situación mundial. Luego

4. En el 2010, la entrada de dólares por venta petrolera para enero fue de 1.790 millones de dólares; en enero de 2011, 2.463 millones, en 2014, 3.000 millones; y en 2015, 815 millones.

de casi una década se vuelve a admitir que la economía mundial no está saneada. El desplome generalizado en las cotizaciones de las entidades financieras de Europa ha sido una muestra más de que la economía capitalista global no progresa adecuadamente. En menos de un año, las bolsas mundiales han visto reducida su capitalización en un valor equivalente al PIB de la eurozona. El mismísimo G20 prefiere ahora culpar a los mercados. El propio ministro de Finanzas alemán Wolfgang Schäuble afirmó que “hay cierto punto de exageración en los mercados”. Lo que antes era una respuesta de los mercados frente a aquello que no les gustaba (véase China, Grecia, España), hoy en día se torna una exagerada advertencia de los mercados por el futuro de la economía mundial. Esto complica aun más lo que sucede en la economía mundial, altamente dependiente de las finanzas desde la época neoliberal.

La economía real no sale de su encrucijada; el comercio mundial sigue a la baja. No se atisba ninguna posibilidad de estabilidad en el crecimiento real de la economía. El capital se ha malacostumbrado de tal modo a la buena vida que se le han quitado las ganas de invertir para producir. Se impone la hipótesis de Larry Summers (exsecretario del Tesoro de los Estados Unidos) del estancamiento secular: se ha llegado a un punto de la economía mundial capitalista, en el que el potencial de crecimiento es demasiado bajo, y solo se podría salir adelante mediante burbujas especulativas.

El frente externo es hostil y precisa ser analizado, asumido e internalizado a la hora de diseñar la política económica más adecuada en Venezuela para este tiempo político que se avvicina. Pero no todas las dificultades económicas proceden de lo que sucede afuera. También hay que mirar casa adentro, conocer e identificar los desequilibrios estructurales actuales de la economía venezolana y también sus respectivos desajustes coyunturales.

La Revolución Bolivariana ha logrado mucho en muy poco tiempo; ha sido capaz de reapropiarse de la renta petrolera; ha

conseguido consolidar un Estado de las Misiones garante de los derechos sociales sin pedir permiso al capital; ha recuperado la soberanía. Todo se ha realizado a gran velocidad, sin descarrilar. Aunque ahora sí aparecen contradicciones propias de cualquier proceso de cambio. El vicepresidente boliviano García Linera las denomina “tensiones creativas de la revolución”, y pueden ser: a) fundamentales, generadas entre el modelo económico humanista de cambio y el modelo capitalista neoliberal que nunca se retira (aunque le indiques la salida); b) secundarias, contradicciones emanadas en el seno del propio pueblo, como las llamaba el presidente chino Mao Tse Tung.

El pueblo venezolano, en los últimos años, luego de haber naturalizado las mejoras sociales y mejoras en el consumo, realiza nuevas demandas. Además, también, hay otras tensiones derivadas de los desequilibrios internos económicos: 1) rentismo importador, especulativo-ocioso, como respuesta para satisfacer la creciente demanda interna; 2) insuficiencia productiva; 3) sistema de distribución ineficaz en manos del capitalismo especulativo. A esto hay que sumarle la guerra económica contra el pueblo venezolano que vienen llevando a cabo ciertos intereses privados que quieren derrocar, como sea, al presidente constitucionalmente electo en el año 2013.

La economía política debe estar siempre presente en cualquier análisis económico. Dejarla afuera es desconocer cómo funciona la economía. Es elemental identificar a los responsables de esta guerra económica y conocer cuál es su forma de actuar. El metabolismo del capital vuelve a tener un gran protagonismo en la actual economía venezolana. Las razones son muchas. Se impuso el rentismo importador del siglo XXI. La economía real quedó sometida y avasallada por la economía ociosa. En este fenómeno todos tienen responsabilidad: unos más que otros. El sector privado jamás quiso dedicarse a impulsar un nuevo desarrollo productivo. Optó por la importación, demandando divisas. Esto impuso una dinámica económica improductiva, altamente dependiente

de las importaciones y, además, con un fuerte componente especulativo en precios.

Ciertamente este es uno de los aspectos más críticos de la economía venezolana. La acumulación anualizada del índice nacional de precios al consumidor para el 2015 fue de 180,9%. Pero este dato no puede ser entendido como el simple resultado de una ecuación matemática. Más bien, se debe explicar en base a una compleja álgebra política-económica, en la que inciden las variables macroeconómicas convencionales, pero también influyen quienes, aprovechando su poder de mercado, se quedan con la mayor tasa de ganancia por cada eslabón de la cadena de valor. El debate de la inflación tiene múltiples aristas y todas han de ser tenidas en cuenta. La escasez de divisas es un factor clave; otro es la elevada capacidad de consumo del pueblo venezolano; e, innegablemente, la economía política es también responsable de la conformación de los precios. La cotización ilegal del dólar, conocida en Venezuela como Dólar Today –que evoluciona de forma exponencial sin criterio económico aparente– también ha sido determinante para la fijación abusiva de los precios.

La inflación vino acompañada de contracción económica (estanflación). El Banco Central de Venezuela afirmó que la economía se contrajo en 5,7% el año 2015, una caída superior a la del 2014, de 3,9%. El sector público experimentó un incremento de 1,1%, mientras que el sector privado descendió en 8,4%. Esto explica la alta dependencia del privado en relación con la divisa; con divisas crecen, porque importan; pero sin ellas, caen en picada. Este componente denota una economía con debilidad de crecimiento cuando hay límites en divisas.

El otro asunto delicado es el desabastecimiento en algunos bienes específicos. Esto se explica, en gran medida, por la alta dependencia de las divisas. Pero también tienen mucho que ver los comportamientos especulativos de sectores privados oligopólicos y las fallas en los canales de distribución. Todo esto vino acompañado de colas en los establecimientos. En muchas

ocasiones, estas fueron planificadas en una fase inicial con la intención de desestabilizar la economía y de generar una mayor sensación de “falta y escasez”, incentivando las compras nerviosas. No es un tema sencillo de solventar porque se ha impuesto una suerte de desorden entrópico que requiere de tiempo y políticas económicas acertadas desplegadas en forma integral. No es cuestión únicamente de precios, como pretenden argüir algunos sectores. Recalculiar los precios en base a una estructura real de costes podría ayudar, pero seguramente no es la varita mágica que resolverá el desabastecimiento en algunos bienes. Este asunto controversial es poliédrico: tiene muchas caras y, por tanto, no hay una única variable determinante.

Sin embargo, no todo son debilidades; hay que considerar también las fortalezas en materia laboral que la economía venezolana tiene. El desempleo es inelástico respecto al crecimiento y entrada de divisas. Esto constituye un importante sostén del modelo económico bolivariano. El desempleo está en torno a 6% y no se ha visto afectado a pesar de la emergencia económica, interna y externa. La política laboral del año pasado, a pesar de las dificultades, también priorizó los incrementos salariales; el salario mínimo creció por encima de 130% (considerando el aumento del ticket alimentación). Por otro lado, la inversión social tampoco se ha visto perturbada por el escenario económico adverso. Los indicadores de desigualdad y pobreza no se vieron impactados negativamente. Las políticas públicas han venido desempeñándose a buen ritmo a pesar de las dificultades. La recaudación tributaria creció, permitiendo así sostener al Estado de las Misiones garantista de los derechos sociales. No obstante, es cierto que el IVA es una de las principales fuentes recaudatorias debido al efecto aumento de precios. Esto es un tema a resolver para evitar que la inflación (que afecta a todos negativamente) sea lo que permita obtener más recursos al Estado en tiempos de emergencia.

Frente al escenario económico adverso y a la alta tensión política, la cuestión es preguntarse qué se puede hacer para salir de este laberinto. La economía venezolana está al borde de un punto de bifurcación. Toma un camino u otro. La oposición en la Asamblea tiene su senda, la neoliberal, con medidas regresivas de la distribución de la riqueza. El proyecto de ley denominado Activación y Fortalecimiento de la Producción Nacional, presentado el 18 de febrero, demuestra claramente cuáles son los intereses económicos de la oposición venezolana. No busca encontrar respuestas frente a la emergencia, sino más bien consolidar un “paquetazo” neoliberal tradicional sustentado en: 1) excesiva preocupación a favor de las transnacionales (con reconocimiento de deuda); 2) política de asignación de divisas sin considerar la escasez de las mismas; 3) ningún interés por fomentar la producción; 4) creación de una Comisión Especial para poner un marcha una restauración privatizadora de muchas empresas públicas de sectores estratégicos; 5) delegar la política de precios en manos de los oligopolios privados; 6) exenciones tributarias sin criterios productivos a favor de grandes capitales. La derecha venezolana aún continúa atrapada por el pretérito sin saber qué decir cada vez que debe presentar una propuesta de futuro.

En cambio, el presidente Maduro anunció una Agenda Económica Bolivariana (AEB) de corte no neoliberal que busca afrontar la emergencia económica sobre la base de un nuevo orden económico, con el objetivo de sostener el espíritu social y humanista de la revolución. Definitivamente, la AEB evita caer en la tentación neoliberal como salida a esta situación económica tan complicada. El objetivo de esta AEB es mirar hacia adelante, a partir de una hoja de ruta que priorice la resolución de los problemas urgentes para avanzar en las transformaciones estructurales pendientes. La AEB combina dos dimensiones: lo coyuntural y lo estructural, esto es, responder a las emergencias del ahora, del ya, pero pensando en el mañana. Se delinea así cuál es la senda económica por donde

transitar, evitando atajos que lleven al abismo como sucedió en el pasado neoliberal. La nueva carta de navegación para superar la tormenta no es por afuera de la Revolución Bolivariana; las soluciones nunca pasarán por renunciar al Estado de las Misiones ni a la soberanía. Esto es innegociable. No se le pide sacrificios al pueblo, sino más bien lo contrario: protegerlo, y contribuir para forjar las condiciones de modo que se active una vigorosa economía productiva. La AEB no renuncia al carácter humanista y democratizador de la economía defendida por el chavismo, pero sí añade la importancia de generar riqueza, de crecer distribuyendo.

La AEB ha comenzado a rodar. Se ha abierto una nueva etapa para la Gran Política Económica. En estos meses han proliferado las decisiones en diferentes ámbitos de la economía:

1) Se han activado nuevos motores productivos (agroalimentario, hidrocarburos, minería, telecomunicaciones, informática, construcción, industria, industria militar, turismo, forestal, economía comunal y social, farmacéutico), con un nuevo mapa de actores que ayuden a la democratización del aparato productivo. El nuevo modelo productivo en desarrollo pretende crear riqueza con el afán de superar el rentismo importador y el rentismo exportador petrolero. La economía productiva se presenta como el centro de gravedad del nuevo orden económico para atender a la demanda interna. Se ha activado un Plan 50 para producir aquellos bienes y servicios que forman parte de lo cotidianamente necesario para el pueblo venezolano. La instalación del Consejo Nacional de Economía Productiva, además, ha contado con una amplia participación del sector privado interesado en formar parte de este nuevo espacio.

2) Una nueva política de asignación de divisas como parte de la política cambiaria: la AEB contempla un nuevo plan de asignación de divisas, una acupuntura de las divisas con la pretensión de lograr una economía más productiva, generando así círculos virtuosos de creación de riquezas. Cada divisa se

asignará en función del efecto multiplicador económico. El nuevo plan de asignación de divisas no seguirá las directrices del rentismo importador improductivo. Se aprobó un nuevo método, los Certificados de Producción, que asignan las divisas para importar insumos necesarios en función de una determinada cuota obligatoria de producción.

3) Se ha puesto en marcha una nueva política de captación de divisas que rompa con la dependencia exportadora petrolera. En el sector minero, se firmó un decreto para cuantificar y certificar las reservas contenidas en tres áreas del Arco minero del Orinoco; más de 150 empresas de 35 países firmaron contratos para explorar la franja, siempre bajo condiciones de mayoría accionaria a favor del Estado. Esta tarea no traerá resultados inmediatos, pero ya ha comenzado a dar sus primeros frutos gracias a los acuerdos de certificación de reservas de oro –que, además, han permitido solucionar un conflicto existente en el Ciadi con Gold Reserve–. Esto implicará una entrada neta de divisas de unos 3.000 millones de dólares, dejando el resto para inversiones en industrialización. La política de captación de divisas también ha priorizado el fomento de las exportaciones, otorgándoles mejores incentivos en retención de divisas y en materia tributaria.

4) El sistema cambiario también ha transitado hacia un modelo dual: a) el Dipro (divisa protegida), 10 bolívares por dólar, que ampara a sectores prioritarios para el pueblo venezolano (alimentos, salud, insumos básicos para la producción de estos sectores, cultura, deporte, pago de los pensionados y jubilados, investigaciones científicas y otros casos de especial urgencia); b) el Dicom como divisa complementaria de flotación, administrada para el resto de la economía⁵. Este nuevo esquema cambiario prioriza la protección del pueblo en sectores

5. A mediados de julio del 2016, el valor ha crecido desde 200 bolívares por dólar hasta 640.

clave, y procura ser atractivo para el arribo de capital extranjero en divisas.

5) La llamada a la Revolución Tributaria se convierte en una herramienta clave para recaudar adentro todo lo que se necesita para sostener la política de inversión social ante esta emergencia económica. El objetivo es, progresivamente, cambiar la matriz impositiva para avanzar en clave de soberanía tributaria, bajo principios de justicia social. En este ímpetu, un aspecto notorio ha sido el anuncio del nuevo Plan de Tolerancia Cero Contra la Evasión, el Fraude y la Elusión Fiscal. Se trata de mejorar la recaudación, especialmente para aquellos grandes capitales improductivos que no están pagando los impuestos que les corresponden. Para esto se ha puesto en marcha un sistema de facturación electrónica que permite mejorar de forma inmediata la recaudación. Cada bolívar es necesario frente a esta emergencia económica para garantizar los derechos sociales y, también, para impulsar el nuevo orden económico productivo. En materia de elusión, también se tomaron medidas adecuadas para evitar la práctica elusiva a la que recurren los grandes patrimonios, descontándose de su utilidad fiscal el efecto inflacionario. Por último, es preciso resaltar una decisión tributaria que no deja lugar a dudas de en qué parte se está en este proceso político: se ha exonerado del pago de impuesto de la renta a más de 2 millones de familias de bajos recursos, demostrando claramente cuál es la diferencia entre el “paquetazo” neoliberal y otra forma de afrontar esta emergencia económica.

6) Se ha cambiado, luego de más de dos décadas, el esquema actual de subsidios para la gasolina. Venezuela es el país con la gasolina más barata del mundo. Y, con el nuevo sistema, se pretende utilizar de forma más justa y eficiente los recursos disponibles. La gasolina seguirá siendo barata, pero los recursos extras que comienzan a obtenerse por esta nueva política son destinados a las misiones sociales y también a mejorar los sistemas de transporte. Además, los nuevos precios de la

gasolina generan más incentivos para consumir aquel octanaje que requiere menos divisas para la importación de derivados necesarios para su producción.

Estas son algunas de las más destacadas decisiones económicas tomadas en estos últimos meses. Pero no son las únicas. Se ha puesto en marcha una nueva forma de utilizar las compras públicas para aprovechar este músculo económico tan relevante en el país. Es la hora de transformar el universo social en un espacio económico productivo. Y no solo eso; se ha creado una Corporación Nacional Productiva como nuevo sistema articulador de todas las empresas de gestión estatal o en manos de trabajadores. También se ha puesto en funcionamiento un plan de agricultura urbana; se ha creado el Banco de insumos para la pequeña y mediana industria; se ha iniciado una política de alimentación de abastecimiento seguro para reorganizar este sector; y, más recientemente, la activación de la tarjeta de las misiones socialistas a favor de las familias venezolanas en núcleos de pobreza extrema. De esta forma, el esquema de subsidio cambia: se concentra en la persona.

En definitiva, se observa cómo Venezuela tiene su propia receta frente a la emergencia económica. No usa ningún *copy-paste* del modelo neoliberal. La AEB comienza a consolidarse. Seguramente restan muchos flancos todavía por afrontar: reordenamiento del sistema financiero para la nueva etapa; redefinición del poder comunal en el desafío económico; un sistema de distribución más eficiente; avance en la desdolarización de las relaciones comerciales; reactivación de mecanismos económicos de integración regional. Son tantos los desafíos como se quiera. Esto es precisamente la gran fortaleza de la AEB, es decir, se tiene una carta de navegación para procurar superar la actual tormenta, adentro y afuera, lo cual demuestra que no solo se rechaza la salida neoliberal, sino que se ha comenzado a ejecutar una agenda económica para este momento histórico. Así se pone de manifiesto que sí hay alternativa frente al mandato neoliberal.

En definitiva, el chavismo está ante la propia definición de sus tesis políticas económicas para la nueva fase, de no hacerlo, acabará definiéndose por reducción al absurdo. Siempre se ha caracterizado por su naturaleza ofensiva: hay que pasar a ser proactivo; es el momento de reapropiarse del debate político y económico imponiendo los temas sobre los que se quiere progresar. Estamos –gramscianamente hablando– en una guerra de posiciones en materia económica, lo cual exige ganarle terreno a su vez al enemigo histórico. Hay que revertir el gran capital improductivo; el capital financiero especulativo; los monopolios importadores; el sistema distributivo concentrado e ineficiente. El buen gobierno de la economía, desde una óptica chavista, dependerá en gran medida de qué tesis económicas se acaben imponiendo. La disputa de las ideas políticas y económicas está servida, tanto en el plano teórico como en la praxis cotidiana.

ÍNDICE

- 7 **Presentación**
Emir Sader
- 9 **¿Fin de ciclo progresista
o proceso por oleadas revolucionarias?**
Álvaro García Linera
- 49 **La experiencia argentina bajo el nombre del kirchnerismo**
Ricardo Forster
- 95 **La década ganada... ¿Y después?**
Manuel Canelas
- 117 **Brasil: de Lula al golpe blanco**
Emir Sader

- 131 **De la ira a la esperanza: la disputa del futuro en Ecuador**
René Ramírez y Juan Guijarro
- 209 **La porfiada voluntad de un proyecto: la izquierda uruguaya en la encrucijada latinoamericana**
Constanza Moreira
- 269 **El chavismo en Venezuela: orígenes, logros, retos y perspectivas**
Alfredo Serrano Mancilla

Este libro se terminó de imprimir en el mes de marzo de 2017, en xxxxxxxx,
Caracas-Venezuela.
La edición consta de 1.000 ejemplares.

Este libro recoge diferentes análisis sobre los países con gobiernos posneoliberales en América Latina, desde sus orígenes y desarrollo hasta su situación actual, además de ofrecer una perspectiva global en su estudio sobre la región. No se pretende agotar los temas, sino incentivar debates, a partir de las extraordinarias experiencias vividas en estos países.

Todos los análisis, con sus particularidades, están realizados desde el punto de vista de las conquistas logradas y, a partir de ellas, se abordan los problemas que enfrentan los gobiernos, con la conciencia de que las fuerzas y los liderazgos que los protagonizan son de los más avanzados que ha tenido el continente y que, por lo tanto, disponen de las mejores condiciones para superar las dificultades actuales.

El título de este libro, inspirado en la célebre obra de Eduardo Galeano, sirve para destacar que los horizontes históricos del continente permanecen abiertos y, en el contexto de las disputas de las que son objeto, es vital el protagonismo de los pueblos organizados en la región.

